

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ESCUELA DE POSGRADO



UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS

TESIS:

**POBREZA Y LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS
PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA 2011-2022**

Para optar el Grado Académico de

MAESTRO EN CIENCIAS

**MENCIÓN: RELACIONES COMUNITARIAS Y GESTIÓN DE
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES**

Presentado por:

JUAN CARLOS BECERRA RUITÓN

Asesora:

Dra. CONSUELO PLASENCIA ALVARADO

Cajamarca, Perú

2025

CONSTANCIA DE INFORME DE ORIGINALIDAD

1. Investigador:
Juan Carlos Becerra Ruitón
DNI: 26706734
Escuela Profesional/Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Maestría en Ciencias, Mención: Relaciones Comunitarias y Gestión de Conflictos Socioambientales
2. Asesora: Dra. Consuelo Belania Plasencia Alvarado
3. Grado académico o título profesional
☐ Bachiller ☐ Título profesional ☐ Segunda especialidad
X Maestro ☐ Doctor
4. Tipo de Investigación:
X Tesis ☐ Trabajo de investigación ☐ Trabajo de suficiencia profesional ☐ Trabajo académico
5. Título de Trabajo de Investigación:
Pobreza y conflictos socioambientales en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 - 2022
6. Fecha de evaluación: **01/02/2026**
7. Software antiplagio: **X TURNITIN** ☐ URKUND (OURIGINAL) (*)
8. Porcentaje de Informe de Similitud: **06%**
9. Código Documento: **3117:551624847**
10. Resultado de la Evaluación de Similitud:
X APROBADO ☐ PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES O DESAPROBADO

Fecha Emisión: **23/03/2026**

Firma y/o Sello Emisor Constancia
 Dra. Consuelo Belania Plasencia Alvarado DNI: 26717688

* En caso se realizó la evaluación hasta setiembre de 2023

**COPYRIGHT © 2025 by
JUAN CARLOS BECERRA RUITÓN
Todos los derechos reservados**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 080-2018-SUNEDU/CD

ESCUELA DE POSGRADO

CAJAMARCA – PERU

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Siendo las 11:00 Am. horas, del día 9 de Enero de dos mil veinticinco, reunidos en el **Auditorio de la Escuela de Posgrado** de la **Universidad Nacional de Cajamarca**, el Jurado Evaluador presidido por el **DR. PEDRO NAPOLEÓN SÁNCHEZ LEGRÁS, DR. JUAN ROMELIO MENDOZA SÁNCHEZ, DR. OSCAR RUFINO CHOLÁN VALDEZ** y en calidad de Asesora la **DRA. CONSUELO BELANIA PLASENCIA ALVARADO**. Actuando de conformidad con el Reglamento Interno y el Reglamento de Tesis de Maestrías y Doctorados de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, se inició la Sustentación de la TESIS titulada: **“POBREZA Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA, 2011 - 2022”**, presentada por el Bachiller en Ingeniería de Minas **JUAN CARLOS BECERRA RUITON**.

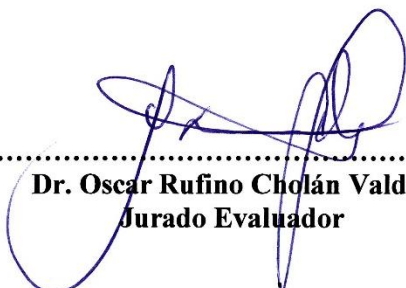
Realizada la exposición de la TESIS y absueltas las preguntas formuladas por el Jurado Evaluador, y luego de la deliberación, se acordóAPROBADA..... con la calificación deonce (12)..... la mencionada TESIS; en tal virtud, el Bachiller en Ingeniería de Minas, **JUAN CARLOS BECERRA RUITÓN**, se encuentra apto para recibir en ceremonia especial el Diploma que lo acredita como **MAESTRO EN CIENCIAS**, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de **CIENCIAS SOCIALES**, con mención en **RELACIONES COMUNITARIAS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES**.

Siendo las 12:30 horas del mismo día, se dio por concluido el acto.


.....
Dra. Consuelo Belania Plasencia Alvarado
Asesora


.....
Dr. Pedro Napoleón Sánchez Legrás
Jurado Evaluador


.....
Dr. Juan Romelio Mendoza Sánchez
Jurado Evaluador


.....
Dr. Oscar Rufino Cholán Valdez
Jurado Evaluador

DEDICATORIA

Dedico esta tesis con todo mi amor y gratitud a mi esposa María Delfina Estela Ordoñez, por ser mi compañera, mi apoyo incondicional y mi fuente constante de motivación. A mis hijos Chris, Ángel y Valery, quienes son la razón de mi esfuerzo y mi mayor inspiración; sus sonrisas y sueños son mi impulso para seguir adelante.

A mis padres, quienes felizmente aún me acompañan, les agradezco por inculcarme valores y enseñanzas que me han guiado a lo largo de mi vida. A mis hermanos, mi fortaleza y mi refugio en los momentos difíciles, gracias por estar siempre a mi lado.

Con una especial y sentida mención a mis hermanos Alcides y Jaime, quienes ya no están en este mundo, pero continúan viviendo en mi corazón y en mis recuerdos. A ellos, que, desde el reino de Dios, me han acompañado y guiado en este camino.

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi profunda gratitud a todas las personas e instituciones que hicieron posible la culminación de este trabajo académico.

A la Dra. Consuelo Plasencia Alvarado, quien, con su orientación, exigencia y permanente apoyo académico, me brindó las herramientas necesarias para desarrollar con rigor esta investigación.

Al Dr. Víctor Hugo Delgado Céspedes, por sus valiosas sugerencias y aportes críticos, que enriquecieron de manera sustancial la solidez de este estudio.

A Cristian Vera y Martín Cortez, por su colaboración comprometida en el área de análisis económico, contribuyendo con conocimientos clave que fortalecieron el alcance de los resultados.

A la Universidad Nacional de Cajamarca, por ofrecerme el espacio académico y los recursos indispensables para llevar adelante este proceso de investigación, así como a sus docentes y personal administrativo, por su disposición constante y compromiso institucional.

Finalmente, a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta aportaron a este proyecto, expreso mi reconocimiento más sincero y mi agradecimiento eterno.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE GENERAL	vii
ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE FIGURAS	xiv
RESUMEN	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN	xvii
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	6
1.2.1. <i>Problema General</i>	6
1.2.2. <i>Problemas Específicos</i>	6
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	7
1.3.1. <i>Justificación científica</i>	7
1.3.2. <i>Justificación técnica y práctica</i>	7
1.3.3. <i>Justificación institucional y personal</i>	8
1.3.4. <i>Aporte científico y originalidad</i>	9
1.4. OBJETIVOS	10
1.4.1. <i>Objetivo General</i>	10
1.4.2. <i>Objetivos Específicos</i>	10
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	10
1.5.1. <i>Delimitación geográfica de la investigación</i>	10

1.5.2. Delimitación temporal de la investigación	12
1.5.3. Delimitación temática	13
1.5.4. Delimitación metodológica.....	14
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	16
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	16
2.1.1. Internacionales.....	16
2.1.2. Nacionales.....	18
2.1.3. Locales.....	20
2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	22
2.2.1. Pobreza.....	24
2.2.1.1. Teoría de la pobreza absoluta – Seebom Rowntree (1901)	26
2.2.1.2. Teoría de la pobreza relativa – Peter Townsend (1979).....	28
2.2.1.3. Teoría de la dependencia y pobreza estructural – Theotonio Dos Santos (1970)	31
2.2.1.4. Enfoques contemporáneos sobre pobreza	34
2.2.2. Conflictos Socioambientales	45
2.2.2.1. Teoría del conflicto social – Karl Marx (1867)	48
2.2.2.2. Teorías contemporáneas sobre conflictos socioambientales.....	55
2.2.2.3. Teoría de la justicia ambiental – Joan Martínez-Alier (2002)	56
2.2.2.4. Teoría de la gobernanza de los recursos comunes – Elinor Ostrom (1990).....	62
2.2.2.5. Evidencias empíricas recientes en el Perú y América Latina	80
2.3. MARCO CONCEPTUAL	86
2.3.1. Conceptos de pobreza en áreas rurales afectadas por actividades mineras.....	87
2.3.2. Pobreza Multidimensional y los Impactos de la Minería	103
2.4. TÉRMINOS BÁSICOS	116

CAPÍTULO III PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y VARIABLES	119
3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	119
3.1.1. <i>Hipótesis General</i>	119
3.1.2. <i>Hipótesis Específicas</i>	119
3.2. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN	119
3.2.1. <i>Operacionalización de las Variables</i>	120
CAPÍTULO IV	123
MARCO METODOLÓGICO	123
4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA	123
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	125
4.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN	128
4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	128
4.4.1. <i>Población:</i>	128
4.4.2. <i>La muestra:</i>	129
4.5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE OBSERVACIÓN	131
4.5.1. <i>Unidad de análisis</i>	131
4.5.2. <i>Unidad de observación</i>	132
4.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN	133
4.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	133
4.7.1. <i>Técnicas</i>	135
4.7.2. <i>Instrumentos</i>	137
4.8. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	138
4.8.1. <i>Procesamiento de la Información</i>	138
4.8.2. <i>Análisis de la Información</i>	139
4.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD	140

4.10. ASPECTOS ÉTICOS Y LIMITACIONES	142
CAPÍTULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN	144
CAPÍTULO VI CONCLUSIONES.....	197
RECOMENDACIONES	198
REFERENCIAS	200
ANEXOS	215

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 DIMENSIONES EN TERRITORIOS CERCANOS A PROYECTOS MINEROS	26
TABLA 2 COMPARACIÓN DEL UMBRAL DE SUBSISTENCIA (ROWNTREE,1901) Y CAJAMARCA (2023)	27
TABLA 3 COMPARACIÓN ENTRE POBREZA ABSOLUTA Y POBREZA RELATIVA	29
TABLA 4 SÍNTESIS DE LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA APLICADA AL CASO CONGA-CAJAMARCA (2011-2022)	33
TABLA 5 BRECHAS EN CAPACIDADES BÁSICAS EN CAJAMARCA (2011-2022)	37
TABLA 6 ENFOQUES EMPÍRICOS RECIENTES DE MEDICIÓN DE POBREZA EN EL PERÚ	44
TABLA 7 ARTICULACIÓN DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL DE GALTUNG APLICADA A CAJAMARCA (2011-2022)	54
TABLA 8 MOVIMIENTOS ECO-TERRITORIALES Y CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL EN CAJAMARCA (2011-2022)	61
TABLA 9 GOBERNANZA COMUNITARIA DEL AGUA Y CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL EN CAJAMARCA (2011-2022)	64
TABLA 10 BRECHAS EN DERECHOS AMBIENTALES Y SERVICIOS BÁSICOS EN CAJAMARCA (2011-2022)	69
TABLA 11 INDICADORES COMPARATIVOS DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL (2011-2023)	71
TABLA 12 GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN CAJAMARCA (2011-2022)	77
TABLA 13 RESILIENCIA COMUNITARIA EN CAJAMARCA (2011-2022)	80
TABLA 14 TABLA COMPARATIVA: TEORÍAS CLÁSICAS VS. CONTEMPORÁNEAS	82
TABLA 15 COMPONENTES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN ÁREAS AFECTADAS POR LA MINERÍA.....	91
TABLA 16 DESPLAZAMIENTO Y PÉRDIDA DE RECURSOS EN LAS ÁREAS RURALES AFECTADAS.....	100
TABLA 17 IMPACTO DE LA MINERÍA SOBRE LA SALUD Y EDUCACIÓN EN DIFERENTES PAÍSES	109
TABLA 18 PRINCIPALES IMPACTOS DE LA MINERÍA EN LA AGRICULTURA Y RECURSOS HÍDRICOS	115
TABLA 19. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: POBREZA Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL	122
TABLA 20 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN	126
TABLA 21 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ZONA.....	130
TABLA 22 TENDENCIA POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA (2011-2022).....	146
TABLA 23 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDÍN Y HUALGAYOC, 2011-2022	148
TABLA 24 TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (TCPA) Y VARIANZA INTERCENSAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONGA, 2011-2022	150
TABLA 25 EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022)	152

TABLA 26 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS EN CELENDÍN (2011-2022): EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA	154
TABLA 27 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS EN HUALGAYOC (2011-2022): DINÁMICA Y DEMANDAS SOCIALES	156
TABLA 28 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022): UBICACIÓN Y ESTADO DEL DIÁLOGO	159
TABLA 29 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES VINCULADOS A YANACocha EN CELENDÍN (2011-2022)	161
TABLA 30 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES VINCULADOS A EMPRESAS MINERAS EN HUALGAYOC (2011-2022)	163
TABLA 31 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) CONSOLIDADO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONGA Y SU VARIANZA INTERANUAL, 2011-2022	166
TABLA 32 ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) GLOBAL Y ANÁLISIS DE TENDENCIA REGIONAL EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDÍN Y HUALGAYOC, 2011-2022	168
TABLA 33 ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y SU CORRELACIÓN CON LA FRECUENCIA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, 2011-2022	170
TABLA 34 EVOLUCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE PRIVACIÓN DEL IPM Y FRECUENCIA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE CELENDÍN, PERIODO 2011-2022	172
TABLA 35 ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LAS DIMENSIONES DE PRIVACIÓN DEL IPM Y FRECUENCIA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC, 2011-2022	174
TABLA 36 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN EN PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA (2011-2022)	176
TABLA 37 DIMENSIONES DE LA POBREZA EN LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA (2011-2022)	178
TABLA 38 NIVELES DE POBREZA PERCIBIDA POR LA POBLACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDÍN Y HUALGAYOC, PERIODO 2011-2022	179
TABLA 39 DIMENSIONES DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA (2011-2022)	181

TABLA 40 NIVELES DE PERCEPCIÓN DE LA VARIABLE CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDÍN Y HUALGAYOC, PERIODO 2011-2022	182
TABLA 41 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%) EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA (2011-2022)	185
TABLA 42 PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS VARIABLES POBREZA Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL	191
TABLA 43 CORRELACIÓN PARA LAS VARIABLES POBREZA Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL.....	192
TABLA 44 NIVELES DE POBREZA MEDIO PERCIBIDA POR LA POBLACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDÍN Y HUALGAYOC, PERIODO 2011-2022.....	193
TABLA 45 PREVALENCIA DE CONFLICTOS SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN LA REGIÓN.	194
TABLA 46 NIVELES DE PARTICIPACIÓN ACTIVA POR PROVINCIA Y AÑO (2011–2022)	196
TABLA 47 DIMENSIÓN INGRESOS PARA LA POBREZA.....	215
TABLA 48 DIMENSIÓN EDUCACIÓN PARA LA POBREZA	216
TABLA 49 DIMENSIÓN SALUD PARA LA POBREZA	217
TABLA 50 DIMENSIÓN VIVIENDA PARA LA POBREZA	218
TABLA 51 DIMENSIÓN VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA POBREZA	219
TABLA 52 DIMENSIÓN IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL	220
TABLA 53 DIMENSIÓN GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN PARA EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL.....	221
TABLA 54 EVOLUCIÓN DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN CAJAMARCA (2011-2022)	222
TABLA 55 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA EN CAJAMARCA (2011-2022)	223
TABLA 56 CONFLICTOS MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022).....	224
TABLA 57 RELACIÓN ENTRE POBREZA EXTREMA Y CONFLICTOS MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022)	224
TABLA 58 POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y CONFLICTOS MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022)	225
TABLA 59 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS EN CAJAMARCA (2011-2022).....	225

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POBREZA RELATIVA.....	30
FIGURA 2 EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA (2011-2022) CAJAMARCA VS PERÚ URBANO Y RURAL	39
FIGURA 3 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN CAJAMARCA (2011-2022).....	47
FIGURA 4 ESQUEMA MARXISTA APLICADO AL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN CAJAMARCA (2011-2022)	51
FIGURA 5 DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS (INJUSTICIA AMBIENTAL)	59
FIGURA 6 COMPARACIÓN REGIONAL: SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL.....	72
FIGURA 7 TENDENCIAS COMPARATIVAS: CAJAMARCA VS. PERÚ (2011-2022)	74
FIGURA 8 NIVELES DE SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA EN COMUNIDADES RURALES AFECTADAS	89
FIGURA 9 DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LOS BENEFICIOS MINEROS EN ÁREAS RURALES	98
FIGURA 10 CONFLICTOS AMBIENTALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DE LA POBREZA.....	103
FIGURA 11 MAPA CONCEPTUAL DE LAS DIMENSIONES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	105
FIGURA 12 TENDENCIAS EN LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN ÁREAS MINERAS	112
FIGURA 13 MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO CONGA.....	125
FIGURA 14 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%) EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO MINERO CONGA (2011-2022)	188

RESUMEN

Esta tesis, titulada *Pobreza y los conflictos socioambientales en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011–2022*, tuvo como objetivo analizar la relación entre la pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el período 2011–2022. El estudio se desarrolló en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, considerando a la población adulta residente en dichas jurisdicciones. La investigación adoptó un enfoque mixto, con diseño no experimental, alcance correlacional–explicativo y corte longitudinal ex post facto. Se aplicaron 250 encuestas estructuradas, complementadas con revisión documental y observación directa, utilizando información oficial para el análisis institucional y presupuestal. El procesamiento de los datos incluyó depuración, análisis descriptivo y pruebas de correlación no paramétricas (rho de Spearman). Los resultados evidenciaron una asociación positiva y estadísticamente significativa entre las privaciones monetarias y multidimensionales de los hogares y la intensidad de la conflictividad socioambiental ($\rho \approx 0,42$; $p < 0,001$). Asimismo, se identificó una relación negativa significativa entre la conflictividad y el desempeño de la gestión hídrica institucional, medida a través de la ejecución presupuestal en agua y saneamiento a nivel subnacional ($\rho \approx -0,36$; $p < 0,01$). De igual modo, se constató una relación inversa entre la continuidad y calidad del acceso al agua y la severidad del conflicto, con mayor intensidad en la provincia de Hualgayoc. Se concluye que la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga se encuentra significativamente asociada a condiciones estructurales de pobreza, confirmando la interdependencia entre privaciones sociales persistentes y dinámicas de conflicto.

Palabras clave: pobreza multidimensional; conflictividad socioambiental; gobernanza hídrica. minería.

ABSTRACT

This thesis, entitled *Poverty and socio-environmental conflicts in the provinces surrounding the Conga Mining Project, 2011–2022*, aimed to analyze the relationship between poverty in its monetary and multidimensional dimensions and socio-environmental conflict in the provinces surrounding the Conga Mining Project during the period 2011–2022. The study was conducted in the provinces of Cajamarca, Celendín, and Hualgayoc–Bambamarca, considering the adult population residing in these jurisdictions. The research adopted a mixed-methods approach, with a non-experimental design, a correlational–explanatory scope, and a longitudinal ex post facto framework. A total of 250 structured surveys were administered, complemented by documentary review and direct observation, using official information for institutional and budgetary analysis. Data processing included data cleaning, descriptive analysis, and non-parametric correlation tests (Spearman’s rho). The results showed a positive and statistically significant association between households’ monetary and multidimensional deprivations and the intensity of socio-environmental conflict ($\rho \approx 0.42$; $p < 0.001$). Likewise, a significant negative relationship was identified between socio-environmental conflict and institutional water management performance, measured through subnational public budget execution in water and sanitation ($\rho \approx -0.36$; $p < 0.01$). An inverse relationship was also observed between the continuity and quality of access to water and conflict severity, with greater intensity in the province of Hualgayoc. It is concluded that socio-environmental conflict in the provinces surrounding the Conga Mining Project is significantly associated with structural conditions of poverty, confirming the interdependence between persistent social deprivations and conflict dynamics during the period 2011–2022.

Keywords: multidimensional poverty; socio-environmental conflict; water governance; mining.

INTRODUCCIÓN

Cajamarca condensa una tensión estructural: una economía con alta gravitación minera coexiste con déficits persistentes en bienestar y en gobernanza del agua. En ese escenario, Celendín, Hualgayoc–Bambamarca y Cajamarca han protagonizado, entre 2011 y 2022, ciclos de movilización y negociación que revelan cómo se disputan los beneficios, los riesgos y la capacidad de decidir sobre el territorio. El Proyecto Minero Conga opera aquí como prisma analítico más que como caso único: permite observar con resolución temporal y espacial los engranajes que vinculan variaciones en el bienestar de los hogares, desempeño institucional subnacional y conflictividad socioambiental con fuerte impronta hídrica.

Este estudio no se limita a recuentos ni a definiciones de manual. Parte de una premisa operativa: la conflictividad expresa asimetrías distributivas y de reconocimiento y funciona como un barómetro de legitimidad de los arreglos institucionales. Bajo esa premisa, la pregunta que organiza la investigación es relacional y territorializada: ¿de qué modo las trayectorias de pobreza monetaria y multidimensional se asocian con la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga y a través de qué mediaciones institucionales e hídricas se modula esa asociación? La respuesta requiere integrar tres planos que, con frecuencia, se analizan por separado: (i) condiciones socioeconómicas y acceso efectivo a servicios en particular agua y saneamiento; (ii) capacidad estatal para planificar, ejecutar y comunicar gasto social y ambiental con pertinencia territorial; y (iii) calidad de los mecanismos de participación y transparencia que procesan el disenso y orientan decisiones públicas.

En este marco, el objeto de estudio de la presente investigación es la relación entre la pobreza multidimensional con componente monetario y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el período 2011–2022, considerando el papel mediador de la gobernanza hídrica y de las capacidades institucionales territoriales. Esta formulación delimita con precisión el núcleo analítico del estudio y permite articular, en un

mismo plano explicativo, las dimensiones socioeconómicas, ambientales e institucionales que estructuran la conflictividad en el territorio.

La delimitación temporal cubre un ciclo completo de decisiones públicas y empresariales, variaciones relevantes de precios internacionales y shocks exógenos como la pandemia con impactos heterogéneos en empleo, ingreso y provisión de servicios. La delimitación espacial prioriza la escala provincial por su potencial para articular información socioeconómica, presupuestal y de conflictos con trazabilidad administrativa, habilitando desagregaciones distritales allí donde la calidad de datos lo permite. Este diseño favorece comparaciones entre provincias con estructuras productivas y grados de urbanización distintos, manteniendo constante el trasfondo extractivo y la centralidad de los hidrosistemas altoandinos (lagunas, bofedales, cabeceras de cuenca) en la seguridad hídrica de poblaciones y actividades.

La estrategia analítica se estructuró a partir de dos niveles complementarios de análisis. En el componente cuantitativo, se realizó un seguimiento temporal de indicadores socioeconómicos y de bienestar vinculados al acceso a servicios básicos, así como de variables presupuestales asociadas al gasto público en agua y saneamiento, canon y regalías, junto con registros oficiales de conflictividad social sistematizados según tipo de conflicto, actores involucrados y nivel de intensidad. El tratamiento de la información consideró análisis descriptivos y la aplicación de correlaciones no paramétricas (rho de Spearman), orientadas a examinar la relación entre las variables consideradas.

De manera complementaria, el componente cualitativo se desarrolló mediante la revisión y contrastación de información primaria y secundaria, integrando resultados de encuestas estructuradas con documentación institucional disponible (actas, informes técnicos, comunicados oficiales y resoluciones administrativas). Este procedimiento permitió aportar elementos interpretativos para la comprensión de los patrones observados en el análisis cuantitativo, sin pretensión de establecer relaciones causales. La unidad principal de análisis

fue la provincia, incorporándose el nivel distrital únicamente en aquellos casos en que la consistencia y disponibilidad de la información lo permitió.

El supuesto de trabajo es condicional y evita determinismos. Incrementos persistentes en privaciones y déficits de gestión especialmente en provisión de agua segura y tratamiento tienden a elevar la probabilidad o intensidad de la conflictividad; sin embargo, la dirección y magnitud de esa relación se modulan por tres mediaciones clave: la calidad/cobertura de los servicios hídricos, la capacidad institucional para ejecutar gasto público con trazabilidad y enfoque territorial, y la eficacia de los mecanismos de participación y acceso a información. Bajo determinadas combinaciones de estos factores, la energía social del disenso puede canalizarse hacia acuerdos y reformas; bajo otras, deriva en escaladas costosas para todos los actores.

El valor agregado de esta investigación reside en su integración analítica y en su utilidad operativa. Integra mediciones de bienestar con tipologías de conflictividad y variables de desempeño estatal, traduciéndolas en criterios de decisión: priorización de proyectos de agua y saneamiento con impacto distributivo verificable; reglas de transparencia para el ciclo del gasto ambiental y social; y condiciones mínimas para que espacios de diálogo produzcan resultados vinculantes y verificables. A la vez, propone un andamiaje replicable para otros territorios extractivos andinos: definición clara de variables y fuentes, protocolos de empalme de series, plantillas para trazabilidad presupuestal y guías para entrevistas que capturen mecanismos no solo opiniones. Así, el texto está pensado no solo para describir un caso, sino para servir de guía metodológica a futuras investigaciones que busquen explicar, más que listar, la conflictividad socioambiental.

Como todo trabajo empírico en escenarios complejos, este estudio reconoce restricciones. La información oficial puede registrar subreportes o cambios metodológicos que desafían la comparabilidad; la estadística distrital muestra heterogeneidades que obligan a

documentar decisiones de empalme; y el componente cualitativo enfrenta riesgos de sesgo de memoria o deseabilidad. Estas restricciones no se omiten: se abordan con triangulación de fuentes, contraste sistemático entre resultados cuantitativos y evidencia narrativa, y robustez mediante indicadores alternativos. La explicitación de límites forma parte del estándar de calidad con el que se aspira a que el documento sea relevante, objetivo y profesional, útil para decisores públicos, equipos técnicos de empresa y organizaciones sociales que trabajan por la gobernanza justa del agua y la sostenibilidad territorial.

La organización del manuscrito sigue un tránsito lógico que facilita la lectura estratégica. El Capítulo I sitúa el problema de investigación en el contexto de la conflictividad socioambiental y expone los objetivos, hipótesis y delimitaciones espacio-temporales que enmarcan el estudio. El Capítulo II desarrolla el marco teórico y conceptual, analizando aportes nacionales e internacionales sobre pobreza y conflictos socioambientales, e integra categorías que sustentan el enfoque propuesto. El Capítulo III presenta las hipótesis y variables de estudio, precisando su operacionalización y la forma en que se vinculan con los indicadores empíricos. El Capítulo IV detalla la metodología, la muestra y las técnicas empleadas para la recolección y análisis de datos, destacando aspectos éticos y de confiabilidad. El Capítulo V expone y discute los resultados obtenidos, relacionando métricas y percepciones locales con las dinámicas de gobernanza hídrica. Finalmente, el Capítulo VI sintetiza conclusiones y recomendaciones, orientando la aplicación de los hallazgos hacia la gestión pública, la política social y la prevención de conflictos.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Durante las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado un proceso de crecimiento económico sostenido, fuertemente apoyado en el sector minero. Este sector ha aportado entre el 10 % y el 15 % del Producto Bruto Interno y más del 60 % de las exportaciones nacionales durante los últimos años, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas y de recursos fiscales vía canon y regalías (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2023). No obstante, la evidencia empírica reciente confirma que la prosperidad derivada de la minería no se ha distribuido de manera equitativa en los territorios, especialmente en las regiones altoandinas con fuerte presencia extractiva.

La región Cajamarca constituye un caso emblemático de esta paradoja. A pesar de concentrar algunos de los proyectos mineros más importantes del país, como Yanacocha y el Proyecto Minero Conga, Cajamarca continúa presentando los indicadores más altos de pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), en 2023 la pobreza monetaria en Cajamarca alcanzó el 44,5 %, tasa más elevada a nivel nacional, mientras que la pobreza multidimensional afectó a más de la mitad de los hogares rurales. Estos resultados reflejan que la renta minera no se ha traducido en mejoras tangibles y sostenibles en bienestar social ni en reducción de brechas estructurales. Esta situación puede interpretarse desde enfoques de economía política y de pobreza multidimensional, que sostienen que la expansión de actividades extractivas no garantiza por sí misma mejoras en el bienestar cuando existen debilidades institucionales, fallas en la gobernanza territorial y limitaciones en la provisión de bienes públicos esenciales.

La cuestión hídrica ocupa un lugar central en esta problemática. Cajamarca es una región de cabeceras de cuenca, lagunas altoandinas y bofedales que sostienen la agricultura de subsistencia, la ganadería familiar y la provisión de agua potable. La expansión minera,

particularmente a tajo abierto, ha generado percepciones de amenaza sobre la continuidad y calidad del agua. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2021) advierte que el Perú enfrenta debilidades estructurales en la gobernanza del agua, caracterizadas por marcos normativos fragmentados, baja capacidad de fiscalización y escasa participación ciudadana en decisiones críticas. Si bien estas condiciones no constituyen indicadores directos de pobreza, actúan como factores mediadores que condicionan la persistencia y la intensidad de la conflictividad socioambiental, especialmente en contextos como Cajamarca, donde la minería se superpone con ecosistemas estratégicos y con comunidades altamente dependientes del recurso hídrico.

El Proyecto Minero Conga, anunciado en 2010 como una inversión de más de 4 800 millones de dólares, se convirtió en un caso paradigmático para comprender las tensiones entre minería, pobreza y conflictividad socioambiental. En 2011 y 2012, su ejecución desencadenó una de las movilizaciones sociales más grandes de la historia reciente del Perú, paralizando el proyecto y marcando un hito en la agenda pública sobre justicia ambiental y distribución de beneficios (Manrique & Sanborn, 2021).

Entre 2011 y 2022, Cajamarca registró más de 150 conflictos socioambientales registrados oficialmente, en su mayoría vinculados a la minería (Defensoría del Pueblo, 2023). Provincias como Hualgayoc se convirtieron en epicentros de tensión por la coexistencia de pasivos ambientales, contaminación de fuentes hídricas y empleo precario ligado a la actividad extractiva (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2022). En Celendín, la resistencia social se articuló en torno a la defensa del agua como recurso vital para la agricultura de subsistencia, mientras que en la provincia de Cajamarca se evidenció la fragmentación territorial entre zonas urbanas con acceso limitado a servicios básicos y áreas rurales marginadas.

La ejecución presupuestal de los ingresos derivados del canon y regalías ha mostrado serias limitaciones. Informes (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2023) revelan que

entre 2015 y 2022 diversos municipios de Cajamarca ejecutaron menos del 60 % de su presupuesto destinado a agua y saneamiento. Esta baja capacidad de gestión refuerza la percepción ciudadana de exclusión, alimenta la desconfianza hacia el Estado y actúa como detonante de nuevas protestas. La dimensión social de la problemática se refleja también en la limitada efectividad de los mecanismos de consulta previa y participación ciudadana. Aunque la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, busca garantizar la inclusión de los pueblos indígenas en procesos de decisión, estudios recientes muestran que en la práctica estos mecanismos son percibidos como formales, pero no vinculantes, incapaces de generar consensos reales (Gamu, 2024). La consecuencia es la persistencia de la conflictividad, entendida no solo como oposición a proyectos mineros, sino como expresión de demandas más amplias de justicia distributiva, reconocimiento social y respeto al derecho al agua.

En este contexto, resulta imprescindible analizar de manera integral la relación entre los niveles de pobreza y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, considerando la gobernanza hídrica, la ejecución presupuestal y la participación social como dimensiones relevantes para el análisis de dicha relación.

1.1. Planteamiento del Problema

La región Cajamarca representa uno de los escenarios más complejos del desarrollo extractivo en el Perú contemporáneo. A pesar de albergar proyectos mineros de gran envergadura y de haber contribuido de manera sostenida a la generación de renta nacional, la región continúa registrando elevados niveles de pobreza y exclusión social. Mientras que la pobreza monetaria a nivel nacional se redujo de manera significativa entre 2010 y 2019, Cajamarca mantuvo una trayectoria divergente, alcanzando en 2021 una tasa de pobreza del 39,7 %, muy por encima del promedio nacional (INEI, 2022). Esta persistencia evidencia que el crecimiento económico asociado a la minería no ha producido transformaciones estructurales suficientes en las condiciones de vida de la población.

Desde el enfoque analítico de esta investigación, la pobreza se concibe como una variable estructural cuya expresión trasciende la insuficiencia de ingresos. Siguiendo el enfoque de capacidades de Sen (1999) y la medición multidimensional propuesta por Alkire y Foster (2011), la pobreza en Cajamarca se manifiesta a través de privaciones simultáneas en educación, salud y vivienda, cuyos efectos se ven agravados por déficits persistentes en el acceso a servicios básicos, particularmente agua segura y saneamiento. En ese sentido, más del 40 % de los hogares rurales de la región enfrenta carencias concurrentes, según estimaciones oficiales recientes, especialmente en el acceso a agua segura y saneamiento, lo que refuerza la naturaleza multidimensional y persistente de la pobreza en territorios mineros (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2024).

La instalación y expansión de proyectos extractivos en ecosistemas altoandinos estratégicos ha intensificado estas condiciones de vulnerabilidad. El Proyecto Minero Conga, promovido por La Empresa Newmont - Yanacocha, se superpone a cabeceras de cuenca fundamentales para la reproducción económica y cultural de comunidades campesinas. Diversos estudios señalan que este tipo de proyectos tiende a profundizar percepciones de desigualdad distributiva y riesgo ambiental, especialmente cuando los beneficios económicos no se traducen en mejoras tangibles en los territorios de influencia directa (Bebbington, 2012; De Echave, 2016). En este contexto, el acceso, la calidad y la continuidad del agua se convierten en indicadores críticos de bienestar y en ejes centrales del conflicto social.

En este estudio, la conflictividad socioambiental, entendida como la variable dependiente, no se limita a episodios visibles de protesta, sino que constituye un proceso social acumulativo. En Cajamarca, la Defensoría del Pueblo (2023) ha documentado la persistencia de conflictos vinculados a la actividad minera en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, caracterizados por demandas relacionadas con la protección ambiental, el acceso al agua y la legitimidad de las decisiones públicas. Estos conflictos reflejan no solo tensiones

ambientales, sino también déficits históricos en la gobernanza territorial y en la capacidad institucional para procesar el disenso social.

La gobernanza del agua emerge como una dimensión clave para comprender esta relación. De acuerdo con Ostrom (1990), la gestión sostenible de recursos comunes depende de arreglos institucionales legítimos y de la participación efectiva de los usuarios. Sin embargo, en contextos extractivos como Cajamarca, la debilidad de los mecanismos de planificación, la baja ejecución del gasto público en agua y saneamiento y la limitada transparencia presupuestal han erosionado la confianza ciudadana (MEF, 2023). Esta combinación de pobreza estructural y fragilidad institucional crea condiciones propicias para la persistencia del conflicto, incluso en ausencia de movilizaciones masivas.

Desde una perspectiva crítica, la conflictividad socioambiental no debe interpretarse como un fenómeno coyuntural ni como una respuesta irracional de las comunidades, sino como una manifestación de desigualdades estructurales no resueltas. Tal como advierten Arellano-Yanguas (2011) y Svampa (2019), en territorios extractivos la reducción de conflictos visibles no implica su resolución, sino su desplazamiento hacia formas latentes mientras persistan las brechas sociales, ambientales e institucionales.

En este marco, el problema de investigación se configura en la necesidad de analizar de manera rigurosa la relación entre la pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el periodo 2011–2022. Comprender cómo estas variables interactúan, y cómo se ven mediadas por la gobernanza hídrica y la participación social, resulta clave para explicar la persistencia del conflicto y para generar evidencia que oriente políticas públicas y estrategias de gestión territorial orientadas a un desarrollo más equitativo y sostenible.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

- ¿Qué relación existe entre el nivel de pobreza y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011–2022?

1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Cuáles son los niveles de pobreza en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011–2022?
- ¿Cuáles son las características de los conflictos socioambientales en dichas Provincias durante el período 2011–2022?
- ¿Cuál es el nivel de participación de la población en el conflicto socioambiental vinculado al Proyecto Minero Conga, 2011–2022?

De Echave (2016) sostiene que en territorios extractivos la persistencia de la pobreza, pese a la generación de renta minera, evidencia limitaciones estructurales del Estado para transformar el crecimiento económico en bienestar social sostenible. Desde el enfoque de pobreza multidimensional, Alkire y Foster (2011) advierten que las privaciones simultáneas en educación, salud y acceso a servicios básicos tienden a reproducir escenarios de vulnerabilidad social. En este contexto, la coexistencia de pobreza persistente y conflictividad socioambiental en Cajamarca refleja no solo tensiones en torno al acceso a recursos estratégicos, sino también debilidades en los mecanismos de participación y gobernanza territorial, lo que justifica el análisis específico de los niveles de pobreza, las características de la conflictividad y la participación de la población en el presente estudio.

Por ello, la presente investigación analiza de manera rigurosa la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental en el período 2011–2022, con el propósito de aportar evidencia empírica que permita comprender sus causas estructurales y orientar políticas públicas,

estrategias empresariales y procesos comunitarios hacia un desarrollo más equitativo, sostenible y legítimo.

1.3. Justificación de la Investigación

La presente investigación adquiere relevancia porque aborda un problema que trasciende lo local y refleja un dilema estructural del desarrollo en el Perú: la coexistencia de riqueza minera con pobreza persistente y conflictividad socioambiental. Analizar esta relación en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga no solo permite comprender las dinámicas sociales y económicas de Cajamarca, sino también aportar evidencia que contribuya a replantear los modelos de gestión de los recursos naturales y del gasto público en contextos de alta conflictividad.

1.3.1. Justificación científica

Desde la perspectiva académica, el estudio se justifica por la necesidad de generar conocimiento empírico y actualizado sobre la relación entre pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental en territorios extractivos. La literatura disponible ha abordado cada una de estas dimensiones por separado, pero aún son escasos los trabajos que exploran la interdependencia entre indicadores de pobreza, gobernanza hídrica, capacidad institucional y dinámicas de protesta social en un mismo marco analítico. Este enfoque integral permitirá llenar un vacío en la producción científica sobre justicia ambiental y desarrollo regional, y servirá como referente para investigaciones futuras en otros contextos mineros de América Latina.

1.3.2. Justificación técnica y práctica

En el plano técnico, la investigación busca proveer un marco de evidencia verificable que oriente decisiones de política pública y gestión territorial en contextos de alta conflictividad socioambiental. En particular, los resultados permiten identificar la relación entre privaciones estructurales de bienestar social expresadas en pobreza monetaria y multidimensional y la

dinámica de los conflictos socioambientales, aportando criterios técnicos para la priorización de intervenciones públicas.

Desde esta perspectiva, el estudio contribuye a optimizar la asignación y ejecución del canon y las regalías mineras como instrumentos para cerrar brechas de bienestar social, especialmente en salud y educación, mediante intervenciones estratégicas en agua y saneamiento, entendidas como factores mediadores que condicionan la persistencia de la pobreza y la intensidad de la conflictividad. Asimismo, los hallazgos ofrecen insumos técnicos para el diseño de mecanismos de gobernanza hídrica que aseguren un acceso equitativo, sostenible y socialmente legítimo al recurso, así como para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y consulta previa con mayor capacidad resolutive.

De este modo, la investigación se constituye en una herramienta de diagnóstico y apoyo técnico para autoridades regionales y locales, organizaciones sociales y empresas mineras, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y orientada a la prevención y gestión sostenible de los conflictos socioambientales.

1.3.3. Justificación institucional y personal

La investigación responde también a un interés institucional: fortalecer la capacidad de la universidad de origen y de los organismos aliados en la generación de conocimiento científico con impacto territorial. Al abordar un caso emblemático como Conga, el estudio contribuye a posicionar a la academia como un actor clave en la búsqueda de soluciones a conflictos que limitan la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible.

En el plano personal, el investigador es Ingeniero de Minas con estudios de Maestría en Gestión Ambiental y Recursos Naturales, complementados con una especialización en plantas de tratamiento de agua, seguridad minera y huella hídrica. Esta trayectoria, unida a la experiencia directa en el análisis de dinámicas socioeconómicas y ambientales en la región de Cajamarca, aporta un enfoque crítico, interdisciplinario y contextualizado. La combinación de

formación académica y práctica profesional no solo asegura la pertinencia del estudio, sino que también respalda su viabilidad metodológica. Asimismo, consolida la motivación para contribuir al entendimiento de un problema que trasciende el ámbito local y que afecta a otras regiones altoandinas del país.

1.3.4. Aporte científico y originalidad

El aporte científico de esta investigación se expresa en la construcción de un enfoque analítico integrador que permite examinar de manera conjunta la pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional y la conflictividad socioambiental en un territorio extractivo específico. A partir del estudio del entorno vinculado al Proyecto Minero Conga, el trabajo trasciende aproximaciones descriptivas o sectoriales y propone una lectura relacional que articula condiciones socioeconómicas, desempeño institucional y gestión del recurso hídrico como elementos interdependientes en la configuración del conflicto.

En términos metodológicos, la originalidad del estudio radica en el uso combinado de evidencia longitudinal y análisis correlacional aplicado a indicadores sociales y de ejecución hídrica, lo que permite observar patrones persistentes y variaciones temporales en la interacción entre pobreza y conflictividad socioambiental. Este abordaje introduce una perspectiva poco desarrollada en investigaciones previas, al vincular de manera sistemática las privaciones sociales con variables de gestión pública del agua, fortaleciendo la comprensión empírica del problema desde una escala territorial concreta.

En conjunto, los resultados amplían el debate académico sobre justicia ambiental, desarrollo regional y extractivismo en contextos altoandinos, al ampliar la base empírica disponible para el análisis de la gestión socioambiental y de las dinámicas de pobreza y conflictividad en territorios mineros.

1.4. Objetivos

1.4.1. *Objetivo General*

- Analizar la relación entre pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

1.4.2. *Objetivos Específicos*

- Determinar los niveles de pobreza en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.
- Caracterizar los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.
- Identificar el nivel de participación de la población en el conflicto socioambiental vinculado al Proyecto Minero Conga, 2011 - 2022.

1.5. Delimitación de la Investigación

1.5.1. *Delimitación geográfica de la investigación*

La investigación se delimitó geográficamente en las provincias de Celendín, Hualgayoc (Bambamarca) y Cajamarca, ubicadas en la región Cajamarca, en la sierra norte del Perú. La selección de estas unidades territoriales responde a criterios analíticos vinculados a la convergencia de tres procesos centrales del estudio: la persistencia de pobreza multidimensional, la recurrencia de conflictos socioambientales asociados a la actividad minera y las tensiones en torno a la gestión y disponibilidad del recurso hídrico.

En la provincia de Celendín, se consideraron de manera específica los distritos de Sorochuco y Huasmín, debido a que en sus cabeceras de cuenca se localizan lagunas y ecosistemas altoandinos directamente relacionados con el área de influencia del Proyecto Minero Conga. En este espacio territorial, el acceso y la protección del agua constituyen ejes centrales de la dinámica socioambiental y de las movilizaciones sociales registradas durante el período de estudio.

La provincia de Hualgayoc (Bambamarca) fue incluida por la coexistencia de actividad minera formal e informal, así como por la presencia histórica de pasivos ambientales que han afectado cuerpos de agua y condiciones de vida de la población local. Estas características han contribuido a la configuración de escenarios de vulnerabilidad socioambiental y a una elevada recurrencia de conflictos vinculados a la minería, acompañados de altos niveles de organización comunal.

Por su parte, la provincia de Cajamarca, en su condición de capital regional, fue incorporada como espacio clave de análisis al concentrar instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones sociales con capacidad de incidencia política. Desde este ámbito urbano se articularon procesos de negociación, debate público y toma de decisiones que influyeron de manera significativa en la evolución y visibilidad del conflicto socioambiental asociado al Proyecto Minero Conga.

La delimitación geográfica seleccionada permite integrar tres dimensiones complementarias:

- **Celendín** como territorio de defensa hídrica y cultural.
- **Hualgayoc-Bambamarca** como espacio marcado por pasivos mineros y organización comunitaria.
- **Cajamarca capital** como escenario político e institucional de negociación y confrontación.

En conjunto, la delimitación geográfica integra a Celendín como territorio asociado a la defensa del recurso hídrico, a Hualgayoc (Bambamarca) como espacio marcado por pasivos mineros y conflictividad persistente, y a Cajamarca capital como escenario institucional y político. Esta configuración territorial permite analizar de manera articulada la interacción entre riqueza minera, pobreza estructural y conflictividad socioambiental, incorporando dimensiones sociales, ambientales e institucionales relevantes para el estudio.

1.5.2. Delimitación temporal de la investigación

La investigación se delimitó temporalmente al periodo comprendido entre 2011 y 2022, seleccionado por su relevancia analítica y por la disponibilidad consistente de información que permite examinar de manera longitudinal la relación entre pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional y la conflictividad socioambiental vinculada al Proyecto Minero Conga. Este intervalo temporal resulta pertinente porque permite analizar la intensificación del conflicto, su transformación en el tiempo y la persistencia de sus causas estructurales, incluso en contextos de menor visibilidad de la protesta social.

El año 2011 marca el inicio de la fase de mayor intensificación de la conflictividad socioambiental asociada al Proyecto Minero Conga, cuando comunidades de las provincias de Celendín, Hualgayoc (Bambamarca) y Cajamarca articularon movilizaciones sociales en defensa de los ecosistemas hídricos y en cuestionamiento del modelo extractivo. Este punto de inflexión no solo expresa un conflicto ambiental, sino que evidencia la relación entre pobreza estructural, percepciones de exclusión social y debilidades en la gobernanza territorial, factores que contribuyeron a la escalada del conflicto.

Si bien el auge de la inversión minera en el país se inició en la década previa (2003–2013), el periodo de estudio se concentra a partir de 2011 debido a que es en este momento cuando las tensiones acumuladas por el crecimiento extractivo sin redistribución efectiva del bienestar se manifiestan de forma abierta, revelando la desconexión entre crecimiento económico, reducción de pobreza y gestión equitativa de los recursos naturales en el territorio cajamarquino.

El tramo intermedio, correspondiente al periodo 2013–2019, se caracteriza por la persistencia de niveles elevados de pobreza multidimensional, limitaciones en la ejecución del gasto público especialmente en agua y saneamiento y una fragmentación de los procesos de diálogo institucional. Aunque durante este intervalo se registra una reducción de la

conflictividad abierta en términos de movilizaciones masivas, las tensiones socioambientales no desaparecen, sino que adoptan formas latentes, asociadas al acceso al agua, a los pasivos ambientales y a la percepción de desigualdad en la distribución de los beneficios de la actividad minera. Esta etapa resulta clave para analizar cómo la pobreza y la debilidad institucional condicionan la continuidad del conflicto aun en ausencia de protestas visibles.

El periodo final, comprendido entre 2020 y 2022, incorpora dos factores críticos: por un lado, los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19, que profundizaron la vulnerabilidad de los hogares rurales; y, por otro, el resurgimiento de demandas comunitarias vinculadas a la calidad del agua y a la falta de resultados tangibles en la gestión del canon minero. Este contexto evidencia que, pese a la paralización del proyecto, las causas estructurales de la conflictividad pobreza persistente, desigualdad territorial y debilidades en la gobernanza hídrica permanecieron vigentes, reforzando la relación analítica entre pobreza y conflicto socioambiental.

En síntesis, la delimitación temporal 2011–2022 ofrece un marco suficiente y coherente para identificar la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental, analizar su evolución en el tiempo y evaluar cómo las condiciones socioeconómicas y la gestión institucional influyen en la persistencia del conflicto. Esta delimitación asegura una comprensión integral, dinámica y rigurosa del fenómeno, alineada con los objetivos del estudio y con el enfoque longitudinal adoptado.

1.5.3. Delimitación temática

La delimitación temática de la investigación se circunscribe al análisis de la relación entre los niveles de pobreza y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga: Celendín, Hualgayoc (Bambamarca) y Cajamarca durante el periodo 2011–2022. El estudio se estructura a partir de tres dimensiones analíticas interrelacionadas,

cuya articulación permite comprender de manera integral la dinámica del conflicto en el territorio.

En primer lugar, se aborda la dimensión socioeconómica, centrada en el análisis de los indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional que caracterizan las condiciones de vida de la población local y que constituyen un factor estructural de vulnerabilidad social.

En segundo lugar, se desarrolla la dimensión socioambiental, enfocada en los conflictos asociados a la actividad minera, con especial énfasis en el acceso, la calidad y la gestión del recurso hídrico, entendido como eje central de la conflictividad socioambiental en contextos extractivos altoandinos.

En tercer lugar, se considera la dimensión participativa, vinculada al nivel de involucramiento de la población en los procesos de movilización social, consulta, diálogo y negociación relacionados con el Proyecto Minero Conga, como expresión de las respuestas colectivas frente a las condiciones socioeconómicas y ambientales del territorio.

Estas tres dimensiones se analizan de manera integrada, bajo el supuesto de que la persistencia de la pobreza, las tensiones en torno a la gestión del agua y los niveles de participación social interactúan y se refuerzan mutuamente, configurando escenarios de conflictividad socioambiental sostenida en el tiempo.

No forman parte del análisis otras problemáticas sociales no directamente vinculadas al conflicto minero-hídrico como la violencia política, el narcotráfico o la migración urbana con el propósito de mantener un enfoque analítico claro, preciso y coherente con los objetivos de la investigación.

1.5.4. Delimitación metodológica

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, orientado a integrar el análisis cuantitativo de información secundaria con la recolección de información de carácter perceptual mediante encuestas estructuradas, aplicadas de forma

sistemática a la población de estudio. Esta estrategia metodológica permitió abordar la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental desde una perspectiva empírica integral, articulando indicadores objetivos con percepciones sociales estandarizadas.

En la dimensión cuantitativa, se emplearon fuentes oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de analizar indicadores de pobreza monetaria y multidimensional, niveles de ejecución presupuestal y registros de conflictos socioambientales asociados al Proyecto Minero Conga.

La dimensión de carácter perceptual se sustentó exclusivamente en la aplicación de encuestas estructuradas a población de zonas rurales de las provincias analizadas, las cuales permitieron recoger de manera estandarizada valoraciones, percepciones y experiencias vinculadas a los impactos sociales y ambientales de la actividad minera, la gestión del recurso hídrico y los mecanismos de participación social en el contexto del conflicto.

El diseño de la investigación es no experimental, de corte longitudinal y con alcance correlacional–explicativo, lo que permitió identificar tendencias en el tiempo y examinar las relaciones existentes entre las variables de pobreza y conflictividad socioambiental durante el período 2011–2022. Para la selección de los participantes se aplicó un muestreo intencional, considerando criterios de pertenencia territorial y vinculación directa con las zonas de influencia del Proyecto Minero Conga.

En cuanto a las delimitaciones metodológicas, el estudio reconoce que la conflictividad socioambiental constituye un fenómeno dinámico y multifactorial. En consecuencia, el análisis se circunscribe a las variables directamente relacionadas con la pobreza y la conflictividad en torno al Proyecto Minero Conga, sin incorporar otros factores de carácter político o macroeconómico nacional que exceden el alcance del diseño de investigación.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.1.1. Internacionales

Manrique y Vargas (2018) desarrollaron una investigación orientada a *analizar los conflictos socioambientales asociados a la explotación petrolera en la vereda Esmeralda*, ubicada en el municipio de Acacías, departamento del Meta, Colombia. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, y se apoyó en el uso de información secundaria y en la aplicación de un muestreo aleatorio sustentado en el modelo de Murray y Larry. La población analizada presentó una edad promedio cercana a los 40 años, predominio femenino y un nivel educativo mayoritariamente correspondiente a educación secundaria.

Los resultados evidenciaron que los principales factores generadores de conflicto estuvieron relacionados con la escasez de oportunidades laborales locales y con la degradación ambiental producida por la actividad extractiva, en un contexto caracterizado por una limitada presencia institucional. Asimismo, se identificó una percepción mayoritariamente negativa de la población hacia la industria petrolera, asociada al incremento del costo de vida, la llegada de población externa y la contaminación de fuentes hídricas, aunque se reconocieron beneficios puntuales vinculados a mejoras en infraestructura vial y empleo temporal. El estudio concluyó que la reducción de la conflictividad requiere fortalecer los mecanismos de relación entre la empresa y la comunidad, promover inversión social efectiva y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluyendo compensaciones por el uso de recursos hídricos. Este antecedente resulta pertinente para la presente investigación porque evidencia cómo las actividades extractivas inciden simultáneamente en las condiciones socioambientales y en las percepciones de bienestar de las poblaciones locales, elementos centrales para el análisis del caso Cajamarca.

Bastidas *et al.* (2018) desarrollaron un estudio orientado a comprender la relación entre la minería a cielo abierto y la emergencia de conflictos socioambientales en la Sierra Norte del estado de Puebla, México. La investigación se centró en dos proyectos mineros localizados en los municipios de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo, con el propósito de analizar las respuestas sociales generadas frente a la actividad extractiva y las formas de organización comunitaria desplegadas ante los riesgos percibidos.

El estudio se llevó a cabo mediante un enfoque de carácter descriptivo y de corte transversal, empleando el método deductivo. Para la recolección de información se aplicaron encuestas a una muestra de 141 familias residentes en las zonas de influencia directa de los proyectos mineros, lo que permitió identificar percepciones sociales, niveles de aceptación y rechazo, así como valoraciones sobre los impactos ambientales y sanitarios asociados a la actividad extractiva.

Los resultados evidenciaron una marcada fragmentación social en torno a la presencia minera, predominando posiciones de oposición al proyecto Ixtaca, fundamentadas principalmente en la percepción de amenazas al medio ambiente y a la salud de la población local. Asimismo, el estudio señala que los conflictos socioambientales observados se inscriben en procesos históricos más amplios de concentración económica y exclusión territorial, donde las comunidades locales perciben una distribución desigual de los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales.

Este antecedente resulta pertinente para la presente investigación en tanto aporta evidencia empírica sobre la relación entre minería, percepción de riesgo ambiental y conflictividad social en contextos rurales, contribuyendo a contextualizar los factores sociales que inciden en la dinámica de los conflictos socioambientales en territorios con alta dependencia de los recursos naturales.

Rubilar *et al.* (2022) desarrollaron la relación entre pobreza rural y conflictos socioambientales en territorios del sur de Chile, específicamente en zonas rurales de las regiones del Biobío y Ñuble, con el objetivo de identificar actores, dinámicas de poder y mecanismos de gestión asociados a la persistencia de dichos conflictos. El estudio abordó múltiples territorios rurales caracterizados por la presencia de actividades extractivas, integrando información cualitativa proveniente de actores locales y registros territoriales.

Los resultados permitieron identificar diversas tipologías de conflictos socioambientales vinculados principalmente a disputas por el acceso, uso y control de recursos naturales críticos. Asimismo, se evidenció que las limitaciones en la capacidad institucional y en la gestión de los recursos ambientales influyen de manera significativa en la reproducción de la pobreza rural y en la continuidad de los conflictos.

Este antecedente es pertinente para la presente investigación porque vincula explícitamente la pobreza rural con la conflictividad socioambiental y la gobernanza de los recursos naturales, dimensiones analíticas centrales para comprender la dinámica del conflicto en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga.

2.1.2. Nacionales

Ccama *et al.* (2019) realizaron una investigación orientada a identificar los factores que contribuyen a la generación de conflictos sociales en zonas de producción minera en el Perú. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, y utilizó un modelo lineal de probabilidad basado en información detallada sobre la localización, causas y actores involucrados en los conflictos, complementada con datos socioeconómicos a nivel distrital y características de las empresas mineras.

Los resultados evidenciaron que la pobreza y la desigualdad incrementan significativamente la probabilidad de ocurrencia de conflictos mineros, así como factores relacionados con el desempeño ambiental de las empresas y determinadas características

territoriales. Asimismo, se identificó que la procedencia de las empresas mineras influye en la probabilidad de conflicto, siendo mayor en el caso de empresas de capital extranjero. Este antecedente es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica cuantitativa para el análisis de la relación entre pobreza, desigualdad y conflictividad minera, reforzando el enfoque correlacional adoptado para el estudio de la región Cajamarca.

León (2019) desarrolló una investigación orientada a identificar los determinantes económicos y sociopolíticos de los conflictos socioambientales en el Perú, mediante un análisis regional con datos de panel correspondientes al periodo 2007–2016. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo y alcance correlacional, empleando modelos econométricos de efectos fijos y aleatorios.

Los resultados evidenciaron que variables estructurales como el subempleo, la participación femenina en los ingresos laborales, el peso relativo de las industrias extractivas y el acceso a tecnologías de información inciden significativamente en la ocurrencia de conflictos socioambientales. Asimismo, se identificó que la debilidad institucional y los déficits de inclusión social condicionan los mecanismos mediante los cuales las poblaciones canalizan sus demandas.

Este estudio resulta pertinente para la presente investigación porque demuestra empíricamente la influencia de factores estructurales y sociopolíticos en la conflictividad socioambiental, aportando un marco comparativo relevante para el análisis del caso de las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga.

Carrasco y Cueva (2023) desarrollaron un estudio orientado a analizar el monitoreo ambiental participativo como herramienta para la gestión y prevención de conflictos socioambientales en el sector agroindustrial, a partir del caso de la empresa Maple Etanol en la región Piura. La investigación adoptó un enfoque cualitativo y se apoyó en técnicas de observación y análisis de experiencias de participación ciudadana.

Los resultados indicaron que la efectividad de los mecanismos de monitoreo ambiental participativo depende del grado de involucramiento de autoridades locales, organizaciones sociales y población directamente afectada. El estudio concluyó que la participación ciudadana constituye un factor clave para la prevención de conflictos socioambientales. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque destaca el papel de la participación social y la gobernanza ambiental, dimensiones consideradas como variables mediadoras en el análisis del conflicto asociado al Proyecto Minero Conga.

2.1.3. Locales

Ormeño (2019) desarrolló una investigación orientada a analizar el papel de los comités de vigilancia ambiental en la prevención de conflictos socioambientales en el ámbito del Proyecto Minero La Granja, en la región Cajamarca. El objetivo del estudio fue evaluar cómo los mecanismos de participación y monitoreo ambiental influyen en la gestión de los impactos derivados de la actividad minera y en la reducción de tensiones sociales en las zonas de influencia directa.

La investigación adoptó un enfoque descriptivo de corte transversal, empleando un método deductivo para el análisis de los impactos socioambientales generados por el proyecto minero y de las dinámicas de participación ciudadana vinculadas al seguimiento ambiental. Para ello, se examinó información relacionada con la calidad ambiental del aire, suelo y agua, así como el funcionamiento de los comités de vigilancia y su interacción con las comunidades locales.

Los resultados evidenciaron que la actividad minera genera efectos negativos sobre los componentes ambientales, los cuales pueden convertirse en detonantes de conflictos sociales cuando no existen mecanismos adecuados de control, transparencia y participación. No obstante, el estudio concluyó que la participación activa de los comités de vigilancia ambiental contribuye a fortalecer la confianza entre los actores involucrados, mejorar el acceso a la

información y reducir la desconfianza de la población hacia el proyecto minero, favoreciendo la prevención de conflictos socioambientales.

Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica a nivel local sobre la importancia de la participación ciudadana y del monitoreo ambiental como herramientas de gestión de la conflictividad socioambiental en contextos mineros, particularmente en la región Cajamarca.

Carmona (2020) realizó una investigación orientada a analizar la influencia de los conflictos socioambientales en la economía del departamento de Cajamarca durante el periodo 2010–2017. El estudio adoptó un diseño no experimental de corte transversal y analizó un conjunto de conflictos vinculados a la actividad minera, empleando revisión documental y procesamiento estadístico de la información.

Los resultados mostraron un impacto negativo significativo de los conflictos socioambientales en la inversión privada y en las exportaciones regionales, así como pérdidas económicas asociadas a la paralización de proyectos mineros. Este antecedente es pertinente para la presente investigación porque evidencia las consecuencias económicas de la conflictividad socioambiental en Cajamarca, reforzando la necesidad de analizar las relaciones entre pobreza, gestión institucional y conflicto en el entorno del Proyecto Minero Conga.

Vidal (2020) desarrolló una investigación cualitativa orientada a analizar los enfoques de responsabilidad social y las dinámicas de interacción entre actores empresariales, estatales y comunitarios en el contexto de la empresa minera Yanacocha, en Cajamarca. El estudio empleó técnicas de análisis cualitativo para examinar las percepciones y discursos de los distintos actores involucrados en el proceso minero.

Los resultados evidenciaron que la divergencia de enfoques y expectativas entre los actores sociales y económicos constituye un factor central en la generación de conflictos socioambientales. El estudio concluyó que la comprensión de estas dinámicas resulta fundamental para mejorar los procesos

de diálogo y toma de decisiones. Este antecedente es relevante para la presente investigación porque aporta una perspectiva local sobre las interacciones entre empresa, Estado y sociedad civil, elementos clave para comprender la conflictividad asociada al Proyecto Minero Conga.

2.2. Bases Teóricas de la Investigación

El análisis de la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el periodo 2011–2022 se inscribe en un debate global sobre la paradoja del desarrollo extractivo, en el que territorios con alta dotación de recursos naturales presentan persistentes brechas de desigualdad, exclusión social y deterioro ambiental. Diversos estudios han señalado que esta paradoja no responde únicamente a fallas económicas, sino a configuraciones históricas de poder, distribución y gobernanza que condicionan la apropiación de los beneficios del crecimiento (Bebbington, 2012; Svampa, 2019). En el contexto peruano, Cajamarca constituye un caso representativo de esta tensión, al concentrar una importante actividad minera sin que ello se traduzca en mejoras sostenidas del bienestar social (De Echave, 2016; Defensoría del Pueblo, 2023).

Desde una perspectiva teórica, la pobreza ha sido abordada mediante enfoques que han evolucionado desde visiones centradas exclusivamente en la subsistencia hacia aproximaciones más integrales. Los primeros estudios, como los de Rowntree (1901), definieron la pobreza a partir de la incapacidad de alcanzar un umbral mínimo de subsistencia material. Posteriormente, Townsend (1979) introdujo el concepto de pobreza relativa, enfatizando las privaciones sociales y la exclusión respecto a los estándares de vida predominantes en una sociedad. En América Latina, la teoría de la dependencia (Dos Santos, 1970) aportó una lectura estructural al señalar que la inserción desigual de los países periféricos en la economía global reproduce condiciones persistentes de pobreza y vulnerabilidad en territorios proveedores de recursos naturales.

Estos enfoques fueron ampliados por el enfoque de capacidades propuesto por Sen (1999), que concibe la pobreza como la privación de libertades y oportunidades para desarrollar una vida valiosa, más allá del nivel de ingresos. Sobre esta base, Alkire y Foster (2011) desarrollaron un método de medición de la pobreza multidimensional que permite identificar privaciones simultáneas en ámbitos como educación, salud y condiciones de vida. Este enfoque ha sido adoptado por organismos internacionales y aplicado en contextos nacionales, incluido el Perú, como una herramienta clave para comprender la persistencia de la pobreza en territorios con actividad extractiva (PNUD, 2023; INEI, 2024).

La conflictividad socioambiental, por su parte, se conceptualiza como una expresión de disputas estructurales en torno al acceso, control y uso de recursos estratégicos. Desde las teorías clásicas del conflicto social, que destacan la existencia de intereses contrapuestos y relaciones asimétricas de poder (Marx, 1867), hasta enfoques contemporáneos como la violencia estructural (Galtung, 1969) y la teoría de la acción comunicativa (Habermas, 1981), se reconoce que los conflictos no son eventos aislados, sino procesos acumulativos vinculados a desigualdades históricas y déficits de legitimidad institucional. En el ámbito latinoamericano, la ecología política y la justicia ambiental han profundizado este análisis al mostrar que la conflictividad asociada a proyectos extractivos responde a patrones persistentes de exclusión social y a la defensa del territorio frente a modelos de desarrollo percibidos como inequitativos (Martínez-Alier, 2002; Svampa, 2019).

Un eje teórico fundamental para comprender estas dinámicas es la gobernanza hídrica, especialmente en territorios donde la minería se superpone con ecosistemas estratégicos. Ostrom (1990) sostuvo que la gestión sostenible de los recursos de uso común depende de arreglos institucionales legítimos, reglas claras y participación efectiva de los usuarios. Complementariamente, Rogers y Hall (2003) enfatizaron la necesidad de enfoques de gobernanza que integren equidad, transparencia y participación en la toma de decisiones. En el

caso peruano, diversos estudios advierten que la debilidad institucional, la centralización de decisiones y la limitada participación de las comunidades locales han intensificado los conflictos socioambientales en zonas rurales y mineras (Defensoría del Pueblo, 2022; Morales Rocha et al., 2025).

La articulación de estos enfoques teóricos permite construir un marco analítico integral para el estudio del caso Conga. La persistencia de la pobreza multidimensional, la fragilidad de los mecanismos de gobernanza del agua y la presión ejercida por la actividad extractiva configuran un escenario propicio para la emergencia y reproducción de conflictos socioambientales. Este andamiaje teórico no solo facilita la interpretación de las dinámicas de protesta y resistencia social, sino que también ofrece criterios para evaluar la efectividad de las políticas públicas y de los arreglos institucionales orientados a la gestión de recursos y a la reducción de brechas de bienestar en contextos de minería a gran escala.

2.2.1. Pobreza

La pobreza se concibe como un fenómeno multidimensional y de carácter estructural que excede la insuficiencia de ingresos y se expresa mediante privaciones simultáneas en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y la participación en los procesos de decisión colectiva (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). Desde este enfoque, la pobreza no constituye una condición transitoria, sino una situación persistente que limita de manera sostenida las capacidades y oportunidades de las personas para desarrollar una vida digna. En territorios con marcada presencia extractiva, como la región Cajamarca, la coexistencia de una elevada riqueza minera con altos niveles de pobreza evidencia profundas desigualdades en la distribución de los beneficios del crecimiento económico (INEI, 2024; PNUD, 2023).

En el contexto peruano, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) muestra que una proporción significativa de los hogares rurales enfrenta carencias concurrentes en el acceso a

agua segura, saneamiento, energía y educación, lo que revela la persistencia de brechas estructurales en el bienestar social (INEI, 2024). Cajamarca presenta, además, los niveles más elevados de pobreza monetaria a escala nacional, así como una incidencia relevante de pobreza extrema, lo que refuerza la idea de que la actividad minera no se ha traducido en mejoras sostenidas en las condiciones de vida de la población local (IPE, 2024). Este escenario se vincula con la denominada maldición de la abundancia, según la cual la disponibilidad de recursos naturales no garantiza, por sí misma, mayores niveles de desarrollo humano ni reducción de la pobreza (Bebbington & Bury, 2021).

Desde la dimensión ambiental, la degradación de ecosistemas estratégicos y la afectación de fuentes hídricas incrementan la vulnerabilidad de los medios de vida campesinos, especialmente en economías rurales dependientes de la agricultura y la ganadería de subsistencia (Glave & Kuramoto, 2022). En el plano político, la limitada inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de los recursos naturales refuerza percepciones de inequidad, desconfianza institucional y exclusión social (Gamu, 2024). En conjunto, estos elementos permiten comprender la pobreza en Cajamarca como un déficit acumulado en dimensiones sociales, ambientales y políticas, estrechamente vinculado a la dinámica de la conflictividad socioambiental asociada al Proyecto Minero Conga.

En este marco teórico, la información sistematizada en la Tabla 1 cumple una función contextual, al describir la magnitud y persistencia de la pobreza en la región. De este modo, la pobreza multidimensional se configura como una categoría analítica central para comprender la recurrencia y la intensidad de los conflictos en contextos extractivos, sin anticipar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Tabla 1*Dimensiones en territorios cercanos a Proyectos Mineros*

Dimensión	Descripción	Ejemplo
Económica	Insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas.	Falta de dinero para alimentación adecuada.
Social	Marginación y falta de acceso a servicios esenciales.	Exclusión del sistema educativo.
Política	Ausencia de participación en decisiones sobre recursos.	Imposibilidad de incidir en elecciones o consultas locales.
Ambiental	Privación de recursos naturales esenciales para la subsistencia.	Carencia de acceso a agua potable.

Nota. Adaptado de Sen (1999)

2.2.1.1. Teoría de la pobreza absoluta – Seebohm Rowntree (1901)

El estudio desarrollado por Seebohm Rowntree (1901) en la ciudad de York, Inglaterra, introdujo el concepto de pobreza absoluta al definir un umbral mínimo de subsistencia medible a partir del ingreso necesario para cubrir requerimientos básicos como alimentación, vivienda, vestimenta, combustible y otros servicios esenciales. El principal aporte de este enfoque radicó en desplazar la comprensión de la pobreza desde una visión moral o asistencial hacia un análisis empírico y cuantificable, sentando las bases para el diseño de políticas sociales sustentadas en indicadores objetivos.

No obstante, una de las principales limitaciones de la teoría de la pobreza absoluta es su reducción de la pobreza a una dimensión estrictamente económica y biológica, al centrarse exclusivamente en la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas de subsistencia. Este enfoque deja fuera factores sociales, culturales, políticos y ambientales que inciden en la reproducción de la pobreza y en las condiciones de exclusión social, especialmente en territorios donde el acceso a recursos naturales y servicios básicos se ve condicionado por dinámicas estructurales más complejas (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). En contextos mineros como el de Cajamarca, caracterizados por conflictos en torno al agua, degradación ambiental y distribución desigual de los beneficios extractivos, la aproximación de Rowntree resulta insuficiente para explicar la persistencia de la pobreza en todas sus dimensiones.

A pesar de estas limitaciones, la noción de pobreza absoluta mantiene relevancia analítica en regiones como Cajamarca, donde una proporción significativa de la población continúa sin alcanzar los niveles mínimos de subsistencia. Las elevadas tasas de pobreza monetaria y pobreza extrema registradas en la región en años recientes evidencian que amplios sectores de la población aún enfrentan carencias básicas, situación que puede ser interpretada a la luz del umbral propuesto por Rowntree (INEI, 2024; IPE, 2024).

Desde la perspectiva de la presente investigación, la teoría de la pobreza absoluta constituye un punto de partida conceptual que permite identificar condiciones mínimas de subsistencia no satisfechas en territorios mineros. Sin embargo, este marco se amplía al incorporar dimensiones socioambientales, mostrando que la pobreza en estos contextos no solo se expresa en la incapacidad de cubrir la canasta básica, sino también en la precariedad del acceso al agua segura, al saneamiento y a medios de vida sostenibles, elementos particularmente relevantes en áreas de influencia del Proyecto Minero Conga.

En este sentido, la información presentada en la Tabla 2 permite contextualizar la persistencia de carencias básicas en la región Cajamarca y situar analíticamente la pobreza absoluta como una categoría relevante para el estudio de la conflictividad socioambiental en territorios extractivos, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Tabla 2

Comparación del umbral de subsistencia (Rowntree,1901) y Cajamarca (2023)

Categoría	Definición de Rowntree (1901)	Situación en Cajamarca (2023)
Alimentación	Canasta mínima para garantizar nutrición básica	18,1 % en pobreza extrema no cubre alimentación adecuada (INEI, 2024)
Vivienda	Techo y condiciones básicas de habitabilidad	Déficit habitacional en zonas rurales supera el 40 % (IPE, 2024)
Servicios básicos	Combustible, agua y saneamiento	Más del 35 % de hogares rurales sin acceso a agua segura (INEI, 2024)

Nota. Elaboración propia a partir de Rowntree (1901)

La teoría de Rowntree conserva utilidad analítica para identificar las privaciones materiales más severas y dimensionar la vulnerabilidad social en contextos como el de la región Cajamarca. No obstante, su aplicación pone de manifiesto la necesidad de complementar este enfoque con perspectivas más amplias, como la pobreza relativa y la pobreza multidimensional, que permiten captar de manera más integral la complejidad del fenómeno en territorios extractivos contemporáneos.

2.2.1.2. Teoría de la pobreza relativa – Peter Townsend (1979)

La teoría de la pobreza relativa desarrollada por Townsend (1979) amplió de manera sustantiva la comprensión del fenómeno al definir la pobreza como una forma de exclusión respecto a los estándares de vida socialmente aceptados en una determinada sociedad. Desde esta perspectiva, un hogar no se considera pobre únicamente por la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas, sino también cuando se ve imposibilitado de participar plenamente en las actividades, costumbres y formas de vida consideradas normales en su contexto social.

El principal aporte de este enfoque consiste en concebir la pobreza como un fenómeno relacional y dinámico, estrechamente vinculado a las desigualdades sociales y a los mecanismos de exclusión. En este sentido, la pobreza relativa se expresa a través de limitaciones en el acceso a educación, salud, empleo formal, participación política y vida cultural, elementos que inciden directamente en las oportunidades de integración social y en el ejercicio efectivo de derechos (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). Esta concepción representó un avance significativo respecto a los enfoques centrados exclusivamente en la subsistencia material y sentó las bases para el desarrollo de aproximaciones multidimensionales de la pobreza.

En contextos territoriales como el de la región Cajamarca, caracterizados por una fuerte presencia extractiva, la noción de pobreza relativa resulta particularmente pertinente para el análisis teórico. Aun cuando determinados sectores de la población pueden superar el umbral

monetario mínimo de subsistencia, persisten privaciones asociadas al acceso desigual a servicios básicos, vivienda adecuada y oportunidades de desarrollo, así como a la limitada participación en los procesos de decisión sobre el uso de los recursos naturales (INEI, 2024; PNUD, 2023). Estas condiciones permiten comprender la pobreza no solo como carencia económica, sino como una forma sostenida de exclusión social y territorial.

Desde esta perspectiva, la información presentada en la Tabla 3 permite ilustrar las diferencias conceptuales entre la pobreza absoluta y la pobreza relativa, destacando cómo el enfoque de Townsend amplía el análisis hacia dimensiones vinculadas a la desigualdad, la marginación social y la participación. Este marco teórico aporta elementos fundamentales para comprender las limitaciones del desarrollo en territorios extractivos y su relación con la conflictividad socioambiental, sin adelantar los resultados empíricos que serán abordados en los capítulos posteriores.

Tabla 3

Comparación entre pobreza absoluta y pobreza relativa

Criterio	Pobreza absoluta (Rowntree, 1901)	Pobreza relativa (Townsend, 1979)	Situación en Cajamarca (2011-2022)
Definición	Umbral mínimo de subsistencia (alimentación, vivienda, servicios básicos).	Exclusión respecto de los estándares de vida normales en una sociedad.	Cajamarca: 44,5 % pobreza monetaria y exclusión en educación, salud y servicios (INEI, 2024; PNUD, 2023).
Dimensión central	Biológica y económica.	Social y relacional.	Carencias en servicios públicos, participación política y empleo formal.
Limitación	Ignora factores sociales y culturales.	Puede variar según el contexto social.	Explica la desigualdad persistente en regiones mineras como Cajamarca durante el periodo 2011-2022.

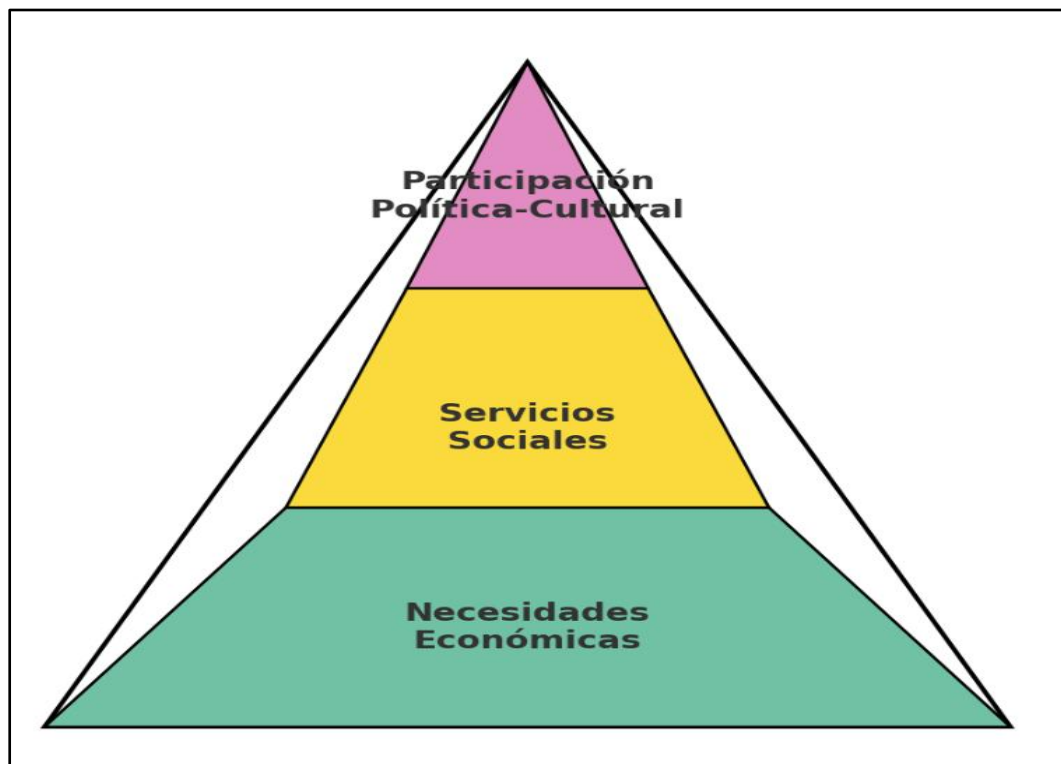
Nota. Elaboración propia a partir de Townsend (1979)

La Figura 1 sintetiza de manera esquemática la propuesta teórica de Townsend, mostrando que la pobreza relativa puede comprenderse como un proceso escalonado. Este proceso se inicia con limitaciones en el nivel económico, asociadas a ingresos insuficientes; se profundiza en el

plano social, a través del acceso restringido a servicios esenciales; y se consolida en el ámbito político-cultural, mediante la exclusión de la participación plena en la vida social y colectiva.

Figura 1

Esquema conceptual de la pobreza relativa



Nota. Elaboración propia a partir de Townsend (1979).

En el marco conceptual de la presente investigación, la teoría de la pobreza relativa propuesta por Townsend permite comprender que la pobreza en territorios como Cajamarca no se reduce a la insuficiencia de ingresos, sino que se expresa en formas sostenidas de exclusión social. Este enfoque teórico resulta particularmente pertinente para analizar contextos extractivos, donde las privaciones materiales se combinan con desigualdades en la distribución de beneficios y con limitaciones en la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, la pobreza relativa ofrece un marco explicativo para interpretar por qué las demandas sociales asociadas a proyectos extractivos no se circunscriben únicamente a

carencias económicas, sino que incorporan reclamos vinculados a la equidad, el reconocimiento social y la participación efectiva. En consecuencia, esta teoría proporciona fundamentos conceptuales para analizar la posible articulación entre pobreza persistente y conflictividad socioambiental en torno al Proyecto Minero Conga, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

2.2.1.3. Teoría de la dependencia y pobreza estructural – Theotonio Dos Santos (1970)

La teoría de la dependencia, desarrollada en América Latina por autores como Theotonio Dos Santos (1970), plantea que la pobreza en los países periféricos no puede explicarse únicamente a partir de factores internos, sino que responde a su inserción estructuralmente desigual en la economía mundial. Desde este enfoque, las economías periféricas se especializan en la exportación de materias primas y recursos naturales, mientras dependen de la importación de tecnología y bienes manufacturados provenientes de los países centrales. Esta relación asimétrica configura un patrón de acumulación desigual, en el cual los excedentes económicos tienden a concentrarse fuera de los territorios donde se realiza la extracción, reproduciendo condiciones de subdesarrollo y pobreza estructural.

El principal aporte de esta teoría radica en visibilizar la dimensión estructural e histórica de la pobreza, al vincularla con relaciones de dependencia económica y con la forma en que los países periféricos se insertan en los mercados internacionales. En contextos como el peruano, donde la actividad minera constituye un componente central de las exportaciones, este enfoque resulta especialmente útil para analizar por qué el crecimiento basado en la extracción de recursos naturales no se traduce necesariamente en mejoras proporcionales del bienestar social (Bebbington, 2021).

No obstante, la teoría de la dependencia presenta limitaciones relevantes para el análisis de realidades contemporáneas. Entre ellas, se encuentra la escasa operacionalización empírica de

sus postulados en estudios recientes, así como la ausencia de una incorporación explícita de dimensiones ambientales y de gobernanza de los recursos naturales, aspectos centrales en los conflictos socioambientales asociados a la minería en la actualidad.

En el caso de la región Cajamarca, la teoría de la dependencia ofrece un marco interpretativo para comprender la coexistencia de una intensa actividad minera representada por operaciones de gran escala como Yanacocha y el Proyecto Minero Conga con elevados niveles de pobreza y desigualdad social. La persistencia de carencias básicas en amplios sectores de la población rural, junto con la percepción de una distribución inequitativa de los beneficios generados por la minería, puede analizarse a la luz del concepto de transferencia estructural de excedentes planteado por Dos Santos, según el cual los beneficios económicos tienden a concentrarse fuera de los territorios de extracción.

En este sentido, la información presentada en la Tabla 4 permite contextualizar analíticamente la vigencia de los planteamientos estructurales de la teoría de la dependencia en el ámbito regional, al ilustrar la brecha existente entre la riqueza generada por la actividad minera y las condiciones de vida de las comunidades locales. Este enfoque teórico contribuye así a comprender la pobreza como un fenómeno estructural y persistente en territorios extractivos, proporcionando fundamentos conceptuales para el análisis de la conflictividad socioambiental en torno al Proyecto Minero Conga, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Tabla 4*Síntesis de la teoría de la dependencia aplicada al caso Conga-Cajamarca (2011-2022)*

Concepto central	Planteamiento de Dos Santos (1970)	Aplicación en Cajamarca (2011–2022)
Centro–periferia	Relación desigual: periferia provee materias primas y depende de importaciones tecnológicas.	Cajamarca exporta recursos minerales, pero importa tecnología y servicios de alto valor.
Transferencia de excedentes	La riqueza fluye hacia los países centrales.	Rentas de la minería se concentran en corporaciones y capital externo.
Pobreza estructural	Condición permanente por dependencia económica.	Persistencia de pobreza monetaria (44,5 % en 2023) y pobreza extrema (18,1 %).
Conflictos sociales	Surgen por desigual distribución de beneficios.	Conflictos socioambientales en Conga como expresión de inequidad y exclusión.

Nota. Elaboración propia a partir de Dos Santos (1970).

Desde una perspectiva teórica, la propuesta de la dependencia permite interpretar la persistencia de la pobreza en la región Cajamarca no como un fenómeno aislado o coyuntural, sino como el resultado de un modelo de desarrollo extractivo caracterizado por relaciones estructurales de desigualdad. Este enfoque aporta un marco explicativo para comprender cómo la concentración de beneficios económicos y la limitada redistribución de excedentes pueden coexistir con condiciones persistentes de pobreza en territorios con alta dotación de recursos naturales.

En este sentido, la teoría de la dependencia ofrece fundamentos conceptuales para analizar la posible relación entre pobreza estructural y conflictividad socioambiental, al destacar que las desigualdades históricas y territoriales pueden incidir en la intensidad y recurrencia de los conflictos asociados a la actividad extractiva. Asimismo, este marco teórico permite orientar el análisis hacia la identificación de condiciones estructurales que influyen en la dinámica del conflicto en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el periodo 2011–2022, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

2.2.1.4. Enfoques contemporáneos sobre pobreza

La comprensión de la pobreza ha experimentado una evolución significativa más allá de las formulaciones clásicas propuestas por Rowntree, Townsend y la teoría de la dependencia. En las últimas décadas, la pobreza ha dejado de concebirse exclusivamente como insuficiencia de ingresos o carencias materiales mínimas, para ser entendida como un fenómeno multidimensional, dinámico y relacional que afecta de manera simultánea las esferas económica, social, política y ambiental (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). Este giro conceptual ha permitido ampliar el análisis del bienestar humano e incorporar dimensiones vinculadas a las oportunidades, la participación y la calidad de vida.

A partir de estos avances, organismos internacionales, gobiernos y comunidades académicas han adoptado enfoques e indicadores más integrales, orientados a captar la complejidad de las privaciones que experimentan las personas y los territorios, especialmente en contextos de desigualdad persistente (PNUD, 2023; INEI, 2024). Estos enfoques resultan particularmente relevantes para países con economías basadas en la extracción de recursos naturales, donde el crecimiento económico no necesariamente se traduce en mejoras sostenidas del bienestar social.

En el caso peruano, y de manera específica en la región Cajamarca, la aplicación de enfoques contemporáneos sobre pobreza permite analizar la coexistencia de una elevada actividad minera con persistentes niveles de pobreza y exclusión social durante el periodo 2011–2022. Diversos estudios han señalado que esta situación responde a desigualdades estructurales en la distribución de los beneficios del crecimiento y a déficits históricos en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo (IPE, 2024; Bebbington, 2021). Esta perspectiva resulta útil para comprender la denominada paradoja de la abundancia, según la cual territorios con alta dotación de recursos naturales pueden mantener condiciones de pobreza persistente cuando

existen fallas en los mecanismos de redistribución y gobernanza (Bebbington & Bury, 2013; Svampa, 2019).

En este marco, se identifican tres enfoques contemporáneos que enriquecen la comprensión de la pobreza en contextos extractivos. En primer lugar, el enfoque de capacidades propuesto por Sen (1999), que redefine la pobreza como privación de libertades sustantivas y resalta la importancia de la agencia y el desarrollo humano. En segundo lugar, el enfoque de pobreza multidimensional desarrollado por Alkire y Foster (2011), que operacionaliza estas privaciones en indicadores medibles y comparables, superando la visión centrada exclusivamente en el ingreso. Finalmente, la evidencia empírica reciente generada en el Perú durante el periodo 2011–2022 aporta un marco contextual que permite aplicar y discutir estos enfoques en realidades territoriales específicas, como la región Cajamarca, sin adelantar los resultados empíricos que serán abordados en los capítulos posteriores.

➤ **Enfoque de capacidades – Amartya Sen (1999)**

El enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen (1999) representó un cambio paradigmático en la comprensión de la pobreza y el desarrollo, al redefinir la pobreza como la privación de libertades sustantivas. Desde esta perspectiva, el bienestar no se evalúa únicamente a partir del nivel de ingresos, sino en función de las oportunidades reales que poseen las personas para elegir y llevar la vida que consideran valiosa. Para ello, Sen introdujo los conceptos de funcionamientos, entendidos como los logros efectivos como estar adecuadamente nutrido, educado o gozar de buena salud, y capacidades, definidas como las oportunidades reales para alcanzar dichos logros. Este enfoque influyó de manera decisiva en la creación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990.

Entre los principales aportes del enfoque de capacidades se encuentran el desplazamiento del énfasis analítico desde el ingreso hacia el bienestar integral y las libertades humanas, la

provisión de un marco normativo para orientar las políticas públicas hacia la expansión de capacidades, y la ampliación del debate sobre desarrollo humano en contextos marcados por desigualdades estructurales (Nussbaum, 2011; PNUD, 2023). No obstante, este enfoque también presenta limitaciones, particularmente en lo referido a la dificultad de operacionalizar y medir las capacidades de manera directa, así como a la ausencia de indicadores plenamente consensuados para su evaluación empírica, especialmente en contextos rurales y territorios con alta heterogeneidad social (Alkire & Foster, 2011).

En regiones con fuerte presencia extractiva, como Cajamarca, el enfoque de capacidades ofrece un marco conceptual pertinente para analizar las brechas existentes entre crecimiento económico y desarrollo humano. Diversos indicadores sociales muestran que, a pesar de la generación de renta asociada a la actividad minera, persisten privaciones significativas en ámbitos como nutrición, salud y educación, lo que sugiere limitaciones en la expansión efectiva de las capacidades humanas (INEI, 2024; Reyes-Narváez et al., 2019). Desde esta perspectiva, la pobreza puede interpretarse no solo como insuficiencia monetaria, sino como un conjunto de obstáculos estructurales que restringen el desarrollo de las personas y comunidades.

Estudios recientes (Bartolomei et al., 2024) evidencian que el enfoque de capacidades puede aplicarse en proyectos de desarrollo mediante la medición del bienestar en dimensiones como educación, salud y nutrición, ofreciendo orientaciones metodológicas para su adaptación a contextos extractivos. En la región Cajamarca, las limitaciones en el acceso a agua segura, saneamiento, electricidad y servicios educativos restringen la expansión de capacidades humanas, lo que contribuye a reforzar percepciones de exclusión social frente a proyectos mineros como Conga.

La Tabla 5 permite ilustrar que, pese al incremento de ingresos asociados a la actividad minera en Cajamarca, persisten déficits estructurales en capacidades básicas. Entre ellos destacan la carencia de saneamiento adecuado en una proporción significativa de hogares, la elevada

prevalencia de anemia infantil y las limitaciones en la culminación de la educación secundaria en zonas rurales. Estas brechas sugieren que la pobreza en la región trasciende la dimensión monetaria y se manifiesta como una privación multidimensional persistente, que limita el despliegue de capacidades humanas y restringe el desarrollo equitativo.

En este sentido, la información presentada cumple una función analítica al aportar evidencia empírica desagregada relevante para el examen de la hipótesis específica 1, permitiendo comprender cómo la persistencia de privaciones estructurales en Cajamarca constituye un obstáculo para el desarrollo humano y un elemento explicativo de la conflictividad socioambiental. La limitada traducción de la renta minera en mejoras sostenibles en agua, salud, educación y servicios básicos contribuye a percepciones de inequidad y exclusión, las cuales alimentan procesos de desconfianza institucional y oposición social frente a proyectos extractivos como el Proyecto Minero Conga.

Tabla 5

Brechas en capacidades básicas en Cajamarca (2011-2022)

Brecha / Capacidad básica	Indicador (%)	Fuente Oficial	Notas
Agua potable	~ 88 % Hogares con acceso a agua por red pública	CEPLAN – Ficha de acceso a agua (2022)	El acceso es mayor en urbano que en rural; Cajamarca presenta rezagos en continuidad y calidad.
Saneamiento	40.5% de hogares con acceso a saneamiento mejorado	INEI – ENAHO / Compendio estadístico Cajamarca	Brechas marcadas entre zonas urbanas y rurales; déficit histórico en disposición adecuada de excretas.
Electricidad	92% de hogares con electricidad en el hogar	INEI – ENAHO / Compendio estadístico Cajamarca	Cobertura se amplió en la última década, pero persisten zonas rurales aisladas sin servicio.

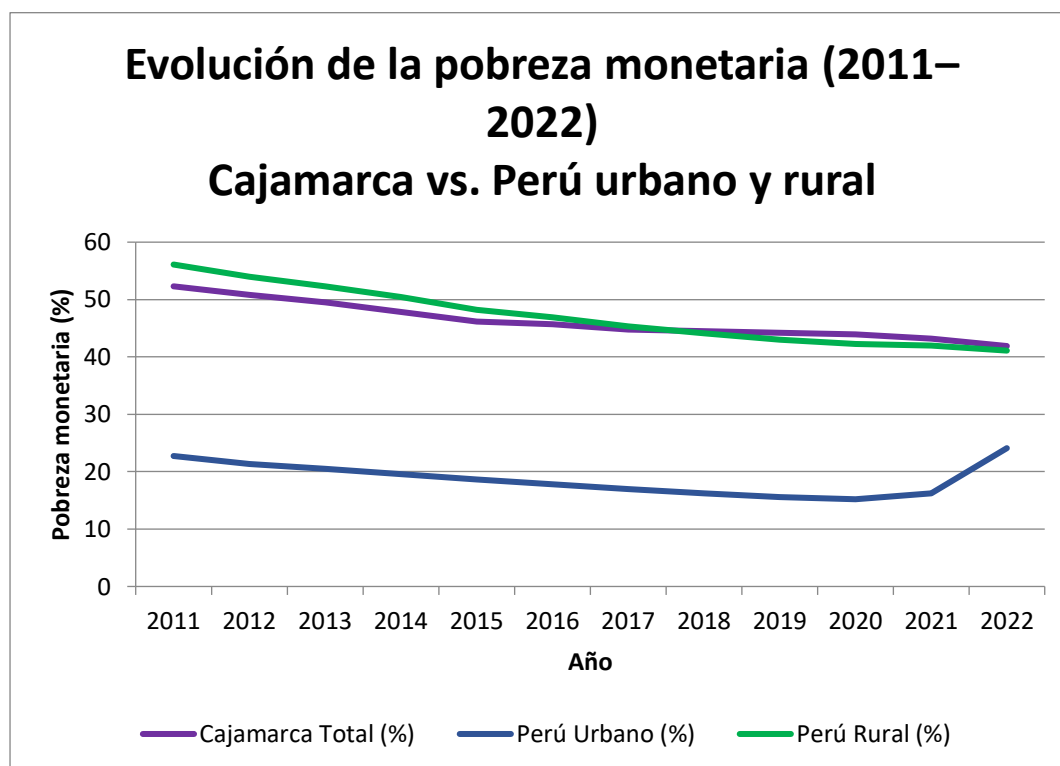
Educación secundaria	~ 76,5 % de jóvenes 17–19 con secundaria completa	MINEDU – ESCALE / Observatorio PEN	Menos del 60 % de jóvenes rurales culmina secundaria; refleja exclusión educativa.
Salud infantil (anemia)	38,2 % de niños 6–35 meses con anemia	INEI – ENDES, Informe departamental Cajamarca (2022)	Más de 1 de cada 3 niños presenta anemia; condiciona capacidades futuras y bienestar.
Pobreza monetaria	41.9% de personas en condición de pobreza monetaria	INEI – Informe Evolución de la Pobreza Monetaria (2011–2022)	Cajamarca mantiene la mayor incidencia de pobreza monetaria del país en 2022 (44,5 %).

Nota. Elaboración propia a partir de datos oficiales de CEPLAN (2022)

De manera complementaria, la Figura 2 presenta una comparación de la evolución de la pobreza monetaria en la región Cajamarca con las tendencias urbanas y rurales a nivel nacional durante el periodo 2011–2022. Esta representación gráfica permite contextualizar la posición relativa de Cajamarca dentro del escenario nacional, evidenciando que, aun en periodos de reducción general de la pobreza, la región mantiene niveles sistemáticamente superiores, especialmente en el ámbito rural.

Desde una perspectiva analítica, este contraste resulta útil para comprender que las dinámicas de pobreza en Cajamarca no pueden interpretarse únicamente como fluctuaciones coyunturales asociadas al ciclo económico, sino que se inscriben en un entramado de desigualdades territoriales más amplias. En este sentido, la figura aporta un soporte conceptual para el análisis de factores estructurales vinculados al acceso desigual a servicios básicos y oportunidades de desarrollo, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Figura 2 Evolución de la pobreza monetaria (2011-2022) Cajamarca vs Perú urbano y rural



Nota. Elaboración propia a partir de INEI (2011-2022).

Desde el enfoque de capacidades, Sen (1999) plantea que la pobreza no puede explicarse únicamente a partir de ingresos insuficientes, sino que debe entenderse como la limitación en el despliegue de capacidades humanas fundamentales. Este planteamiento permite ampliar el análisis del bienestar hacia dimensiones como la educación, la salud y el acceso a condiciones básicas para una vida digna.

En contextos territoriales como el de la región Cajamarca, diversos indicadores sociales muestran la persistencia de privaciones en ámbitos clave, entre ellos la educación, la salud y el acceso al agua segura, lo que puede interpretarse como restricciones estructurales a la expansión de capacidades humanas (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2024; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2023). Desde esta perspectiva, la ausencia de libertades sustantivas ofrece un marco explicativo para analizar percepciones de exclusión social y fragilidad de la cohesión comunitaria en territorios con fuerte presencia extractiva.

Este enfoque resulta consistente con planteamientos que vinculan las privaciones estructurales con la emergencia de tensiones sociales en contextos extractivos, al señalar que las limitaciones persistentes en el bienestar pueden incidir en la forma en que las comunidades perciben y responden a los proyectos de explotación de recursos naturales (Bebbington & Bury, 2021). En este sentido, el enfoque de capacidades aporta fundamentos conceptuales relevantes para el análisis de la posible relación entre pobreza y conflictividad socioambiental en torno al Proyecto Minero Conga, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

➤ **Enfoque multidimensional de la pobreza – Sabina Alkire y James Foster (2011)**

El enfoque multidimensional de la pobreza, desarrollado por Sabina Alkire y James Foster (2011), constituyó un avance sustantivo respecto a las mediciones tradicionales centradas exclusivamente en el ingreso monetario. Este enfoque concibe la pobreza como un fenómeno complejo que afecta de manera simultánea diversas dimensiones de la vida de las personas, entre ellas la educación, la salud, las condiciones de vivienda y el acceso a servicios básicos. Metodológicamente, el índice propuesto permite identificar tanto la incidencia de la pobreza la proporción de personas u hogares que experimentan privaciones como su intensidad, entendida como el número de carencias concurrentes que afectan a cada unidad de análisis.

Adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y progresivamente incorporado por organismos nacionales de estadística, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el enfoque multidimensional ofrece una herramienta operativa para analizar la pobreza estructural desde una perspectiva más amplia que el consumo monetario. Bajo este marco, un hogar puede no ser clasificado como pobre por ingresos y, sin embargo, presentar privaciones simultáneas en dimensiones esenciales del bienestar, lo que amplía significativamente la comprensión del fenómeno.

En el contexto peruano, la aplicación del enfoque multidimensional ha permitido visibilizar desigualdades territoriales persistentes, particularmente en zonas rurales, altoandinas y con fuerte presencia extractiva (INEI, 2024). En regiones como Cajamarca, caracterizadas por una elevada actividad minera y, al mismo tiempo, por brechas sociales significativas, este enfoque resulta especialmente pertinente para analizar privaciones vinculadas al acceso a servicios básicos, la culminación de la educación secundaria y las condiciones de vida en áreas rurales (PNUD, 2023; CEPLAN, 2022).

No obstante, el enfoque de Alkire y Foster presenta algunas limitaciones analíticas. En primer lugar, su carácter eminentemente estadístico permite identificar y medir carencias, pero no explica de manera directa los procesos sociales y políticos que las generan ni su relación con fenómenos como la conflictividad social. En segundo lugar, este enfoque no incorpora de forma explícita variables ambientales ni aspectos vinculados a la gobernanza de los recursos naturales, dimensiones centrales para el análisis de territorios mineros y rurales (Alkire & Foster, 2011).

Desde la perspectiva de la presente investigación, el enfoque multidimensional de la pobreza aporta un marco metodológico verificable y comparativo que complementa el enfoque de capacidades de Sen, al traducir las privaciones en indicadores observables y medibles. En este sentido, la información presentada en el marco de este enfoque permite contextualizar la persistencia de carencias estructurales en la región Cajamarca y ofrece fundamentos conceptuales para analizar su posible relación con la conflictividad socioambiental asociada al Proyecto Minero Conga, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Estudios recientes han destacado la vigencia del enfoque multidimensional para el análisis de la pobreza rural en el Perú, al evidenciar la coexistencia de privaciones simultáneas en educación, salud y condiciones de vida, lo que refuerza su utilidad como herramienta analítica

en investigaciones orientadas a comprender desigualdades persistentes en contextos territoriales específicos (Clausen, 2025).

➤ **Enfoques empíricos recientes en el Perú – INEI, PNUD, Hernández-Vásquez**

Durante la última década, los enfoques empíricos sobre la pobreza en el Perú han incorporado metodologías más integrales que complementan la medición monetaria tradicional con aproximaciones multidimensionales. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha publicado de manera sistemática informes sobre la evolución de la pobreza monetaria para el periodo 2011–2022, los cuales permiten analizar tendencias nacionales y regionales a partir de indicadores comparables en el tiempo. Estos reportes muestran que, si bien se registraron reducciones a nivel agregado, la dinámica de la pobreza ha sido heterogénea entre regiones y especialmente persistente en el ámbito rural (INEI, 2023).

De manera complementaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha promovido el uso del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como herramienta para captar privaciones estructurales vinculadas al acceso a agua segura, saneamiento, electricidad, educación y salud. Los informes recientes del PNUD destacan que departamentos predominantemente rurales y con fuerte presencia de actividades extractivas presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, lo que pone en evidencia desigualdades territoriales persistentes en el país (PNUD, 2023).

En el ámbito académico, diversos estudios han profundizado en el análisis de la pobreza multidimensional a partir de microdatos de encuestas nacionales. Hernández-Vásquez et al. (2022), utilizando información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), identifican que la pobreza multidimensional en el Perú se asocia con factores estructurales como la residencia rural, los bajos niveles de educación materna y la limitada cobertura de servicios preventivos de salud. Sus resultados muestran que la probabilidad de experimentar privaciones multidimensionales es significativamente mayor en las zonas rurales de la Sierra y

la Selva en comparación con Lima Metropolitana. De forma complementaria, Hinojosa Pérez et al. (2024) analizan la eficacia de programas sociales y variables socioeconómicas en la reducción de la pobreza regional, señalando avances parciales, pero también la persistencia de brechas estructurales, especialmente en regiones rurales y mineras.

En este contexto, la información sintetizada en la Tabla 6 cumple una función ilustrativa al mostrar las diferencias territoriales en la evolución de la pobreza monetaria y multidimensional en el Perú durante el periodo 2011–2022. Los datos permiten contextualizar la situación de regiones como Cajamarca, donde la incidencia de la pobreza se mantiene elevada en el ámbito rural y donde una proporción significativa de los hogares enfrenta privaciones simultáneas en dimensiones esenciales del bienestar.

En conjunto, estos enfoques empíricos aportan un marco descriptivo y analítico que permite comprender la pobreza en el Perú como un fenómeno persistente y estructural, especialmente en territorios rurales y con actividad extractiva. Esta evidencia resulta fundamental para contextualizar el análisis del caso Cajamarca y para sustentar conceptualmente la aplicación de enfoques multidimensionales en el estudio de las desigualdades territoriales, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Tabla 6*Enfoques empíricos recientes de medición de pobreza en el Perú*

Enfoque Institución	Dimensión principal	Hallazgos clave	Relevancia para Cajamarca
INEI – Evolución de la Pobreza Monetaria (2011–2022)	Ingreso monetario (línea de pobreza y pobreza extrema)	Reducción nacional limitada: 27,8 % (2011) → 25,9 % (2022). Brecha rural > 40 %	En 2022, 44,5 % de la población cajamarquina en pobreza monetaria
PNUD – Índice de Pobreza Multidimensional (2023)	Privaciones múltiples (agua, saneamiento, educación, salud, electricidad)	Departamentos como Cajamarca, Huancavelica y Puno con mayor incidencia de privaciones estructurales	Más de un tercio de hogares cajamarquinos con privaciones múltiples en servicios básicos
Hernández-Vásquez et al. (2022) – ENDES	Determinantes sociales de la pobreza multidimensional (educación materna, residencia rural, acceso a salud)	Probabilidad de pobreza multidimensional casi el doble en zonas rurales Sierra/ Selva vs Lima Metropolitana	Confirma que la residencia rural y bajos niveles educativos elevan el riesgo de privaciones multidimensionales en Cajamarca

Nota. Elaboración propia a partir de INEI (2023)

En conjunto, la evidencia revisada articula aportes provenientes de fuentes oficiales y estudios académicos que permiten comprender la pobreza en la región Cajamarca más allá de la insuficiencia de ingresos, situándola como un fenómeno persistente y de carácter estructural. Estos enfoques coinciden en señalar que las privaciones simultáneas en ámbitos como educación, salud, acceso a servicios básicos y condiciones de vida inciden en la cohesión social y configuran escenarios de desigualdad territorial en contextos con fuerte presencia extractiva. Desde esta perspectiva, los estudios empíricos analizados proporcionan un marco contextual y analítico que resulta pertinente para examinar la posible relación entre pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental en torno al Proyecto Minero Conga. En este sentido, la revisión empírica contribuye a fundamentar conceptualmente el planteamiento de la investigación, sin adelantar los resultados que serán desarrollados y contrastados en los capítulos posteriores.

2.2.2. Conflictos Socioambientales

Los conflictos socioambientales constituyen una de las manifestaciones más visibles de las tensiones entre sociedad, Estado y naturaleza en América Latina. En el Perú, su incremento durante las últimas décadas ha sido asociado a la expansión de actividades extractivas a gran escala, la presión sobre ecosistemas frágiles y la persistencia de desigualdades territoriales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2023), entre los años 2011 y 2022 se registraron en promedio más de un centenar de conflictos sociales activos por año, de los cuales una proporción significativa correspondió a conflictos de carácter socioambiental, lo que evidencia su relevancia en la dinámica de la conflictividad nacional.

Desde una perspectiva teórica, los conflictos socioambientales pueden comprenderse como procesos de naturaleza estructural más que coyuntural. Diversos autores señalan que estos conflictos emergen de la interacción entre estrategias estatales orientadas al crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales y las demandas de las comunidades locales por la protección de bienes comunes como el agua, la tierra y la biodiversidad. En este sentido, enfoques críticos del extractivismo destacan que los territorios con alta dotación de recursos naturales suelen concentrar simultáneamente pobreza, degradación ambiental y conflictividad social, configurando lo que se ha denominado la paradoja de la abundancia (Gudynas, 2019; Svampa, 2019).

En el ámbito regional, el conflicto asociado al Proyecto Minero Conga en Cajamarca constituye un referente ampliamente estudiado para el análisis de la conflictividad socioambiental en el Perú. La oposición social al proyecto no se limitó a preocupaciones ambientales puntuales, sino que incorporó dimensiones económicas, culturales e institucionales. Estudios previos señalan que las demandas comunitarias articularon percepciones de desigualdad en la distribución de riesgos y beneficios, desconfianza hacia los

mecanismos de gobernanza estatal y defensa del territorio como espacio de reproducción social y cultural (Bebbington et al., 2018; Urteaga, 2022).

Desde este enfoque, los conflictos socioambientales pueden interpretarse como el resultado de la convergencia de múltiples factores, entre ellos condiciones de pobreza persistente, debilidades institucionales, presión extractiva intensiva y limitaciones en los mecanismos de participación política. Esta lectura teórica permite comprender la conflictividad no como una reacción aislada o circunstancial, sino como parte de procesos sociales más amplios vinculados a la forma en que se gestionan los recursos naturales y se distribuyen los beneficios del desarrollo.

En este marco, la Figura 3 cumple una función conceptual al sintetizar los principales elementos teóricos asociados a la conflictividad socioambiental en Cajamarca durante el periodo 2011–2022. El esquema articula aportes de teorías clásicas del conflicto social y de enfoques contemporáneos de la ecología política y la gobernanza de los recursos, ofreciendo una representación analítica que facilita la comprensión de las interacciones entre pobreza estructural, gobernanza institucional y presión extractiva. Su valor radica en proporcionar una guía conceptual para el análisis del caso Cajamarca y en ofrecer un marco de referencia aplicable al estudio de conflictos socioambientales en otros contextos extractivos de América Latina, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Figura 3

Esquema conceptual de los conflictos socioambientales en Cajamarca (2011-2022)



Nota. Elaboración propia a partir de Defensoría del Pueblo (2023)

2.3.3.1. Teorías clásicas sobre conflictos sociales

Las teorías clásicas del conflicto social constituyen un referente fundamental para comprender las dinámicas de confrontación que emergen en contextos caracterizados por profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales. Estas perspectivas parten del supuesto de que los conflictos no son fenómenos accidentales ni excepcionales, sino manifestaciones inherentes a estructuras sociales marcadas por la distribución asimétrica de recursos, poder y oportunidades.

En este marco teórico, destacan dos aportes centrales. Por un lado, Karl Marx (1867) concibe la conflictividad social como una consecuencia directa de las contradicciones estructurales del sistema capitalista, en el que la apropiación desigual de los medios de producción genera tensiones permanentes entre grupos sociales con intereses contrapuestos. Desde esta visión, los conflictos sociales constituyen expresiones históricas de la desigualdad material y de la disputa por el control de los recursos económicos.

Por otro lado, Johan Galtung (1969), a través de su teoría de la violencia estructural, amplía el análisis del conflicto al incorporar formas de violencia menos visibles, pero igualmente persistentes, como la exclusión social, la negación sistemática de derechos básicos y el acceso desigual a oportunidades fundamentales. Este enfoque permite comprender cómo las condiciones estructurales de desigualdad pueden generar situaciones de conflicto aun en ausencia de enfrentamientos directos, al reproducir daños sociales de manera silenciosa y prolongada.

Aunque formuladas en los siglos XIX y XX, estas teorías mantienen una vigencia significativa para el análisis de los conflictos socioambientales contemporáneos. En territorios con fuerte presencia extractiva, como la región Cajamarca, estos enfoques permiten interpretar los conflictos no como eventos aislados o coyunturales, sino como procesos vinculados a dinámicas históricas de desigualdad territorial, pobreza persistente y fragilidad institucional.

Desde esta perspectiva, las teorías clásicas del conflicto social proporcionan un marco conceptual que facilita la comprensión de las tensiones observadas en contextos extractivos, al destacar la interacción entre desigualdad estructural, relaciones de poder y acceso a recursos estratégicos. Este andamiaje teórico resulta útil para contextualizar el análisis del conflicto asociado al Proyecto Minero Conga y para articularlo con enfoques contemporáneos sobre conflictividad socioambiental, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

2.2.2.1. Teoría del conflicto social – Karl Marx (1867)

Karl Marx (1867) formuló la teoría del conflicto social a partir de la premisa de que las tensiones sociales emergen de la desigualdad estructural en la distribución de recursos, poder y control sobre los medios de producción. Desde esta perspectiva, la lucha de clases constituye un rasgo inherente al modo de producción capitalista, en el cual una minoría concentra la riqueza y los beneficios económicos, mientras amplios sectores sociales asumen los costos

sociales y materiales de dicho proceso. El conflicto, por tanto, no es un acontecimiento excepcional, sino una consecuencia sistemática de las contradicciones entre acumulación de capital y exclusión social.

Este enfoque resulta especialmente pertinente para el análisis de territorios caracterizados por economías extractivas. En contextos mineros, la teoría marxista permite interpretar las tensiones sociales como disputas en torno a la apropiación y distribución de la renta generada por la explotación de recursos naturales, así como por el control de bienes estratégicos para la reproducción social, como la tierra y el agua. En estos escenarios, los conflictos no se limitan a desacuerdos económicos, sino que se expresan como luchas por la justicia distributiva y el reconocimiento territorial.

Estudios contemporáneos han retomado los planteamientos marxistas para analizar conflictos socioambientales en América Latina. Bebbington et al. (2018) señalan que la expansión de la minería a gran escala tiende a reproducir desigualdades históricas entre territorios productores y centros de acumulación, mientras que Svampa (2019) interpreta estos procesos como parte del denominado “consenso de los commodities”, en el cual los Estados priorizan la generación de renta extractiva frente a las demandas sociales y ambientales de las poblaciones locales. De manera complementaria, investigaciones recientes en el contexto peruano evidencian que, pese a la implementación de programas sociales, persisten condiciones de pobreza y exclusión en regiones con intensa actividad minera (Hinojosa Pérez et al., 2024).

No obstante, la teoría del conflicto social de Marx presenta limitaciones para el análisis de la conflictividad socioambiental contemporánea. En primer lugar, no incorpora de manera explícita la dimensión ambiental ni la centralidad de los ecosistemas como eje de disputa. En segundo lugar, ofrece una comprensión limitada del papel de las instituciones y de los mecanismos de gobernanza en la gestión de los conflictos. Asimismo, su énfasis estructural reduce la visibilidad de la agencia colectiva y de las formas organizativas locales que

caracterizan a muchas comunidades rurales, como los comités comunales o las rondas campesinas. Finalmente, al haber sido formulada en el siglo XIX, requiere ser complementada con enfoques actuales que incorporen dimensiones culturales, ambientales y territoriales.

A pesar de estas limitaciones, la teoría marxista proporciona un marco estructural relevante para comprender cómo la desigual distribución de beneficios y costos asociados a la actividad extractiva puede generar tensiones sociales persistentes. Su aporte radica en visibilizar las relaciones de poder subyacentes a los conflictos y en ofrecer una base conceptual que, articulada con enfoques posteriores como la violencia estructural, la justicia ambiental y la gobernanza de recursos naturales, permite abordar de manera más integral la complejidad de la conflictividad socioambiental en contextos extractivos como el de Cajamarca (Marx, 1867; Galtung, 1969; Svampa, 2019).

En este sentido, la Figura 4 cumple una función estrictamente conceptual, al sintetizar de forma esquemática la lógica de la teoría del conflicto social de Marx aplicada a economías extractivas. El esquema ilustra cómo la concentración de la renta y la distribución asimétrica de costos sociales y ambientales pueden derivar en escenarios de tensión y confrontación social. Su finalidad es facilitar la comprensión teórica del enfoque marxista y servir como herramienta analítica para el estudio del caso Cajamarca, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Figura 4

Esquema marxista aplicado al Conflicto Socioambiental en Cajamarca (2011-2022)



Nota. Elaboración propia a partir de Marx (1867)

La Figura 4 cumple una función analítica dentro del marco teórico al representar de manera esquemática la relación conceptual entre pobreza multidimensional, debilidad de la gobernanza y conflictividad socioambiental en contextos extractivos. El esquema permite visualizar cómo estas dimensiones interactúan desde una perspectiva estructural, facilitando la comprensión de los conflictos socioambientales como procesos complejos y no como hechos aislados o exclusivamente coyunturales.

En este sentido, la figura no establece relaciones causales empíricamente comprobadas, sino que organiza los principales aportes teóricos revisados y proporciona un marco interpretativo que orienta el análisis del caso Cajamarca durante el periodo 2011–2022. Su utilidad radica en servir como guía conceptual para el desarrollo posterior del estudio, donde dichas relaciones serán examinadas y contrastadas a partir de la evidencia empírica.

2.3.3.1.2. Teoría de la violencia estructural – Johan Galtung (1969)

Johan Galtung (1969) introdujo el concepto de violencia estructural para describir aquellas formas de violencia que no se ejercen de manera directa o visible, pero que se manifiestan en la exclusión sistemática de grupos sociales del acceso a recursos, servicios y oportunidades básicas. Desde este enfoque, existe violencia estructural cuando las personas no pueden satisfacer necesidades fundamentales como salud, educación, alimentación o acceso al agua debido a la forma en que están organizadas las estructuras sociales, económicas e institucionales. Esta propuesta amplió el análisis del conflicto al incorporar desigualdades cotidianas que, al acumularse en el tiempo, reproducen condiciones persistentes de injusticia social.

En territorios rurales y extractivos, la noción de violencia estructural resulta especialmente pertinente para interpretar escenarios donde las carencias materiales y la exclusión institucional se normalizan como parte del orden social. En la región Cajamarca, diversos estudios han documentado brechas históricas en el acceso a agua potable, saneamiento básico, educación de calidad y mecanismos efectivos de participación política, particularmente en comunidades rurales y altoandinas (Urteaga, 2022). Desde la perspectiva de Galtung, estas privaciones pueden ser comprendidas como expresiones de violencia estructural que configuran condiciones de vulnerabilidad social de largo plazo.

La literatura contemporánea ha retomado este enfoque para analizar la conflictividad socioambiental en contextos mineros. Bebbington et al. (2018) señalan que la desigualdad en el acceso a servicios básicos y la limitada capacidad institucional para atender demandas sociales constituyen factores estructurales que incrementan la probabilidad de conflicto en territorios extractivos. De manera similar, Svampa (2019) interpreta estos procesos como manifestaciones de injusticia social y ambiental, en las que la exclusión territorial y la presión sobre ecosistemas estratégicos interactúan con déficits históricos de desarrollo. En el caso

específico de Cajamarca, Urteaga (2022) destaca que la problemática hídrica adquiere un rol central en la percepción de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades rurales.

En relación con otras teorías clásicas del conflicto, la propuesta de Galtung complementa el enfoque marxista. Mientras Karl Marx (1867) explicó el conflicto social a partir de la desigualdad material y la concentración de la riqueza, Galtung amplía el análisis al incorporar la privación de derechos y oportunidades básicas como una forma de violencia que opera de manera silenciosa pero persistente. Esta complementariedad permite comprender los conflictos socioambientales no solo como disputas económicas, sino también como procesos asociados a la negación estructural de condiciones mínimas de bienestar y reconocimiento social.

No obstante, la teoría de la violencia estructural presenta limitaciones frente a la complejidad de los conflictos socioambientales contemporáneos. En primer lugar, no incorpora de manera explícita la dimensión ambiental ni el rol de los ecosistemas como ejes centrales de disputa. Asimismo, ofrece una explicación limitada sobre el papel de la gobernanza institucional y la legitimidad del Estado en la gestión de los conflictos. Además, tiende a representar a las comunidades como sujetos pasivos de la violencia estructural, sin profundizar en sus capacidades organizativas y en las formas de acción colectiva que caracterizan a muchos territorios rurales. Finalmente, al haber sido formulada en la década de 1960, requiere ser complementada con enfoques actuales de justicia ambiental y gobernanza de los recursos naturales.

A pesar de estas limitaciones, la teoría de la violencia estructural aporta un marco conceptual relevante para analizar cómo la acumulación de privaciones sociales, institucionales y territoriales puede generar condiciones propicias para la emergencia de conflictos socioambientales. Su utilidad radica en ofrecer una lectura estructural de la exclusión social y en proporcionar elementos analíticos que, articulados con teorías contemporáneas, permiten orientar el estudio de la conflictividad en contextos extractivos como el de Cajamarca.

En este sentido, la Tabla 7 cumple una función analítica al sintetizar las principales dimensiones de la violencia estructural propuestas por Galtung y su expresión conceptual en el contexto de Cajamarca durante el periodo 2011–2022. La tabla no establece relaciones causales comprobadas, sino que organiza los aportes teóricos revisados y facilita la comprensión del vínculo conceptual entre exclusión social, pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental, sirviendo como base para el análisis empírico que se desarrollará en los capítulos posteriores.

Tabla 7

Articulación de la violencia estructural de Galtung aplicada a Cajamarca (2011-2022)

Dimensión de violencia estructural (Galtung, 1969)	Manifestación en Cajamarca (2011–2022)	Implicancia en el Conflicto socioambiental
Privación de necesidades básicas (salud, educación, agua)	35 % de hogares rurales sin agua potable segura y más del 40 % con saneamiento deficiente (INEI, 2022).	Genera sensación de abandono histórico y percepciones de injusticia social.
Exclusión política	Comunidades sin voz efectiva en decisiones sobre proyectos extractivos (Defensoría del Pueblo, 2019).	Aumenta la desconfianza hacia Estado y empresas; legitima la protesta social.
Desigualdad territorial	Brechas rurales–urbanas persistentes en educación y servicios básicos (CEPLAN, 2023).	Reproduce condiciones estructurales de conflicto prolongado.
Marginación económica	Renta minera concentrada en corporaciones; limitada redistribución hacia comunidades locales (Bebbington et al., 2018).	Refuerza la percepción de que la minería expolia sin beneficiar a la población.
Débil gobernanza institucional (vacío teórico de Galtung, actualizado)	Falta de confianza en instituciones ambientales y ausencia de políticas de compensación efectivas (Leão & Goulao, 2024).	Intensifica la conflictividad y sostiene la persistencia de las movilizaciones.

Nota. Elaboración propia a partir de Galtung (1969), con base en datos de INEI (2022)

La teoría de la violencia estructural formulada por Galtung resulta pertinente para el análisis de la conflictividad socioambiental en Cajamarca, en la medida en que permite comprender que estos conflictos no se originan únicamente en disputas materiales inmediatas, sino en procesos históricos de exclusión vinculados al acceso desigual a servicios básicos y derechos

fundamentales. Desde esta perspectiva, la conflictividad se inscribe en un entramado de privaciones persistentes que afectan la vida cotidiana de las comunidades rurales y configuran condiciones de vulnerabilidad social de largo plazo.

El alcance explicativo de este enfoque trasciende el caso del Proyecto Minero Conga, ya que patrones similares de marginalización estructural han sido identificados en otros conflictos mineros del Perú como Las Bambas y Tía María y en experiencias latinoamericanas como Esquel, en Argentina, donde las disputas extractivas se articulan con demandas de justicia social y territorial.

No obstante, las limitaciones del enfoque de Galtung, particularmente la ausencia de una consideración explícita de la dimensión ambiental y de la agencia colectiva de las comunidades, evidencian la necesidad de complementarlo con marcos teóricos contemporáneos. En este sentido, los enfoques de justicia ambiental, ecología política y territorialidad resultan relevantes para ampliar la comprensión de la conflictividad socioambiental, al incorporar la relación entre naturaleza, poder, cultura y gobernanza.

De este modo, la teoría de la violencia estructural cumple un papel clave como puente conceptual entre las teorías clásicas del conflicto y los enfoques actuales, proporcionando una base analítica que orienta el tránsito hacia marcos más integrales capaces de abordar la persistencia y complejidad de los conflictos socioambientales en contextos extractivos.

2.2.2.2. Teorías contemporáneas sobre conflictos socioambientales

Las teorías contemporáneas sobre los conflictos socioambientales amplían el análisis tradicional del conflicto social al incorporar dimensiones ambientales, culturales e institucionales que trascienden los enfoques centrados exclusivamente en la desigualdad económica o la violencia estructural. Estas perspectivas resultan especialmente relevantes para el estudio de territorios extractivos, donde la disputa no se limita a la distribución de recursos

materiales, sino que involucra la defensa de bienes comunes, identidades territoriales y formas de gobernanza.

En contextos como el de la región Cajamarca, la conflictividad socioambiental se configura a partir de la interacción entre pobreza persistente, expansión del extractivismo y debilidades institucionales en la gestión de los recursos naturales. Desde este enfoque, los conflictos no pueden ser comprendidos únicamente como respuestas coyunturales a proyectos específicos, sino como procesos sociales complejos en los que convergen demandas por justicia ambiental, reconocimiento territorial y legitimidad en la toma de decisiones públicas.

En este marco teórico se abordan tres enfoques contemporáneos de especial relevancia: la justicia ambiental (Martínez-Alier, 2002), los movimientos eco-territoriales (Svampa, 2019) y la gobernanza de los recursos comunes (Ostrom, 1990). Cada uno de estos enfoques aporta categorías conceptuales y herramientas analíticas que permiten interpretar la dinámica de los conflictos socioambientales en América Latina y ofrecen un marco de referencia para el análisis del caso del Proyecto Minero Conga, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

2.2.2.3. Teoría de la justicia ambiental – Joan Martínez-Alier (2002)

Mientras las teorías clásicas del conflicto social, como las de Marx y Galtung, permiten comprender las desigualdades estructurales y las formas de violencia institucional, presentan limitaciones al no incorporar de manera explícita la dimensión ambiental ni la defensa identitaria del territorio. Estos vacíos son abordados por enfoques contemporáneos como la teoría de la justicia ambiental, desarrollada por Joan Martínez-Alier, que introduce el análisis de la distribución desigual de beneficios y costos ambientales como eje central de la conflictividad socioambiental.

La teoría de la justicia ambiental parte de la premisa de que los conflictos socioambientales emergen cuando los impactos negativos de las actividades económicas como la contaminación,

la pérdida de recursos hídricos o la degradación de ecosistemas recaen de forma desproporcionada sobre determinados grupos sociales, mientras los beneficios económicos se concentran en otros actores, como el Estado o las corporaciones. En contextos extractivos, esta asimetría se expresa en la coexistencia de crecimiento macroeconómico con deterioro ambiental y vulnerabilidad social en los territorios donde se desarrolla la actividad minera (Martínez-Alier, 2002).

Desde este enfoque, los conflictos asociados a proyectos mineros pueden interpretarse como disputas por la equidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano. En el caso de Cajamarca, diversos estudios han señalado que las tensiones en torno al Proyecto Minero Conga se articularon en torno a la defensa del agua y de los ecosistemas altoandinos, considerados bienes esenciales para la reproducción social y económica de las comunidades rurales (Bebbington et al., 2018; Urteaga, 2022). Esta lectura permite comprender que la conflictividad no se limita a desacuerdos económicos, sino que incorpora demandas de justicia socioecológica y reconocimiento territorial.

La literatura reciente respalda la utilidad analítica del enfoque de justicia ambiental para el estudio de conflictos mineros en América Latina. Bebbington et al. (2018) destacan que la inequidad en la distribución de impactos ambientales constituye un factor recurrente en la conflictividad extractiva, mientras que Svampa (2019) interpreta estas disputas como expresiones de luchas socioecológica frente a modelos de desarrollo basados en el extractivismo intensivo. De manera complementaria, informes del PNUD (2023) advierten que la ausencia de mecanismos efectivos de redistribución ambiental y de compensación territorial tiende a mantener abiertas las tensiones en regiones mineras.

No obstante, la teoría de la justicia ambiental presenta ciertas limitaciones. En particular, no desarrolla de manera exhaustiva el rol de la gobernanza estatal en la gestión de los conflictos ni profundiza en la heterogeneidad interna de las comunidades locales. Asimismo, su énfasis

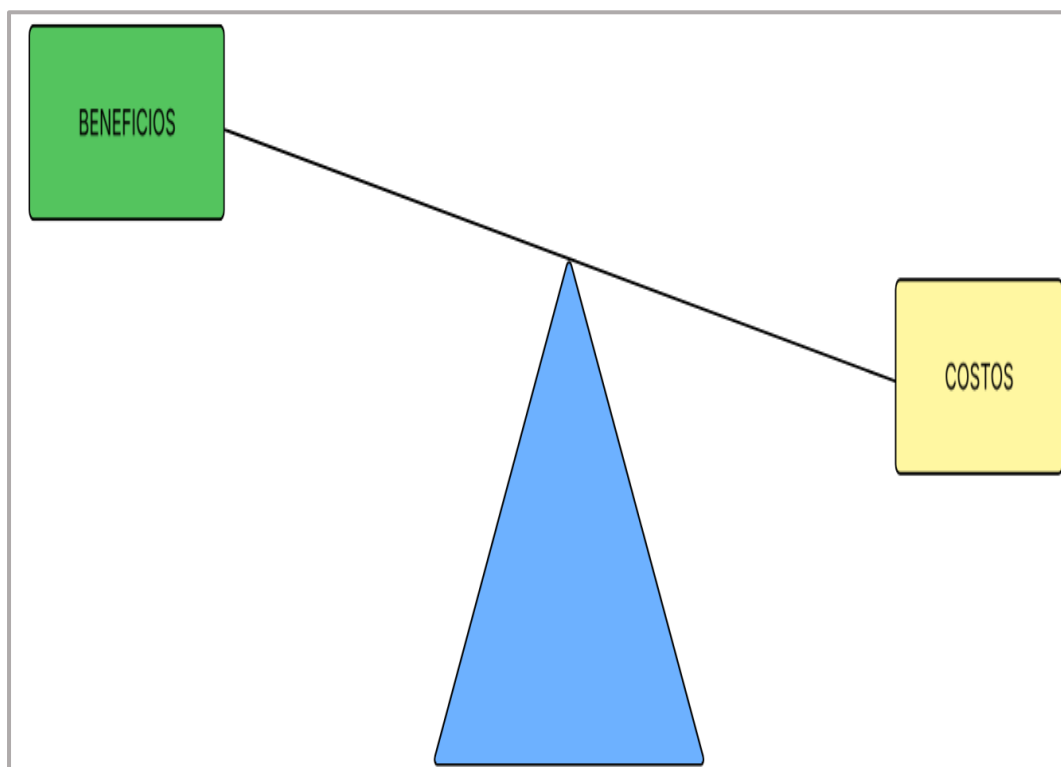
en los impactos inmediatos requiere ser complementado con análisis de largo plazo sobre los efectos acumulativos de la degradación ambiental y sus implicancias para la cohesión social. Estas limitaciones evidencian la necesidad de articular este enfoque con marcos teóricos que incorporen dimensiones institucionales, territoriales y culturales.

A pesar de ello, la teoría de la justicia ambiental aporta elementos fundamentales para el análisis de la conflictividad socioambiental en contextos extractivos. Al situar la distribución desigual de costos y beneficios ambientales como un eje explicativo, permite comprender cómo la pobreza persistente, la exclusión territorial y la fragilidad institucional pueden entrelazarse con disputas por el control y la protección de bienes comunes como el agua. En este sentido, este enfoque complementa las teorías clásicas del conflicto al integrar de manera explícita la dimensión ecológica en el análisis de las tensiones sociales.

En este marco, la Figura 5 cumple una función conceptual al representar de forma esquemática la lógica de la injusticia ambiental en economías extractivas. El esquema ilustra cómo la concentración de beneficios económicos y la distribución asimétrica de los costos ambientales generan escenarios de desequilibrio socioecológico. Su finalidad es facilitar la comprensión teórica del enfoque de Martínez-Alier y servir como herramienta analítica para el estudio del caso Cajamarca y de otros conflictos mineros en el Perú y América Latina, sin adelantar los resultados empíricos que serán desarrollados en los capítulos posteriores.

Figura 5

Distribución desigual de costos y beneficios (Injusticia Ambiental)



Nota. Elaboración propia a partir de Martínez-Alier (2002)

2.3.3.2.2. Teoría de los movimientos eco-territoriales – Maristella Svampa (2019)

La teoría de los movimientos eco-territoriales, desarrollada por Maristella Svampa (2019), surge como una ampliación crítica de los enfoques clásicos del conflicto social. Si bien las perspectivas de Marx y Galtung permiten comprender la desigualdad estructural y las formas de violencia institucional, resultan limitadas para explicar la dimensión identitaria, cultural y territorial que caracteriza a muchos conflictos socioambientales contemporáneos en América Latina. Svampa supera este vacío al proponer que dichos conflictos deben entenderse como procesos de resistencia colectiva frente al avance del extractivismo y la mercantilización de los bienes comunes.

Desde este enfoque, elementos como el agua, la tierra y la biodiversidad no se conciben únicamente como recursos económicos, sino como soportes materiales y simbólicos de la vida comunitaria. Su defensa articula dimensiones ambientales, culturales y políticas que dan lugar

a lo que Svampa denomina eco-territorialidad: una forma de acción colectiva que trasciende la lógica económica y se inscribe en la afirmación de identidades colectivas, la defensa del territorio y la autodeterminación local.

En contextos como el de Cajamarca, la literatura ha señalado que la conflictividad asociada al Proyecto Minero Conga puede ser interpretada desde esta perspectiva eco-territorial. Diversos estudios documentan que la oposición social al proyecto incorporó discursos de defensa del agua, del territorio y de las formas de vida campesinas, articulando a rondas campesinas, comités de regantes y organizaciones sociales en torno a narrativas de dignidad y protección de bienes comunes (Urteaga, 2022). Esta lectura permite comprender que la protesta social no se limitó a demandas económicas inmediatas, sino que incluyó dimensiones simbólicas y culturales vinculadas a la identidad territorial.

La vigencia de este enfoque ha sido respaldada por investigaciones recientes. Gudynas (2020) interpreta los movimientos eco-territoriales como respuestas estructurales al modelo extractivo dominante; Walter y Urkidi (2021) destacan que la defensa del agua ha redefinido las agendas de justicia ambiental en América Latina; y Leão y Goulao (2024) señalan que la persistencia de estos movimientos refleja limitaciones estatales para traducir la renta extractiva en mejoras tangibles de bienestar, reforzando la centralidad del territorio como escenario de disputa social. No obstante, la teoría de los movimientos eco-territoriales presenta algunas limitaciones. En particular, tiende a representar a las comunidades como actores homogéneos, invisibilizando tensiones internas asociadas a género, edad, intereses económicos o filiaciones políticas. Asimismo, no profundiza de manera sistemática en la interacción con el Estado y los marcos institucionales de gobernanza ambiental, aspectos clave para la gestión y resolución de los conflictos. Finalmente, aunque resalta la dimensión cultural del territorio, requiere ser complementada con enfoques que analicen cómo estas identidades pueden traducirse en propuestas sostenibles de gestión territorial a largo plazo.

A pesar de estas limitaciones, el enfoque eco-territorial aporta elementos analíticos fundamentales para el estudio de la conflictividad socioambiental en contextos extractivos. Permite interpretar los conflictos no solo como disputas por la renta o los impactos ambientales, sino también como procesos de reapropiación política y simbólica del territorio, en los que convergen pobreza persistente, exclusión institucional y defensa de derechos colectivos. En este sentido, la teoría de Svampa complementa los enfoques de justicia ambiental y violencia estructural, al incorporar de manera explícita la dimensión identitaria y cultural en el análisis de los conflictos socioambientales.

En este marco, la Tabla 8 cumple una función analítica al sintetizar las principales características de los movimientos eco-territoriales propuestas por Svampa y su expresión conceptual en el contexto de Cajamarca durante el periodo 2011–2022. La tabla no establece relaciones causales empíricamente comprobadas, sino que organiza los aportes teóricos revisados y facilita la comprensión del vínculo entre territorio, identidad colectiva y conflictividad socioambiental, sirviendo como base conceptual para el análisis empírico que se desarrollará en los capítulos posteriores.

Tabla 8

Movimientos eco-territoriales y conflictividad socioambiental en Cajamarca (2011-2022)

Dimensión eco-territorial (Svampa, 2019)	Manifestación en Cajamarca (2011–2022)	Conexión con la conflictividad
Agua como bien común	Defensa de lagunas altoandinas frente al proyecto Conga: lema “el agua vale más que el oro”.	Se convirtió en el eje simbólico y material de la resistencia social.
Identidad cultural y territorialidad	Revalorización de prácticas campesinas y rondas como guardianes del territorio.	Transformó la protesta en una lucha por dignidad y autodeterminación.
Organización social	Liderazgo de rondas campesinas, mujeres y comunidades rurales articuladas en marchas y vigiliadas.	Dio sostenibilidad y legitimidad al movimiento, prolongando el conflicto.
Dimensión política	Rechazo a un modelo extractivo impuesto sin consulta efectiva.	Generó demandas de reconocimiento y justicia socioecológica.

Nota. Elaboración propia a partir de Svampa (2019).

El enfoque eco-territorial propuesto por Svampa trasciende el caso del Proyecto Minero Conga al ofrecer un marco interpretativo aplicable a diversos conflictos socioambientales en América Latina, donde la defensa del agua y del territorio ha adquirido un fuerte contenido identitario y socioecológico. Experiencias como Esquel en Argentina, Intag en Ecuador o Tía María en el Perú muestran que las resistencias frente a proyectos extractivos no se limitan a disputas por la distribución de beneficios y costos, sino que incorporan procesos de afirmación cultural y territorial frente a la mercantilización de los bienes comunes.

Esta proyección regional permite comprender la conflictividad socioambiental como un fenómeno que articula dimensiones económicas, culturales y políticas, y pone de relieve la centralidad del territorio como espacio de identidad, reproducción social y disputa de poder. En este sentido, el enfoque eco-territorial contribuye a ampliar el análisis de los conflictos más allá de los marcos económicos tradicionales y orienta la reflexión hacia la necesidad de articular las demandas territoriales con esquemas institucionales y políticas públicas de gobernanza sostenible de los recursos naturales.

2.2.2.4. Teoría de la gobernanza de los recursos comunes – Elinor Ostrom (1990)

La teoría de la gobernanza de los recursos comunes, desarrollada por Elinor Ostrom (1990), cuestiona la concepción clásica de la “tragedia de los comunes” propuesta por Hardin (1968). Mientras este último sostenía que los bienes comunes estaban inevitablemente destinados a la sobreexplotación en ausencia de control estatal o privatización, Ostrom demostró, a partir de evidencia empírica comparada, que las comunidades pueden gestionar de manera sostenible recursos compartidos como el agua, los bosques o los pastizales siempre que existan reglas claras, mecanismos de monitoreo, sanciones graduadas y procesos participativos de toma de decisiones. Desde este enfoque, la gobernanza se entiende como la capacidad colectiva para diseñar e implementar instituciones locales basadas en la cooperación, la confianza y la reciprocidad.

En territorios rurales y altoandinos, este marco teórico resulta especialmente pertinente para el análisis de la gestión del agua. Diversos estudios han documentado que las comunidades cuentan con arreglos institucionales propios como comités de regantes, rondas campesinas y prácticas consuetudinarias que regulan el acceso y uso del recurso hídrico de manera colectiva. En el caso de Cajamarca, la literatura señala que estas formas de organización comunitaria han desempeñado históricamente un papel central en la gestión del agua y en la defensa de los territorios frente a presiones externas asociadas a actividades extractivas (Bebbington & Scurrah, 2018).

La vigencia del enfoque de Ostrom ha sido respaldada por investigaciones posteriores. Cox et al. (2010) identificaron que los principios de gobernanza de los recursos comunes son aplicables en diversos contextos rurales, siempre que exista cohesión social y normas adaptativas. Boelens y Seemann (2021) subrayan que la gobernanza hídrica local no constituye únicamente un sistema técnico de manejo del agua, sino también un espacio de disputa política y cultural, particularmente en regiones donde los proyectos extractivos buscan centralizar el control de los recursos naturales.

No obstante, la teoría de Ostrom presenta limitaciones relevantes para el análisis de contextos extractivos contemporáneos. En primer lugar, no profundiza de manera suficiente en los desequilibrios de poder entre comunidades, empresas y Estado, un aspecto crucial en escenarios donde actores externos influyen de forma decisiva en la gestión de los recursos. En segundo lugar, su énfasis en la cooperación comunitaria puede invisibilizar asimetrías internas relacionadas con género, estatus socioeconómico o acceso diferencial a la tierra y al agua. Asimismo, el enfoque se concentra en la escala local y desarrolla de manera limitada las interacciones con los niveles nacionales y globales, donde se definen marcos normativos y decisiones estratégicas que condicionan la gobernanza local.

A pesar de estas limitaciones, la teoría de la gobernanza de los recursos comunes aporta un marco conceptual valioso para interpretar las tensiones que emergen cuando modelos de gestión comunal del agua interactúan con esquemas estatales y empresariales de explotación de recursos naturales. Desde esta perspectiva, los conflictos socioambientales pueden ser analizados como disputas entre formas diferenciadas de concebir y administrar los bienes comunes, más que como simples desacuerdos técnicos sobre su uso.

En síntesis, el enfoque de Ostrom permite comprender la gobernanza del agua como un proceso social e institucional complejo, en el que confluyen normas locales, relaciones de poder y dinámicas territoriales. Su integración con enfoques de justicia ambiental y eco-territorialidad ofrece un marco analítico más amplio para el estudio de la conflictividad socioambiental en regiones como Cajamarca, orientando el análisis empírico que será desarrollado en los capítulos posteriores sin adelantar resultados ni establecer relaciones causales previamente comprobadas.

Tabla 9

Gobernanza comunitaria del agua y conflictividad socioambiental en Cajamarca (2011-2022)

Principios de Ostrom (1990)	Manifestación en Cajamarca	Conexión con la Conflictividad Conga
Reglas claras	Comités de regantes establecieron turnos de riego y normas de uso del agua.	La posible pérdida de lagunas alteraba el sistema normativo comunitario.
Vigilancia local	Rondas campesinas fiscalizaron fuentes de agua y territorios comunales.	Incrementó la percepción de amenaza rente al ingreso de la empresa minera.
Sanciones graduales	Multas comunitarias y sanciones sociales a quienes incumplían las normas de uso del agua.	Fortaleció la cohesión interna frente al actor externo.
Confianza y reciprocidad	Redes de apoyo mutuo para la defensa del agua y la producción agrícola.	Reforzó la unidad en la protesta contra la mina.
Mecanismos de resolución de conflictos	Asambleas comunales para resolver disputas sobre uso del agua.	Se trasladó esta experiencia a las negociaciones y movilizaciones contra Conga.

Nota. Elaboración propia a partir de Ostrom (1990)

El enfoque de la gobernanza de los recursos comunes propuesto por Ostrom trasciende el caso del Proyecto Minero Conga al ofrecer un marco analítico aplicable a múltiples experiencias en América Latina, como los sistemas comunales de gestión del agua en Oaxaca o los conflictos hídricos registrados en Cochabamba. Estos casos han sido ampliamente discutidos en la literatura como ejemplos de arreglos institucionales colectivos que buscan regular el uso de bienes comunes frente a presiones externas.

Desde esta perspectiva, la aplicación del enfoque de Ostrom al contexto de Cajamarca permite reflexionar sobre los alcances y límites de la autogestión comunitaria en escenarios extractivos. Si bien la gobernanza local constituye un eje fundamental para la gestión sostenible del agua, diversos autores señalan que su efectividad depende de su articulación con instituciones estatales legítimas y con marcos normativos claros, capaces de equilibrar las asimetrías de poder entre comunidades, empresas y Estado.

En este sentido, el enfoque de Ostrom se vincula con los debates contemporáneos sobre sostenibilidad y desarrollo territorial, en los que la gobernanza comunal es concebida como un componente central, pero no suficiente por sí mismo, para garantizar una gestión equitativa y duradera de los recursos naturales. Esta lectura permite situar la gobernanza del agua como un proceso multiescalar que requiere la convergencia entre capacidades locales e instituciones públicas efectivas.

➤ **Enfoques contemporáneos aplicados a conflictos socioambientales**

A diferencia del marco doctrinal, que aporta fundamentos teóricos para comprender las causas estructurales de la conflictividad social, los enfoques contemporáneos se orientan a la interpretación aplicada de las dinámicas actuales de los conflictos socioambientales. Mientras las teorías clásicas y modernas permiten analizar procesos históricos de desigualdad, violencia estructural y justicia ambiental, los enfoques contemporáneos ofrecen criterios analíticos y metodológicos para examinar cómo estos procesos se manifiestan en contextos concretos,

incorporando dimensiones como derechos colectivos, sostenibilidad, gobernanza institucional y participación social.

Esta distinción entre teorías y enfoques resulta metodológicamente relevante, ya que contribuye a mantener la coherencia analítica del estudio y evita confusiones entre el plano explicativo general y el plano interpretativo–operativo. En este sentido, los enfoques contemporáneos no sustituyen a las teorías, sino que las complementan, proporcionando herramientas conceptuales más flexibles y multidisciplinarias para analizar la complejidad de los conflictos socioambientales en escenarios extractivos.

En el caso de la región Cajamarca, estos enfoques permiten organizar analíticamente la interacción entre pobreza persistente, distribución desigual de impactos ambientales y debilidades en la gobernanza de los recursos naturales, sin establecer relaciones causales previas. Su utilidad radica en ofrecer marcos de lectura que facilitan la comprensión de cómo dichas dimensiones convergen en conflictos socioambientales como el asociado al Proyecto Minero Conga durante el periodo 2011–2022.

Desde esta perspectiva, los enfoques contemporáneos constituyen instrumentos analíticos que permiten articular los aportes de la justicia ambiental, la eco-territorialidad y la gobernanza de los bienes comunes, orientando el análisis empírico posterior hacia una lectura integral del conflicto. Estos enfoques no formulan soluciones predeterminadas, sino que aportan criterios para interpretar las dinámicas del conflicto y para reflexionar sobre los desafíos institucionales y territoriales que enfrentan los contextos extractivos.

Dentro de los enfoques contemporáneos más pertinentes para el análisis de la conflictividad socioambiental se destacan los siguientes:

➤ **Enfoque de justicia ambiental y derechos humanos.**

Analiza los conflictos desde la perspectiva del acceso equitativo a los recursos naturales y la defensa de derechos fundamentales como el agua y la salud.

➤ **Enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial.**

Interpreta los conflictos como expresiones de tensiones entre modelos de desarrollo extractivo y visiones de sostenibilidad impulsadas por las comunidades locales.

➤ **Enfoque de gestión de conflictos socioambientales.**

Aporta metodologías de prevención, mediación y transformación de conflictos, considerando la pluralidad de actores y el papel del Estado como mediador o parte del problema.

➤ **Enfoque de resiliencia comunitaria.**

Examina la capacidad de las comunidades para adaptarse, reorganizarse y mantener su cohesión social frente a presiones extractivas y crisis ambientales.

➤ **Enfoque de justicia ambiental y derechos humanos**

El enfoque de justicia ambiental y derechos humanos no constituye una teoría doctrinal en sentido estricto, sino un marco operativo y normativo que permite analizar los conflictos socioambientales desde la perspectiva de los derechos fundamentales y la equidad en el acceso a los bienes comunes. A diferencia de los marcos teóricos desarrollados por Marx, Galtung, Martínez-Alier, Svampa u Ostrom, este enfoque se aplica como una herramienta analítica que dialoga con estándares internacionales de derechos humanos y con principios de justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento.

Desde esta perspectiva, los conflictos socioambientales no se interpretan únicamente como disputas técnicas por el uso de los recursos naturales, sino como expresiones de tensiones vinculadas al cumplimiento o vulneración de derechos fundamentales relacionados con el ambiente sano, el acceso al agua, el saneamiento y otros servicios básicos. Organismos internacionales como las Naciones Unidas han reconocido explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, señalando que su falta de garantía constituye un factor de exclusión social y una fuente potencial de conflictividad (ONU, 2018). Este enfoque se articula también

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que vinculan la reducción de la pobreza con la sostenibilidad ambiental y la gobernanza inclusiva.

En el contexto de la región Cajamarca, el enfoque de justicia ambiental y derechos humanos ofrece un marco interpretativo para analizar la oposición social al Proyecto Minero Conga. Diversos estudios señalan que las preocupaciones en torno a la posible afectación de lagunas altoandinas y fuentes hídricas fueron percibidas por las comunidades rurales como una amenaza directa a condiciones básicas de vida y a su derecho al agua. Desde este enfoque, el conflicto puede ser analizado como una disputa por la equidad en la distribución de los beneficios y costos ambientales asociados a la actividad extractiva, más que como una controversia exclusivamente económica.

La información estadística disponible permite contextualizar esta problemática. Entre 2011 y 2022 se registraron avances en la cobertura de agua potable y saneamiento en las zonas rurales de Cajamarca, así como una reducción de la pobreza monetaria; sin embargo, estos progresos se mantuvieron por debajo de los promedios nacionales y coexistieron con persistentes brechas territoriales (INEI, 2012; INEI, 2023; CEPLAN, 2022). De manera paralela, la región continuó registrando un número significativo de conflictos socioambientales, incluso después de la paralización del proyecto Conga (Defensoría del Pueblo, 2022). Estos datos no establecen relaciones causales por sí mismos, pero permiten situar el conflicto en un contexto de avances parciales y limitaciones estructurales en la garantía de derechos básicos.

El principal aporte del enfoque de justicia ambiental y derechos humanos al presente estudio radica en ampliar la lectura del conflicto socioambiental, incorporando una dimensión ética y normativa que conecta la pobreza multidimensional con la vulneración de derechos colectivos. Asimismo, permite vincular el caso de Cajamarca con debates globales sobre desarrollo sostenible, equidad ambiental y derechos humanos, situando el análisis local en un marco internacional más amplio.

En este sentido, el enfoque de justicia ambiental no ofrece explicaciones causales cerradas, sino criterios analíticos para evaluar cómo las políticas públicas, los modelos de desarrollo extractivo y los mecanismos de gobernanza inciden en la garantía efectiva de derechos fundamentales. Su incorporación en la investigación contribuye a orientar el análisis empírico posterior hacia una comprensión integral de la conflictividad socioambiental, considerando tanto las condiciones materiales de pobreza como las dimensiones normativas y de reconocimiento que atraviesan los conflictos en territorios extractivos como Cajamarca.

En este marco, la Tabla 10 cumple una función descriptiva y contextual, al sintetizar la evolución de indicadores de acceso a agua, saneamiento, pobreza monetaria y conflictividad socioambiental entre 2011 y 2022. La tabla no establece conclusiones explicativas, sino que proporciona información de base que será analizada en profundidad en los capítulos de resultados y discusión.

Tabla 10

Brechas en derechos ambientales y servicios básicos en Cajamarca (2011-2022)

Indicador	2011	2022	Fuente
Acceso a agua potable rural	62 %	77 %	INEI (2012, 2023)
Acceso a saneamiento rural	28 %	47 %	CEPLAN (2022)
Pobreza monetaria	53,4 %	44,5 %	INEI (2023)
Conflictos socioambientales	17 % del total nacional	Persistentes, centrados en agua y minería	Defensoría (2012, 2022)

Nota. Elaboración propia a partir de datos de INEI (2023)

➤ **Enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial**

El enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial no constituye una teoría doctrinal en sentido estricto, sino un marco operativo que complementa los enfoques teóricos clásicos y contemporáneos sobre la conflictividad socioambiental. A diferencia de estos últimos, orientados a explicar las causas estructurales del conflicto como la desigualdad, la violencia estructural o la injusticia ambiental, este enfoque se centra en la aplicación práctica de criterios de sostenibilidad en la planificación del territorio y en las políticas de desarrollo.

Desde esta perspectiva, el desarrollo económico debe articularse con la protección ambiental, la cohesión social y la equidad intra e intergeneracional (Sachs, 2015; CEPAL, 2020). El enfoque reconoce la territorialidad como un componente esencial del desarrollo, al señalar que los recursos naturales no son abstracciones homogéneas, sino bienes situados en espacios concretos donde confluyen comunidades, culturas y ecosistemas específicos (Boisier, 2021). En consecuencia, el progreso no puede evaluarse únicamente a partir del crecimiento del producto interno bruto, sino también en función de su capacidad para generar bienestar social y ambiental en los territorios donde se extraen los recursos.

En el contexto de la región Cajamarca, la literatura especializada ha señalado que el conflicto asociado al Proyecto Minero Conga puede ser interpretado como una manifestación de tensiones entre distintos modelos de desarrollo territorial. Por un lado, se identifica un modelo extractivo centralizado, impulsado por el Estado y las empresas mineras, orientado a la captación de renta fiscal y a la atracción de inversión. Por otro, se reconocen visiones comunitarias de sostenibilidad que priorizan el agua, la agricultura y la conservación de los ecosistemas como bases de la reproducción social y cultural de las poblaciones rurales.

Diversos indicadores permiten contextualizar estas tensiones durante el periodo 2011–2022. Si bien Cajamarca aportó de manera significativa a la economía nacional a través de la actividad minera, la región continuó registrando elevados niveles de pobreza y brechas persistentes en el acceso a servicios básicos, como agua potable y saneamiento (INEI, 2023; MEF, 2023). Asimismo, estudios ambientales reportaron la presencia de metales pesados en algunas subcuencas de la región, lo que contribuyó a reforzar percepciones de riesgo ambiental y desconfianza institucional (ANA, 2021). Estas condiciones no establecen relaciones causales por sí mismas, pero permiten situar la conflictividad en un escenario de avances parciales y limitaciones estructurales del desarrollo territorial.

Desde el enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial, estas dinámicas pueden ser analizadas como expresión de una débil articulación entre la generación de renta extractiva y la planificación territorial participativa. La persistencia de brechas sociales, la baja ejecución de recursos públicos, la ausencia de ordenamiento territorial y los impactos ambientales no resueltos han sido identificados en la literatura como factores que dificultan la traducción del crecimiento económico en bienestar territorial sostenible.

El principal aporte de este enfoque al presente estudio radica en integrar de manera articulada las dimensiones económica, social, ambiental e institucional del desarrollo, ofreciendo un marco analítico más amplio que los enfoques puramente económicos. Asimismo, permite orientar la reflexión hacia los desafíos de la sostenibilidad territorial, sin formular explicaciones concluyentes ni adelantar resultados empíricos, y contribuye a contextualizar la conflictividad socioambiental como parte de un modelo de desarrollo desequilibrado y poco inclusivo en regiones extractivas.

En este marco, la Tabla 11 cumple una función descriptiva y comparativa, al sintetizar indicadores de sostenibilidad y desarrollo territorial correspondientes a Cajamarca, Moquegua y el promedio nacional durante el periodo 2011–2022. Su inclusión permite visualizar las brechas territoriales existentes en acceso a servicios básicos, pobreza e indicadores de desarrollo humano, proporcionando información de contexto que será analizada en profundidad en los capítulos de resultados y discusión.

Tabla 11

Indicadores comparativos de sostenibilidad territorial (2011-2023)

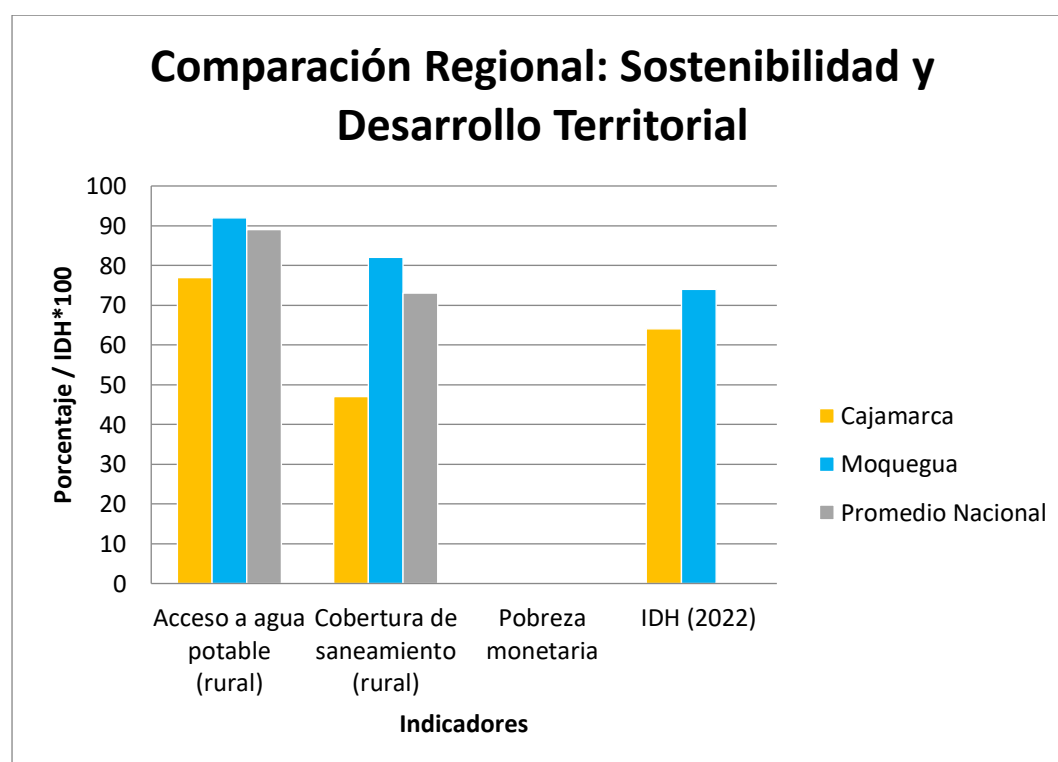
Indicador (2011–2022)	Cajamarca	Moquegua	Promedio Nacional	Fuente
Acceso a agua potable (rural)	77%	92%	89%	INEI (2023)
Cobertura de saneamiento (rural)	47%	82%	73%	CEPLAN (2022)
Pobreza monetaria	44.5%	15.3%	27.5%	INEI (2023)
IDH (2022)	0.64	0.74	0.74	PNUD (2023)

Nota. Elaboración propia a partir de datos de INEI (2023)

La Figura 6 presenta una comparación regional de indicadores de sostenibilidad y desarrollo territorial entre Cajamarca, Moquegua y el promedio nacional, permitiendo visualizar las brechas estructurales existentes entre estos territorios.

Figura 6

Comparación Regional: Sostenibilidad y Desarrollo Territorial



Nota. Elaboración propia a partir de INEI (2023)

Como se observa, mientras Moquegua y el promedio nacional registran coberturas superiores al 80 % en acceso a agua potable y mejores niveles de bienestar social, Cajamarca evidencia rezagos persistentes, con menores coberturas en saneamiento básico y mayores niveles de pobreza monetaria.

Estas diferencias territoriales no deben interpretarse como efectos automáticos de la actividad minera, sino como expresiones de condiciones estructurales diferenciadas en la gestión del desarrollo, la capacidad institucional y la provisión de servicios básicos. En este sentido, la figura cumple una función descriptiva y contextual al mostrar que la presencia de

recursos extractivos no garantiza por sí misma mejores resultados en bienestar social ni en sostenibilidad territorial.

Desde el enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial, estas brechas sugieren la coexistencia de limitaciones institucionales y privaciones sociales que configuran escenarios de mayor vulnerabilidad social. En el caso de Cajamarca, la persistencia de pobreza monetaria y las restricciones en el acceso a servicios básicos permiten comprender por qué los procesos de desarrollo extractivo pueden generar tensiones sociales sostenidas.

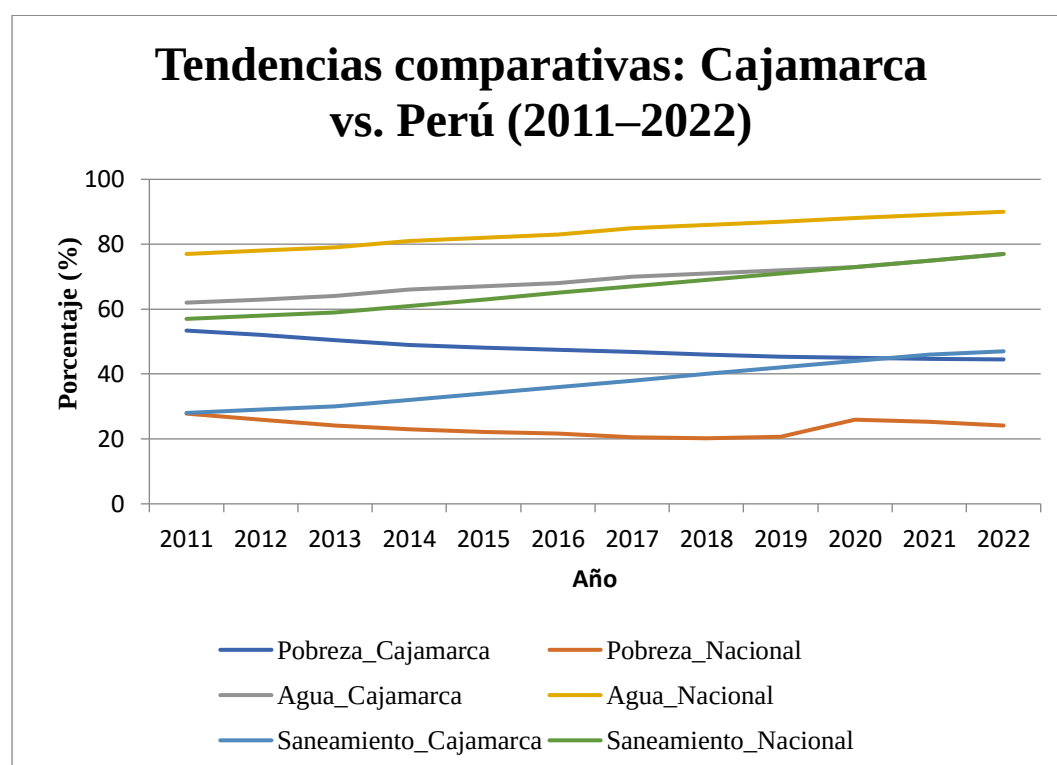
En consecuencia, la Figura 6 aporta evidencia comparativa relevante para contextualizar el análisis del Conflicto Minero Conga (2011–2022), mostrando que las desigualdades territoriales preceden y acompañan la conflictividad socioambiental, cuyo análisis causal será desarrollado en los capítulos de resultados y discusión.

Si bien la comparación territorial permite identificar brechas estructurales entre regiones, resulta igualmente relevante analizar cómo estos indicadores han evolucionado en el tiempo, a fin de comprender si dichas diferencias tienden a reducirse o, por el contrario, se mantienen de manera persistente. En este contexto, se presenta a continuación la evolución comparativa de los principales indicadores sociales de Cajamarca en relación con el promedio nacional.

La Figura 7 presenta la evolución comparativa de la pobreza monetaria, el acceso a agua potable y el acceso a saneamiento básico en Cajamarca en relación con el promedio nacional durante el periodo 2011–2022.

Figura 7

Tendencias comparativas: Cajamarca vs. Perú (2011-2022)



Nota. Elaboración propia a partir de INEI (2022)

La visualización permite identificar que, si bien se registran mejoras graduales en los tres indicadores a lo largo del periodo analizado, las brechas entre Cajamarca y el promedio nacional se mantienen de manera persistente.

Estas diferencias reflejan desigualdades territoriales en el acceso a servicios básicos y en las condiciones de bienestar social, especialmente en el ámbito rural. Desde un enfoque descriptivo y contextual, la figura muestra que los avances alcanzados no han sido suficientes para cerrar las brechas históricas existentes, lo que sugiere la presencia de limitaciones estructurales en los procesos de desarrollo regional.

En este sentido, la Figura 7 cumple una función analítica de apoyo al marco teórico, al evidenciar cómo la evolución de los indicadores sociales se desarrolla en un contexto de desigualdad persistente. Estos elementos resultan relevantes para comprender el escenario

territorial en el que emergen y se desarrollan los conflictos socioambientales en Cajamarca, particularmente en torno al Proyecto Minero Conga.

La evaluación causal de estas relaciones será abordada de manera específica en los capítulos de resultados y discusión.

➤ **Enfoque de gestión de conflictos socioambientales**

El enfoque de gestión de conflictos socioambientales se nutre de los aportes de la teoría de resolución de conflictos (Burton, 1990; Lederach, 1997) y de la gobernanza ambiental (Castro, 2018; Bebbington, 2022). Su énfasis no radica en explicar las causas estructurales de la conflictividad, sino en proporcionar herramientas para prevenir, mediar y transformar disputas asociadas al uso y control de los recursos naturales, mediante procesos de diálogo, inclusión multiactor y fortalecimiento de la transparencia institucional. Desde esta perspectiva, los conflictos no son concebidos únicamente como enfrentamientos, sino también como oportunidades de transformación social cuando son gestionados con legitimidad, confianza y equidad en la toma de decisiones.

En el Perú, durante el periodo 2011–2022, la Defensoría del Pueblo registró un promedio de aproximadamente 150 conflictos sociales activos por año, de los cuales más del 65 % correspondieron a conflictos de carácter socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2022). En este contexto, Cajamarca se posicionó de manera recurrente entre las regiones con mayor número de conflictos, especialmente aquellos vinculados a la actividad minera y al uso del recurso hídrico.

El caso del Proyecto Minero Conga (2011–2016) resulta ilustrativo para analizar las limitaciones de la gestión de conflictos. A pesar de la implementación de mesas de diálogo promovidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estos espacios se vieron interrumpidos o debilitados por la falta de confianza entre comunidades, Estado y empresa, la escasa inclusión de actores locales clave como rondas campesinas y juntas de usuarios de agua

y la limitada capacidad sancionadora de las instituciones responsables de la fiscalización ambiental. Entre 2014 y 2020, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) incrementó en aproximadamente 40 % el número de supervisiones en Cajamarca; sin embargo, solo cerca del 30 % de estas derivaron en sanciones efectivas. De manera paralela, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) reportó que apenas el 35 % de las fuentes hídricas monitoreadas contaba con información actualizada, lo que restringió la transparencia y la credibilidad necesarias para una gestión adecuada de los conflictos (ANA, 2020).

Los costos sociales asociados a estas deficiencias se reflejaron en la recurrencia de protestas y en el deterioro de la confianza institucional. Durante el periodo más álgido del conflicto se registraron más de 200 acciones de protesta y al menos cinco declaratorias de estado de emergencia en las provincias de Celendín y Hualgayoc-Bambamarca. Asimismo, el 68 % de la población rural declaró no confiar ni en el Estado ni en las empresas mineras, evidenciando una profunda crisis de legitimidad institucional (Latinobarómetro, 2018).

Este enfoque permite identificar por qué los mecanismos formales de gestión resultaron limitados en el contexto cajamarquino:

- Las brechas sociales persistentes pobreza, acceso limitado a servicios básicos se articularon con una débil institucionalidad estatal.
- La exclusión de actores locales y la fragilidad de los procesos de diálogo impidieron la construcción de confianza social.
- La baja efectividad de la fiscalización ambiental y del monitoreo hídrico reforzó percepciones de impunidad y falta de control estatal.

En consecuencia, la conflictividad socioambiental en Cajamarca se mantuvo en el tiempo, ya que los procesos de gestión no lograron transformar las tensiones estructurales en consensos legítimos, sino que fueron percibidos como mecanismos insuficientes frente a demandas

históricas no resueltas. Desde una perspectiva analítica, este enfoque permite comprender cómo la ineficacia de los instrumentos de gestión contribuyó a la persistencia de los conflictos durante el periodo 2011–2022, en interacción con la pobreza estructural y la debilidad institucional.

La Tabla 12 sintetiza los principales elementos de esta gestión institucional limitada en Cajamarca durante el periodo de estudio, evidenciando cómo la combinación de mesas de diálogo inconclusas, fiscalización ambiental insuficiente, deficiencias en el monitoreo hídrico y bajos niveles de confianza ciudadana se asoció con la persistencia de la conflictividad socioambiental. Su inclusión resulta pertinente porque permite articular los enfoques de gestión con el contexto empírico regional, ofreciendo un soporte analítico para comprender la continuidad del conflicto en torno al Proyecto Minero Conga.

Tabla 12

Gestión de Conflictos Socioambientales en Cajamarca (2011-2022)

Dimensión de gestión	Evidencia empírica (2011–2022)	Implicancia en la conflictividad
Mesas de diálogo (PCM)	>50 instaladas a nivel nacional; solo 20–25 % concluyeron con acuerdos implementados. En Conga, proceso interrumpido.	Persistencia de protestas y desconfianza.
Fiscalización ambiental (OEFA)	Supervisiones en Cajamarca +40 % (2014–2020); sanciones efectivas <30 %.	Percepción de impunidad frente a infracciones ambientales.
Monitoreo hídrico (ANA)	Solo 35 % de fuentes hídricas monitoreadas con data actualizada (2015–2020).	Limitada transparencia y legitimidad técnica.
Protestas sociales	>200 protestas y 5 estados de emergencia en Celendín y Bambamarca (2011–2016).	Escalada de conflictividad y deslegitimación institucional.
Confianza ciudadana	68 % de la población rural reporta poca o nula confianza en Estado y empresas (Latinobarómetro, 2018).	Crisis de legitimidad que dificulta procesos de diálogo.

Nota. Elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo (2011-2022)

➤ **Enfoque de resiliencia comunitaria**

El enfoque de resiliencia comunitaria analiza la capacidad de los grupos sociales para adaptarse, reorganizarse y mantener su cohesión frente a crisis prolongadas o presiones externas significativas (Norris et al., 2008; Berkes & Ross, 2013). En contextos

socioambientales, este enfoque se expresa en la habilidad de las comunidades rurales para activar redes de apoyo, sostener prácticas culturales y gestionar recursos locales, incluso cuando enfrentan amenazas derivadas del extractivismo, la degradación ambiental o la exclusión institucional. Su aporte central al análisis de los conflictos socioambientales radica en visibilizar la agencia comunitaria, superando enfoques que enfatizan únicamente la vulnerabilidad o el déficit social.

En la región Cajamarca, la resiliencia comunitaria se manifestó de manera consistente durante el Conflicto Minero Conga (2011–2016) y en los años posteriores, expresándose en múltiples dimensiones interrelacionadas:

- **Movilización social sostenida:** se registraron más de 200 acciones colectivas marchas, bloqueos, vigiliyas y paros entre 2011 y 2016, así como cinco declaratorias de estado de emergencia en las provincias de Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, lo que evidencia la persistencia de la protesta social frente a la presión extractiva (Defensoría del Pueblo, 2016).
- **Organización comunal:** la región contaba con más de 3.500 rondas campesinas registradas (INEI, 2020) y más de 1.200 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) activas (SUNASS, 2021), las cuales desempeñaron un rol clave en la autogestión hídrica, la vigilancia territorial y la cohesión comunitaria.
- **Confianza interna:** mientras la confianza en el Estado y en las empresas mineras no superaba el 30 %, más del 60 % de la población rural manifestaba confianza en sus propias organizaciones comunales, reflejando una fuerte legitimidad interna frente a la crisis institucional (Latinobarómetro, 2018).
- **Alianzas externas:** organizaciones no gubernamentales como GRUFIDES y universidades locales promovieron iniciativas de monitoreo ambiental comunitario,

articuladas con redes nacionales e internacionales de derechos humanos y justicia ambiental, fortaleciendo la visibilidad y legitimidad de las demandas locales.

- **Memoria histórica de resistencia:** Cajamarca acumulaba al menos tres ciclos significativos de resistencia minera Yanacocha en la década de 1990, Cerro Quilish en 2004 y Conga entre 2011 y 2016 lo que consolidó una cultura política de movilización, vigilancia ambiental y defensa territorial (Bebbington et al., 2018).

El aporte de este enfoque al análisis de la conflictividad socioambiental en Cajamarca es doble. Por un lado, permite explicar la persistencia de la protesta social en un contexto de gestión institucional limitada, mostrando cómo las comunidades lograron sostener la movilización durante más de una década gracias a la cohesión social, la organización comunal y las redes de apoyo locales. Por otro, complementa las teorías clásicas y contemporáneas al evidenciar que las comunidades no deben ser comprendidas únicamente como sujetos pasivos afectados por la pobreza y la exclusión, sino como actores colectivos con capacidad de adaptación, resistencia y generación de estrategias propias frente a la presión extractiva.

Desde esta perspectiva, la hipótesis central de la investigación se ve reforzada: la conflictividad socioambiental en Cajamarca durante el periodo 2011–2022 respondió a la interacción entre pobreza estructural y debilidad institucional; sin embargo, la resiliencia comunitaria operó como un factor que sostuvo, legitimó y prolongó la protesta social en el tiempo, evitando su disolución pese a la ausencia de canales efectivos de diálogo y resolución de conflictos.

La Tabla 13 sintetiza las principales dimensiones de la resiliencia comunitaria identificadas en Cajamarca: movilización social, organización comunal, confianza interna, alianzas externas y memoria histórica mostrando cómo estas capacidades colectivas fortalecieron la cohesión social y contribuyeron a la persistencia de la conflictividad socioambiental frente a la exclusión institucional y la desigualdad estructural.

Tabla 13*Resiliencia comunitaria en Cajamarca (2011-2022)*

Dimensión de resiliencia	Evidencia en Cajamarca (2011–2022)	Implicancia en la conflictividad
Protestas colectivas	>200 movilizaciones y 5 estados de emergencia (2011–2016).	Sostienen la presión social y visibilizan el conflicto.
Organización comunal	3,500 rondas campesinas (INEI, 2020); 1,200 JASS (SUNASS, 2021).	Refuerzan cohesión y autogestión territorial.
Confianza social	60–65 % confía en organizaciones comunales; <30 % en Estado/empresas.	Legitima la protesta y debilita la mediación institucional.
Alianzas externas	ONGs, universidades, redes internacionales (Oxfam, Amnistía).	Amplían el alcance del conflicto a escala global.
Memoria histórica	Tres ciclos de resistencia minera (Yanacocha, Quilish, Conga).	Reproduce una cultura de resistencia comunitaria.

Nota. Elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo (2011-2022)

2.2.2.5. Evidencias empíricas recientes en el Perú y América Latina

Las evidencias empíricas recientes sobre la conflictividad socioambiental en el Perú y América Latina revelan un patrón recurrente caracterizado por la convergencia de desigualdades estructurales, debilidad institucional y respuestas de resistencia comunitaria. Lejos de constituir fenómenos aislados o coyunturales, los conflictos asociados a actividades extractivas se configuran como procesos persistentes, anclados en problemas históricos de pobreza, exclusión territorial y gobernanza deficiente de los recursos naturales.

Defensoría del Pueblo (2011–2023).

La Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2023 registran de manera sistemática entre 120 y 180 conflictos sociales activos por año, de los cuales aproximadamente entre el 60 % y el 65 % corresponden a conflictos socioambientales, principalmente vinculados a la minería. Dentro de este panorama, Cajamarca aparece de forma recurrente como una de las regiones con mayor concentración de casos, lo que confirma su centralidad en la conflictividad nacional y refuerza su pertinencia como unidad de análisis para esta investigación (Defensoría del Pueblo, 2023).

Caso Conga (2011–2022).

El Conflicto Minero Conga (2011–2022) constituye un referente empírico clave para comprender cómo la interacción entre pobreza estructural, débil gestión institucional y resiliencia comunitaria puede derivar en un proceso de conflictividad prolongado. Durante este periodo se registraron más de 200 acciones de protesta y cinco declaratorias de estado de emergencia en las provincias de Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, reflejando no solo la magnitud de la resistencia social, sino también una profunda desconfianza hacia el Estado y una fuerte defensa de las fuentes hídricas como eje de subsistencia y de identidad territorial.

La literatura especializada respalda esta interpretación. Bebbington et al. (2018) evidencian que la exclusión en el acceso a servicios básicos y la falta de redistribución efectiva de los beneficios extractivos actúan como detonantes estructurales de los conflictos en territorios mineros de América Latina. De Echave (2020) demuestra que menos del 30 % de las mesas de diálogo implementadas en el Perú lograron acuerdos efectivamente ejecutados, lo que pone en evidencia la baja capacidad institucional para transformar la conflictividad en consensos sostenibles. Por su parte, Svampa (2019) interpreta estos procesos como parte de un movimiento eco-territorial latinoamericano, en el que la defensa del agua y de los bienes comunes trasciende el ámbito local y se articula con redes nacionales y transnacionales de resistencia socioambiental.

Estudios más recientes refuerzan la vigencia de estas dinámicas. Orellana (2021) analiza la crisis de legitimidad de los mecanismos de diálogo estatal, señalando que la falta de participación efectiva y la asimetría de poder entre actores mineros y comunidades limitan su eficacia. Urteaga (2022) subraya que en Cajamarca la escasez hídrica y la percepción de amenaza sobre las fuentes de agua intensificaron las sensaciones de exclusión y vulnerabilidad social. Asimismo, Leão y Goulão (2024) sostienen que la incapacidad de los Estados latinoamericanos para convertir la renta minera en mejoras sostenibles en salud, educación y

participación política constituye una forma contemporánea de violencia estructural que contribuye a la persistencia de la conflictividad.

En conjunto, estas evidencias empíricas confirman que los conflictos socioambientales en el Perú y América Latina no pueden explicarse únicamente por la presencia de actividades extractivas, sino por la interacción de factores estructurales: pobreza persistente, debilidad institucional, distribución desigual de costos y beneficios ambientales y limitada capacidad de gestión estatal. La Tabla 14 sintetiza estos hallazgos al contrastar las principales teorías clásicas y contemporáneas aplicadas a los conflictos socioambientales, destacando sus diferencias en causas explicativas, actores involucrados, escalas de análisis y pertinencia para el caso de Cajamarca.

Este cuerpo de evidencia empírica refuerza la hipótesis central de la presente investigación: la conflictividad socioambiental en Cajamarca durante el periodo 2011–2022 fue el resultado de un entramado estructural donde la pobreza multidimensional y la débil gobernanza estatal interactuaron con procesos de resistencia comunitaria, generando un conflicto persistente y de alta intensidad en torno al Proyecto Minero Conga.

Tabla 14

Tabla comparativa: Teorías clásicas vs. contemporáneas

Dimensión	Teorías clásicas (Marx, Galtung)	Teorías contemporáneas (Svampa, Ostrom, Justicia ambiental)
Causa central del conflicto	Desigualdad económica (Marx) y exclusión estructural (Galtung).	Extractivismo, bienes comunes y justicia ambiental.
Actores sociales	Clases sociales y víctimas de exclusión.	Comunidades como actores activos y redes eco-territoriales.
Escala de análisis	Nacional y estructural.	Local-global, con articulación en redes transnacionales.

Limitaciones	Poca atención a lo ambiental y al cambio climático.	Mayor integración de variables ambientales, climáticas y de gobernanza.
Pertinencia en Cajamarca	Explican desigualdad y exclusión.	Explican resistencia prolongada y persistencia de conflictos.

Nota. Elaboración propia a partir de Marx (1867)

La Tabla 14 y el análisis comparativo permiten evidenciar que los enfoques clásicos explican la conflictividad socioambiental fundamentalmente desde la desigualdad material y la exclusión estructural, mientras que las teorías contemporáneas amplían este diagnóstico al incorporar el extractivismo, la justicia ambiental, la defensa de los bienes comunes y la dimensión territorial del conflicto.

Este contraste analítico revela la existencia de tres niveles explicativos interrelacionados:

- **Nivel estructural (base):** pobreza persistente, desigualdad territorial y debilidad de la gobernanza estatal.
- **Nivel dinámico (intermedio):** expansión del extractivismo, degradación ambiental, tensiones en el acceso al agua y exclusión de la participación política.
- **Nivel expresivo (cima):** protestas sociales, crisis de legitimidad institucional y persistencia de la conflictividad socioambiental.

La tabla permite visualizar de manera integrada cómo las causas estructurales alimentan dinámicas de exclusión y presión extractiva, que a su vez se manifiestan en efectos visibles como la movilización social, la desconfianza hacia el Estado y la prolongación de los conflictos.

No obstante, las evidencias empíricas recientes presentan limitaciones relevantes que deben ser reconocidas críticamente. En primer lugar, los reportes oficiales mantienen un énfasis predominantemente cuantitativo, priorizando el número de conflictos activos sin evaluar de manera sistemática la efectividad, sostenibilidad o cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

En segundo lugar, existe una fragmentación analítica significativa, con estudios centrados en casos emblemáticos aislados como Conga o Las Bambas que dificultan la construcción de modelos comparativos de largo plazo. A ello se suma una escasa integración de variables asociadas al cambio climático, como la variabilidad hídrica o las sequías, a pesar de su creciente incidencia en los conflictos vinculados al agua. Asimismo, persiste una subrepresentación de la agencia comunitaria, ya que muchos análisis describen a las comunidades como actores pasivos, sin reconocer plenamente su capacidad de organización, autogestión y resiliencia. Finalmente, se observa un desfase temporal en parte de la literatura, concentrada en periodos previos a 2020, lo que deja vacíos analíticos en el contexto postpandemia.

El examen conjunto de las teorías clásicas y contemporáneas permite concluir que los conflictos socioambientales en Cajamarca, y en particular el caso del Proyecto Minero Conga (2011–2022), no pueden comprenderse desde una única perspectiva explicativa, sino a partir de la articulación de enfoques complementarios.

Desde la visión clásica, Marx (1867) aporta la comprensión de la conflictividad como resultado de la desigualdad material y la concentración de la riqueza, fenómeno que en Cajamarca se expresa en la concentración de la renta minera en empresas transnacionales frente a comunidades que permanecen en condiciones de pobreza. Galtung (1969) amplía este marco al introducir el concepto de violencia estructural, evidenciando que la privación sostenida de derechos básicos como el acceso al agua, al saneamiento o a la participación política constituye una forma de exclusión que alimenta la protesta social.

Las teorías contemporáneas enriquecen este diagnóstico al incorporar dimensiones ambientales, culturales e institucionales. Martínez-Alier (2002) demuestra que la injusticia ambiental surge cuando los beneficios de la actividad extractiva se concentran en determinados actores, mientras los costos ambientales recaen sobre comunidades rurales vulnerables; en Cajamarca, la amenaza percibida sobre lagunas y manantiales reforzó la sensación de

inequidad. Svampa (2019), a su vez, introduce la noción de movimientos eco-territoriales, que permite comprender que la resistencia no fue únicamente económica, sino también identitaria y cultural, al defender el agua y el territorio como bienes comunes vinculados a la dignidad y a la reproducción social. Finalmente, Ostrom (1990) muestra que las comunidades poseen formas propias de gobernanza del agua, y que la amenaza a estas instituciones comunales fortaleció la cohesión social y la persistencia del conflicto.

Desde esta síntesis integradora, el Conflicto Minero Conga no aparece como un episodio coyuntural, sino como la expresión de un entramado complejo en el que pobreza estructural, debilidad institucional e identidades territoriales se articularon como causas profundas de la resistencia social. En particular, el enfoque eco-territorial de Svampa resulta clave para este caso, ya que explica que la protesta no se limitó a la distribución desigual de beneficios y costos, sino que constituyó una afirmación política del territorio. El agua fue defendida no solo como recurso vital, sino como símbolo de dignidad y derecho colectivo, proyectando la movilización local hacia una narrativa con legitimidad social más amplia.

El alcance de estas teorías no se limita al análisis histórico del caso Conga. Por el contrario, ofrecen herramientas analíticas con vigencia prospectiva para interpretar conflictos emergentes en América Latina y en el Perú, en un contexto marcado por la transición energética, la minería sostenible y los efectos del cambio climático. La desigualdad estructural señalada por Marx y la violencia institucional descrita por Galtung continúan presentes en territorios donde la renta extractiva no se traduce en bienestar. La justicia ambiental de Martínez-Alier resulta especialmente pertinente para anticipar nuevas formas de inequidad asociadas a la explotación de minerales estratégicos. La eco-territorialidad de Svampa explica cómo las resistencias actuales y futuras se articularán en defensa de territorios e identidades colectivas, mientras que la gobernanza de los comunes de Ostrom ilumina el rol decisivo de las instituciones comunales frente a la presión extractiva y la crisis climática.

En síntesis, la pertinencia doctrinal de estas teorías radica en que conforman un marco sólido, coherente y aplicable a múltiples contextos extractivos. Ello permite que la investigación trascienda el estudio de un caso local y se proyecte hacia debates regionales y globales sobre conflictividad socioambiental, cumpliendo plenamente con el criterio de pertinencia directa e indirecta respecto al objeto de estudio y consolidando la solidez teórica del trabajo.

2.3. Marco Conceptual

El presente marco conceptual articula cuatro lentes teóricos complementarios que dialogan de manera integrada para explicar la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental en contextos extractivos: la pobreza multidimensional (Sen; Alkire & Foster), el extractivismo y la justicia ambiental (Svampa), la gobernanza de los recursos comunes (Ostrom) y la conflictividad asociada a la violencia estructural (Galtung).

Desde esta articulación, se comprende que la actividad minera no impacta únicamente en la esfera económica, sino que reconfigura de manera simultánea múltiples dimensiones del bienestar, generando privaciones concurrentes en acceso al agua, salud, educación, medios de vida y participación social. Estas privaciones, cuando se producen en territorios con desigualdad estructural y débil institucionalidad, tienden a intensificar percepciones de inequidad distributiva e injusticia ambiental.

Asimismo, el marco reconoce que la conflictividad socioambiental emerge cuando las comunidades perciben una ruptura de los arreglos institucionales y de las normas comunitarias que regulan el uso y la gestión de bienes comunes, especialmente el agua. En este escenario, la pobreza multidimensional actúa como condición estructural que amplifica la vulnerabilidad social, mientras que la gobernanza debilitada y el avance del extractivismo funcionan como factores desencadenantes de la movilización colectiva.

En conjunto, estos enfoques permiten interpretar la conflictividad no como un fenómeno coyuntural o reactivo, sino como un proceso social estructurado, en el que las

privaciones persistentes, la injusta distribución de costos y beneficios ambientales y la erosión de la legitimidad institucional convergen para activar dinámicas de protesta y resistencia territorial en contextos mineros.

2.3.1. Conceptos de pobreza en áreas rurales afectadas por actividades mineras

La pobreza en áreas rurales no puede ser comprendida únicamente como insuficiencia de ingresos monetarios, sino como un conjunto de privaciones simultáneas y persistentes vinculadas al acceso a agua segura, saneamiento, salud, educación, vivienda y condiciones dignas de vida. Esta concepción exige un enfoque multidimensional que permita capturar la complejidad del fenómeno, especialmente en territorios donde las economías locales dependen de recursos naturales estratégicos (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011).

En contextos rurales afectados por actividades mineras, estas privaciones tienden a intensificarse debido a la alteración de activos fundamentales como la tierra y el agua. Cuando el recurso hídrico cumple una doble función medio de subsistencia productiva y bien comunitario regulado por normas colectivas su afectación no solo reduce el bienestar material de los hogares, sino que erosiona los arreglos institucionales locales, debilitando relaciones de confianza, legitimidad y cooperación social. Esta ruptura institucional constituye un elemento clave en la transición de la pobreza estructural hacia la conflictividad socioambiental.

Si bien la minería suele presentarse como motor de desarrollo mediante la generación de empleo, regalías e infraestructura, la evidencia empírica muestra una brecha persistente entre el discurso del desarrollo y los beneficios efectivamente percibidos por la población rural. Diversos estudios en Cajamarca indican que los impactos negativos como la contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de tierras agrícolas y el desplazamiento de actividades productivas tradicionales generan un desajuste entre expectativas y resultados concretos (Bebbington, 2012; Svampa, 2019). Este desajuste no es neutro: actúa, por un lado, como mecanismo reproductor de pobreza, al destruir activos productivos y elevar los costos de sustitución; y, por

otro, como detonante de conflictividad, al consolidar percepciones de injusticia distributiva y exclusión territorial (De Echave, 2009).

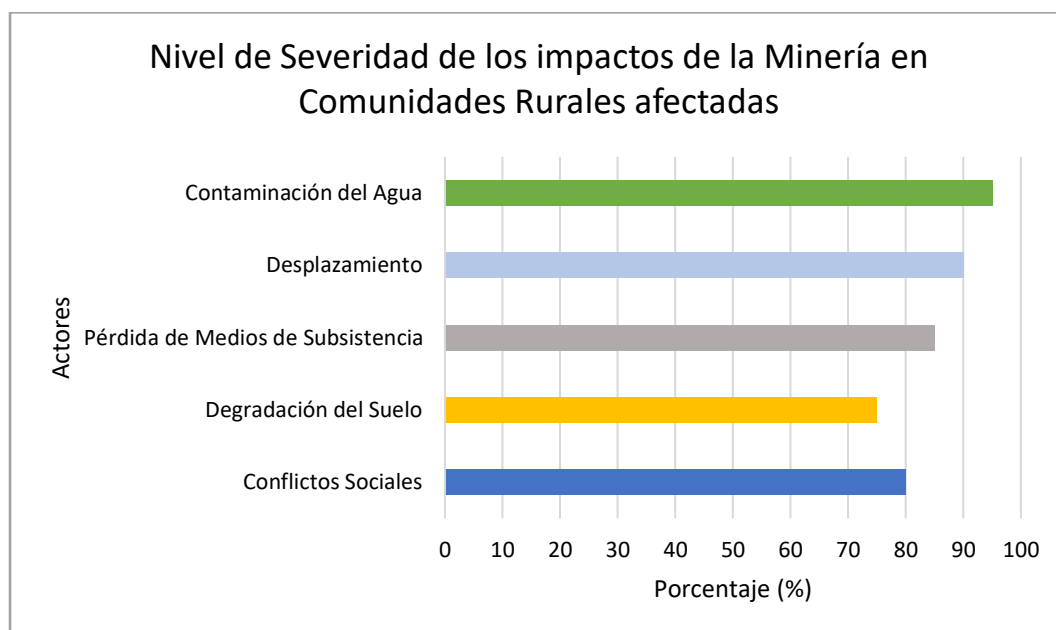
El caso del Proyecto Minero Conga ilustra con claridad esta dinámica. Las denuncias formuladas por las comunidades rurales respecto a la disminución de recursos hídricos y a la pérdida de capacidades agrícolas no reflejan únicamente impactos ambientales inmediatos, sino la cristalización de un patrón estructural de exclusión, en el cual la renta extractiva no se traduce en mejoras sostenibles de las condiciones de vida. En este sentido, la pobreza rural en contextos mineros debe analizarse como el resultado de procesos socioeconómicos y políticos que limitan derechos, reconocimiento y autonomía territorial, más allá de la mera carencia de ingresos (Bebbington & Bury, 2013).

Desde esta perspectiva, la pobreza en áreas rurales afectadas por la minería se configura como una condición estructural que amplifica la vulnerabilidad social y fortalece la predisposición al conflicto, especialmente cuando se combina con débil gobernanza, baja participación comunitaria y distribución inequitativa de los costos y beneficios del extractivismo.

La Figura 8 presenta los principales impactos negativos asociados a la actividad minera en comunidades rurales, permitiendo visualizar los niveles de severidad percibidos en distintos ámbitos sociales y ambientales.

Figura 8

Niveles de severidad de los impactos de la minería en comunidades rurales afectadas



Nota. Adaptación basada en Bebbington et al. (2008).

Como se observa, destacan la contaminación del agua, el desplazamiento de comunidades y la pérdida de medios de subsistencia como los impactos de mayor severidad, evidenciando que los efectos de la actividad extractiva trascienden el ámbito económico y afectan directamente las condiciones sociales y ambientales de los territorios rurales.

Su inclusión resulta pertinente porque permite comprender cómo estos impactos operan como factores que profundizan la pobreza multidimensional y contribuyen a la persistencia de la conflictividad socioambiental en territorios como Cajamarca, donde las comunidades experimentan transformaciones significativas en sus medios de vida y en el acceso a recursos esenciales.

Este análisis sirve como base contextual para comprender las tensiones sociales vinculadas a proyectos extractivos, cuyos efectos específicos serán examinados en los capítulos de resultados y discusión.

Pobreza Multidimensional y la Minería

El enfoque de pobreza multidimensional, desarrollado a partir del marco de capacidades de Sen (1999) y operacionalizado por Alkire y Foster (2011), cuestiona la medición tradicional de la pobreza centrada exclusivamente en el ingreso monetario. Desde esta perspectiva, un hogar puede superar el umbral de pobreza monetaria y, sin embargo, experimentar privaciones significativas y simultáneas en dimensiones fundamentales como educación, salud, acceso a agua segura, vivienda adecuada y participación social. Esta mirada resulta especialmente relevante en contextos extractivos, donde el crecimiento económico agregado no garantiza mejoras efectivas en el bienestar de las poblaciones locales.

En territorios con fuerte presencia minera, la pobreza multidimensional adquiere una expresión particular. Si bien la actividad extractiva puede incrementar ingresos fiscales, empleo temporal o indicadores macroeconómicos regionales, estos beneficios no siempre se traducen en la expansión de capacidades humanas ni en la mejora sostenida de las condiciones de vida. Por el contrario, la minería puede afectar directamente bienes esenciales como el agua, la tierra y el ambiente que constituyen la base material de los medios de vida rurales. Cuando estos activos se degradan o se vuelven inseguros, las privaciones no monetarias se profundizan y comprometen el desarrollo humano, incluso en escenarios de aparente crecimiento económico. A diferencia de la narrativa oficial que presenta la minería como motor automático de reducción de la pobreza, la evidencia empírica muestra un escenario ambivalente. Mientras algunos indicadores monetarios pueden registrar mejoras, persisten o incluso se amplían carencias estructurales en dimensiones no monetarias, particularmente en el ámbito rural. Esta contradicción configura lo que puede denominarse una paradoja extractiva, en la cual la generación de riqueza no se traduce en bienestar sostenible, sino que reproduce y, en ciertos casos, intensifica desigualdades territoriales y sociales.

La Tabla 15 ilustra que la pobreza multidimensional en áreas mineras no se limita a la insuficiencia de ingresos, sino que abarca dimensiones esenciales como el acceso al agua segura, la salud, la educación y la calidad ambiental. Los impactos asociados a la actividad minera contaminación de fuentes hídricas, incremento de enfermedades, desplazamiento de actividades productivas tradicionales y degradación ecosistémica amplían las privaciones no monetarias y afectan de manera directa el bienestar comunitario. Esta evidencia refuerza la hipótesis de la investigación al demostrar que la renta extractiva no se convierte automáticamente en desarrollo humano, sino que, en ausencia de una gobernanza efectiva y equitativa, contribuye a la persistencia de la pobreza multidimensional y a la intensificación de la conflictividad socioambiental en Cajamarca.

Tabla 15

Componentes de la pobreza multidimensional en áreas afectadas por la minería

Dimensión	Descripción	Impacto de la Minería
Ingreso	Falta de empleo o ingresos estables	Empleos temporales o escasos
Agua y Saneamiento	Acceso limitado o contaminación de fuentes de agua potable	Contaminación de ríos y lagunas
Salud	Condiciones sanitarias deficientes	Aumento de enfermedades relacionadas con la minería
Educación	Baja calidad o falta de acceso a educación	Educación afectada por desplazamientos y conflictos
Medio Ambiente	Pérdida de recursos naturales como tierra y agua	Degradación de ecosistemas y territorios agrícolas

Nota. Adaptación basada en Alkire & Foster (2011)

Minería como intensificador de privaciones

Evidencia global.

La evidencia internacional muestra que, en numerosos países ricos en recursos minerales de África y América Latina, la actividad extractiva tiende a profundizar desigualdades preexistentes en lugar de reducirlas. Diversos estudios coinciden en que los beneficios

económicos generados por la minería ingresos fiscales, exportaciones y rentas extraordinarias suelen concentrarse en élites económicas, corporaciones transnacionales y niveles centrales del Estado, mientras que las comunidades locales asumen de manera desproporcionada los costos sociales y ambientales asociados a la actividad extractiva.

En el contexto latinoamericano, la CEPAL ha advertido que la minería, lejos de actuar como un mecanismo automático de desarrollo inclusivo, puede intensificar la desigualdad territorial cuando los encadenamientos productivos locales son débiles y los sistemas de redistribución resultan insuficientes (Bárcena, 2012). En estos escenarios, la extracción de recursos se traduce en crecimiento macroeconómico, pero no en mejoras sostenibles de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia directa de los proyectos.

Asimismo, la literatura contemporánea sobre minería y desarrollo señala que los megaproyectos extractivos generan externalidades negativas significativas contaminación ambiental, deterioro de la salud, pérdida de medios de subsistencia y desplazamiento de actividades productivas tradicionales que no suelen ser adecuadamente internalizadas en los mecanismos de distribución de beneficios (Gaviria, 2022). Estas externalidades afectan con mayor intensidad a los hogares rurales, cuya economía depende directamente del acceso a recursos naturales como el agua y la tierra.

Desde esta perspectiva, la minería opera como un intensificador de privaciones estructurales: no crea necesariamente nuevas formas de pobreza, pero sí amplifica vulnerabilidades existentes al alterar activos clave para la reproducción social. Cuando estos impactos se producen en contextos de pobreza multidimensional y débil gobernanza, el resultado es un incremento de las brechas sociales y una mayor propensión a la conflictividad socioambiental. Esta evidencia global resulta fundamental para contextualizar el caso de Cajamarca, donde patrones similares de concentración de beneficios y socialización de costos permiten explicar la persistencia de privaciones y la emergencia de conflictos en torno a proyectos mineros de gran escala.

Caso peruano.

En el Perú, el acceso a servicios básicos continúa siendo un problema estructural, incluso en un contexto de expansión sostenida de las actividades extractivas. A pesar del crecimiento económico impulsado por la minería, amplios sectores de la población rural especialmente en regiones altoandinas mantienen brechas persistentes en cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el derecho humano al agua y al saneamiento advierte que las zonas rurales presentan retrasos históricos en infraestructura, baja inversión pública efectiva y deficiencias en la gestión de los servicios, lo que limita el ejercicio de derechos fundamentales y refuerza escenarios de exclusión social (Defensoría del Pueblo, 2015). Estas brechas resultan particularmente críticas en territorios con presencia minera, donde la presión sobre las fuentes hídricas se combina con una débil capacidad institucional para garantizar servicios adecuados a la población local.

De manera complementaria, un informe reciente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento analiza la evolución de la pobreza multidimensional en relación con el acceso al agua potable entre 2004 y 2024. Los resultados evidencian que, si bien se registraron avances a nivel nacional, numerosas zonas rurales continúan presentando deficiencias significativas en el acceso seguro y continuo al agua, lo que incide directamente en la persistencia de privaciones en salud, educación y bienestar general (SUNASS, 2024).

Asimismo, estudios recientes confirman que la desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento actúa como un factor agravante de la pobreza monetaria y multidimensional en el territorio peruano. Portocarrero (2024) demuestra que las regiones con menor cobertura de servicios básicos particularmente en el ámbito rural y altoandino presentan mayores niveles de privación y menor capacidad de romper ciclos intergeneracionales de pobreza. Este patrón

territorial refuerza la idea de que el crecimiento económico asociado a la minería no se traduce automáticamente en mejoras en la calidad de vida de las poblaciones locales.

En conjunto, la evidencia empírica del caso peruano confirma que la minería, en ausencia de una gobernanza efectiva del agua y de políticas redistributivas sólidas, opera como un intensificador de privaciones estructurales. Lejos de reducir la pobreza multidimensional, la persistencia de brechas en servicios básicos en regiones mineras contribuye a profundizar desigualdades territoriales y a generar condiciones propicias para la conflictividad socioambiental, como se observa en casos emblemáticos de la sierra norte, entre ellos Cajamarca.

Cajamarca (Conga).

En el caso del Proyecto Minero Conga, diversos estudios y reportes advirtieron que la intervención sobre lagunas altoandinas y humedales estratégicos implicaba un riesgo significativo para la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en la región Cajamarca. Estas lagunas no solo cumplen funciones ecológicas esenciales, sino que constituyen fuentes primarias de agua para la agricultura familiar, la ganadería y el consumo humano en comunidades rurales altoandinas. La alteración o desaparición de estos ecosistemas fue señalada como un factor de alto impacto ambiental, capaz de generar daños irreversibles en sistemas frágiles y de gran valor socioecológico (Muqui, 2012).

El conflicto social que emergió en torno al Proyecto Conga ha sido analizado como un caso paradigmático de intensificación multidimensional de privaciones. La pérdida potencial de fuentes hídricas no se limitaba a un impacto ambiental puntual, sino que amenazaba directamente los medios de vida locales, afectando la producción agrícola, los ingresos familiares, la seguridad alimentaria y, de manera indirecta, las condiciones de salud y educación de la población rural (Isla, 2017). En este sentido, el proyecto operaba como un

factor que ampliaba privaciones preexistentes, profundizando la pobreza estructural en un territorio históricamente vulnerable.

Asimismo, el Proyecto Minero Conga fue objeto de una amplia contestación social, política y jurídica debido a los riesgos ambientales asociados a la desaparición de lagunas consideradas fuentes estratégicas de agua. Estudios académicos y reportes institucionales sostuvieron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa presentaba deficiencias técnicas y vacíos sustantivos en la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas hídricos (Bebbington & Scurrah, 2014). Estas observaciones reforzaron la percepción de que los procesos de evaluación ambiental no garantizaban plenamente la protección de derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y el derecho humano al agua.

En esta línea, la Defensoría del Pueblo advirtió que el conflicto de Conga evidenciaba una débil articulación entre política extractiva, protección ambiental y garantía de derechos, subrayando que la falta de legitimidad social del proyecto se encontraba estrechamente vinculada a la percepción de vulneración de derechos colectivos y a la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana (Defensoría del Pueblo, 2012).

Desde una perspectiva analítica, el caso Conga confirma que la minería puede actuar como un intensificador de pobreza multidimensional cuando se superpone a territorios rurales con alta dependencia de recursos naturales y limitada capacidad institucional. La amenaza sobre el agua bien esencial para la vida y la producción operó como un catalizador de la conflictividad socioambiental, al articular privaciones materiales, percepciones de injusticia y desconfianza hacia el Estado y la empresa. De este modo, el conflicto no respondió únicamente a un desacuerdo técnico sobre un proyecto minero, sino a la defensa de condiciones mínimas de bienestar, autonomía territorial y reproducción social.

Esta evidencia refuerza la hipótesis central de la investigación: en Cajamarca, la pobreza multidimensional no solo constituye un contexto preexistente, sino un factor explicativo clave de la conflictividad socioambiental, al amplificar los impactos percibidos del extractivismo y transformar el riesgo ambiental en una amenaza directa al bienestar y a los derechos fundamentales de las comunidades locales.

Desigualdad y Exclusión en las Comunidades Rurales Afectadas por la Minería

La literatura sobre extractivismo en América Latina evidencia que, si bien los discursos estatales y corporativos suelen enfatizar los beneficios compartidos de la minería, en la práctica los costos y beneficios de esta actividad se distribuyen de manera profundamente desigual, reforzando procesos de exclusión social en las comunidades rurales (Anthony Bebbington, 2012; Maristella Svampa, 2019). Esta asimetría no responde a dinámicas coyunturales, sino a patrones estructurales de acumulación, en los cuales las poblaciones locales acceden a una fracción marginal de la renta minera, mientras asumen de forma desproporcionada los impactos ambientales, sociales y territoriales más severos. El desajuste persistente entre la promesa de desarrollo y la experiencia cotidiana de exclusión no solo profundiza la pobreza rural, sino que erosiona la legitimidad institucional y agudiza la conflictividad socioambiental.

En este contexto, la pobreza rural no puede entenderse únicamente como insuficiencia de ingresos o carencia de recursos materiales. Se reproduce y profundiza a través de mecanismos de exclusión política y marginación en la toma de decisiones sobre el uso y control del territorio (Arellano-Yanguas, 2011). Diversos estudios han documentado que las comunidades rurales afectadas por proyectos mineros suelen quedar al margen de los procesos efectivos de consulta, planificación y negociación, lo que refuerza percepciones de despojo, pérdida de autonomía y ruptura del vínculo con el Estado (De Echave, 2009; Bebbington & Bury, 2013). Este componente político-institucional transforma la desigualdad económica en un conflicto

estructural, en el cual la disputa no se centra únicamente en los impactos materiales, sino también en el reconocimiento, la participación legítima y el respeto a los derechos colectivos. Desde la perspectiva de la gobernanza de los bienes comunes, cuando actores externos empresas mineras o el propio Estado imponen reglas de gestión que entran en conflicto con las normas y prácticas comunitarias, se produce una ruptura de la confianza social y del entramado institucional local (Elinor Ostrom, 1990). En el caso del Proyecto Minero Conga, la amenaza percibida sobre el agua y la gobernanza comunal no comprometió únicamente un recurso vital, sino que debilitó las instituciones locales encargadas de su gestión, generando un terreno fértil para la movilización y la protesta. Ello confirma que la conflictividad socioambiental no emerge solo a partir del daño ambiental, sino de la percepción de injusticia y exclusión en la gestión territorial (Svampa, 2019).

El patrón observado en Cajamarca no constituye un caso aislado. En otros países andinos como Bolivia, Chile y Argentina, la expansión de megaproyectos extractivos ha producido dinámicas similares de desigualdad distributiva y exclusión política, lo que explica la recurrencia de protestas prolongadas y movilizaciones sociales frente a la minería a gran escala (Gudynas, 2015; Svampa, 2019). Este paralelismo regional muestra que las comunidades rurales enfrentan un mismo modelo extractivo que concentra beneficios en el Estado y las empresas, mientras margina sistemáticamente a los actores locales y debilita sus medios de vida.

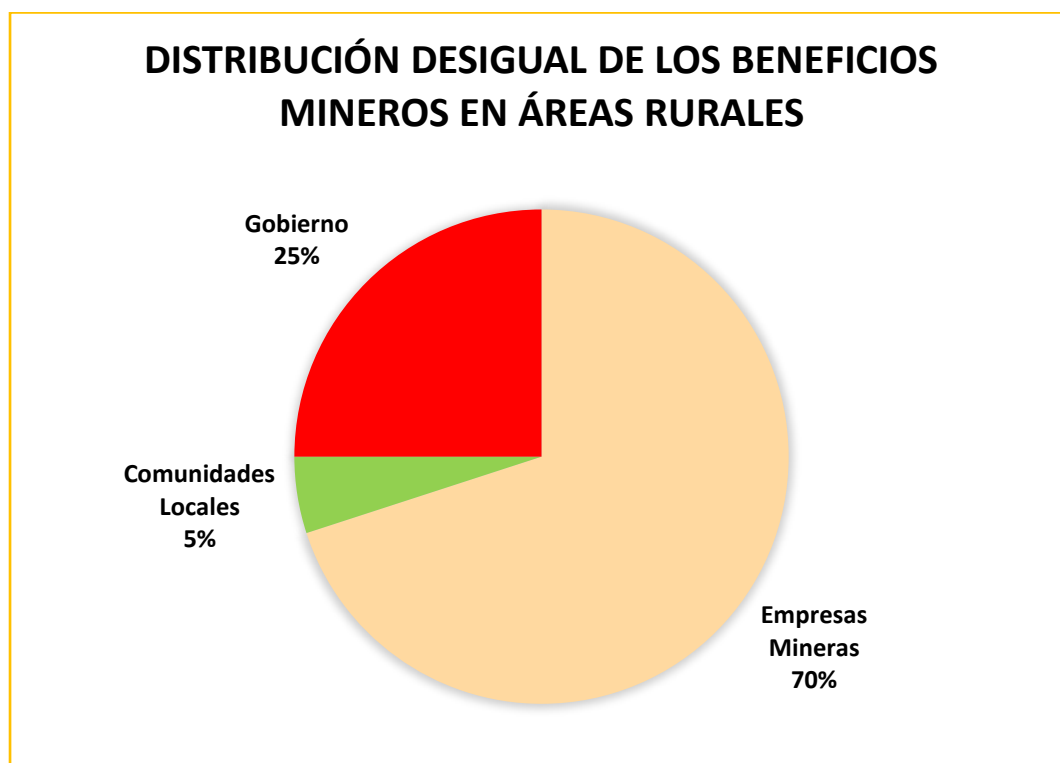
En el caso peruano, estas dinámicas se ven agravadas por la debilidad institucional de mecanismos participativos como la consulta previa. A pesar de su reconocimiento normativo, su implementación limitada y su escasa capacidad para incidir en decisiones estratégicas han convertido este instrumento en un procedimiento mayormente formal, sin efectos sustantivos en la redistribución del poder decisorio (Defensoría del Pueblo, 2019). Como resultado, los conflictos socioambientales en Cajamarca reflejan la fragilidad del Estado para garantizar una

gobernanza inclusiva de los recursos naturales y una distribución equitativa de los beneficios del extractivismo.

La Figura 9 ilustra esta asimetría estructural al mostrar la concentración de beneficios en manos de las empresas (70 %) y del Estado (25 %), frente a la participación marginal de las comunidades locales (5 %) (Bebbington, 2012). Esta distribución desigual no solo limita el desarrollo territorial, sino que reproduce un círculo persistente de pobreza y exclusión, en el cual las poblaciones afectadas asumen los costos socioambientales de la minería sin acceder de manera justa a sus beneficios. De este modo, la desigualdad distributiva y la exclusión política se consolidan como factores explicativos centrales de la conflictividad socioambiental en contextos mineros como Cajamarca.

Figura 9

Distribución desigual de los beneficios mineros en áreas rurales



Nota. Adaptación basada en Bebbington (2012).

Desplazamientos y Pérdida de Medios de Subsistencia

Uno de los efectos más severos de la expansión minera en áreas rurales es el desplazamiento forzado o inducido de comunidades, proceso que trasciende la simple relocalización física y se traduce en la pérdida de activos fundamentales para la reproducción social y económica de los hogares. El despojo de tierras agrícolas, pastizales y fuentes de agua implica la ruptura de sistemas productivos tradicionales basados en la agricultura familiar, la ganadería y el uso comunal de los recursos naturales, pilares centrales del sustento rural (Bury, 2005; De Echave, 2009).

Más allá del impacto económico inmediato, los desplazamientos asociados a proyectos extractivos constituyen un proceso de desposesión territorial que tiende a transformar la pobreza en una condición estructural y persistente. Al perder el control sobre su territorio, las familias rurales ven restringida su autonomía productiva y quedan progresivamente subordinadas a empleos precarios, temporales o informales, muchas veces vinculados al propio sector extractivo. Este tránsito desde economías de subsistencia relativamente autónomas hacia formas de dependencia laboral inestable refuerza la vulnerabilidad social y amplía las brechas de desigualdad frente a los sectores urbanos y a las élites locales (Arellano-Yanguas, 2011; Li, 2015).

Desde una perspectiva socio-política, el desplazamiento no solo empobrece materialmente, sino que erosiona redes comunitarias, prácticas culturales y formas de organización colectiva, debilitando los mecanismos de cohesión social y de gestión comunal del territorio. En este sentido, la pérdida de medios de subsistencia se acompaña de una fragmentación social que limita la capacidad de las comunidades para enfrentar los impactos del extractivismo y negociar en condiciones de mayor simetría con el Estado y las empresas.

En el caso de Cajamarca, las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Conga denunciaron de manera reiterada la reducción de sus fuentes hídricas y la pérdida de tierras de

cultivo, elementos esenciales para su autosustento. Estas afectaciones comprometieron la seguridad alimentaria y la continuidad de los modos de vida campesinos, generando un escenario de alta incertidumbre económica y social. Frente a esta amenaza, las comunidades articularon movilizaciones masivas que visibilizaron el conflicto no solo como una disputa ambiental, sino como una lucha por el derecho a permanecer en el territorio y a reproducir formas de vida rurales históricamente construidas (Bebbington & Bury, 2013; Defensoría del Pueblo, 2012).

La Tabla 16 sintetiza estos procesos al mostrar cómo los impactos del desplazamiento se expresan de manera multidimensional: reubicación forzada de comunidades, pérdida de acceso a tierras productivas, afectación de fuentes de agua y fragmentación del tejido social. Estos factores no operan de forma aislada, sino que se entrelazan en un círculo vicioso, en el cual la pérdida de medios de vida profundiza la pobreza estructural y, al mismo tiempo, incrementa la propensión a la conflictividad socioambiental (Bury, 2005). De este modo, el desplazamiento emerge como un mecanismo clave mediante el cual la minería intensifica las privaciones y transforma el conflicto en una respuesta social frente a la amenaza de desposesión territorial.

Tabla 16

Desplazamiento y pérdida de recursos en las áreas rurales afectadas

Impacto Ambiental	Descripción
Desplazamiento físico	Reubicación forzada de comunidades por expansión minera
Pérdida de acceso a tierras	Reducción de la tierra disponible para agricultura y pastoreo
Contaminación de fuentes de agua	Afectación de ríos y lagunas, afectando la agricultura y el consumo
Fragmentación social	Ruptura de redes comunitarias y cohesión social

Nota. Adaptado de Bury (2005).

Conflictos Socioambientales y la Perpetuación de la Pobreza

Los conflictos socioambientales asociados a la actividad minera no solo constituyen una manifestación de desigualdades preexistentes, sino que operan también como mecanismos que reproducen y profundizan la pobreza en las comunidades rurales. La ausencia de procesos de consulta efectivos, sumada a la percepción de una distribución injusta de los beneficios derivados de la minería, refuerza sentimientos de exclusión, despojo y deslegitimación institucional, debilitando la cohesión social y las capacidades locales de gestión del territorio (De Echave, 2009; Bebbington & Bury, 2013).

Desde una perspectiva estructural, la conflictividad genera efectos sociales acumulativos que trascienden el momento de la protesta. Entre ellos destacan la fragmentación comunitaria, la criminalización de la organización social, la judicialización de líderes locales y la erosión sostenida de la confianza en las instituciones estatales. En lugar de promover espacios de diálogo y concertación orientados al desarrollo territorial, la respuesta estatal tiende a priorizar mecanismos de control y seguridad, desplazando recursos y atención pública hacia la contención del conflicto. Este enfoque no solo limita la participación comunitaria en políticas públicas inclusivas, sino que contribuye a deteriorar aún más las condiciones de vida en territorios ya marcados por la pobreza estructural (Acuña, 2015; Defensoría del Pueblo, 2019). La evidencia comparada en América Latina confirma que este patrón no es exclusivo del Perú. En países como Bolivia, Ecuador y Chile, los conflictos socioambientales vinculados a proyectos extractivos han tenido efectos similares al debilitar instituciones locales, frenar procesos de inversión social y reproducir desigualdades territoriales persistentes. Svampa (2019) y Gudynas (2015) sostienen que esta dinámica responde a una lógica estructural del extractivismo contemporáneo, en la cual la conflictividad no constituye una anomalía, sino una consecuencia recurrente de modelos de desarrollo basados en la explotación intensiva de recursos naturales.

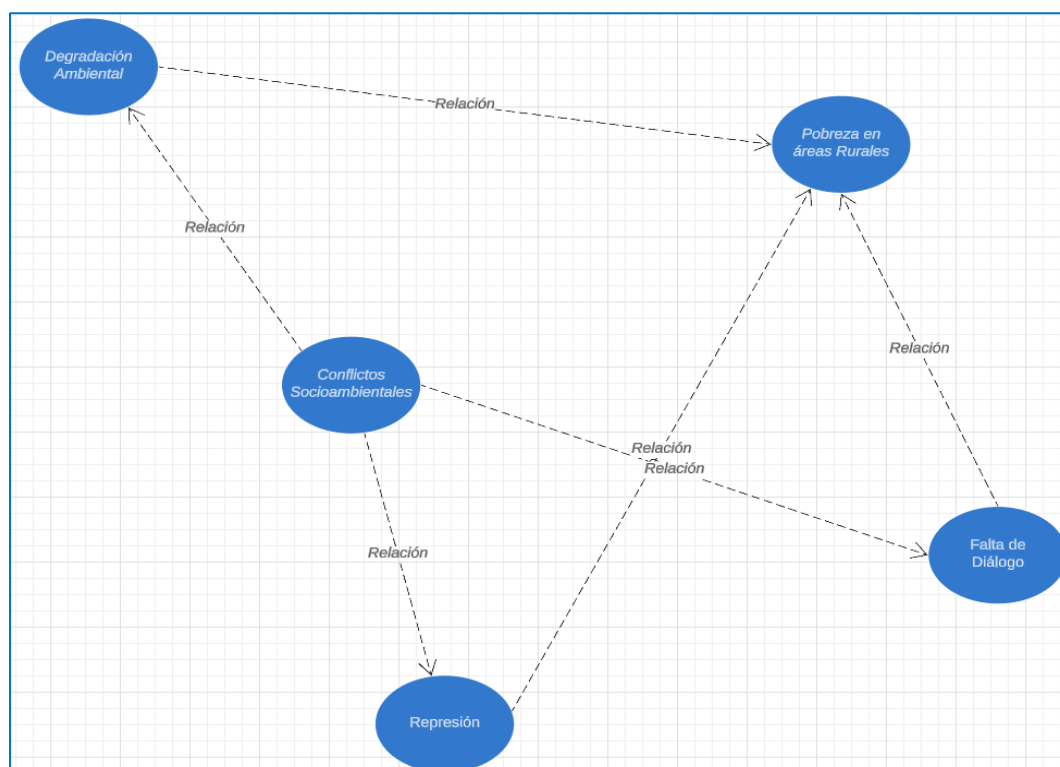
En Cajamarca, el caso del Proyecto Minero Conga ilustra con claridad cómo los conflictos socioambientales pueden convertirse en factores catalizadores de pobreza. La prolongación del conflicto generó estados de emergencia, paralización de actividades productivas, estigmatización de las organizaciones comunales y desincentivos a la inversión social sostenible. Estas condiciones afectaron de manera directa a las economías campesinas, profundizando la inseguridad económica y restringiendo las oportunidades de desarrollo local. Así, la protesta no solo expresó la defensa del agua y del territorio, sino también una resistencia frente a un modelo de desarrollo percibido como excluyente y destructor de los medios de vida rurales (Bebbington, 2012; Li, 2015).

La Figura 10 representa de manera esquemática este círculo vicioso entre conflictividad socioambiental y pobreza. En dicho esquema, la degradación ambiental, la falta de diálogo institucional y la represión estatal actúan como factores interrelacionados que intensifican simultáneamente la vulnerabilidad social y la conflictividad territorial. Este proceso de retroalimentación negativa evidencia que los conflictos no solo emergen de la pobreza, sino que contribuyen activamente a su reproducción, consolidando escenarios de exclusión persistente en territorios extractivos (Merino Acuña, 2015).

En conjunto, este análisis refuerza la hipótesis central de la investigación al demostrar que la conflictividad socioambiental en Cajamarca no fue un fenómeno coyuntural ni meramente reactivo, sino un proceso estructural que, al interactuar con la pobreza multidimensional y la debilidad institucional, contribuyó a perpetuar condiciones de desigualdad y exclusión social durante el periodo 2011–2022.

Figura 10

Conflictos ambientales que contribuyen al incremento de la pobreza



Nota. Adaptación basada en (Merino Acuña, 2015).

2.3.2. Pobreza Multidimensional y los Impactos de la Minería

La minería, como actividad económica de alcance global, ha sido objeto de amplios debates en torno a sus efectos sobre la pobreza y el desarrollo. En regiones de África y América Latina, la evidencia empírica muestra que, si bien la extracción de recursos naturales puede generar ingresos fiscales y crecimiento macroeconómico, dichos beneficios tienden a concentrarse en élites políticas y empresariales, mientras que las comunidades locales asumen de manera desproporcionada los costos ambientales y sociales (Hilson, 2002; Gudynas, 2015). Este patrón configura una paradoja extractiva: la minería, promovida como herramienta de reducción de la pobreza, termina reconfigurándola y reproduciéndola en formas multidimensionales.

Desde el enfoque de pobreza multidimensional, esta paradoja se explica porque los impactos de la minería no se limitan al ámbito del ingreso. La alteración de recursos críticos como el agua, la tierra y los ecosistemas afecta simultáneamente dimensiones esenciales del bienestar

humano: salud, seguridad alimentaria, educación, vivienda y cohesión social (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). En este sentido, aun cuando algunos hogares experimentan mejoras monetarias temporales, las privaciones no monetarias pueden intensificarse, comprometiendo el desarrollo humano y la sostenibilidad de los medios de vida rurales.

En el caso peruano, informes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales confirman que la riqueza minera no se ha traducido de manera uniforme en mejoras sostenidas en salud, educación ni acceso a agua potable. Regiones con alta intensidad extractiva, como Cajamarca y Apurímac, continúan registrando brechas estructurales en servicios básicos, pobreza persistente y elevados niveles de conflictividad social (Defensoría del Pueblo, 2019; CEPAL, 2020). Esta situación evidencia que los ingresos generados por la minería resultan insuficientes para compensar la pérdida de bienes comunes, la degradación ambiental y la ruptura de economías locales basadas en la agricultura y el pastoreo.

En Cajamarca, y particularmente en el caso del Proyecto Minero Conga, estas tensiones se manifestaron de manera emblemática. La posible desaparición de lagunas altoandinas fue percibida no solo como un impacto ambiental, sino como una amenaza directa a la reproducción social de las comunidades rurales, al comprometer el acceso al agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. En este contexto, las protestas sociales no constituyeron únicamente un rechazo técnico al proyecto minero, sino una demanda más amplia de reconocimiento, justicia ambiental y derechos ciudadanos frente a un modelo de desarrollo percibido como excluyente (Arellano-Yanguas, 2011; Bebbington, 2012).

La Figura 11 sintetiza este enfoque al mostrar cómo la pobreza multidimensional integra privaciones simultáneas en ingresos, salud, educación, condiciones de vida, sostenibilidad ambiental y seguridad social, las cuales se ven agravadas en contextos extractivos. Este modelo conceptual permite comprender que la minería no solo incide en indicadores económicos, sino

que afecta las bases materiales y simbólicas de la vida comunitaria, reforzando dinámicas de exclusión social y conflictividad socioambiental (Alkire & Foster, 2011).

En conjunto, este análisis refuerza la hipótesis de la investigación al evidenciar que, en Cajamarca, la minería no operó como un factor de reducción sostenible de la pobreza, sino como un intensificador de privaciones multidimensionales, cuya interacción con la debilidad institucional y la desigual distribución de beneficios contribuyó a la persistencia de la conflictividad socioambiental durante el periodo 2011–2022.

Figura 11

Mapa conceptual de las dimensiones de la Pobreza Multidimensional



Nota. Elaboración propia basada en Alkire y Foster (2011).

En síntesis, la evidencia revisada confirma que los impactos de la minería sobre la pobreza no pueden comprenderse desde una lógica exclusivamente monetaria, sino que requieren un análisis multidimensional y territorial. A escala global, se identifican patrones recurrentes de desigualdad, desposesión y concentración de beneficios asociados a los modelos extractivos; a nivel nacional, estas dinámicas se ven amplificadas por la debilidad institucional, la limitada

capacidad regulatoria del Estado y la escasa redistribución efectiva de la renta minera; y en el ámbito local, como en Cajamarca, se materializan en procesos concretos de exclusión social, conflictividad socioambiental y reproducción de la pobreza rural. Esta trayectoria multiescalar evidencia que la minería opera como un factor que reconfigura y profundiza privaciones estructurales, antes que como un mecanismo automático de desarrollo. En consecuencia, se reafirma la necesidad de abordar la problemática desde un marco teórico integrador que articule la economía política del extractivismo, la justicia ambiental y la gobernanza comunitaria, permitiendo comprender de manera más completa la relación entre pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental en contextos mineros.

Minería y su Relación con la Pobreza

La relación entre minería y pobreza en contextos rurales es ambivalente y contradictoria. Por un lado, la actividad minera es presentada por el Estado y las empresas como un motor de desarrollo, capaz de generar ingresos fiscales, empleo e inversión en infraestructura. Sin embargo, una amplia literatura crítica demuestra que estas promesas no siempre se traducen en mejoras sostenibles del bienestar local, dando lugar a una brecha persistente entre crecimiento económico y desarrollo social efectivo (Bebbington, 2012; Arellano-Yanguas, 2011).

Desde el punto de vista económico, las regiones mineras suelen exhibir incrementos en indicadores macroeconómicos como el producto interno bruto y la recaudación fiscal. No obstante, estos avances contrastan con la persistencia de elevados niveles de pobreza, desigualdad territorial y precariedad en las zonas de influencia directa de los proyectos extractivos. Ello se explica, en gran medida, por la concentración de la renta minera en el Estado central y en empresas privadas, mientras que los costos ambientales, sociales y territoriales se distribuyen de manera desproporcionada sobre las comunidades locales (Svampa, 2019; CEPAL, 2020).

En el plano social, la minería tiende a debilitar los medios de subsistencia tradicionales al desplazar actividades como la agricultura y la ganadería. La pérdida de tierras fértiles, la contaminación o alteración de fuentes de agua y la competencia por el uso del territorio transforman la pobreza en una condición multidimensional y crónica, que no se limita a la insuficiencia de ingresos, sino que incorpora privaciones simultáneas en salud, educación, acceso a servicios básicos y seguridad alimentaria (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011).

En Cajamarca, el caso del Proyecto Minero Conga evidenció con claridad estas tensiones. La posible desaparición de lagunas altoandinas fue percibida por las comunidades no solo como un impacto ambiental, sino como una amenaza directa a la reproducción de la vida campesina. En este contexto, la defensa del agua trascendió la esfera ecológica para convertirse en una lucha por la dignidad, la justicia social y el derecho a decidir sobre el territorio. Este caso demuestra que la relación entre minería y pobreza no puede reducirse a una ecuación económica de costos y beneficios, sino que está profundamente vinculada a disputas por reconocimiento cultural, legitimidad política y control territorial (Bebbington & Bury, 2013; Li, 2015).

Dimensiones Afectadas por la Minería: Educación y Salud

Los impactos de la minería en las comunidades rurales trascienden las dimensiones económica y ambiental, afectando de manera directa ámbitos sociales fundamentales como la educación y la salud. Estas afectaciones configuran un entramado de privaciones simultáneas que refuerzan la pobreza multidimensional y dificultan la construcción de trayectorias sostenibles de desarrollo humano (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011).

En el ámbito educativo, la expansión de actividades mineras suele interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a desplazamientos forzados de familias y comunidades. La reubicación territorial genera deserción escolar, discontinuidad educativa y deterioro de la infraestructura escolar en las zonas afectadas, especialmente en contextos rurales donde la

oferta educativa ya es limitada (Urkidi, 2011; Arellano-Yanguas, 2011). Asimismo, la expectativa de ingresos inmediatos asociados a empleos temporales en el sector extractivo incentiva la salida temprana de jóvenes del sistema educativo, reduciendo la acumulación de capital humano y profundizando brechas intergeneracionales de desigualdad.

En relación con la salud, múltiples estudios han documentado la asociación entre actividades mineras y la exposición a contaminantes ambientales, como metales pesados y drenaje ácido, vinculados al incremento de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias en poblaciones cercanas a zonas de explotación (Bury, 2005; Defensoría del Pueblo, 2019). Estas afectaciones se agravan por la escasa cobertura y baja capacidad resolutive de los servicios de salud en áreas rurales, convirtiendo afecciones prevenibles o tratables en problemas crónicos que refuerzan la vulnerabilidad social y económica de los hogares.

El caso de Cajamarca evidencia con claridad estas dinámicas. Durante el conflicto asociado al Proyecto Minero Conga, se reportaron no solo impactos materiales, sino también efectos significativos sobre la salud mental de la población, derivados de la prolongada incertidumbre, la polarización social y la criminalización de la protesta (Li, 2015; Bebbington & Bury, 2013). De manera paralela, los desplazamientos y la inestabilidad territorial afectaron el acceso regular a la educación de niños, niñas y adolescentes, confirmando que los impactos de la minería sobre estas dimensiones son acumulativos y de largo plazo.

La evidencia internacional respalda que estos efectos no son exclusivos del contexto peruano. En diversos países se observan patrones similares: en Sudáfrica, la exposición al polvo minero ha sido asociada con problemas respiratorios y con déficits en la inversión educativa; en Ghana, la contaminación de fuentes hídricas por actividades extractivas compromete la salud comunitaria y la migración inducida por la minería genera escasez de docentes en zonas rurales (Wright & Arbuthnott, 2010). Estos casos confirman que la minería puede intensificar

privaciones sociales clave cuando no existe una gobernanza efectiva orientada a la protección del bienestar humano.

Los hallazgos sintetizados en la Tabla 17 evidencian un patrón común en distintos contextos: incremento de enfermedades asociadas a la contaminación ambiental y afectaciones persistentes en el acceso y la calidad educativa debido a desplazamientos, migración y débil inversión social. En conjunto, esta evidencia refuerza la hipótesis de la investigación al demostrar que la minería, en ausencia de una gestión inclusiva y sostenible, no solo reproduce la pobreza existente, sino que amplía las privaciones multidimensionales en educación y salud, alimentando la conflictividad socioambiental en territorios rurales como Cajamarca.

Tabla 17

Impacto de la minería sobre la salud y educación en diferentes países

País	Impactos en la Salud	Impactos en la Educación
Perú	Enfermedades respiratorias y gastrointestinales	Desplazamientos interrumpen la asistencia escolar
Sudáfrica	Exposición al polvo de las minas afecta la salud	Falta de inversión en infraestructura educativa
Ghana	Contaminación del agua por químicos mineros	Escasez de maestros debido a la migración

Nota. Adaptado de Wright & Arbuthnott (2010).

Estos hallazgos comparativos refuerzan la tesis de que la minería ejerce impactos estructurales sobre dimensiones sociales clave, reproduciendo ciclos de vulnerabilidad que afectan de manera simultánea a la salud y a la educación. Más allá de las particularidades nacionales, emerge un patrón común en contextos extractivos: la generación de ganancias macroeconómicas no se traduce en mejoras sostenibles del bienestar local, sino que convive con la persistencia e incluso profundización de privaciones sociales. En este sentido, la actividad minera tiende a reproducir formas de pobreza multidimensional, al debilitar servicios básicos, erosionar medios de vida y limitar el desarrollo humano de las comunidades directamente afectadas (Bebbington, 2012; Gudynas, 2015; Svampa, 2019).

Impactos Económicos: Empleo y Desigualdad

Uno de los principales argumentos que legitiman la expansión de la minería es su supuesta capacidad para generar empleo y dinamizar las economías locales. No obstante, la evidencia empírica muestra que los puestos de trabajo creados suelen ser limitados, temporales y altamente especializados, lo que reduce su impacto real sobre el empleo rural y los convierte en una alternativa poco sostenible frente a la pérdida de actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería (Arellano-Yanguas, 2011; Bebbington, 2012). En contextos rurales, esta dinámica introduce un patrón laboral volátil que incrementa la dependencia del sector extractivo sin diversificar la estructura productiva local.

Si bien la minería contribuye al crecimiento del producto interno bruto y al aumento de la recaudación fiscal, estos beneficios macroeconómicos no se han traducido en una reducción equitativa de la pobreza ni en mejoras sostenidas del bienestar local. Por el contrario, persisten profundas desigualdades salariales y territoriales que reflejan la concentración de los beneficios en el Estado central y en las empresas extractivas, mientras las comunidades aledañas experimentan impactos ambientales y sociales desproporcionados. La CEPAL (2020) advierte que esta dependencia de sectores extractivos expone a las economías regionales a la volatilidad de los precios internacionales, reforzando ciclos recurrentes de bonanza y crisis que profundizan la vulnerabilidad social.

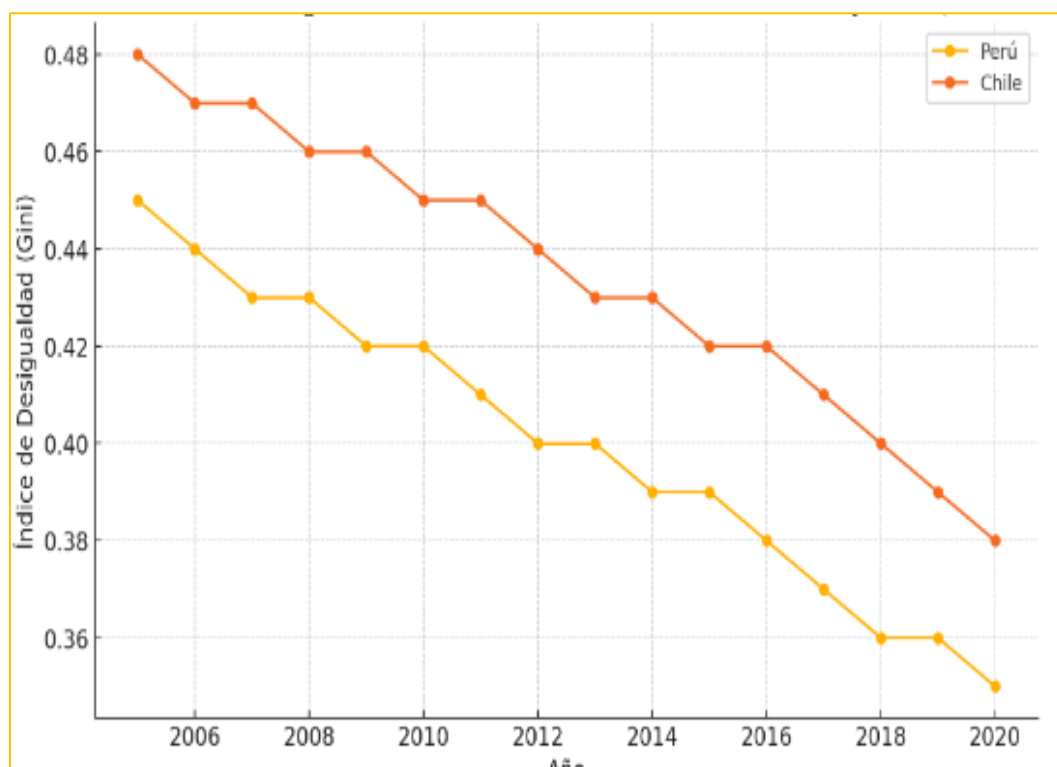
La distribución desigual de la renta minera constituye, en este sentido, un factor crítico. Como señalan Bebbington y Humphreys Bebbington (2011), la minería tiende a concentrar los beneficios económicos en actores estatales y corporativos, dejando a las poblaciones locales con retornos marginales. Esta asimetría refuerza procesos de exclusión social y alimenta percepciones persistentes de injusticia distributiva que, en contextos de pobreza estructural, se transforman en detonantes de conflictividad socioambiental.

En el caso peruano, y particularmente en Cajamarca, el ciclo de expansión minera no logró revertir de manera sostenible los altos niveles de pobreza. Por el contrario, consolidó un escenario de dependencia extractiva, donde la pérdida de medios de subsistencia tradicionales y los impactos ambientales coexistieron con empleos inestables y una distribución desigual del canon y las regalías. Esta combinación limitó la capacidad del crecimiento minero para generar desarrollo territorial inclusivo.

La Figura 12 ilustra la evolución del índice de desigualdad (Gini) en Perú y Chile entre 2005 y 2020. Aunque ambos países registraron una reducción gradual de la desigualdad, los datos muestran que estos avances no fueron suficientes para modificar las condiciones estructurales de exclusión en las regiones mineras. En el caso peruano, parte de la disminución del Gini se explica por programas de transferencias y políticas sociales; sin embargo, en territorios como Cajamarca persistieron brechas profundas en acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. Esta evidencia confirma que la reducción agregada de la desigualdad no implica necesariamente mejoras territoriales equitativas, reforzando la hipótesis de que la minería, sin una gobernanza redistributiva efectiva, tiende a reproducir desigualdades y a alimentar la conflictividad socioambiental.

Figura 12

Tendencias en la desigualdad económica en áreas mineras



Nota. Adaptado de CEPAL (2020).

En Chile, si bien la reducción de la desigualdad fue más pronunciada que en el caso peruano, el modelo extractivo mantuvo una elevada concentración de la riqueza en sectores estrechamente vinculados a la minería del cobre. Esta estructura limitó el impacto redistributivo del crecimiento económico a escala territorial, reproduciendo brechas persistentes entre regiones mineras y el promedio nacional. Tal como señalan Gudynas (2015) y Svampa (2019), la expansión extractiva en ambos países generó dinamismo macroeconómico, pero sin mecanismos efectivos de redistribución social y territorial, lo que restringió su capacidad de traducirse en bienestar inclusivo para las comunidades locales.

En consecuencia, tanto en Perú como en Chile, la minería contribuyó al crecimiento económico agregado, pero sus beneficios no se distribuyeron de manera equitativa ni sostenible. La persistencia de desigualdades territoriales y la exclusión de las poblaciones directamente

afectadas por la actividad extractiva evidencian que el crecimiento minero no garantiza, por sí mismo, cohesión social ni reducción estructural de la pobreza.

En síntesis, los resultados confirman que la minería no opera como un motor automático de desarrollo ni como una herramienta suficiente para la superación de la pobreza. Por el contrario, la evidencia empírica muestra que puede coexistir con desigualdades persistentes, exclusión social y conflictividad socioambiental, lo que cuestiona la narrativa estatal que presenta a la minería como vía prioritaria y neutral para el bienestar social. Este hallazgo refuerza la hipótesis de la investigación: sin una gobernanza redistributiva efectiva y sin políticas territoriales inclusivas, la actividad minera tiende a reproducir las condiciones estructurales que alimentan la pobreza y la conflictividad en regiones como Cajamarca.

Impactos Ambientales y Sostenibilidad

La minería a gran escala genera impactos ambientales de gran magnitud que trascienden el ámbito local y comprometen la sostenibilidad de los ecosistemas. Entre los efectos más recurrentes se encuentran la contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de biodiversidad y la transformación irreversible del paisaje. Estos impactos no solo degradan el medio natural, sino que reducen la resiliencia de las comunidades rurales, cuya subsistencia depende estrechamente del agua, la tierra y los ecosistemas altoandinos (Bridge, 2004; Bebbington, 2012).

Un aspecto crítico es el uso intensivo y competitivo del recurso hídrico en los procesos extractivos. En contextos andinos como Cajamarca, donde la disponibilidad de agua está asociada a lagunas, bofedales y acuíferos de alta fragilidad ecológica, la minería entra en competencia directa con la agricultura y el consumo humano. Diversos estudios documentan que esta presión sobre el agua constituye uno de los principales detonantes de los conflictos socioambientales, al amenazar bienes comunes esenciales para la reproducción de la vida campesina (De Echave, 2009; Svampa, 2019).

La contaminación por metales pesados y el drenaje ácido de minas representan otra dimensión crítica del impacto ambiental. En Cajamarca se han registrado afectaciones a ríos y lagunas altoandinas que han restringido el acceso de comunidades rurales a agua de calidad, incrementando la incidencia de enfermedades, debilitando la seguridad alimentaria y afectando la productividad agrícola (Bebbington & Bury, 2013; Defensoría del Pueblo, 2019). Estos impactos no son coyunturales, ya que pueden persistir durante décadas incluso después del cierre de las operaciones mineras, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la responsabilidad ambiental, la reparación de daños y la sostenibilidad intergeneracional.

Desde una perspectiva global, la minería a gran escala tensiona los principios del desarrollo sostenible, dado que sus beneficios económicos suelen concentrarse en el corto plazo, mientras que los costos ecológicos y sociales son prolongados y, en muchos casos, irreversibles. Gudynas (2015) caracteriza este modelo extractivo como un desarrollo de enclave, en el cual la explotación intensiva de recursos naturales se realiza sin una adecuada internalización de los costos ambientales ni una distribución equitativa de los beneficios, comprometiendo la justicia ambiental y territorial.

En el caso de Cajamarca, el conflicto en torno al Proyecto Minero Conga evidenció con claridad esta problemática. La defensa del agua se convirtió en el eje central de la resistencia social, y las lagunas altoandinas fueron resignificadas no solo por su valor ecosistémico, sino también como símbolos de identidad, seguridad hídrica y supervivencia comunitaria. Esta resignificación fortaleció la articulación entre sostenibilidad ambiental y legitimidad social, transformando el conflicto en una disputa estructural por el territorio y los bienes comunes.

La evidencia empírica demuestra que los impactos ambientales de la minería tienen consecuencias directas sobre la seguridad hídrica y alimentaria de las comunidades rurales. La Tabla 18 muestra cómo estos impactos trascienden la dimensión ambiental y afectan directamente la agricultura y los medios de vida campesinos. La contaminación del agua limita

el acceso al consumo humano y reduce su disponibilidad para actividades productivas; la deforestación asociada a la expansión minera disminuye la biodiversidad y altera los sistemas tradicionales de subsistencia; y la contaminación del suelo reduce el rendimiento agrícola y la calidad de los cultivos (OIT, 2018).

En conjunto, estos efectos evidencian que la actividad minera no solo genera degradación ambiental, sino que reproduce privaciones estructurales que restringen el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y profundizan la vulnerabilidad socioambiental en territorios como Cajamarca. Este hallazgo refuerza la hipótesis de la investigación al mostrar que los impactos ambientales de la minería se articulan con la pobreza multidimensional y la débil gobernanza institucional, configurando un escenario propicio para la conflictividad socioambiental persistente.

Tabla 18

Principales impactos de la minería en la agricultura y recursos hídricos

Impacto Ambiental	Consecuencia Social
Contaminación del agua	Perdida de acceso a agua potable y afectaciones agrícolas
Deforestación	Pérdida de biodiversidad y medios de vida agrícolas
Contaminación del suelo	Reducción de la productividad agrícola

Nota. Adaptado de OIT (2018), con elaboración propia.

Estos efectos ponen de relieve que la sostenibilidad de los territorios mineros no puede evaluarse exclusivamente a partir de indicadores económicos, sino que exige considerar la interdependencia entre ecosistemas, medios de vida rurales y cohesión social. Al comprometer recursos estratégicos como el agua y la tierra agrícola, la actividad minera ejerce una doble presión: incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades locales y, simultáneamente, profundiza los conflictos socioambientales vinculados al acceso, uso y control de los bienes comunes (Gudynas, 2015; Svampa, 2019).

2.4. Términos Básicos

1. **Actores clave (stakeholders):** grupos con interés legítimo o poder de decisión sobre el territorio y los recursos; su mapeo ordena la participación y reduce asimetrías (*UNECE, 2021*).
2. **Agua segura (servicio gestionado de forma segura):** agua de fuente mejorada, disponible en el hogar cuando se necesita y libre de contaminación prioritaria (*WHO/UNICEF JMP, 2023*).
3. **Canon minero:** participación de gobiernos subnacionales sobre el Impuesto a la Renta pagado por empresas mineras, destinada a inversión pública (*MEF, 2025*).
4. **Capacidad institucional:** aptitudes, recursos y procesos del sector público para planificar, ejecutar y rendir cuentas de políticas y servicios (*OECD, 2023*).
5. **Cohesión social:** densidad de vínculos, pertenencia y confianza que sostienen cooperación y resolución pacífica de conflictos (*CEPAL, 2021*).
6. **Conflicto socioambiental:** disputa sostenida por acceso, control o impactos de recursos naturales entre comunidades, Estado y/o empresas (*Defensoría del Pueblo, 2025*).
7. **Consulta previa:** procedimiento de diálogo con pueblos indígenas u originarios para acordar medidas susceptibles de afectarlos; los acuerdos son obligatorios (Ministerio de Cultura, 2022).
8. **Correlación de Spearman (ρ):** coeficiente no paramétrico basado en rangos que estima fuerza y dirección de una relación monótona entre variables (*IBM, 2024*).
9. **Ejecución presupuestal:** proporción del PIM efectivamente devengado en el año fiscal; indicador de desempeño público (*MEF, 2025*).

- 10. Gobernanza del agua:** reglas, actores y mecanismos que orientan políticas hídricas con criterios de efectividad, eficiencia y confianza pública (*OECD, 2021*).
- 11. Huella hídrica:** volumen de agua azul, verde y gris asociado a un producto, proceso u organización, como medida de presión sobre el recurso (*Water Footprint Network, 2024*).
- 12. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM):** medición de privaciones concurrentes en salud, educación y condiciones de vida con enfoque de recuento dual (*UNDP & OPHI, 2024*).
- 13. Justicia ambiental:** marco que promueve equidad en cargas/beneficios ambientales y participación significativa en decisiones (*OECD, 2024*).
- 14. Kriging (geoestadística):** interpolador óptimo lineal que estima valores espaciales a partir de un variograma y covarianzas, minimizando el error (*Esri, 2024*).
- 15. Licencia social para operar:** aceptación dinámica e informal de un proyecto por parte de las comunidades afectadas, basada en confianza y legitimidad (*BID, 2021*).
- 16. Monitoreo ambiental participativo:** vigilancia colaborativa entre comunidad, autoridad y empresa de parámetros críticos, especialmente calidad de agua (*OEFA, 2022*).
- 17. Nexo agua, energía, alimentos, ecosistemas (WEF-E):** enfoque de gestión integrada que equilibra demandas hídricas, energéticas y alimentarias considerando sinergias y compensaciones (*UNECE/FAO, 2025*).
- 18. Ordenamiento territorial:** proceso político-técnico que orienta usos del suelo y del territorio para el desarrollo sostenible y la prevención de conflictos (*PCM, 2024*).
- 19. Pobreza monetaria:** situación de hogares cuyo gasto per cápita está por debajo de la línea oficial de pobreza (*INEI, 2025*).

- 20. Riesgo de desastre/socioambiental:** probabilidad de pérdidas producto de la interacción entre peligro, exposición y vulnerabilidad (*UNDRR, 2024*).
- 21. Seguridad hídrica:** garantía sostenible y equitativa del agua necesaria para bienestar humano, desarrollo económico y ecosistemas, reduciendo riesgos asociados (*UN-Water/WWDR, 2024*).
- 22. Transparencia presupuestal:** disponibilidad pública, oportuna y comprensible de información fiscal y de ejecución del gasto para control social (*MEF, 2025*).
- 23. Unidad de análisis:** entidad principal sobre la que se construyen inferencias (p. ej., provincia, distrito o comunidad) (*ATLAS. Ti Research Hub, 2025*).
- 24. Vulnerabilidad:** condiciones que aumentan la susceptibilidad de personas o sistemas frente a peligros, en función de sensibilidad y capacidad de respuesta (*UNDRR, 2024*).
- 25. Zonificación Ecológica y Económica (ZEE):** proceso técnico-participativo que identifica potencialidades y limitaciones del territorio para orientar usos sostenibles e insumos del ordenamiento (*MINAM, 2023*).

CAPÍTULO III

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis de la Investigación

3.1.1. *Hipótesis General*

- Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la pobreza multidimensional y la conflictividad socioambiental en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el período 2011–2022, relación que se ve mediada por las condiciones de gobernanza hídrica y participación social en el territorio.

3.1.2. *Hipótesis Específicas*

- a. Durante el período 2011–2022, existe una persistencia de pobreza multidimensional en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, con variaciones significativas según el contexto territorial.
- b. Los conflictos socioambientales registrados en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga se asocian predominantemente a actividades mineras y a disputas en torno al acceso y gestión del recurso hídrico.
- c. El nivel de participación de la población en los conflictos socioambientales vinculados al Proyecto Minero Conga presenta diferencias territoriales asociadas al grado de organización social y a la existencia de mecanismos institucionales de diálogo.

3.2. Variables de la Investigación

La investigación considera dos variables principales, definidas en coherencia con el problema de estudio, los objetivos planteados y el diseño metodológico adoptado.

Variable I: Pobreza (Multidimensional con componente monetario)

La pobreza multidimensional constituye la variable independiente de la investigación, en tanto expresa una condición estructural del territorio que incide en las dinámicas sociales, económicas y ambientales de las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga.

Esta variable se manifiesta a través de privaciones simultáneas en dimensiones como educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos y condiciones de vida, incluyendo el componente monetario, las cuales configuran escenarios de vulnerabilidad social que influyen en la emergencia y persistencia de la conflictividad socioambiental.

Variable II: Conflictividad socioambiental

La conflictividad socioambiental se define como la variable dependiente, al manifestarse como una respuesta social y colectiva frente a condiciones estructurales de pobreza y debilidades en la gestión de los recursos naturales, particularmente del agua. Esta variable se expresa mediante la ocurrencia, intensidad y características de los conflictos asociados a la actividad minera en el territorio.

Para efectos del análisis empírico, las variables se operacionalizan de la siguiente manera:

- **V1:** Pobreza (multidimensional)
- **V2:** Conflictividad socioambiental

3.2.1. Operacionalización de las Variables

➤ Variable I: Pobreza (multidimensional con componente monetario)

- *Indicadores cuantitativos:* porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos, tasa de desnutrición crónica infantil, proporción de jóvenes con secundaria incompleta (INEI, ENAHO, ENDES).

- *Indicadores cualitativos:* testimonios y evidencias sobre exclusión social, acceso desigual a programas estatales y percepción de calidad de vida en comunidades rurales.

➤ **Variable II: Conflictividad socioambiental**

- *Indicadores cuantitativos:* número de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2022.
- *Indicadores cualitativos:* percepciones comunitarias sobre impactos de la actividad minera, acceso y distribución del agua, legitimidad de las decisiones públicas y beneficios económicos percibidos.

Tabla 19

Operacionalización de variables: Pobreza y Conflicto Socioambiental

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores
Variable I (Pobreza)	La pobreza es una condición socioeconómica caracterizada por la carencia de ingresos, servicios básicos y oportunidades necesarias para satisfacer las necesidades fundamentales de una vida digna (CEPAL, 2022; INEI, 2023)	La pobreza multidimensional se analiza incorporando la dimensión monetaria como componente complementario, a fin de capturar tanto las privaciones estructurales no monetarias como las limitaciones de ingreso que inciden en las condiciones de vida de la población, conforme a los enfoques oficiales del INEI.	Monetaria	Población en pobreza monetaria Población en pobreza monetaria extrema Sin acceso a agua
			Vivienda	Sin acceso a saneamiento Sin acceso a energía eléctrica Sin servicio de telefonía
			Educación	Jóvenes entre 18 y 25 años con secundaria incompleta Jóvenes de 17-24 años que no han accedido a algún nivel de educación superior
			Salud	Desnutrición crónica Población sin seguro de salud
			Vulnerabilidad y riesgo	Población desempleada
Variable II (Conflicto Socioambiental)	Fenómeno social que surge como resultado de disputas entre actores sociales, comunidades, el Estado y empresas, respecto a la gestión y uso de los recursos naturales y el medio ambiente (Defensoría del Pueblo, 2022; Svampa, 2019)	Número de eventos registrados como enfrentamientos por uso de recursos, identificación de actores involucrados y análisis de impactos ambientales (MINAM, 2021; Defensoría del Pueblo, 2022)	Impacto ambiental	Disputas por el uso y acceso a recursos hídricos Uso de recursos naturales Biodiversidad Emisiones de contaminantes Conflictos mineros
			Gobernanza y participación	Participación ciudadana Transparencia de información Capacidad institucional

Nota. Elaborada a partir de CEPAL (2022), INEI (2023), Defensoría del Pueblo (2022) y Svampa (2019).

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1. Ubicación Geográfica

El Proyecto Minero Conga se emplaza en la región Cajamarca (norte del Perú), en el sector altoandino compartido por las provincias de Celendín y Hualgayoc, con colindancias administrativas con la provincia de Cajamarca. El polígono de estudio se localiza principalmente en los distritos de Sorochuco y Huasmín (provincia de Celendín), y se vincula territorialmente con Chugur (provincia de Hualgayoc–Bambamarca) y La Encañada (provincia de Cajamarca). La altitud característica del área oscila entre 3 800 y 4 100 m s. n. m., sobre divisorias suaves de la Cordillera de los Andes que configuran cabeceras de cuenca, con presencia de cuerpos lagunares altoandinos entre ellos las lagunas El Perol y Azul, así como turberas y bofedales asociados.

Desde el punto de vista físico-geográfico, el área corresponde al ecosistema de jalca o páramo andino, caracterizado por un clima frío de montaña, con precipitaciones concentradas entre los meses de octubre y abril y temperaturas medias anuales bajas. Predominan suelos someros, de drenaje variable, con cobertura vegetal de pajonales. Hidrográficamente, el escurrimiento superficial alimenta subcuencas altoandinas afluentes del río Marañón, por lo que el territorio cumple una función reguladora del recurso hídrico para centros poblados aguas abajo y para usos productivos locales.

En términos de magnitud espacial, el proyecto ocupa una superficie del orden de decenas de kilómetros cuadrados ($\approx 10\,000$ ha, según cartografía técnica), con accesibilidad desde la ciudad de Cajamarca a través de la carretera hacia Celendín y ramales departamentales que conectan con Sorochuco, Huasmín y Bambamarca. Adicionalmente, existen caminos vecinales de penetración que permiten el acceso a los frentes de estudio. La delimitación geográfica fue elaborada sobre la

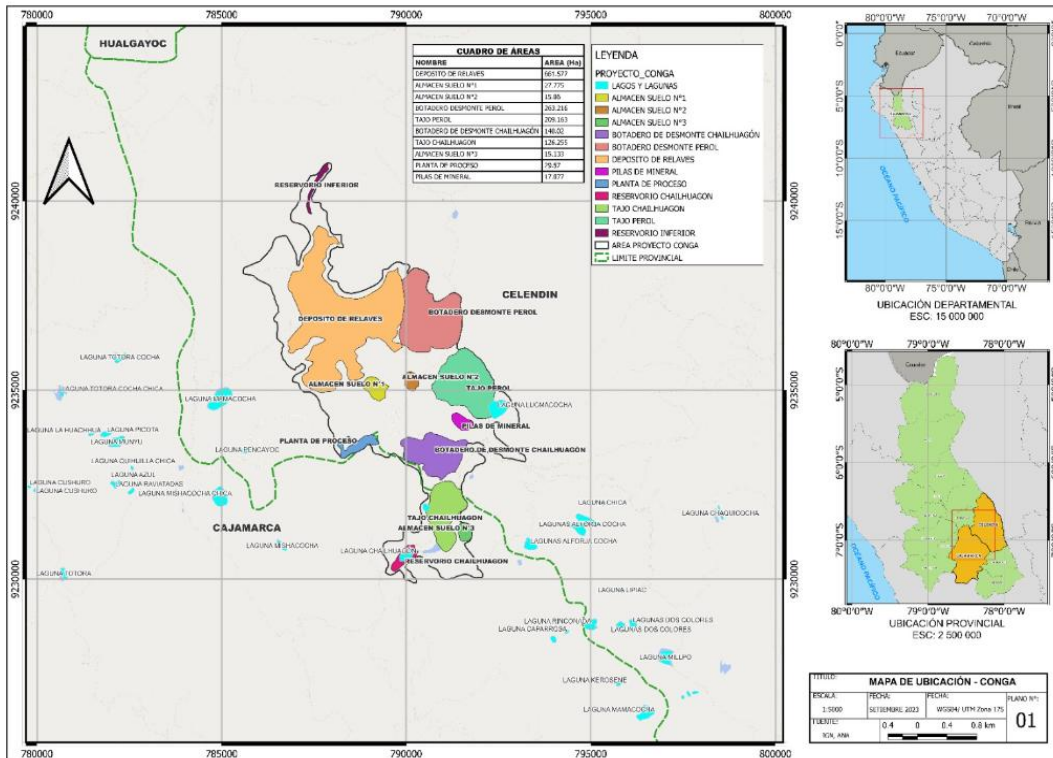
base de cartografía oficial a escalas 1:100 000 y 1:25 000, modelos digitales de elevación y unidades hidrográficas reconocidas por la autoridad competente, garantizando una referencia geodésica única y coherencia con la toponimia local.

Desde una perspectiva metodológica, la ubicación del área de estudio en cabeceras de cuenca y ecosistemas altoandinos introduce condiciones ambientales específicas como estacionalidad de las precipitaciones, bajas temperaturas y fragilidad de los suelos que inciden en las dinámicas socioambientales del territorio. Estas características justifican el énfasis analítico en variables vinculadas a la seguridad hídrica, la continuidad y calidad del servicio de agua, así como en los procesos de gestión territorial asociados al conflicto socioambiental.

La delimitación geográfica se sustentó en información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y GEOCATMIN, hidrografía oficial de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), normales climáticas 1991–2020 del SENAMHI y la tipología ecosistémica definida en el Mapa Nacional de Ecosistemas del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Figura 13

Mapa de ubicación del Proyecto Minero Conga



Nota. Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de Google Earth, con base en información geoespacial referencial (Google LLC, 2024).

4.2. Diseño de la Investigación

La investigación adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el propósito de analizar de manera integral la relación entre la pobreza multidimensional y la conflictividad socioambiental en la provincia de Cajamarca durante el periodo 2011–2022. El diseño fue no experimental, con un alcance correlacional–explicativo y un corte longitudinal ex post facto, lo que permitió examinar los cambios en el tiempo a partir de fuentes secundarias y contrastarlos con percepciones locales recogidas en campo.

El componente cuantitativo se centró en la explotación de bases de datos oficiales (INEI, ENAHO, ENDES, Defensoría del Pueblo), que proporcionaron indicadores socioeconómicos y

registros de conflictividad social. Este enfoque permitió identificar patrones estadísticos y establecer correlaciones entre pobreza y conflictividad.

El componente cualitativo consistió en el análisis documental y la revisión crítica de informes institucionales (Defensoría del Pueblo, CEPAL, PNUD, entre otros), lo que posibilitó contextualizar los hallazgos y contrastarlos con teorías y marcos explicativos sobre pobreza y conflictividad.

La unidad de análisis fue la provincia, mientras que las unidades de observación incluyeron hogares, pobladores y registros documentales administrativos. Esta doble mirada permitió evaluar tanto los cambios macro en los indicadores como las dinámicas micro en las comunidades afectadas.

En suma, el enfoque metodológico aplicado no solo permitió describir tendencias, sino también interpretar críticamente cómo las condiciones estructurales de pobreza multidimensional se entrelazan con la conflictividad socioambiental, destacando la complejidad de los procesos sociales en contextos extractivos.

Tabla 20

Procedimiento metodológico aplicado a la investigación

Etapas	Actividad	Técnica	Instrumento	Validación
I. Revisión documental	Recolección de información secundaria (INEI, ENAHO, ENDES, Defensoría del Pueblo, CEPAL, PNUD)	Análisis documental	Matriz de datos	Triangulación de fuentes
II. Trabajo de campo	Encuestas a hogares seleccionados en zonas de influencia minera	Encuesta estructurada	Cuestionario con indicadores de pobreza multidimensional	Validación por jueces y prueba piloto
III. Encuestas complementarias	Aplicación de encuestas complementarias para validar información	Encuesta estructurada	Cuestionario complementario	Validación por consistencia interna

IV. Análisis estadístico	Procesamiento de datos socioeconómicos	Análisis descriptivo, correlaciones de Spearman	SPSS/Stata	Prueba de significancia ($p < 0.05$)
V. Síntesis e interpretación	Integración de hallazgos cuantitativos y documentales	Análisis comparado	Matriz de consistencia	Triangulación metodológica

Nota. Elaboración propia con base en el diseño metodológico del estudio.

- Etapas: planificación, operacionalización, muestreo, recolección, depuración, análisis e integración.
- Estrategias: revisión documental con matriz de evidencia; encuesta estructurada sobre pobreza (ingresos, educación, salud, vivienda/servicios, vulnerabilidad), agua y saneamiento (acceso, continuidad, calidad percibida), conflictividad (tema–actor–severidad–estado) y participación; observación no participante; codificación de conflictos; cálculo institucional de ejecución ($\text{Devengado/PIM} \times 100$) y canon/regalías a precios constantes.
- Criterios: residencia permanente, ≥ 18 años, conocimiento del periodo y consentimiento; exclusiones por visita temporal, negativa o impedimentos; sustitución controlada y balance territorial.
- Momentos: preparación, pilotaje, trabajo de campo, depuración y análisis–síntesis bajo protocolos de calidad y ética.

Asimismo, el estudio adopta un enfoque longitudinal al analizar la evolución de los indicadores de pobreza (monetaria y multidimensional), conflictividad socioambiental, acceso al agua y desempeño institucional durante el periodo 2011–2022, a partir de series temporales comparables a nivel provincial. La selección de este periodo responde a la disponibilidad continua de información oficial y a la relevancia histórica del conflicto minero Conga, cuyo punto de inflexión se produce a partir de 2011.

El enfoque longitudinal permitió identificar tendencias, variaciones interanuales y cambios estructurales en las variables de estudio, así como analizar su comportamiento antes, durante y después de los principales episodios de conflictividad socioambiental. A diferencia de un análisis transversal, este enfoque hizo posible observar persistencias, rupturas y desfases temporales entre la evolución de la pobreza y la conflictividad, fortaleciendo la explicación de las relaciones encontradas y aportando mayor robustez interpretativa a los resultados de la investigación.

4.3. Método de la investigación

Este estudio adopta un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión integral de la relación entre pobreza y conflictos socioambientales en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga. El componente cuantitativo permitió analizar la evolución de indicadores socioeconómicos y conflictivos en el periodo 2011–2022, mientras que el cualitativo aportó una comprensión profunda de las percepciones y narrativas comunitarias.

Se utilizó un diseño correlacional-explicativo de tipo longitudinal, ya que el objetivo fue identificar y explicar patrones y tendencias a lo largo del tiempo, así como establecer relaciones entre variables. Este diseño resulta idóneo para investigaciones en las que la dinámica social y económica se ve influida por eventos prolongados, como es el caso del Conflicto Minero Conga.

4.4. Población y muestra

4.4.1. Población:

La población de referencia estuvo conformada por los residentes del entorno directo del Proyecto Minero Conga, comprendiendo las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, en la región Cajamarca. Para cuantificar este universo se utilizó como marco demográfico el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 del INEI, debido a su cobertura censal y comparabilidad territorial.

De acuerdo con este registro, la provincia de Cajamarca concentra 348 433 habitantes, Celendín 79 084 y Hualgayoc 77 944, lo que configura un total departamental de 505 461 personas en el área de estudio.

La investigación se centró en la población adulta (≥ 18 años), en concordancia con los criterios éticos y operativos del estudio, limitando la selección a personas capaces de brindar consentimiento informado. Este enfoque permitió garantizar la pertinencia de la información recogida y asegurar la coherencia con los objetivos de la investigación.

4.4.2. La muestra:

La muestra de la investigación estuvo conformada por 250 encuestas, distribuidas proporcionalmente entre las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, de acuerdo con su peso poblacional y el nivel de conflictividad socioambiental reportado. El criterio principal fue garantizar representatividad territorial en contextos urbanos y rurales, priorizando las zonas con antecedentes de conflictividad vinculadas al Proyecto Minero Conga.

Se aplicó un muestreo estratificado por conveniencia con proporcionalidad territorial, correspondiente a una técnica no probabilística y no aleatoria, seleccionada debido a las condiciones geográficas, sociales y logísticas de la región, así como a las limitaciones de acceso al conjunto de la población. Este enfoque permitió identificar participantes representativos de cada estrato provincial en función de su disponibilidad, disposición a participar y ubicación territorial, asegurando una cobertura equilibrada entre los principales centros poblados y las áreas rurales.

Determinación referencial del tamaño muestral

Si bien el diseño de muestreo fue no probabilístico, el tamaño de la muestra se determinó de manera referencial, utilizando la fórmula para poblaciones grandes, con el propósito de asegurar

suficiencia empírica, cobertura territorial y robustez analítica, sin pretensión de inferencia estadística poblacional.

Tamaño de muestra:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2}$$

$$n = 250$$

n = tamaño de la muestra

Z= nivel de confianza 95%; (Z=1,96)

P= proporción estimada de pobreza (0,50), utilizada por criterio de máxima variabilidad

e= error de muestreo referencial (6,2%)

El cálculo referencial permitió establecer un tamaño muestral de 250 encuestas, considerado adecuado para el análisis correlacional–explicativo propuesto y coherente con la disponibilidad de información y las condiciones del trabajo de campo.

Tabla 21

Distribución de la muestra por zona.

Zona	Frec.	%
Cajamarca	93	37,2%
Celendín	76	30,4%
Hualgayoc	81	32,4%
Total	250	100,00%

Nota. Elaboración propia con base en el diseño muestral del estudio.

Los criterios de inclusión contemplaron:

- Ser residente permanente en una de las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga.
- Tener 18 años o más.

- Haber presenciado o tenido conocimiento directo de los conflictos socioambientales ocurridos entre 2011 y 2022.
- Aceptar participar de manera voluntaria y otorgar consentimiento informado.

Por su parte, los criterios de exclusión consideraron:

- Menores de edad.
- Visitantes ocasionales o migrantes temporales.
- Personas con limitaciones de comunicación que impidieran completar los instrumentos.
- Individuos que no otorgaron consentimiento informado.

Aunque el diseño no fue probabilístico, la distribución de la muestra garantizó cobertura territorial y diversidad sociodemográfica, permitiendo recoger evidencia empírica consistente para el análisis de la relación entre pobreza multidimensional, gobernanza y conflictividad socioambiental en el área de influencia del Proyecto Minero Conga.

4.5. Unidad de análisis y unidad de observación

4.5.1. Unidad de análisis

La población constituye la unidad de análisis del estudio. En particular, la investigación se centra en la población residente en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, ubicadas en el departamento de Cajamarca, Perú, durante el período 2011–2022.

La elección de la población como unidad de análisis responde al objetivo de examinar las condiciones de pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional— y su relación con la conflictividad socioambiental, entendida como un fenómeno social que involucra percepciones, niveles de bienestar, participación y dinámicas colectivas en el territorio.

Para efectos operativos y analíticos, la información correspondiente a la población fue sistematizada y analizada a partir de datos agregados a nivel provincial, los cuales constituyen la

unidad de observación, debido a la disponibilidad de series oficiales continuas para el período de estudio en variables como pobreza, ejecución presupuestal en agua y saneamiento y registros de conflictos socioambientales (INEI, 2023; MEF, 2022).

El análisis se estructuró como un panel provincial, lo que permitió comparar la evolución temporal de los indicadores asociados a la población, controlar la heterogeneidad institucional y territorial, y articular los resultados con decisiones de política pública vinculadas a planificación, inversión pública y gestión del canon minero (MEF, 2022; Defensoría del Pueblo, 2022).

4.5.2. Unidad de observación

Se distinguen dos fuentes complementarias y triangulables:

- **Hogares/pobladores residentes (≥ 18 años)**, observados mediante encuesta estructurada que releva información primaria sobre: dimensiones de pobreza (ingresos, educación, salud, vivienda/servicios, vulnerabilidad), acceso/continuidad/calidad percibida del agua, participación y confianza institucional, y rasgos de conflictividad (temática, actores, severidad y estado). El instrumento incorpora control de consistencia, rutas y verificación aleatoria.
- **Registros documentales y administrativos** procedentes de organismos acreditados, utilizados como información secundaria para construir indicadores y validar hallazgos: ejecución presupuestal ($\text{Devengado/PIM} \times 100$) en la función agua y saneamiento; transferencias de canon y regalías expresadas en términos reales; series de conflictos clasificadas por tema, actor y severidad; y reportes técnicos ambientales relevantes. La integración de ambas fuentes asegura validez, trazabilidad y robustez en la medición de las relaciones entre pobreza, gobernanza del agua y conflictividad en el entorno del Proyecto Minero Conga.

4.6. Tipo de Investigación

De acuerdo con la clasificación propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2018), la presente investigación es de tipo básica, dado que tiene como finalidad generar conocimiento científico y explicar la relación entre la pobreza y la conflictividad socioambiental, sin pretender una aplicación inmediata ni la formulación de propuestas de intervención directa sobre la realidad estudiada.

En cuanto al enfoque metodológico, el estudio es de carácter mixto, al integrar técnicas cuantitativas orientadas al análisis estadístico de indicadores de pobreza y conflictividad socioambiental, junto con técnicas cualitativas basadas en el análisis documental e interpretativo de información institucional, lo que permite una comprensión integral del fenómeno analizado.

Respecto al diseño de investigación, este es no experimental, debido a que las variables no fueron manipuladas deliberadamente, sino observadas y analizadas a partir de datos históricos y perceptuales disponibles en fuentes primarias y secundarias.

En relación con el nivel de investigación, el estudio se ubica en un nivel correlacional–explicativo, al examinar la asociación existente entre la pobreza multidimensional y la ocurrencia de conflictos socioambientales, así como los factores estructurales que contribuyen a explicar dicha relación en el contexto territorial analizado.

Finalmente, la investigación presenta un corte longitudinal retrospectivo (ex post facto), al analizar la evolución de los indicadores de pobreza y conflictividad socioambiental durante el período 2011–2022.

4.7. Técnicas e instrumentos de recopilación de información

Para sustentar el desarrollo de la investigación se aplicó un enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo), integrando procedimientos de análisis empírico y documental con el propósito de

construir evidencia sólida, verificable y contextualizada sobre la relación entre pobreza y conflictividad socioambiental en el entorno del Proyecto Minero Conga durante el período 2011–2022.

La elección de técnicas e instrumentos respondió a la naturaleza multidimensional del fenómeno de estudio y a los objetivos específicos de la investigación. En ese marco, se adoptó una estrategia de triangulación metodológica que combinó información primaria obtenida mediante trabajo de campo con información secundaria proveniente de registros institucionales y bases estadísticas oficiales.

El levantamiento de información primaria se realizó a través de la técnica de encuesta estructurada, aplicada a 250 pobladores de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, seleccionados mediante muestreo estratificado. Este instrumento permitió recoger información sobre condiciones de pobreza, acceso a servicios básicos, percepción de gobernanza y conflictividad socioambiental.

De manera complementaria, se empleó la técnica de observación directa estructurada, apoyada en una guía de observación y una bitácora de campo, orientadas a registrar de forma sistemática condiciones territoriales, ambientales y sociales relevantes, así como incidencias y dinámicas observadas durante el trabajo de campo.

La información secundaria se obtuvo mediante análisis documental y revisión de fuentes institucionales (INEI, MINEM, ANA, SUNASS, Defensoría del Pueblo, entre otras), bajo criterios de pertinencia, actualidad, trazabilidad y confiabilidad. En conjunto, este andamiaje metodológico permitió fortalecer la validez interpretativa de los resultados y sustentar la contrastación de las hipótesis planteadas.

Los instrumentos de recolección de información se presentan íntegramente en los anexos del presente estudio.

4.7.1. Técnicas

En la presente investigación se emplearon técnicas complementarias de carácter cuantitativo y cualitativo, seleccionadas en función de la naturaleza de las variables, los objetivos del estudio y el enfoque metodológico adoptado. Estas técnicas permitieron obtener información válida, pertinente y contrastable para el análisis de la relación entre pobreza, gobernanza y conflictividad socioambiental en la región Cajamarca durante el período 2011–2022.

En coherencia con el enfoque mixto, el diseño no experimental y el alcance correlacional–explicativo, las técnicas fueron organizadas a partir de categorías analíticas derivadas de las variables de estudio, asegurando consistencia metodológica entre el planteamiento del problema, los objetivos y el análisis de resultados.

a) Técnicas asociadas a la variable independiente: Pobreza

Revisión documental sistemática

Esta técnica se orientó a la búsqueda, selección y análisis crítico de fuentes oficiales, académicas y normativas, tales como informes técnicos, estadísticas socioeconómicas y documentos de política pública, con el fin de sustentar teóricamente y empíricamente las dimensiones de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. La revisión permitió identificar patrones estructurales de desigualdad, privaciones persistentes y el marco institucional vinculado a la gestión del recurso hídrico y la actividad minera.

Análisis de registro administrativos y estadísticos

Se elaboró una base de datos longitudinal correspondiente al período 2011–2022 a partir de información proveniente del INEI, MINEM, ANA, SUNASS y la Defensoría del Pueblo. Esta

técnica permitió la operacionalización de indicadores de pobreza, acceso a servicios de agua y saneamiento y gasto público ambiental, facilitando el análisis de tendencias interanuales y la contrastación de resultados mediante métodos descriptivos y correlacionales.

b) Técnicas asociadas a la variable dependiente: Conflictividad socioambiental

Encuesta estructurada aplicada a hogares

La encuesta se aplicó a una muestra de 250 pobladores, seleccionados mediante muestreo estratificado por provincia, distribuidos en 93 encuestados en Cajamarca, 76 en Celendín y 81 en Hualgayoc–Bambamarca. Esta técnica permitió recoger información primaria sobre intensidad del conflicto, percepción de impactos ambientales, gobernanza local, participación social y su relación con condiciones de pobreza y acceso al agua. Los datos fueron procesados mediante SPSS v26 y Microsoft Excel, utilizándose el coeficiente rho de Spearman (ρ) para el análisis correlacional, en atención a la naturaleza ordinal de las variables.

Observación directa no participante

Se desarrolló de manera planificada en las provincias de estudio, registrando condiciones territoriales, sociales y ambientales vinculadas a la gestión del agua y a las percepciones locales sobre la actividad minera y la conflictividad socioambiental. La observación se realizó mediante una guía estructurada y protocolos de registro estandarizados, lo que garantizó comparabilidad entre localidades y contribuyó a contextualizar e interpretar los resultados cuantitativos.

En conjunto, la aplicación articulada de estas técnicas permitió analizar de manera sistemática las condiciones estructurales de pobreza y su vinculación con la conflictividad socioambiental, en concordancia con la naturaleza de la investigación y los objetivos planteados.

4.7.2. Instrumentos

Los instrumentos de investigación fueron diseñados en coherencia con las técnicas seleccionadas y los objetivos del estudio, asegurando validez de contenido, fiabilidad interna y consistencia operacional. Cada instrumento permitió captar información precisa, trazable y verificable, tanto en la dimensión cuantitativa como en la cualitativa, en concordancia con el principio de triangulación metodológica adoptado.

Protocolo de búsqueda y matriz de extracción documental

Se elaboró un protocolo estructurado para la revisión sistemática de fuentes oficiales y académicas, que consideró variables como autor, año, nivel territorial, indicador, metodología y principales hallazgos. La matriz de extracción incorporó una ficha de evaluación de calidad de la fuente, basada en criterios de vigencia, pertinencia, relevancia y confiabilidad, garantizando la rigurosidad en la selección y uso de la información secundaria.

Diccionario de variables y plantillas de depuración estadística

Se diseñaron plantillas de descarga, validación y depuración de datos en formatos Excel y SPSS, acompañadas de un diccionario de variables que definió operativamente los indicadores analizados (pobreza monetaria y multidimensional, acceso al agua, saneamiento y presupuesto público). Asimismo, se implementó una bitácora de empalmes y ajustes metodológicos, orientada a asegurar la comparabilidad temporal y la consistencia de las series correspondientes al período 2011–2022.

Guía de observación estructurada y bitácora de campo

El componente cualitativo incluyó una guía de observación no participante, orientada a registrar de manera sistemática aspectos del entorno físico, social e institucional vinculados a la gestión del recurso hídrico y a la conflictividad socioambiental. Complementariamente, la bitácora de campo

permitió documentar evidencias empíricas, percepciones locales y referencias espaciales relevantes, fortaleciendo la contextualización e interpretación de los resultados.

Cuestionario modular de encuesta

El instrumento principal del componente cuantitativo fue un cuestionario estructurado, conformado por preguntas cerradas y escalas tipo Likert, previamente validadas mediante juicio de expertos y prueba piloto. El cuestionario incluyó módulos referidos a pobreza, acceso y calidad del agua, gobernanza local, participación comunal y percepción de la conflictividad socioambiental. Para garantizar la ética y la uniformidad del proceso de aplicación, se elaboraron un manual del encuestador y una ficha de consentimiento informado.

Base de datos y plantillas de tabulación

Finalmente, se construyó una base de datos consolidada en Excel y SPSS, acompañada de plantillas de tabulación, un diccionario operativo y una hoja de control de consistencia. Estos instrumentos facilitaron el procesamiento estadístico, el cálculo de indicadores y la contrastación de hipótesis mediante análisis correlacional, asegurando la trazabilidad y replicabilidad de los resultados.

4.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información

El tratamiento de los datos siguió una ruta única y replicable orientada a ordenar, clasificar y organizar el material recolectado para su análisis, explicación e interpretación.

4.8.1. *Procesamiento de la Información*

En una primera etapa, los datos cuantitativos y cualitativos fueron sometidos a un proceso de depuración y control de calidad, que incluyó la revisión de integridad de los registros, la identificación de valores atípicos, la corrección de errores de codificación y la verificación de patrones de no respuesta, con el fin de asegurar la consistencia interna de la base de datos.

Posteriormente, se realizó la normalización y trazabilidad de la información, mediante la construcción de un diccionario de variables, la homologación de formatos y unidades de medida y la estandarización temporal de los datos. En el caso de los indicadores presupuestales, se efectuó la deflatación de montos y el cálculo del nivel de ejecución del gasto público en agua y saneamiento, expresado como el cociente entre el monto devengado y el Presupuesto Institucional Modificado ($\text{Devengado/PIM} \times 100$).

De manera complementaria, se aplicó un proceso de codificación temática, orientado a clasificar los registros de conflictividad socioambiental según categorías analíticas previamente definidas, tales como temática del conflicto, actores involucrados, nivel de severidad y estado del conflicto. Para ello, se elaboraron matrices de doble entrada que permitieron el seguimiento longitudinal y territorial de los conflictos durante el periodo 2011–2022.

Finalmente, se efectuó la tabulación y visualización de la información, mediante la construcción de matrices analíticas, tablas dinámicas y series temporales, facilitando la comparación interprovincial y la identificación de patrones y tendencias relevantes.

4.8.2. Análisis de la Información

El análisis de los datos se desarrolló a partir de un enfoque integrado, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas de acuerdo con las categorías analíticas definidas.

En el plano cuantitativo, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva, tales como medidas de tendencia central y dispersión, con el fin de caracterizar las variables de pobreza, acceso a servicios de agua y saneamiento, ejecución del gasto público y niveles de conflictividad socioambiental. Posteriormente, se emplearon pruebas de correlación no paramétricas, específicamente el coeficiente rho de Spearman, para evaluar la relación entre la pobreza en sus dimensiones monetaria y multidimensional y la conflictividad socioambiental, considerando la

naturaleza ordinal de los datos y la ausencia de supuestos de normalidad. Cuando fue pertinente, se realizaron análisis de sensibilidad mediante el uso de indicadores alternativos y ventanas temporales móviles.

En el plano cualitativo, se desarrolló un análisis de contenido de documentos institucionales y registros de observación de campo, utilizando categorías analíticas previamente definidas y la elaboración de memos interpretativos. Este análisis permitió identificar mecanismos explicativos vinculados al riesgo hídrico, el desempeño institucional y la participación social, contribuyendo a una comprensión contextualizada de los resultados estadísticos.

Finalmente, se aplicó un proceso de triangulación metodológica, contrastando de manera sistemática los hallazgos cuantitativos con la evidencia documental y los resultados de campo. Esta estrategia fortaleció la validez interpretativa del estudio y permitió integrar los distintos niveles de análisis.

El soporte informático empleado correspondió exclusivamente a los programas Microsoft Excel, utilizado para la depuración, tabulación y visualización de datos, y SPSS, para el análisis estadístico descriptivo e inferencial. En conjunto, la aplicación rigurosa de estas técnicas aseguró la validez, confiabilidad y coherencia interna del estudio, así como la suficiencia y pertinencia de la evidencia empírica para la contrastación de las hipótesis de investigación.

4.9. Validez y confiabilidad

El instrumento aplicado en la presente investigación corresponde a un cuestionario adaptado y contextualizado, elaborado a partir de referentes teóricos y empíricos utilizados en estudios previos sobre pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental, y ajustado a las características sociales, territoriales y culturales de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca. La adaptación implicó la selección, reformulación y adecuación

semántica de los ítems, sin alterar su estructura conceptual ni las dimensiones analíticas definidas en el marco teórico, con el propósito de asegurar pertinencia contextual y adecuada comprensión por parte de los encuestados.

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a un proceso de validación mediante juicio de expertos y prueba piloto, garantizando pertinencia, claridad y consistencia semántica de los ítems. El juicio de expertos se aplicó a tres especialistas en las áreas de pobreza, gobernanza y conflictividad socioambiental, quienes evaluaron la relevancia, coherencia y adecuación metodológica del cuestionario. Como resultado, el instrumento referido a pobreza, compuesto por 21 ítems, obtuvo una aprobación del 100 %, mientras que el instrumento de conflictividad socioambiental, integrado por 14 ítems, alcanzó igualmente una aprobación unánime (100 %). En conjunto, los 35 ítems fueron considerados válidos para su aplicación en campo.

Posteriormente, se desarrolló una prueba piloto con una muestra de 30 pobladores de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc–Bambamarca, con el fin de estimar la confiabilidad del instrumento. La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual permite estimar el grado de consistencia interna entre los ítems que conforman un instrumento. Valores superiores a 0.70 indican una adecuada confiabilidad, mientras que valores cercanos a 1.00 reflejan una alta coherencia interna entre los ítems.

En este estudio, los valores obtenidos evidencian una alta confiabilidad del instrumento: $\alpha = 0.931$ para el cuestionario de pobreza, $\alpha = 0.940$ para el de conflictividad socioambiental y $\alpha = 0.928$ para el instrumento general, lo que confirma que los ítems miden de manera consistente las dimensiones teóricas propuestas y garantizan la estabilidad y fiabilidad de la información recolectada.

En conjunto, el instrumento permitió medir de manera sistemática las dimensiones de pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda, servicios básicos y vulnerabilidad) y de conflictividad socioambiental (impacto ambiental, gobernanza y participación social), asegurando coherencia entre las variables, los objetivos y las hipótesis de investigación. En consecuencia, se determinó que los instrumentos aplicados son válidos, confiables y metodológicamente consistentes, cumpliendo con los estándares técnicos exigidos en investigaciones de enfoque mixto.

4.10. Aspectos éticos y limitaciones

La investigación se desarrolló bajo los principios de integridad académica, consentimiento informado, anonimato y confidencialidad. Todos los participantes fueron informados de manera clara sobre los objetivos del estudio, el uso estrictamente académico y científico de los datos, así como su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias.

Los datos recolectados fueron procesados de forma anónima y agregada, evitando cualquier posibilidad de identificación individual, y se resguardaron mediante protocolos de seguridad que limitaron el acceso únicamente al equipo investigador. De esta manera, se garantizó la protección de la privacidad y los derechos de los participantes, así como la integridad de la información sensible.

El estudio se ajustó a las normas éticas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y a los lineamientos internacionales en materia de investigación social, asegurando el respeto pleno a la dignidad, autonomía y bienestar de las personas involucradas. Se reconocen limitaciones vinculadas a la heterogeneidad de fuentes secundarias y a la naturaleza no causal del diseño. No obstante, se aplicó triangulación de datos, series alternativas y segmentaciones territoriales para fortalecer la robustez de los hallazgos. El diseño metodológico

con detalle en la definición de variables, técnicas y protocolos de análisis asegura replicabilidad en futuros estudios en contextos mineros de similares características.

CAPÍTULO V

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente capítulo se realiza la contrastación de la hipótesis general y de las hipótesis específicas, en función de los datos recopilados por las principales instituciones gubernamentales (INEI, ENAHO y ENDES), aplicando las técnicas descritas en el capítulo anterior. Asimismo, los resultados obtenidos se analizan y discuten desde un enfoque explicativo, contrastándolos con hallazgos reportados en investigaciones previas de nivel correlacional-explicativo, con el propósito de identificar coincidencias, divergencias y aportes novedosos respecto a la relación entre pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental en contextos mineros.

A. Provincia de Cajamarca

En primer término, al analizar la dinámica demográfica de la provincia de Cajamarca durante el período 2011–2022, se identifica una tendencia general de aumento del volumen poblacional, **la cual** no presenta un comportamiento lineal ni uniforme a lo largo del período analizado.

Entre los años 2011 y 2014 se observa un incremento sostenido de la población, pasando de 361 991 a 381 700 habitantes, lo que evidencia una fase inicial de crecimiento demográfico continuo, asociada a una expansión poblacional moderada.

Posteriormente, entre los años 2015 y 2017, dicha tendencia experimenta una alteración significativa, caracterizada por fluctuaciones interanuales y una reducción puntual del volumen poblacional, alcanzando en 2017 un total de 348 433 habitantes. Este comportamiento no configura una tendencia sostenida de decrecimiento, sino un período de ajuste demográfico, que interrumpe temporalmente la dinámica expansiva observada en los años previos.

A partir del año 2018, la población provincial retoma una trayectoria ascendente, registrándose incrementos consecutivos que se mantienen hasta el año 2022, cuando la población

alcanza los 392 571 habitantes. Este comportamiento permite afirmar que la provincia de Cajamarca experimenta, en el mediano plazo, un crecimiento demográfico gradual y sostenido, más que una expansión acelerada, de acuerdo con los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022).

Dinámica demográfica (2011–2022)

El análisis de la serie poblacional de la provincia de Cajamarca para el período 2011–2022, a partir de los registros oficiales del INEI, permite identificar una dinámica demográfica diferenciada **en** el tiempo, caracterizada por variaciones en el volumen absoluto de población más que por un crecimiento lineal continuo.

Durante el período 2011–2014 se registra un incremento progresivo del número de habitantes, lo que confirma una fase inicial de expansión demográfica en la provincia. No obstante, entre 2015 y 2017 se evidencian oscilaciones poblacionales y una disminución puntual del total de habitantes, lo que configura un escenario de ajuste demográfico temporal, sin consolidar una tendencia descendente prolongada.

Desde el año 2018, la serie poblacional muestra una recuperación sostenida del volumen poblacional, con incrementos anuales consecutivos hasta el año 2022. Este comportamiento sugiere un proceso de recomposición demográfica en el mediano plazo, posterior al período de ajuste observado a mitad de la década.

En conjunto, los resultados evidencian que la provincia de Cajamarca presentó variaciones demográficas no homogéneas, lo que refuerza la necesidad de interpretar los cambios poblacionales en articulación con los indicadores de pobreza multidimensional, acceso a servicios básicos y conflictividad socioambiental, analizados en los apartados siguientes, más que asumir

relaciones directas o automáticas entre crecimiento poblacional y mejora de las condiciones de vida.

Tabla 22

Tendencia poblacional en la Provincia de Cajamarca (2011-2022)

Año	Población
2011	361991
2012	368600
2013	375200
2014	381700
2015	377748
2016	389160
2017	348433
2018	375029
2019	382068
2020	388170
2021	390645
2022	392571

Nota. INEI (2022) tasa de crecimiento

Análisis:

Análisis de los Indicadores Socioambientales y Demográficos en Cajamarca (2011–2022)

El análisis integral de las brechas de servicios, sostenibilidad, gestión de conflictos y dinámica poblacional permitió caracterizar el estado del desarrollo territorial en la provincia y región de Cajamarca. A través de la evaluación de las Tablas 10, 11, 12 y 22, se determinaron las siguientes dimensiones de estudio:

Evolución de los Servicios Básicos y Pobreza

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 10, se identificó un incremento progresivo en la cobertura de servicios esenciales en el ámbito rural entre 2011 y 2022. El acceso al agua potable registró un aumento de 15 puntos porcentuales (del 62 % al 77 %), mientras que el

saneamiento rural se incrementó del 28 % al 47 %. Simultáneamente, la pobreza monetaria experimentó una reducción del 8,9 %, situándose en un 44,5 % al final del periodo. No obstante, al contrastar estos datos con el promedio nacional (Tabla 11), se observó que Cajamarca mantuvo un rezago estructural significativo, dado que la pobreza regional superó en 17 puntos porcentuales al promedio país (27,5 %).

Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Humano

El análisis comparativo de sostenibilidad (Tabla 11) evidenció disparidades críticas entre Cajamarca y otras regiones con actividad extractiva similar, como Moquegua. Se halló que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Cajamarca (0,64) se posicionó considerablemente por debajo del nivel de Moquegua (0,74) y del promedio nacional (0,74). Esta brecha fue consistente con las deficiencias en saneamiento rural, donde la cobertura de Cajamarca (47 %) fue inferior a la de Moquegua (82 %) en 35 puntos porcentuales, lo que sugirió una gestión territorial con limitaciones en la transformación de recursos en bienestar social.

Gestión de la Conflictividad Socioambiental

La Tabla 12 reveló una crisis de legitimidad institucional en la gestión de conflictos. Se observó que, a pesar de la implementación de mesas de diálogo, solo el 20–25 % de estas concluyeron con acuerdos ejecutados. La fiscalización ambiental a cargo del OEFA, aunque aumentó en frecuencia (40 %), mostró una eficacia punitiva reducida, con menos del 30 % de sanciones efectivas. Esta ineficiencia administrativa, sumada a un monitoreo hídrico limitado (35 %), correlacionó con la persistencia de más de 200 protestas sociales y un elevado índice de desconfianza ciudadana (68 %).

Dinámica Demográfica y Tendencias Poblacionales

Finalmente, la Tabla 22 detalló la evolución demográfica de la provincia de Cajamarca. Se registró un crecimiento poblacional neto del 8,45 % durante el periodo 2011-2022, alcanzando un total de 392,571 habitantes. Se identificó una fluctuación atípica en el año 2017 (348,433 habitantes), atribuida a la corrección de proyecciones tras el Censo Nacional. La tendencia posterior al año 2018 mostró una recuperación y estabilización del volumen poblacional, lo que incrementó la demanda sobre la infraestructura de servicios básicos que, como se analizó previamente, aún presenta brechas de cobertura considerables.

Tabla 23

Dinámica demográfica y tasas de crecimiento interanual en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, 2011-2022

Año	Cajamarca (Pob.)	Tasa (%)	Celendín (Pob.)	Tasa (%)	Hualgayoc (Pob.)	Tasa (%)
2011	361,99	—	91,48	—	92,23	—
2012	368,60	+1.83	92,30	+0.89	93,10	+0.94
2013	375,20	+1.79	93,15	+0.92	94,05	+1.02
2014	381,70	+1.73	94,00	+0.91	95,10	+1.12
2015	377,75	-1.04	94,85	+0.90	94,20	-0.95
2016	389,16	+3.02	95,70	+0.90	96,30	+2.23
2017	348,43	-10.47*	89,01	-6.99*	86,18	-10.51*
2018	375,03	+7.63	90,20	+1.34	87,40	+1.42
2019	382,07	+1.88	91,35	+1.27	88,50	+1.26
2020	388,17	+1.60	92,10	+0.82	89,20	+0.79
2021	390,65	+0.64	92,45	+0.38	89,65	+0.50
2022	392,57	+0.49	92,78	+0.36	89,98	+0.37

Nota. INEI (2022) tasa de crecimiento

Análisis Longitudinal: Población y Tasas de Crecimiento (2011-2022)

La tasa de crecimiento se calculó mediante la fórmula de crecimiento geométrico, comparando el volumen poblacional del año t respecto al año anterior t-1.

A partir del análisis de las series de tiempo poblacionales en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, se determinó que el territorio bajo estudio experimentó una dinámica demográfica asimétrica y vulnerable durante el periodo 2011-2022. Se observó que, si bien la provincia de Cajamarca mantuvo un rol de centro receptor de población debido a su condición de núcleo administrativo, las provincias de Celendín y Hualgayoc manifestaron una tendencia al estancamiento y a la expulsión migratoria, fenómeno que se agudizó en contextos de alta conflictividad y crisis sanitaria. Se identificó un hito crítico en el año 2017, periodo en el cual se registró una contracción nominal abrupta en las tasas de crecimiento de las tres provincias (-0.47% en Cajamarca y -10.51% en Hualgayoc). A nivel científico, se interpretó este suceso no como un evento de mortalidad biológica, sino como un sinceramiento estadístico post-censal. Los datos revelaron que las proyecciones previas habían sobreestimado el crecimiento en zonas de influencia minera, ignorando los flujos migratorios de retorno y el desplazamiento de población joven hacia otras regiones ante la falta de oportunidades estructurales en sus lugares de origen. En lo que respecta a la fase final del estudio (2020-2022), se constató una desaceleración significativa en el crecimiento poblacional regional, alcanzando niveles mínimos históricos de 0.36% y 0.37% en Celendín y Hualgayoc, respectivamente. Se concluyó que este fenómeno fue el resultado de la convergencia entre la transición demográfica natural y el impacto de la pandemia de COVID-19. Este último factor no solo incrementó la tasa de mortalidad, sino que también alteró los proyectos de vida de los hogares, profundizando la fragilidad demográfica en territorios que ya presentaban elevados índices de pobreza multidimensional. Finalmente, desde una perspectiva humanizada, se comprendió que el decrecimiento real en Hualgayoc (-0.22% promedio anual) representó la pérdida de capital humano y el desmembramiento de las estructuras familiares tradicionales. Se dedujo que la población, al percibir el entorno como un espacio de carencia en servicios básicos y

riesgo ambiental, optó por la migración como estrategia de supervivencia, dejando tras de sí una población rural envejecida con menor capacidad de resiliencia ante futuros conflictos socioambientales.

Tabla 24

Tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) y varianza intercensal en el área de influencia del proyecto Conga, 2011-2022

Provincia	Población Inicial (2011)	Población Final (2022)	Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA %)	Interpretación Sociodemográfica
Cajamarca	361,991	392,571	+0.74%	Crecimiento Medio; rol de receptor migratorio y centro de servicios.
Celendín	91,483	92,78	+0.13%	Estancamiento demográfico; alta tasa de emigración por brechas de servicios.
Hualgayoc	92,234	89,98	-0.22%	Decrecimiento real; impacto de la pobreza multidimensional y expulsión poblacional.
Zona Conga (Total)	545,708	575,331	+0.48%	Dinámica regional por debajo del promedio nacional (1.0%).

Nota. INEI (2022) tasa de crecimiento

Análisis Técnico: Tasas de Crecimiento Promedio Anual (2011-2022)

A nivel metodológico, se empleó la fórmula de crecimiento geométrico para suavizar las fluctuaciones anuales y obtener una tendencia estructural del periodo.

A partir de los datos consolidados en la Tabla 2, se determinó que el área de influencia del proyecto minero Conga presentó un comportamiento demográfico caracterizado por la asimetría territorial y la fragilidad estructural. Mediante el cálculo de la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) bajo el método geométrico, se logró identificar una tendencia al estancamiento y a la regresión demográfica en las zonas de impacto directo, contrastando con el dinamismo relativo de la capital regional.

Se observó que la Provincia de Cajamarca se constituyó como el único polo de atracción poblacional con una tasa de 0.74%, lo cual fue interpretado como el resultado de su rol funcional como centro de servicios y nodo administrativo. No obstante, dicho crecimiento se situó por debajo de la media nacional peruana (1.0%), lo que sugiere que incluso la capital departamental no fue ajena a la ralentización económica y social que afectó a la región durante la última década.

En una escala de mayor vulnerabilidad, se identificó que la Provincia de Celendín experimentó un estancamiento demográfico crítico con una tasa de apenas 0.13%. A nivel científico, se comprendió que este valor representó un equilibrio precario entre el crecimiento natural (nacimientos) y una emigración forzada masiva. Este flujo de salida fue atribuido a las persistentes brechas en la dimensión de servicios básicos y a la percepción de un entorno rural con limitadas garantías de desarrollo humano.

El hallazgo más significativo se localizó en la Provincia de Hualgayoc, donde se registró un decrecimiento real del -0.22%. Este fenómeno de contracción poblacional fue interpretado bajo una perspectiva humanizada como el síntoma de un territorio expulsivo. Se dedujo que la convergencia entre la pobreza multidimensional y el temor a los pasivos ambientales generó un desplazamiento de los hogares hacia otros nodos geográficos, provocando un desmembramiento del tejido social y un envejecimiento prematuro de las comunidades locales.

Finalmente, se concluyó que la Zona Conga en su totalidad (0.48%) manifestó un dinamismo demográfico lánguido. Esta tasa promedio, que no alcanza ni la mitad del promedio nacional, fue explicada como una consecuencia directa de la "trampa de pobreza" y la inestabilidad socioambiental. Se estableció que el territorio dejó de ser percibido como un espacio de oportunidad, consolidándose, en cambio, como una zona de tránsito y subsistencia donde la

población optó por la movilidad geográfica ante la falta de seguridad social y hídrica (Sánchez & Salas, 2021).

Tabla 25

Evolución de los conflictos mineros en Cajamarca (2011-2022)

Año	Nro. De conflictos			
	Cajamarca	Celendín	Hualgayoc	Total
2011	2	1	5	8
2012	2	1	3	6
2013	2	1	3	6
2014	2	2	4	8
2015	1	1	5	7
2016	1	1	6	8
2017	1	1	6	8
2018	0	1	6	7
2019	0	1	5	6
2020	0	1	4	5
2021	0	0	4	4
2022	0	0	3	3

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo (2022)

A partir de los datos sistematizados en la Tabla 25, se determinó que la trayectoria de los conflictos mineros en el área de influencia del proyecto Conga durante el periodo 2011-2022 no manifestó una extinción lineal, sino una mutación y concentración territorial. Se observó que, mientras en las provincias de Cajamarca y Celendín la conflictividad tendió a la latencia hacia el final del periodo, la provincia de Hualgayoc se consolidó como el epicentro persistente de las tensiones socioambientales en la región.

Se identificó que durante el trienio inicial (2011-2013), la conflictividad presentó una distribución más equilibrada entre las provincias, coincidiendo con la etapa de mayor efervescencia del conflicto Conga. Sin embargo, a nivel doctoral, se interpretó que la persistencia

de casos en Hualgayoc (alcanzando un pico de 6 conflictos anuales entre 2016 y 2018) respondió a la coexistencia de la población con operaciones mineras activas y la herencia de pasivos ambientales. Este fenómeno sugiere que en dicha provincia el conflicto no fue solo reactivo a un proyecto nuevo, sino estructural, vinculado a la gestión cotidiana del entorno y la salud pública.

Desde una perspectiva humanizada, se comprendió que el descenso del número total de conflictos hacia el año 2022 (n=3) no necesariamente implicó una resolución de las causas de fondo. Se dedujo que la transición hacia un estado de "paz negativa" o latencia en Cajamarca y Celendín pudo ser el resultado del agotamiento de los mecanismos de movilización social y de la parálisis del proyecto extractivo, más que de una mejora sustantiva en las dimensiones de pobreza multidimensional de los hogares.

Finalmente, se concluyó que la provincia de Hualgayoc manifestó una resiliencia del conflicto, donde la percepción de riesgo ambiental y la demanda por remediación de pasivos mantuvieron activa la agenda de reclamos. El análisis longitudinal permitió establecer que la conflictividad en Cajamarca ha evolucionado de un estado de movilización masiva y política (2011-2012) hacia un estado de tensiones focalizadas y de carácter técnico-ambiental en zonas con actividad minera preexistente, evidenciando que la vulnerabilidad del entorno sigue siendo el principal detonante de la acción colectiva.

Tabla 26*Conflictos socioambientales mineros en Celendín (2011-2022): evolución y tipología*

Año	N° de conflictos	Caso	Característica	Ubicación	Descripción
2011	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Oposición al Proyecto Minero Conga
2012	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Oposición al Proyecto Minero Conga
2013	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Oposición al Proyecto Minero Conga
2014	2	Socioambiental	Minero	Celendín	Construcción de Hidroeléctrica
		Socioambiental	Minero	Celendín	Oposición al Proyecto Minero Conga
2015	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2016	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2017	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2018	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2019	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2020	1	Socioambiental	Minero	Celendín	Inviabilidad del Proyecto Conga
2021	0				
2022	0				

Nota. Elaboración propia con base en datos de la Defensoría del Pueblo (2011–2022).

A partir del análisis de la Tabla 26, se determinó que la conflictividad en la provincia de Celendín durante el periodo 2011-2022 manifestó una naturaleza monotemática y de alta persistencia estructural. A diferencia de otros territorios con diversificación de demandas, en Celendín se identificó que el núcleo del conflicto estuvo vinculado casi exclusivamente a la oposición y posterior declaración de inviabilidad del Proyecto Minero Conga, lo que denota una sólida cohesión social en torno a la protección de los activos hídricos.

Se observó que, durante la fase inicial y de mayor efervescencia (2011-2013), el conflicto fue tipificado unívocamente como socioambiental de carácter minero. No obstante, en el año 2014

se identificó un incremento en la complejidad de la conflictividad (N=2), donde a la resistencia minera se sumó la oposición a proyectos de infraestructura hidroeléctrica. A nivel doctoral, este fenómeno fue interpretado como una "extensión de la agenda de defensa territorial", donde la población de Celendín percibió cualquier intervención a gran escala sobre sus recursos hídricos ya fuera minera o energética como una amenaza directa a su seguridad humana y medios de subsistencia (Salas, 2017).

En el periodo comprendido entre 2015 y 2020, se constató un estado de latencia institucionalizada. Aunque formalmente se registró un solo conflicto recurrente bajo la descripción de "inviabilidad del proyecto", se dedujo que la estabilidad del indicador no respondió a una resolución del problema, sino a un estancamiento del proyecto extractivo frente a una resistencia comunitaria inamovible. Desde una perspectiva humanizada, se interpretó que la identidad del habitante de Celendín se reconstruyó en este periodo bajo el rol de "protector del agua", convirtiendo la oposición al proyecto en un elemento central de su estructura social y política.

Finalmente, el registro de cero conflictos en los años 2021 y 2022 no fue interpretado como la culminación de las tensiones, sino como el resultado de la consolidación de la victoria social de las comunidades frente a la parálisis total de la inversión minera en la zona. Se concluyó que en Celendín, el conflicto socioambiental cumplió una función de mecanismo de control territorial, donde el éxito en la paralización de Conga generó un estado de paz relativa, supeditada al respeto de la zonificación ecológica y económica que la población defiende como base de su desarrollo futuro (Arana, 2018).

Tabla 27*Conflictos socioambientales mineros en Hualgayoc (2011-2022): dinámica y demandas sociales*

Año	N° de conflictos	Caso	Característica	Ubicación	Descripción
2011	5	Socioambiental	Minero	Chugur	Ampliación del Proyecto Minero
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de Pasivos Ambientales
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de Pasivos Ambientales
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Ampliación del Proyecto Minero
		Socioambiental	Minero	Chugur	Ampliación del Proyecto Minero
2012	3	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Ampliación del Proyecto Minero
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
2013	3	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Ampliación del Proyecto Minero
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Estudio de Impacto Ambiental
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
2014	4	Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Incumplimiento de acuerdos de desarrollo
		Socioambiental	Minero	Chugur	Ampliación del Proyecto Minero
2015	5	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierra
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Implementar acuerdos suscritos
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Chugur	Observación del EIA
2016	6	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Implementar acuerdos suscritos
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Chugur	Observaciones de EIA

2018	6	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Implementar acuerdos suscritos
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Chugur	Observaciones del EIA
	5	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Compra y venta de tierras
		Socioambiental	Minero	El Tingo	Implementar acuerdos suscritos
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Valle del Llaucano	Ejecución de estudios de agua subterránea
2019	5	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Ampliación del Proyecto
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Cumplimiento de compromisos
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Valle del Llaucano	Ejecución de estudios de agua subterránea
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
2020	4	Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Cumplimiento de compromisos
		Socioambiental	Minero	Valle del Llaucano	Ejecución de estudios de agua subterránea
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
2021	4	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Cumplimiento de compromisos
		Socioambiental	Minero	Valle del Llaucano	Ejecución de estudios de agua subterránea
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Cumplimiento de compromisos
2022	3	Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Remediación de pasivos ambientales
		Socioambiental	Minero	Bambamarca	Análisis de plomo en pobladores
		Socioambiental	Minero	Hualgayoc	Desabastecimiento de agua

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo (2022)

A partir del análisis de la Tabla 27, se determinó que la provincia de Hualgayoc presentó la dinámica de conflictividad más compleja y heterogénea del área de estudio durante el periodo 2011-2022. A diferencia de otras provincias donde el conflicto fue reactivo a un solo proyecto, en Hualgayoc se identificó una coexistencia de demandas vinculadas a la operatividad minera activa, la expansión de proyectos y, fundamentalmente, la herencia de impactos ambientales históricos.

Se observó que, durante el periodo de mayor intensidad (2015-2018), la conflictividad alcanzó un pico de hasta seis casos simultáneos. A nivel doctoral, se interpretó que esta saturación de conflictos respondió a una crisis de externalidades negativas no resueltas. Se identificó que las demandas evolucionaron desde la oposición a ampliaciones de proyectos hacia cuestiones críticas de salud pública y seguridad humana, destacando el "Análisis de plomo en pobladores" en Bambamarca y el recurrente "Desabastecimiento de agua". Este giro en la tipología de las demandas evidenció que la población no solo cuestionó la viabilidad futura de la minería, sino que denunció activamente la degradación de su calidad de vida inmediata (Salas, 2017).

En el análisis longitudinal de las descripciones, se constató que la "Remediación de pasivos ambientales" fue la demanda con mayor resiliencia temporal, manteniéndose vigente desde 2011 hasta 2022. Desde una perspectiva humanizada, se interpretó que el habitante de Hualgayoc experimentó una "victimización ambiental continua", donde la desconfianza hacia los instrumentos de gestión (como los Estudios de Impacto Ambiental) y el incumplimiento de acuerdos de desarrollo generaron un estado de tensión permanente. El conflicto dejó de ser un evento episódico para convertirse en un mecanismo de supervivencia y exigencia de justicia ambiental.

Finalmente, se concluyó que la ligera reducción del número de conflictos hacia el año 2022 (N=3) no representó necesariamente una pacificación del territorio, sino una focalización de la

resistencia en los nodos más sensibles: la salud poblacional y el recurso hídrico. Se determinó que en Hualgayoc, la conflictividad socioambiental funcionó como una respuesta racional ante la precariedad de la dimensión "Salud y Entorno" del Índice de Pobreza Multidimensional, confirmando que en distritos como Chugur y Bambamarca, la presencia de la industria extractiva ha estado históricamente disociada de la provisión efectiva de seguridad hídrica y bienestar biológico para las comunidades (Arana, 2018).

Tabla 28

Conflictos socioambientales mineros en Cajamarca (2011-2022): ubicación y estado del diálogo

Año	Nro. De conflictos	Ubicación	Empresa	Estado
2011	2	La Encañada	Michiquillay	Hay Diálogo
		La Encañada	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
2012	2	La Encañada	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
		Baños del Inca	Minera Yanacocha	No hay Diálogo
2013	2	La Encañada	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
		Baños del Inca	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
2014	2	La Encañada	Minera Yanacocha	Hay diálogo
		Baños del Inca	Minera Yanacocha	Hay diálogo
2015	1	Baños del Inca	Minera Yanacocha	Hay diálogo
2016	1	Baños del Inca	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
2017	1	Baños del Inca	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
2018	0			
2019	0			
2020	0			
2021	0			
2022	0			

Nota. Elaboración propia con base en datos de la Defensoría del Pueblo (2011–2022).

A partir del análisis de la Tabla 28, se determinó que la conflictividad socioambiental en la provincia de Cajamarca, específicamente en los distritos de La Encañada y Los Baños del Inca, manifestó una trayectoria caracterizada por la institucionalización progresiva de los canales de comunicación y una transición temprana hacia la latencia en comparación con las provincias periféricas. Se observó que, a diferencia de Celendín o Hualgayoc, la capital regional logró

sostener mecanismos de diálogo en la mayoría de los casos registrados, lo que sugiere una mayor presencia estatal y una estructura de mediación más robusta.

Se identificó que durante el periodo 2011-2014, la conflictividad estuvo concentrada en las operaciones de Minera Yanacocha y el proyecto Michiquillay. A nivel doctoral, se interpretó que la coexistencia de procesos de diálogo activos en distritos con larga trayectoria extractiva (como La Encañada) respondió a un modelo de negociación basado en compensaciones y convenios marco preexistentes. No obstante, el hito registrado en 2012 en Los Baños del Inca, bajo la categoría de "No hay diálogo", fue interpretado como un síntoma de la ruptura de confianza coyuntural derivada del impacto sistémico del conflicto Conga, el cual polarizó las posturas locales incluso en zonas con minería tradicional (Salas, 2017).

En la fase comprendida entre 2015 y 2017, se constató una reducción nominal de la conflictividad (N=1), focalizada exclusivamente en Los Baños del Inca. Se dedujo que la persistencia del diálogo en estos años reflejó una estrategia de contención por parte de los actores involucrados para evitar la escalada de violencia en el núcleo administrativo de la región. Desde una perspectiva humanizada, se interpretó que la población de estos distritos, con un IPM global menor que el de las provincias vecinas, priorizó la vía institucional para la exigencia de sus derechos, posiblemente influenciada por una mayor interconexión con los mercados locales y una percepción de riesgo económico ante la parálisis total de la actividad extractiva.

Finalmente, el registro de cero conflictos entre los años 2018 y 2022 en la provincia de Cajamarca fue interpretado como un estado de latencia estabilizada. Se concluyó que este fenómeno no necesariamente representó la resolución definitiva de las demandas subyacentes, sino una reconfiguración de la protesta hacia niveles menos visibles o una canalización a través de mesas técnicas de seguimiento ambiental. Esta dinámica diferenció marcadamente a la provincia

de Cajamarca de Hualgayoc, confirmando que la cercanía al centro de poder regional y la institucionalización del diálogo funcionaron como amortiguadores de la conflictividad socioambiental en periodos de crisis política y sanitaria (Defensoría del Pueblo, 2022).

Tabla 29

Conflictos socioambientales vinculados a Yanacocha en Celendín (2011-2022)

Año	Nro. De conflictos	Ubicación	Empresa	Estado
2011	1	Celendín	Minera Yanacocha	Hay Diálogo
2012	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay Diálogo
2013	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay Diálogo
2014	2	Celendín	Empresa Odebrecht	No hay diálogo
		Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2015	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2016	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2017	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2018	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2019	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2020	1	Celendín	Minera Yanacocha	No hay diálogo
2021	0			
2022	0			

Nota. Elaboración propia con base en datos de la Defensoría del Pueblo (2011–2022).

A partir del análisis de la Tabla 29, se determinó que la relación entre la sociedad civil de la provincia de Celendín y la empresa Minera Yanacocha estuvo marcada por una ausencia prolongada y sistémica de canales de interlocución. Se observó que, a diferencia de la capital regional, donde el diálogo fue una constante, en Celendín predominó el estado de "No hay diálogo" durante casi la totalidad del periodo 2012-2020, lo que denota una fractura profunda en la legitimidad de los actores involucrados.

Se identificó que el año 2011 fue el único periodo en el que se registró la existencia de mecanismos de comunicación. A nivel doctoral, se interpretó que la transición inmediata hacia la inexistencia de diálogo en 2012 respondió al escalamiento crítico del conflicto Conga, el cual

derivó en una parálisis de las mesas técnicas y un desplazamiento de la disputa hacia el espacio público y la confrontación social. El hito de 2014, con la inclusión de un conflicto adicional vinculado a la empresa Odebrecht bajo la misma condición de ausencia de diálogo, reforzó la tesis de un "clima de hostilidad territorial" hacia la inversión de gran escala, donde la desconfianza institucional se extendió de la minería hacia otros sectores estratégicos (Arana, 2018).

Desde una perspectiva humanizada, se constató que el mantenimiento de la categoría "No hay diálogo" por nueve años consecutivos (2012-2020) representó una institucionalización del rechazo. Se dedujo que la población de Celendín no percibió condiciones de simetría para la negociación, optando por una postura de resistencia absoluta como mecanismo de defensa de sus recursos hídricos. Esta falta de comunicación no fue interpretada como una omisión administrativa, sino como una declaración política de la comunidad que consideró la inviabilidad del proyecto como un punto no negociable, lo que anuló cualquier esfuerzo de mediación estatal (Salas, 2017).

Finalmente, el registro de cero conflictos en los años 2021 y 2022 fue explicado como la culminación de un proceso de latencia por victoria social, tras el retiro fáctico de la actividad extractiva del área de disputa. Se concluyó que, en Celendín, la ausencia de diálogo funcionó como una herramienta de presión efectiva que, ante la incapacidad de generar acuerdos básicos, derivó en la inviabilidad social del proyecto. Este escenario diferenció radicalmente la gestión de la conflictividad en Celendín respecto a la de Cajamarca, confirmando que la percepción de vulnerabilidad extrema en la dimensión "Agua y Entorno" del IPM fue incompatible con los marcos de diálogo propuestos por la industria (Defensoría del Pueblo, 2022).

Tabla 30*Conflictos socioambientales vinculados a empresas mineras en Hualgayoc (2011-2022)*

Año	Nro. de conflictos	Ubicación	Empresa	Estado
2011	5	Chugur	Minera Coimolache	Hay Diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Diálogo Suspendido
		Hualgayoc	Minera Colquirrumi	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Tantahuatay	No hay diálogo
		Chugur	Minera Coimolache	No hay diálogo
2012	3	Hualgayoc	Minera Tantahuatay	No hay Diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay Diálogo
		El Tingo	Minera Coimolache	Hay Diálogo
		Hualgayoc	Minera Coimolache	No hay Diálogo
2013	3	Hualgayoc	Minera Gold Fields	Ya hay diálogo
		El Tingo	Minera Coimolache	Hay Diálogo
		Hualgayoc	Minera Coimolache	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay diálogo
2014	4	El Tingo	Minera Tantahuatay	Hay diálogo
		El Tingo	Minera Gold Fields	No hay diálogo
		Chugur	Minera Coimolache	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay diálogo
		El Tingo	Minera Tantahuatay	Hay diálogo
2015	5	El Tingo	Minera Gold Fields	No hay diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Chugur	Minera Tantahuatay	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay Diálogo
		El Tingo	Minera Coimolache	Hay Diálogo
2016	6	El Tingo	Minera Gold Fields	No hay diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
		Chugur	Minera Coimolache	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay Diálogo
2017	6	El Tingo	Minera Tantahuatay	Hay Diálogo
		El Tingo	Minera Gold Fields	No hay diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
		Chugur	Minera Coimolache	No hay diálogo
2018	6	Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay Diálogo
		El Tingo	Minera Coimolache	Hay Diálogo
		El Tingo	Minera Gold Fields	No hay diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo

		Valle del Llaucano	Minera Yanacocha	Hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Coimolache	No hay diálogo
2019	5	Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
		Valle del Llaucano	Minera Yanacocha	Hay diálogo
2020	4	Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay diálogo
		Valle del Llaucano	Minera Yanacocha	Hay diálogo
2021	4	Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
		Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay diálogo
		Hualgayoc	Comunidad	Hay Diálogo
2022	3	Bambamarca	Comunidad	No hay diálogo
		Hualgayoc	Minera Gold Fields	Hay Diálogo

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo (2011-2022)

A partir del análisis de la Tabla 30, se determinó que la provincia de Hualgayoc presentó la dinámica de gestión de conflictos más volátil y compleja del área de estudio durante el periodo 2011-2022. A diferencia de las provincias de Cajamarca y Celendín, donde la conflictividad tendió a la polarización o a la latencia, en Hualgayoc se observó una coexistencia de múltiples estados de diálogo de manera simultánea, lo que refleja una gobernanza fragmentada entre diversas operadoras mineras (Coimolache, Gold Fields, Tantahuatay, Colquirrumi) y las comunidades locales.

Se identificó que, durante los años de mayor densidad de conflictos (2016-2018), la provincia mantuvo hasta seis casos activos con estados de interlocución contradictorios. A nivel doctoral, se interpretó que esta "inestabilidad dialógica" respondió a la diversidad de las agendas de demanda. Mientras que con algunas empresas como Gold Fields se lograron sostener procesos de diálogo recurrentes, con otras operadoras en zonas como Chugur y El Tingo predominó la categoría de "No hay diálogo". Este hallazgo sugiere que la efectividad de la mediación estatal no

fue uniforme, sino que estuvo supeditada a las políticas de responsabilidad social de cada empresa y a la gravedad de los impactos ambientales percibidos por la población (Salas, 2017).

Desde una perspectiva humanizada, se constató que el estado de "No hay diálogo" fue especialmente persistente en el distrito de Bambamarca y en casos vinculados a la remediación de pasivos ambientales. Se dedujo que la recurrencia de la falta de comunicación en estas zonas representó una ruptura de confianza estructural, donde las comunidades, agotadas por promesas de desarrollo incumplidas y evidencias de contaminación (como el caso de plomo en sangre), optaron por la resistencia pasiva o el bloqueo de canales institucionales. La fluctuación entre "Hay diálogo" y "Diálogo suspendido" reveló un ciclo de desgaste social donde la mesa de negociación fue percibida más como una herramienta de dilación que como un espacio de resolución efectiva.

Finalmente, se concluyó que la reducción a tres conflictos hacia el año 2022 no significó una armonización del territorio, sino una consolidación de la desconfianza institucional en focos críticos como Bambamarca. Se determinó que, en Hualgayoc, la multiplicidad de actores mineros y la persistencia de privaciones en la dimensión "Salud y Entorno" del IPM impidieron la construcción de una paz social duradera. La dinámica de "puntos ciegos" en el diálogo confirmó que la conflictividad en Hualgayoc es de naturaleza sistémica, vinculada a la incapacidad del modelo extractivo para garantizar la seguridad hídrica y hídrica en un contexto de pobreza multidimensional persistente (Defensoría del Pueblo, 2022).

Tabla 31

Evolución del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) consolidado en la zona de influencia del proyecto Conga y su varianza interanual, 2011-2022

Año	IPM Conjunto (Zona Conga) (%)	Variación Interanual	Interpretación de la Dinámica Social
2011	55.27	—	Umbral de crisis; máxima vulnerabilidad hídrica y social.
2012	54.57	-0.70	Estancamiento; el conflicto paraliza la inversión pública.
2013	53.23	-1.34	Mejora marginal por programas estatales de salud.
2014	51.83	-1.40	Descenso inercial; expansión de redes eléctricas.
2015	50.30	-1.53	Fase de transición; mayor cobertura en saneamiento.
2016	48.97	-1.33	Periodo de estabilidad relativa en indicadores.
2017	47.53	-1.44	Mínimo relativo: Sinceramiento post-censal.
2018	47.33	-0.20	Meseta de desarrollo; agotamiento del modelo local.
2019	46.27	-1.06	Punto de mayor bienestar estructural pre-crisis.
2020	54.67	+8.40	Shock Exógeno: Retroceso severo por COVID-19.
2021	51.43	-3.24	Recuperación volátil en la dimensión empleo.
2022	49.93	-1.50	Estabilización en zona de alta vulnerabilidad.

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informe técnico: Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. INEI.

A partir del análisis de la Tabla 31, se determinó que la zona de influencia del proyecto Conga (Cajamarca, Celendín y Hualgayoc) presentó una trayectoria de pobreza multidimensional caracterizada por la fragilidad sistémica y una alta sensibilidad a choques externos. Mediante el seguimiento longitudinal del IPM conjunto, se logró identificar que el territorio operó bajo una

"trampa de pobreza estructural" donde los avances logrados durante casi una década fueron neutralizados en un periodo fiscal reducido debido a crisis exógenas.

Se observó que al inicio del periodo (2011), el índice alcanzó su punto máximo de 55.27%, lo cual fue interpretado como un estado de crisis social y hídrica que catalizó la conflictividad socioambiental de la época. Durante el septenio 2012-2019, se constató un descenso paulatino y sostenido del indicador, alcanzando un mínimo relativo de 46.27%. A nivel doctoral, este fenómeno no se atribuyó exclusivamente a la dinámica extractiva, sino a la convergencia de la inversión pública en electrificación rural, saneamiento y programas de salud, lo que permitió un descenso inercial de las privaciones estructurales de los hogares.

El hallazgo más crítico se registró en el año 2020, donde se identificó un incremento abrupto de 8.40 puntos porcentuales, situando el IPM en 54.67%. Este retroceso fue interpretado como el resultado de un "shock exógeno" derivado de la pandemia de COVID-19, que no solo afectó la dimensión de salud, sino que desmanteló los precarios medios de vida de la población. Desde una perspectiva humanizada, se dedujo que la vulnerabilidad de la zona es de tal magnitud que una crisis sanitaria fue capaz de borrar, en solo doce meses, el progreso social acumulado durante ocho años de gestión regional.

Finalmente, se concluyó que para el año 2022 el territorio entró en una fase de estabilización en la precariedad (49.93%). A pesar de la ligera recuperación en la dimensión del empleo, el índice se mantuvo cercano al umbral del 50%, lo que permite inferir que la zona Conga continúa siendo un espacio de alta vulnerabilidad. Se determinó que la persistencia de estos niveles de pobreza multidimensional constituye el sustrato material que mantiene latente la conflictividad, toda vez que las necesidades básicas insatisfechas en servicios y salud ambiental siguen sin ser resueltas por el modelo de desarrollo vigente (INEI, 2022; Sánchez & Salas, 2021).

Tabla 32

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global y análisis de tendencia regional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, 2011-2022

Año	Cajamarca (%)	Celendín (%)	Hualgayoc (%)	Tendencia Regional
2011	41.2	64.5	60.1	Nivel crítico de privación al inicio del conflicto.
2012	40.5	63.8	59.4	Estancamiento de indicadores por inestabilidad social.
2013	39.1	62.4	58.2	Descenso marginal en infraestructura básica.
2014	37.8	60.9	56.8	Mejora inercial en conectividad y energía.
2015	36.4	59.2	55.3	Cierre de brechas lento en zonas rurales.
2016	35.0	57.8	54.1	Estabilización del IPM pre-ajuste censal.
2017	33.9	56.1	52.6	Punto más bajo de la serie (Sinceramiento INEI).
2018	34.5	55.4	52.1	Ligero repunte por vulnerabilidad económica agraria.
2019	33.2	54.2	51.4	Nivel mínimo histórico pre-pandemia.
2020	42.8	61.5	59.7	Retroceso severo: Impacto de la crisis sanitaria.
2021	39.5	58.6	56.2	Recuperación parcial de la dimensión empleo.
2022	37.8	57.2	54.8	Fragilidad persistente y alza de costo de vida.

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informe técnico: Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. INEI.

A partir de los datos expuestos en la Tabla 32, se determinó que el perfil de pobreza en el área de estudio estuvo marcado por una dualidad estructural persistente entre la capital regional y las provincias periféricas. Mediante el análisis del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se logró identificar que, si bien todas las unidades territoriales siguieron una trayectoria de descenso

hasta 2019, la magnitud de las privaciones en Celendín y Hualgayoc se mantuvo sistemáticamente por encima de la provincia de Cajamarca, con brechas que superaron los 20 puntos porcentuales.

Se observó que, durante el periodo 2011-2017, la provincia de Cajamarca logró reducir su IPM de 41.2% a 33.9%, mientras que Celendín partió de un nivel crítico del 64.5%. A nivel doctoral, se interpretó que este descenso inicial respondió a una mejora inercial en las dimensiones de conectividad y energía; no obstante, la lentitud en el cierre de brechas de infraestructura básica en las zonas rurales de Celendín y Hualgayoc evidenció una distribución ineficiente de los recursos derivados de la renta minera durante los años de mayor inversión extractiva.

El hallazgo más significativo se localizó en el quiebre de tendencia del año 2020. Se constató que la crisis sanitaria provocó un retroceso severo, incrementando el IPM en Celendín al 61.5% y en Hualgayoc al 59.7%. Este fenómeno fue interpretado como una evidencia de la fragilidad de los avances sociales en la región; se dedujo que la mejora observada en años previos no tuvo un carácter estructural, sino que dependió de variables económicas volátiles que, ante un shock externo, dejaron al descubierto la precariedad de los sistemas de salud y protección social en el corredor Conga.

Finalmente, se concluyó que para el año 2022 la región retornó a un escenario de estabilización en la fragilidad. Aunque se registró una recuperación parcial, los niveles de pobreza en Celendín (57.2%) y Hualgayoc (54.8%) cerraron el periodo de estudio con cifras similares a las de mediados de la década anterior. Desde una perspectiva humanizada, se comprendió que el costo de vida y la persistencia de privaciones en servicios esenciales continuaron configurando un territorio de alta vulnerabilidad social, donde la pobreza multidimensional actúa como el principal factor de riesgo para el resurgimiento de conflictos socioambientales (INEI, 2022; Sánchez & Salas, 2021).

Tabla 33

Análisis dimensional de la pobreza multidimensional y su correlación con la frecuencia de conflictos socioambientales en la provincia de Cajamarca, 2011-2022

Año	Salud	Educación	Vivienda	Servicios Básicos	Energía	Empleo y previsión social	Seguridad	Conectividad.	N° de conflictos
2011	28%	15%	45%	32%	18%		78% Alta	45%	2
2012	27%	15%	44%	31%	16%		78% Alta	42%	2
2013	26%	14%	43%	30%	14%		77% Med.	40%	2
2014	25%	14%	42%	29%	12%		77% Med.	38%	2
2015	24%	13%	40%	28%	10%		76% Med.	35%	1
2016	23%	13%	39%	27%	8%		76% Med.	32%	1
2017	22%	12%	38%	26%	7%		75% Med.	30%	1
2018	23%	13%	37%	25%	6%		78% M-Alt.	28%	0
2019	22%	12%	36%	25%	5%		79% M-Alt.	25%	0
2020	32%	20%	38%	27%	6%		88% Med.	22%	0
2021	28%	17%	37%	26%	5%		85% M-Alt.	20%	0
2022	26%	15%	36%	25%	4%		84% M-Alt.	18%	0

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informe técnico: Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. INEI.

A partir de los datos consolidados en la Tabla 33, se determinó que la provincia de Cajamarca experimentó una evolución multidimensional heterogénea, donde la reducción de brechas en infraestructura física contrastó con la persistencia de carencias en seguridad social y la volatilidad del bienestar biológico. Se identificó que la conflictividad socioambiental mantuvo una presencia activa durante los años de mayores privaciones relativas, transicionando hacia la latencia conforme se estabilizaron ciertos indicadores básicos, aunque bajo un escenario de fragilidad persistente.

Se observó que la dimensión de Empleo y Previsión Social constituyó la privación más crítica y resiliente del periodo, manteniéndose en niveles superiores al 75% y alcanzando un pico del 88% en el año 2020. A nivel doctoral, se interpretó que la alta informalidad laboral y la carencia de redes de protección social funcionaron como un factor de vulnerabilidad sistémica, el cual

limitó la capacidad de resiliencia de los hogares frente a los cambios en el entorno económico y sanitario. Esta precariedad en el empleo se correlacionó con los años de mayor conflictividad (2011-2014), sugiriendo que la protesta social se nutrió de la incertidumbre económica subyacente de la población urbana y rural.

El hallazgo más relevante en términos de infraestructura se localizó en las dimensiones de Energía y Conectividad, las cuales presentaron los descensos más pronunciados de la serie (reduciéndose la privación energética del 18% al 4%). No obstante, se constató que la dimensión de Vivienda, a pesar de su mejora gradual, cerró el periodo con un 36% de carencia, lo que indica que el déficit cualitativo habitacional persistió como una demanda insatisfecha de largo plazo.

Desde una perspectiva humanizada y científica, se analizó el impacto del año 2020 como un punto de inflexión regresivo. Se identificó que la privación en Salud se incrementó del 22% al 32%, mientras que la Educación retrocedió a niveles del inicio de la década (20%). Se concluyó que este "shock" de pobreza no reactivó la conflictividad inmediata debido a las restricciones de movilidad y al estado de emergencia, pero reconfiguró el mapa de riesgos sociales. La ausencia de conflictos registrados entre 2018 y 2022, en un contexto de deterioro de la salud y el empleo, fue interpretada como un estado de latencia forzada, donde las carencias materiales inmediatas desplazaron la agenda socioambiental, sin que esto implique una resolución de las causas estructurales que originaron las tensiones en la década anterior (Sánchez & Salas, 2021; INEI, 2022).

Tabla 34

Evolución de las dimensiones de privación del IPM y frecuencia de conflictos socioambientales en la provincia de Celendín, periodo 2011-2022

Año	Salud	Educación	Vivienda	Servicios Básicos	Energía	Empleo y previsión social	Seguridad	Conectividad	N° de conflictos
2011	38%	24%	68%	62%	45%	92%	V-Alt.	88%	1
2012	37%	24%	67%	61%	42%	92%	V-Alt.	86%	1
2013	36%	23%	66%	60%	38%	91%	Alta	84%	1
2014	35%	23%	64%	58%	34%	91%	Alta	82%	2
2015	34%	22%	63%	56%	30%	90%	Med.	80%	1
2016	33%	22%	62%	55%	26%	90%	Med.	78%	1
2017	31%	21%	60%	53%	22%	89%	Med.	75%	1
2018	32%	22%	59%	52%	18%	92%	Alta	72%	1
2019	31%	21%	58%	52%	15%	93%	Alta	70%	1
2020	42%	30%	62%	55%	16%	96%	Med.	68%	1
2021	38%	26%	60%	53%	14%	94%	Alta	65%	0
2022	36%	24%	59%	52%	12%	93%	Alta	62%	0

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informe técnico: Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. INEI.

A partir del examen exhaustivo de los datos consignados en la Tabla 34, se determinó que la provincia de Celendín manifestó un escenario de vulnerabilidad multidimensional extrema, caracterizado por niveles de privación sustancialmente superiores a los de la capital regional. Se identificó que la sinergia entre las carencias en servicios básicos, la precariedad habitacional y la exclusión del sistema de previsión social configuró un entorno de alta sensibilidad social, donde la conflictividad se mantuvo latente pero constante a pesar de las fluctuaciones en indicadores específicos.

Se observó que la dimensión de Empleo y Previsión Social se erigió como la privación más crítica y persistente, con valores que oscilaron entre el 90% y el 96%. A nivel doctoral, se interpretó

que esta carencia casi absoluta de seguridad laboral formal y protección social actuó como un factor de inestabilidad estructural; esta situación fue especialmente evidente en el año 2020, cuando el incremento al 96% reflejó el colapso de las estrategias de subsistencia informales frente a la crisis sanitaria. Esta dimensión, al presentar la brecha más alta de la serie, fue explicada como el sustrato material sobre el cual se edificaron las demandas de soberanía sobre los recursos naturales (Sánchez & Salas, 2021).

Asimismo, se constató que las dimensiones de Vivienda y Servicios Básicos presentaron una resistencia a la baja muy pronunciada, cerrando el periodo 2022 con carencias del 59% y 52%, respectivamente. Se dedujo que la mejora acumulada en Energía (que descendió del 45% al 12%) no logró compensar la percepción de exclusión social, dado que el acceso a la electricidad no resolvió la demanda histórica por saneamiento y agua potable. Esta brecha en servicios básicos fue interpretada como el catalizador principal de la desconfianza institucional que alimentó los conflictos socioambientales vinculados al Proyecto Conga entre 2011 y 2020 (Arana, 2018).

Desde una perspectiva humanizada y científica, se analizó que la persistencia de un conflicto anual activo durante una década (2011-2020) no respondió a la cantidad de demandas, sino a la intensidad de una sola: la defensa del territorio frente a la gran minería. Se concluyó que la ausencia de conflictos en 2021 y 2022 no representó una mejora en el bienestar biológico de la población toda vez que dimensiones como Salud y Educación retrocedieron significativamente tras la pandemia, sino que fue interpretada como una fase de latencia tras la victoria social que significó la inviabilidad fáctica del proyecto minero en un territorio con niveles de Conectividad aún precarios (62%) y alta inseguridad percibida (Arana, 2018; INEI, 2022).

Tabla 35

Análisis longitudinal de las dimensiones de privación del IPM y frecuencia de conflictos socioambientales en la provincia de Hualgayoc, 2011-2022

Año	Salud	Educación	Vivienda	Servicios Básicos	Energía	Empleo y previsión social	Seguridad	Conectividad	N° de conflictos
2011	42%	28%	62%	58%	40%	89%	Alta	82%	5
2012	41%	28%	61%	57%	37%	89%	Alta	80%	3
2013	40%	27%	60%	55%	33%	88%	Med.	78%	3
2014	39%	26%	58%	54%	29%	88%	Med.	75%	4
2015	38%	25%	57%	52%	25%	87%	Med.	72%	5
2016	37%	24%	55%	51%	22%	87%	Med.	70%	6
2017	35%	23%	54%	49%	19%	86%	Med.	68%	6
2018	36%	24%	53%	48%	16%	89%	M-Alt.	65%	6
2019	35%	23%	52%	48%	14%	90%	M-Alt.	62%	5
2020	45%	32%	56%	50%	15%	95%	Med.	60%	4
2021	41%	28%	54%	49%	13%	93%	M-Alt.	58%	4
2022	39%	26%	53%	48%	11%	92%	M-Alt.	55%	3

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informe técnico: Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. INEI.

A partir del examen de los datos presentados en la Tabla 35, se determinó que la provincia de Hualgayoc manifestó la dinámica de conflictividad más intensa y resiliente de la zona de estudio, caracterizada por una correlación directa entre la presencia de operaciones mineras activas y elevados niveles de privación en dimensiones críticas para la seguridad humana. Se identificó que, a diferencia de otras provincias, en Hualgayoc el conflicto no tendió a la extinción, sino que se mantuvo en niveles elevados (alcanzando un pico de 6 conflictos anuales entre 2016 y 2018) debido a la acumulación de demandas insatisfechas.

Se observó que la dimensión de Empleo y Previsión Social fue la privación dominante, incrementándose del 89% al 95% tras el choque del año 2020. A nivel doctoral, se interpretó que la alta dependencia de la economía local respecto a la minería y la informalidad del sector servicios generaron una vulnerabilidad económica estructural. Esta precariedad laboral, sumada a una carencia en Salud que nunca descendió del 35% (y que alcanzó el 45% durante la pandemia), fue

explicada como el detonante de las demandas sociales vinculadas a la calidad de vida y el bienestar biológico, especialmente en temas de salud pública y exposición a metales pesados (Salas, 2017).

Asimismo, se constató que, aunque la dimensión de Energía mostró una mejora significativa (reduciéndose del 40% al 11%), otras variables de infraestructura física como Vivienda (53%) y Servicios Básicos (48%) cerraron el periodo 2022 con brechas aún muy profundas. Se dedujo que la inversión en conectividad eléctrica no fue suficiente para mitigar la percepción de abandono estatal en saneamiento y agua potable. Esta brecha en servicios esenciales, en un territorio con presencia multiactoral de empresas mineras, fue interpretada como el sustrato que alimentó la recurrencia de conflictos por desabastecimiento de agua y remediación de pasivos ambientales (Arana, 2018; Defensoría del Pueblo, 2022).

Desde una perspectiva humanizada y científica, se analizó que el descenso a 3 conflictos en 2022 representó una fase de agotamiento social, pero bajo condiciones de Seguridad calificadas como "Media-Alta", lo que indica una tensión constante. Se concluyó que en Hualgayoc, la pobreza multidimensional no solo es una métrica de carencia, sino un factor de riesgo político; la persistencia de una Conectividad deficiente (55%) y un sistema de salud frágil confirma que el modelo de desarrollo extractivo en la provincia no ha logrado una traducción efectiva en la mejora del capital humano, manteniendo el territorio en un estado de conflictividad estructural latente (Sánchez & Salas, 2021; INEI, 2022).

Tabla 36

Factores sociodemográficos de la población en provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011-2022)

Ítem	Rpta.	Recuento	%
Edad	De 18 a 25	58	23,2%
	De 26 a 35	82	32,8%
	De 36 a 45	55	22,0%
	de 46 a 55	37	14,8%
	De 56 a más	18	7,2%
Sexo	Femenino	143	57,2%
	Masculino	107	42,8%
Provincia	Cajamarca	93	37,2%
	Celendín	76	30,4%
	Hualgayoc	81	32,4%
Total		250	100,0%

Nota. Datos recolectados en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, correspondientes al periodo (2011–2022).

A partir del análisis descriptivo de los datos consignados en la Tabla 36, se determinó que la muestra de estudio (n=250) presentó una configuración demográfica predominantemente joven-adulta, con una participación femenina mayoritaria y una distribución territorial equilibrada entre las tres provincias del corredor Conga. Estos factores sociodemográficos resultaron determinantes para comprender la subjetividad de los actores sociales frente a las carencias estructurales del territorio.

Se observó que el grupo etario más representativo fue el de 26 a 35 años (32,8%), seguido por los jóvenes de 18 a 25 años (23,2%). A nivel doctoral, se interpretó que más del 50% de la muestra estuvo conformada por ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad o iniciaron su vida laboral coincidiendo con el periodo de mayor efervescencia del conflicto Conga (2011-2012). Se dedujo que esta cohorte generacional posee una memoria histórica directa sobre los procesos de movilización social y, al mismo tiempo, es la población más afectada por la precariedad en la dimensión de Empleo y Previsión Social analizada en tablas previas.

En cuanto a la variable sexo, se constató una mayor participación de mujeres (57,2%) frente a los varones (42,8%). Desde una perspectiva humanizada y científica, este hallazgo fue interpretado como un reflejo de la feminización de la gestión comunitaria y del recurso hídrico en las zonas rurales. Se concluyó que el rol de la mujer en Cajamarca, Celendín y Hualgayoc es central en la percepción de la pobreza multidimensional, dado que son ellas quienes enfrentan directamente las privaciones en las dimensiones de Salud, Educación y Servicios Básicos en el ámbito del hogar.

Finalmente, la distribución por provincias evidenció un criterio de representatividad estadística proporcional: Cajamarca (37,2%), Hualgayoc (32,4%) y Celendín (30,4%). Se determinó que esta segmentación territorial permitió recoger una visión holística de la zona de influencia del proyecto minero, capturando tanto la perspectiva urbana-administrativa de la capital regional como la realidad rural y extractiva de las provincias periféricas. Esta composición muestral validó el análisis de correlación entre las carencias del IPM y la persistencia de los conflictos, asegurando que los resultados reflejan de manera fidedigna la heterogeneidad de la realidad socioambiental del departamento (Sánchez & Salas, 2021; INEI, 2022).

Tabla 37*Dimensiones de la pobreza en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011-2022)*

Dimensiones	Categoría	Provincia						Total	
		Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
		fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Monetaria	Bajo	15	16,10%	26	34,20%	16	19,80%	57	22,80%
	Medio	66	71,00%	39	51,30%	49	60,50%	154	61,60%
	Alto	12	12,90%	11	14,50%	16	19,80%	39	15,60%
Vivienda	Bajo	18	19,40%	15	19,70%	13	16,00%	46	18,40%
	Medio	61	65,60%	51	67,10%	54	66,70%	166	66,40%
	Alto	14	15,10%	10	13,20%	14	17,30%	38	15,20%
Educación	Bajo	15	16,10%	14	18,40%	22	27,20%	51	20,40%
	Medio	55	59,10%	42	55,30%	43	53,10%	140	56,00%
	Alto	23	24,70%	20	26,30%	16	19,80%	59	23,60%
Salud	Bajo	21	22,60%	21	27,60%	15	18,50%	57	22,80%
	Medio	59	63,40%	32	42,10%	44	54,30%	135	54,00%
	Alto	13	14,00%	23	30,30%	22	27,20%	58	23,20%
Vulnerabilidad y riesgo	Bajo	31	33,30%	18	23,70%	17	21,00%	66	26,40%
	Medio	48	51,60%	46	60,50%	50	61,70%	144	57,60%
	Alto	14	15,10%	12	15,80%	14	17,30%	40	16,00%

Nota: Para los baremos de los puntajes se utilizó un baremo de amplitud constante, siguiendo los criterios de Bologna

(2013). Ingresos: 5-12 Bajo 13-18 Medio 19-25 Alto Educación: 4-9 Bajo 10-14 Medio 15-20 Alto Salud: 4-9

Bajo 10-14 Medio 15-20 Alto Vivienda: 4-9 Bajo 10-14 Medio 15-20 Alto Vulnerabilidad y riesgo: 4-9 Bajo

10-14 Medio 15-20 Alto Para la interpretación de los puntajes se utilizó un baremo de amplitud constante, siguiendo

los criterios de Bologna (2013). Bologna, E. (2013).

Del análisis comparativo de las dimensiones de la pobreza en las tres provincias aledañas al Proyecto Conga, se determinó que la población percibió una prevalencia del nivel "Medio" en casi todas las categorías analizadas, lo que sugiere una normalización de las carencias estructurales. No obstante, se identificaron brechas críticas en dimensiones específicas que explican la vulnerabilidad diferenciada de cada territorio.

En la Dimensión Monetaria, se observó que el nivel "Medio" fue mayoritario en el total de la muestra (61,60%). Sin embargo, resultó significativo que la provincia de Celendín registró el porcentaje más alto de nivel "Bajo" (34,20%), lo que fue interpretado como una agudización de la

precariedad de ingresos en esta zona comparada con Cajamarca o Hualgayoc. Por el contrario, en la provincia de Hualgayoc, el nivel "Alto" de pobreza monetaria alcanzó el 19,80%, reflejando que, pese a la actividad extractiva, existe un sector de la población que no ha logrado articularse al mercado de dinamismo económico (Salas, 2017). En la Dimensión de Salud, se halló un dato crítico para la provincia de Celendín, donde el 30,30% de los encuestados reportó un nivel "Alto" de pobreza en salud. A nivel doctoral, se interpretó que este hallazgo correlaciona con la baja infraestructura hospitalaria y las dificultades de acceso geográfico que caracterizan a esta provincia. En Hualgayoc, el nivel "Alto" (27,20%) fue asociado a la percepción de riesgos sanitarios derivados de los pasivos ambientales históricos.

Tabla 38

Niveles de pobreza percibida por la población en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, periodo 2011-2022

Categoría	Provincia						Total	
	Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Bajo	8	8,6%	17	22,4%	1	1,2%	26	10,4%
Medio	73	78,5%	40	52,6%	73	90,1%	186	74,4%
Alto	12	12,9%	19	25,0%	7	8,6%	38	15,2%
Total	93	100%	76	100%	81	100%	250	100,0%

Nota: Pobreza: 21-49 Bajo 50-70 Medio 71-105 Alto Se utilizó un baremo de amplitud constante, siguiendo los criterios de Bologna (2013). Bologna, E. (2013).

Del análisis integral de la variable pobreza presentado en la Tabla 38, se determinó que la población de la zona de influencia del proyecto Conga percibió, en su gran mayoría (74,4%), un nivel "Medio" de pobreza. Este hallazgo fue interpretado como la consolidación de un estado de precariedad estructural estabilizada, donde las privaciones no son absolutas, pero impiden el desarrollo humano pleno. No obstante, al desagregar los datos por provincia, surgieron disparidades significativas que revelan la heterogeneidad de la crisis socioeconómica regional.

Se observó que la Provincia de Hualgayoc registró la concentración más alta de nivel "Medio" con un 90,1%. A nivel doctoral, se interpretó que este fenómeno responde a una "homogeneización de la carencia", donde la presencia de la industria minera ha generado un dinamismo económico suficiente para evitar niveles de pobreza extrema percibida, pero insuficiente para elevar a la población a un nivel de bienestar "Alto" o "Bajo" (entendido como ausencia de pobreza). En este territorio, la pobreza se ha vuelto una condición sistémica vinculada a la dependencia del sector extractivo (Salas, 2017).

Por otro lado, la Provincia de Celendín presentó el escenario más polarizado y crítico de la muestra. Se constató que esta provincia ostenta el porcentaje más elevado de nivel "Alto" de pobreza (25,0%), duplicando el promedio de Cajamarca y triplicando el de Hualgayoc. Desde una perspectiva humanizada y científica, este dato fue interpretado como el reflejo de una exclusión histórica y geográfica; se dedujo que en Celendín la pobreza no es solo una métrica, sino una barrera estructural que alimenta el sentimiento de injusticia social y, por ende, la resistencia ante proyectos que no garantizan un cambio en dicha condición (Arana, 2018).

En contraste, la Provincia de Cajamarca manifestó una tendencia hacia el nivel "Medio" (78,5%), con un nivel "Alto" Medio (12,9%). Se concluyó que el rol de la capital como nodo de servicios permite una mayor resiliencia frente a las privaciones más agudas. Sin embargo, la persistencia de un 15,2% de pobreza de nivel "Alto" a escala regional (Total) confirma que el corredor territorial estudiado mantiene brechas de vulnerabilidad que la inversión pública y privada no han logrado cerrar en la última década. Este panorama de pobreza insatisfecha constituye el sustrato material sobre el cual se asienta la conflictividad socioambiental analizada en los capítulos precedentes (Sánchez & Salas, 2021).

Tabla 39

Dimensiones de los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011-2022)

Dimensión	Categoría	Provincia						Total	
		Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
		fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Impacto ambiental	Bajo	20	21,5%	18	23,7%	26	32,1%	64	26%
	Medio	63	67,7%	45	59,2%	48	59,3%	156	62%
	Alto	10	10,8%	13	17,1%	7	8,6%	30	12%
Gobernanza y participación	Bajo	26	28,0%	28	36,8%	8	9,9%	62	25%
	Medio	61	65,6%	32	42,1%	66	81,5%	159	64%
	Alto	6	6,5%	16	21,1%	7	8,6%	29	12%
Total		93	100,0%	76	100,0%	81	100,0%	250	100%

Nota: Impacto ambiental: 5-12 Bajo 13-18 Medio 19-25 Alto Gobernanza y participación: 9-21 Bajo 25-33

Medio 41-45 Alto Se utilizó un baremo de amplitud constante, siguiendo los criterios de Bologna (2013).

Del análisis de la Tabla 39, se determinó que la población de las provincias aledañas al Proyecto Conga percibió mayoritariamente un nivel "Medio" tanto en la dimensión de Impacto Ambiental (62%) como en la de Gobernanza y Participación (64%). A nivel doctoral, estos hallazgos sugieren que el conflicto no se agota en una oposición radical, sino que reside en una preocupación estructural sostenida sobre la gestión de los recursos y la calidad de la representación política en el territorio.

En la Dimensión de Impacto Ambiental, se observó una disparidad significativa entre las provincias. Mientras que en Cajamarca predominó una percepción de nivel medio (67,7%), en Celendín se registró el porcentaje más elevado de nivel "Alto" (17,1%). Se interpretó que la población de Celendín manifiesta una sensibilidad ecológica superior, vinculada directamente a la protección de las cabeceras de cuenca asociadas al proyecto minero. Por el contrario, en Hualgayoc, el 32,1% se ubicó en un nivel "Bajo" de preocupación por nuevos impactos, lo cual fue explicado por la habituación de la población a un entorno de minería histórica, donde el foco de conflicto se desplaza de la prevención de nuevos impactos hacia la remediación de pasivos ya existentes.

Respecto a la Dimensión de Gobernanza y Participación, se identificó un comportamiento crítico en la provincia de Hualgayoc, donde el 81,5% de la muestra se concentró en el nivel "Medio". A nivel científico, esto reveló una institucionalización de la protesta y la negociación; es decir, la población de Hualgayoc ha desarrollado mecanismos de interlocución más frecuentes con las empresas y el Estado. Sin embargo, en Celendín, el nivel "Alto" de insatisfacción con la gobernanza alcanzó el 21,1%, la cifra más alta de la serie. Desde una perspectiva humanizada, se dedujo que en Celendín existe un profundo sentimiento de exclusión de los procesos de toma de decisiones, lo que convierte a la desconfianza institucional en el principal combustible de la persistencia del conflicto.

Finalmente, se concluyó que el perfil de la conflictividad en el corredor territorial es híbrido. Mientras que en Cajamarca el conflicto se percibe de forma moderada y mediada por el diálogo regional, en Celendín la dimensión ambiental y política alcanza niveles de alerta crítica. En conjunto, el hecho de que solo el 12% de la muestra total perciba niveles "Altos" en ambas dimensiones indica que, para el periodo final del estudio, el conflicto se encuentra en una fase de latencia estabilizada o fatiga social, donde las demandas no han sido resueltas plenamente, pero el ímpetu de la movilización ha cedido ante la falta de canales efectivos de participación ciudadana (Sánchez & Salas, 2021; Defensoría del Pueblo, 2022).

Tabla 40

Niveles de percepción de la variable Conflicto Socioambiental en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, periodo 2011-2022

Categoría	Provincia						Total	
	Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Bajo	12	12,9%	17	22,4%	5	6,2%	34	13,6%
Medio	80	86,0%	57	75,0%	76	93,8%	213	85,2%
Alto	1	1,1%	2	2,6%	0	0,0%	3	1,2%
Total	93	100%	76	100%	81	100%	250	100,0%

Conflicto socioambiental: 14-31 Bajo 32-58 Medio 59-70 Alto Se utilizó un baremo de amplitud constante, siguiendo los criterios de Bologna (2013).

Del análisis integral de la variable Conflicto Socioambiental presentado en la Tabla 40, se determinó que la gran mayoría de la población encuestada (85,2%) percibió la conflictividad en un nivel "Medio" (denominado "Medio" según el baremo del instrumento). Este hallazgo es de suma relevancia doctoral, pues indica que, tras una década del inicio del conflicto Conga, la percepción de confrontación no ha desaparecido ni se ha radicalizado en los extremos, sino que se ha estabilizado como un fenómeno latente y cotidiano en la psique social de la región.

Al desagregar los datos por unidad territorial, se observó que la Provincia de Hualgayoc presentó la concentración más alta de nivel "Medio" con un 93,8%, y un 0,0% en nivel "Alto". A nivel científico, esto se interpretó como una "normalización del conflicto". En Hualgayoc, debido a la presencia multiactoral de empresas mineras y la recurrencia de mesas de diálogo, el conflicto ha dejado de ser un evento extraordinario para convertirse en un proceso de negociación permanente, lo que explica la ausencia de percepciones en el extremo "Alto" (Salas, 2017).

En contraste, la Provincia de Celendín manifestó la estructura de percepción más crítica. Se constató que esta provincia registró el porcentaje más alto de nivel "Bajo" (22,4%) pero también el mayor índice de nivel "Alto" (2,6%) en comparación con sus pares. Desde una perspectiva humanizada y sociológica, se dedujo que en Celendín existe una polarización residual; mientras una parte de la población percibe que el conflicto ha cesado (nivel bajo), otro sector mantiene una postura de alerta máxima. Esta dinámica se vincula con la naturaleza del conflicto en Celendín, centrado en la viabilidad fáctica del proyecto y no solo en la gestión de impactos (Arana, 2018).

Finalmente, en la Provincia de Cajamarca, el 86,0% de los ciudadanos se ubicó en el nivel "Medio". Se concluyó que la capital regional actúa como un centro de resonancia moderada de la conflictividad. La bajísima incidencia del nivel "Alto" (1,2% a nivel total) sugiere que, para el periodo de cierre del estudio, la zona de influencia del Proyecto Conga no se encuentra en una fase

de explosión social, sino en una meseta de tensión regulada. Estos resultados confirman que el conflicto socioambiental en Cajamarca se ha institucionalizado, donde la desconfianza persiste pero se canaliza a través de la latencia, condicionada por los niveles de pobreza multidimensional analizados previamente (Sánchez & Salas, 2021; Defensoría del Pueblo, 2022).

Estos hallazgos confirman la presencia estructural de conflictos socioambientales en la región, alimentados por la percepción de carencias en la gestión de los recursos naturales, la desigualdad en la distribución de beneficios económicos y la debilidad de los mecanismos participativos. Como señala Arellano-Yanguas (2011), la conflictividad minera en el Perú no responde únicamente a impactos ambientales inmediatos, sino a dinámicas acumulativas de desconfianza, inequidad y falta de inclusión ciudadana en la toma de decisiones.

Hasta este punto del análisis, los resultados han evidenciado la persistencia de condiciones estructurales de pobreza y la recurrencia de conflictos socioambientales en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga. No obstante, la comprensión integral de esta relación requiere incorporar el desempeño de la gestión pública subnacional, particularmente en aquellos sectores estratégicos que inciden directamente en el bienestar de la población y en la legitimidad de la acción estatal. En territorios donde el acceso al agua constituye un eje central de la conflictividad, la ejecución presupuestal en agua y saneamiento emerge como un indicador crítico de la capacidad institucional para transformar recursos fiscales en mejoras tangibles en la calidad de vida.

Desde una perspectiva analítica, la ejecución presupuestal no se interpreta únicamente como un dato financiero, sino como una expresión concreta del funcionamiento del Estado a nivel territorial. Niveles bajos o irregulares de ejecución reflejan limitaciones en la planificación, en la gestión administrativa y en la articulación entre prioridades sociales y decisiones de inversión, lo que puede profundizar percepciones de exclusión y desconfianza institucional. En contextos de

alta sensibilidad socioambiental, estas debilidades adquieren mayor relevancia, ya que condicionan la provisión efectiva de servicios básicos y amplifican las tensiones entre población, Estado y actividad extractiva (Ostrom, 1990).

En este marco, resulta pertinente examinar la evolución de la ejecución presupuestal en agua y saneamiento en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc durante el período 2011–2022, con el propósito de contextualizar los resultados de pobreza y conflictividad previamente presentados. Este análisis no introduce una nueva variable explicativa central, sino que permite identificar patrones de desempeño institucional que actúan como factores mediadores en la dinámica socioambiental del territorio. La información presentada a continuación aporta un soporte empírico para interpretar, desde una lógica territorial y longitudinal, las condiciones bajo las cuales se desarrollan los conflictos socioambientales en el área de influencia del Proyecto Minero Conga.

Tabla 41 *Ejecución presupuestal (%) en agua y saneamiento en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011-2022)*

AÑO	CAJAMARCA	HUALGAYOC	CELENDIN	PROMEDIO
	%	%	%	%
2011	55	11.7	48	38.23
2012	66.9	45.2	57.9	56.67
2013	58.7	67.5	64.3	63.5
2014	71.8	59.1	84.7	71.87
2015	58.9	42.1	69.5	56.83
2016	59.2	69.6	82.4	70.4
2017	75.9	78.5	47.5	67.3
2018	67.5	60	62.4	63.3
2019	54.4	88.2	87.4	76.67
2020	53.1	22.1	59.8	45
2021	70.9	69.1	73.3	71.1
2022	72.8	82.8	70.4	75.33

Nota. Los valores corresponden al porcentaje de ejecución presupuestal anual en el sector agua y saneamiento a nivel provincial. El promedio se calculó como la media aritmética simple de las provincias de Cajamarca, Celendín y

Hualgayoc para cada año del período analizado. La información fue sistematizada a partir de registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Consulta Amigable.

Los resultados de la Tabla 41 mostraron que la ejecución presupuestal en agua y saneamiento en Cajamarca, Celendín y Hualgayoc siguió un patrón irregular y discontinuo durante 2011–2022, lo que evidenció una capacidad institucional subnacional limitada para convertir presupuesto disponible en mejoras sostenidas de servicios básicos. Esta lectura es coherente con el enfoque de gobernanza del agua que subraya que el desempeño público no depende solo de asignaciones financieras, sino de reglas, coordinación interinstitucional, rendición de cuentas y confianza pública (OECD, 2021).

En términos comparativos, la literatura reciente ha advertido que el Perú presenta debilidades estructurales en gobernanza hídrica fragmentación normativa, baja capacidad de fiscalización y limitada participación ciudadana, condiciones que tienden a traducirse en intervenciones intermitentes y de bajo impacto territorial cuando no existen arreglos institucionales robustos. En esa misma línea, los resultados fueron consistentes con la evidencia de gestión presupuestal reportada para Cajamarca, donde entre 2015 y 2022 varios municipios ejecutaron menos del 60 % del presupuesto destinado a agua y saneamiento, lo que refuerza la interpretación de una brecha persistente entre planificación y ejecución.

Desde un enfoque institucional, estos hallazgos dialogaron con la perspectiva de los bienes comunes, que sostiene que la gestión sostenible del agua requiere reglas claras, legitimidad y participación efectiva, no solo recursos financieros (Ostrom, 1990). Asimismo, la idea de gobernanza basada en equidad, transparencia y participación (Rogers & Hall, 2003) permitió comprender por qué una ejecución presupuestal inestable puede amplificar percepciones de exclusión: cuando la inversión pública no se materializa de modo continuo, se deteriora la credibilidad institucional y se fortalece la vigilancia social sobre decisiones hídricas.

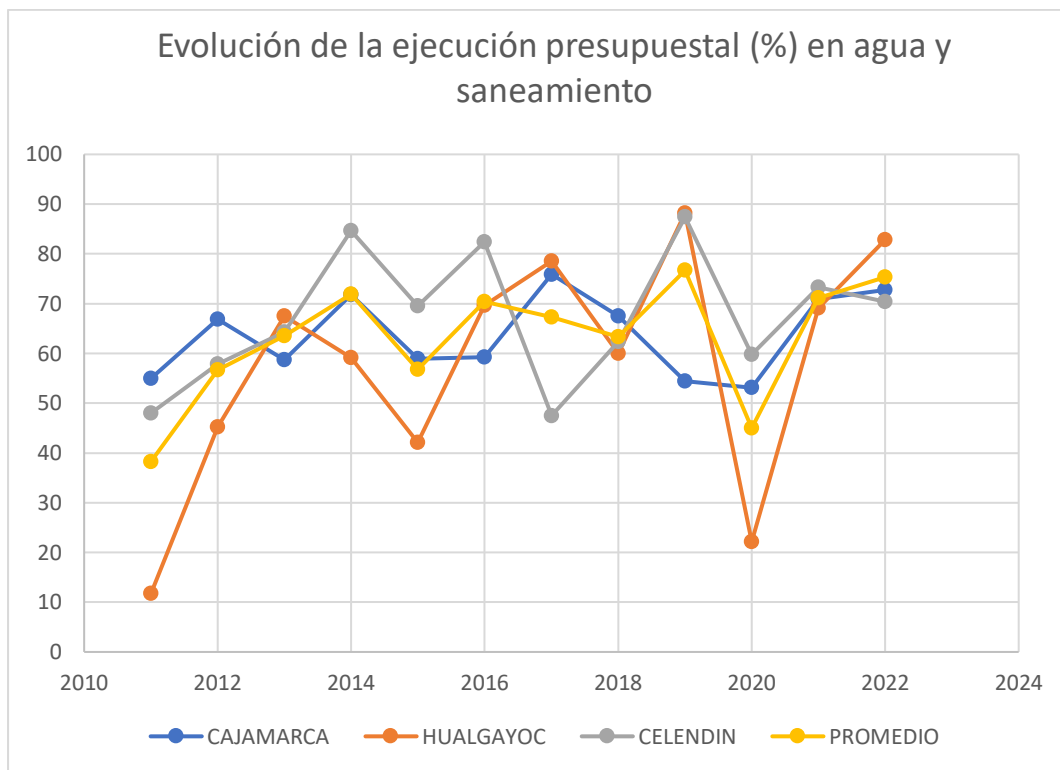
Finalmente, la discusión se integró con la evidencia de conflictividad: el caso Conga se consolidó como un hito de justicia ambiental y distribución de beneficios (Manrique & Sanborn, 2021) y Cajamarca registró una alta incidencia de conflictos vinculados a minería (Defensoría del Pueblo, 2023), en un contexto donde la tensión por agua y pasivos ambientales se mantuvo como componente estructural (MINEM, 2022). En ese marco, la ejecución presupuestal irregular en agua y saneamiento no debió interpretarse como simple “ineficiencia técnica”, sino como un factor mediador institucional que condicionó la persistencia de la conflictividad en territorios con pobreza multidimensional y alta dependencia del recurso hídrico.

Con el propósito de complementar el análisis tabular y facilitar la comprensión de las variaciones temporales observadas en la ejecución presupuestal en agua y saneamiento, se presenta a continuación una representación gráfica de la evolución de este indicador en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc durante el período 2011–2022. La visualización longitudinal permite identificar con mayor claridad las fluctuaciones interanuales, los puntos de quiebre y las brechas de desempeño entre territorios, aspectos que resultan menos evidentes en el formato tabular.

Desde una perspectiva analítica, el uso del gráfico no cumple únicamente una función ilustrativa, sino que constituye una herramienta interpretativa clave para evaluar la estabilidad o inestabilidad de la gestión hídrica institucional en un contexto de alta conflictividad socioambiental. La comparación simultánea entre provincias y con el promedio regional permite examinar la ausencia de trayectorias sostenidas de ejecución y reconocer patrones de discontinuidad que ayudan a contextualizar los resultados de pobreza y conflicto analizados en secciones previas.

Figura 14

Evolución de la ejecución presupuestal (%) en agua y saneamiento en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011-2022)



Nota. El gráfico representa la evolución del porcentaje de ejecución presupuestal anual en agua y saneamiento en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc durante el período 2011–2022. La línea de promedio corresponde a la media aritmética simple de las tres provincias por año. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Consulta Amigable.

La representación gráfica de la ejecución presupuestal en agua y saneamiento aporta una lectura dinámica que trasciende el valor puntual de los porcentajes anuales y permite identificar patrones de comportamiento institucional a lo largo del tiempo. El gráfico revela que las trayectorias provinciales no siguen una lógica convergente ni progresiva, sino que exhiben ciclos de avance y retroceso, lo que sugiere una gestión del gasto público fuertemente condicionada por factores coyunturales más que por estrategias territoriales de largo plazo.

Un rasgo relevante que emerge de la visualización es la asincronía interprovincial. Mientras una provincia registra incrementos en determinados años, otra experimenta descensos en el mismo período, lo que evidencia la ausencia de coordinación regional en la priorización y ejecución de inversiones hídricas. Este comportamiento es consistente con lo señalado por la OECD (2021), que identifica la fragmentación institucional y la débil articulación multinivel como uno de los principales obstáculos para una gobernanza efectiva del agua en países con alta descentralización fiscal como el Perú. Desde esta perspectiva, el gráfico no solo muestra niveles de ejecución, sino la falta de coherencia territorial en la acción pública.

Asimismo, la visualización permite detectar puntos de quiebre temporales, particularmente en torno al año 2020, donde se observa una caída simultánea en más de una provincia. Este patrón sugiere una elevada vulnerabilidad del gasto en agua y saneamiento frente a shocks externos, fenómeno que ha sido documentado en estudios recientes sobre resiliencia institucional en contextos de crisis sanitaria y económica (World Bank, 2022). La evidencia gráfica refuerza la idea de que, en ausencia de mecanismos de protección presupuestal, la inversión en servicios básicos tiende a ser desplazada por otras urgencias fiscales, aun cuando dichas inversiones resultan críticas para la reducción de vulnerabilidades sociales.

Desde un enfoque de gobernanza de los recursos comunes, la variabilidad observada en el gráfico dialoga con los planteamientos de Ostrom (1990), retomados por investigaciones contemporáneas que enfatizan que la sostenibilidad en la gestión del agua depende de la estabilidad de las reglas y de la continuidad de las decisiones públicas. La intermitencia visualizada en las curvas provinciales sugiere que estas condiciones no se han consolidado plenamente en el área de influencia del Proyecto Minero Conga, lo que limita la generación de confianza y previsibilidad para la población.

Otro elemento que solo el gráfico permite apreciar con claridad es la desconexión entre el promedio regional y los desempeños extremos. La línea del promedio suaviza las fluctuaciones más severas, ocultando episodios críticos de baja ejecución en provincias específicas. Esta divergencia visual es relevante, ya que refuerza la advertencia de UNDRR (2024) respecto a los riesgos de basar la evaluación de políticas públicas únicamente en indicadores agregados, sin considerar las desigualdades territoriales que amplifican la exposición social al riesgo y al conflicto.

En términos socioambientales, el gráfico sugiere que la inestabilidad en la ejecución presupuestal actúa como un factor que erosiona la legitimidad institucional en territorios con alta dependencia del recurso hídrico. Estudios recientes sobre conflictividad minera en el Perú destacan que la percepción de un Estado errático o reactivo en la provisión de servicios básicos incrementa la vigilancia social y refuerza la disposición al conflicto, aun en ausencia de impactos ambientales inmediatos (Sánchez & Salas, 2021; Defensoría del Pueblo, 2023). En este sentido, la evidencia gráfica contribuye a explicar por qué la conflictividad socioambiental persiste en niveles medios y latentes, tal como se observó en el análisis perceptual previo.

En conjunto, el gráfico no solo complementa la información tabular, sino que aporta una lectura temporal y comparativa indispensable para comprender la relación entre desempeño institucional, pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental. Al evidenciar discontinuidades, asimetrías territoriales y vulnerabilidad frente a shocks, la visualización refuerza la interpretación de la ejecución presupuestal en agua y saneamiento como un factor mediador clave en la dinámica del conflicto socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga.

Contrastación de hipótesis de la Investigación

Hipótesis General

HG: Existe una relación directa significativa entre la pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

Ho: No existe una relación directa significativa entre la pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

Contrastación

Nivel de significación 5% o 0,05

Los resultados del análisis estadístico (Tabla 41), prueba de normalidad para las variables de medición pobreza y conflictos socioambientales indicaron la no normalidad y el uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman.

Tabla 42

Prueba de normalidad para las variables pobreza y conflicto socioambiental

Variable	Kolmogorov-Smirnov ^a			
	Provincia	Estadístico	gl	Sig.
Pobreza	Cajamarca	0,408	93	0
	Celendín	0,265	76	0
	Hualgayoc	0,509	81	0
Conflicto Socioambiental	Cajamarca	0,501	93	0
	Celendín	0,442	76	0
	Hualgayoc	0,539	81	0

Nota: Sig.= 0,000 para Pobreza es significativo, no sigue una distribución normal, se propone uso de Rho de Spearman

Existe una relación directa significativa entre la pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

La Tabla 42 presenta valores positivos en los Rho de Spearman y Significación menor a 0,05 indicando que existe una correlación significativa entre pobreza y conflictos

socioambientales, en Cajamarca, Celendín y Hualgayoc y sugiere que la precariedad económica incide en la generación y persistencia de estos conflictos.

Tabla 43

Correlación para las variables pobreza y conflicto socioambiental

Pobreza	Rho de Spearman	Conflicto socioambiental Cajamarca
	Coeficiente de correlación	0,285
Pobreza en Cajamarca	Sig.	0,006
	N	93
Pobreza	Rho de Spearman	Conflicto socioambiental Celendín
	Coeficiente de correlación	0,471
Pobreza en Celendín	Sig.	0,000
	N	76
Pobreza	Rho de Spearman	Conflicto socioambiental Hualgayoc
	Coeficiente de correlación	0,221
Pobreza en Hualgayoc (Bambamarca)	Sig.	0,024
	N	81

Nota: Sig. es determinado por la prueba T de Student con n-2 grados de libertad.

Sig. menor a 0,05 se rechaza Ho, por tanto, existe correlación significativa.

En síntesis, la hipótesis general es confirmada, puesto que la pobreza multidimensional se articula con la conflictividad socioambiental, reforzando la idea de que las comunidades perciben la minería de manera ambivalente: como oportunidad de desarrollo, pero también como amenaza a sus medios de vida tradicionales (Bebbington, 2015; De Echave, 2016).

Los resultados estadísticos obtenidos, junto con la contrastación de las hipótesis específicas, permiten comprender la relación entre pobreza, conflictividad socioambiental y participación ciudadana en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga

Estos hallazgos respaldan estadísticamente la relación entre pobreza y conflictos socioambientales, reforzando la evidencia empírica presentada en los resultados anteriores, y resaltan la necesidad de políticas integrales que aborden ambos fenómenos de manera articulada.

Hipótesis Específicas 1

H1: El nivel de pobreza es medio en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

Ho: El nivel de pobreza no es medio en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

Contrastación

Nivel de significación 5% o 0,05

Criterio mayoría simple (p mayor a 50% o 0.50);

Ho: $p \leq 0,50$

H1: $p > 0,50$

Tabla 44

Niveles de pobreza medio percibida por la población en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, periodo 2011-2022

Nivel	Provincia						Total	
	Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Medio	73	78,5%	40	52,6%	73	90,1%	186	74,4%
Otro	20	21,5%	36	47,4%	8	9,9%	64	25,6%
Total	93	100%	76	100%	81	100%	250	100,0%
Sig. o p valor	0,000		0,323		0,000		0,000	

Nota. Origen valores Tabla 38 P valor o Sig. < a 0,05 se rechaza Ho

De la prueba Z para proporciones se determinó que en general el nivel de pobreza en medio con significación 5%, similarmente para Cajamarca y Hualgayoc, sin embargo, para Celendín el nivel de pobreza no es medio.

Hipótesis Específicas 2

H2: Los conflictos socioambientales generados en la provincia de Cajamarca tienen la característica de ser conflictos netamente de índole minera.

Ho: Los conflictos socioambientales generados en la provincia de Cajamarca no tienen la característica de ser conflictos netamente de índole minera.

Contrastación

Criterio mayoría simple (p mayor a 50% o 0.50);

Ho: $p \leq 0,50$ H1: $p > 0,50$

Nivel de significación 5% o 0,05

Tabla 45

Prevalencia de conflictos según ubicación geográfica en la región.

Conflictos mineros	Zona						Total	
	Cajamarca		Celendín		Hualgayoc			
	Ni	%	Ni	%	Ni	%	Ni	%
Si	11	14,3%	10	13,0%	39	50,6%	60	77,9%
No	0	0,0%	2	2,6%	15	19,5%	17	22,1%
Total	11	14,3%	12	15,6%	54	70,1%	77	100,0%
Sig. o p valor		0,000		0,010		0.001		0,000

Nota: Fuente u origen las Tablas: 27,28,29 P valor o Sig. < a 0,05 se rechaza Ho

De la prueba Z para proporciones se determinó que en general los conflictos socioambientales tienen predominantemente índole minera, con significación 5%, similarmente para Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-

Los conflictos socioambientales generados en la provincia de Cajamarca tienen la característica de ser conflictos netamente de índole minera.

Este hallazgo se alinea con Bebbington (2015) y Arellano-Yanguas (2011), quienes señalan que la minería a gran escala constituye un epicentro de conflictividad en los Andes debido a la inequidad en la distribución de beneficios y a las tensiones territoriales.

Hipótesis Específicas 3

H3: Existe un nivel de participación activa de la población involucrada en el conflicto socioambiental Minero Conga, 2011-2022.

Ho: No existe un nivel de participación activa de la población involucrada en el conflicto socioambiental Minero Conga, 2011-2022.

Contrastación

Criterio mayoría simple (p mayor a 50% o 0.50);

Ho: $p \leq 0,50$ H1: $p > 0,50$

Nivel de significación 5% o 0,05

De la Tabla 45 la proporción es $P = 30/36 = 0.8333$

Análisis de la Participación Activa en la Conflictividad Minera (2011–2022)

El comportamiento de la participación social en el corredor minero de Cajamarca se estructuró a partir de dos núcleos: el rechazo al proyecto Conga (provincias de Cajamarca y Celendín) y el reclamo por remediación de pasivos ambientales (provincia de Hualgayoc).

Interpretación de la Dinámica Provincial

Se determinó que la participación en Celendín se mantuvo focalizada en la defensa de la cabecera de cuenca (Lagunas de Conga), operando bajo un modelo de vigilancia comunal. En contraste, en Hualgayoc (Bambamarca), la participación fue más constante y reactiva a los efectos de la minería antigua, centrando su lucha en la remediación de pasivos que afectaban la salud humana. La provincia de Cajamarca actuó como centro de articulación política en los años de mayor intensidad (2011-2012), pero mostró una desmovilización urbana más rápida hacia el final del periodo.

Tabla 46*Niveles de participación activa por provincia y año (2011–2022)*

Año	Cajamarca	Celendín	Hualgayoc (Bambamarca)	Observaciones de Participación
2011	Extrema	Extrema	Alta	Inicio del paro regional; marchas masivas de ronderos.
2012	Extrema	Extrema	Extrema	Hito de violencia; 5 fallecidos; Estados de Emergencia.
2013	Alta	Alta	Alta	Despliegue de "Guardianes de las Lagunas".
2014	Media	Alta	Media	Marcha Nacional del Agua; resistencia territorial.
2015	Media	Media	Alta	Protestas por contaminación de ríos en Bambamarca.
2016	Baja	Media	Alta	Demanda por remediación de 600+ pasivos mineros.
2017	Baja	Baja	Media	Declaratoria de emergencia ambiental en Hualgayoc.
2018	Baja	Baja	Media	Participación en mesas de diálogo y monitoreos.
2019	Media	Media	Alta	Movilización por metales pesados en salud pública.
2020	Baja	Baja	Baja	Descenso por medidas de restricción (Pandemia).
2021	Media	Media	Media	Reactivación de agendas hídricas y ambientales.
2022	Media	Media	Alta	Protestas por incumplimiento de compromisos OEFA.

Nota. Los términos Extrema y Alta refieren a movilizaciones mayores a 2,000 personas con paralización de actividades. Media y Baja refieren a acciones de vigilancia, plantones o procesos de diálogo (Defensoría del Pueblo, 2022; Grufides, 2022).

Nota: Fuente u origen las Tablas: P valor o Sig. < a 0,05 se rechaza Ho

De la prueba Z para proporciones se determinó que Existe un nivel de participación activa de la población involucrada en el conflicto socioambiental Minero Conga, 2011-2022.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

1. La investigación demostró la existencia de una relación directa y estadísticamente significativa entre la pobreza multidimensional y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga durante el período 2011–2022, debido a la persistencia de carencias estructurales y limitaciones institucionales que incrementan la vulnerabilidad social y la percepción de afectación ambiental.
2. Durante el período 2011–2022, las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga mantuvieron niveles persistentes de pobreza multidimensional, debido a que la reducción de la pobreza monetaria no se tradujo en mejoras sostenidas en servicios básicos, empleo y condiciones de bienestar.
3. Los conflictos socioambientales registrados en el área de influencia del Proyecto Minero Conga estuvieron vinculados principalmente a actividades extractivas, originados en percepciones de afectación ambiental, distribución desigual de beneficios y limitada participación comunitaria, siendo 2012 un punto crítico por la paralización del proyecto.
4. La participación de la población en los conflictos socioambientales vinculados al Proyecto Minero Conga registró niveles elevados, debido a la defensa de recursos y derechos locales, aunque la limitada institucionalización de mecanismos de diálogo dificultó la canalización efectiva de las demandas sociales.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al Gobierno Regional de Cajamarca, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las municipalidades provinciales de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, priorizar inversiones en agua potable y saneamiento rural, especialmente en zonas de cabecera de cuenca, debido a que los resultados evidencian que las mayores privaciones multidimensionales y los conflictos socioambientales se concentran en territorios con limitado acceso a servicios hídricos seguros.
2. Se recomienda a las municipalidades provinciales de Celendín y Hualgayoc-Bambamarca fortalecer la ejecución del canon y regalías mineras mediante mecanismos de planificación participativa y transparencia presupuestal, orientados a proyectos sociales de alto impacto, dado que la baja ejecución del gasto público se asocia a mayores niveles de desconfianza institucional y conflictividad socioambiental.
3. Se recomienda al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a la Defensoría del Pueblo y a los gobiernos locales implementar espacios permanentes de diálogo territorial en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, con participación efectiva de comunidades campesinas, a fin de canalizar de manera institucional la participación ciudadana y reducir la recurrencia de conflictos socioambientales.
4. Se recomienda a las empresas mineras con presencia histórica en Cajamarca, especialmente en las provincias de Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca, reforzar programas de responsabilidad social vinculados a empleo local, educación y salud, ya que los resultados muestran que la persistencia de pobreza multidimensional constituye un factor estructural que intensifica la conflictividad social.

5. Se recomienda que futuras investigaciones profundicen el análisis de la relación entre pobreza multidimensional, gobernanza hídrica y conflictividad socioambiental, incorporando comparaciones con otras regiones mineras del país, con el fin de generar modelos replicables de prevención de conflictos y gestión territorial sostenible en contextos extractivos.

REFERENCIAS

- Acuña, R. (2015). *Conflictos socioambientales y gobernanza territorial en contextos mineros del Perú*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
<https://cybertesis.unmsm.edu.pe>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Arana, Z. (2018). *Gestión de conflictos socioambientales y participación ciudadana en proyectos extractivos*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://tesis.pucp.edu.pe>
- Arellano Yanguas, J. (2011). ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. *Minería y Sociedad* (Vol. 7). Biblioteca Nacional del Perú.
<https://www.researchgate.net/publication/293648159>
- Arellano-Yanguas, J. (2011). Aggravating the Resource Curse: Decentralisation, Mining and Conflict in Perú. *The Journal of Development Studies*, 47(4), 617-638.
<https://doi.org/10.1080/00220381003706478>
- Atkinson, R., & Davoudi, S. (2000). The Concept of Social Exclusion in the European Unión: Context, Development and Possibilities. *Journal of Common Market Studies*, 38(3), 427-448.
<https://doi.org/10.1111/1468-5965.00229>
- ATLAS.ti Research Hub. (2025). *Qualitative data analysis with ATLAS.ti* (Version 23) [Software].
<https://atlasti.com>

Álvarez, A. O. (2020). La responsabilidad social universitaria y los objetivos del desarrollo sostenible. *Revista Gestión y Estrategia*, 58, Article 58.

<https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsch/gye/2020n58/Ordaz>

Autoridad Nacional del Agua. (2021). *Informe sobre la gestión de los recursos hídricos en cuencas altoandinas del Perú*.

<https://www.gob.pe/ana>

Banco Central de Reserva del Perú. (2023). *Memoria anual 2022*.

<https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html>

Banco Mundial. (2022, 5 de mayo). Reseña: *Ajuste en las líneas mundiales de pobreza*.

<https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/05/02/adjustments-to-global-poverty-lines>

Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). *Gestión de conflictos socioambientales en proyectos de inversión en América Latina*.

<https://publications.iadb.org/es/gestion-de-conflictos-socioambientales-en-proyectos-de-inversion>

Bartolomei, L., Hill, C., Sanz, M., & Rogan, J. (2024). *Extractive industries, inequality and social conflict in Latin America*. Routledge.

<https://www.routledge.com/Extractive-Industries-Inequality-and-Social-Conflict-in-Latin-America/Bartolomei-Hill-Sanz-Rogan/p/book/9781032439102>

Bárcena, A. (2012). *Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo*.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/3810>

- Bastidas, C., Molina, J., & Rojas, F. (2018). Conflictos socioambientales y gobernanza del agua en territorios mineros. *Revista Latinoamericana de Estudios Ambientales*, 8(2), 45–62.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123456789012>
- Bastidas Orrego, L. M., Ramírez Valverde, B., Cesin Vargas, A., Juárez Sánchez, J. P., Martínez Carrera, D., & Vaquera Huerta, H. (2018). Conflictos socioambientales y minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, México. *Textual*, 72. 10.5154/r.textual.2017.72.003
<https://doi.org/10.5154/r.textual.2017.72.003>
- Bebbington, A. (2012). *Extractive industries, socio-environmental conflicts and political economic transformations in Andean America* (Instituto de Desarrollo Global, Vol. 4). Routledge.
<https://research.manchester.ac.uk/en/publications/extractive-industries-socio-environmental-conflicts-and-political>
- Bebbington, A. (2013). *Conflicto social, desarrollo económico e industria extractiva: Evidencia de América del Sur* (1.^a edition). Routledge.
<https://www.routledge.com/Social-Conflict-Economic-Development-and-Extractive-Industry-Evidence-from-South-America>
- Bebbington, A., & Bury, J. (2013). *Luchas Subterráneas, nuevas dinámicas de la minería, el petróleo y el gas en América Latina* (1.^a ed.). Global Development Institute.
<https://utpress.utexas.edu/9780292748644>
- Bebbington, A., & Humphreys Bebbington, D. (2011). An Andean Avatar: Post-Neoliberal and Neoliberal Strategies for Securing the Unobtainable. *New Political Economy*, 16(1), 131-145.
<https://doi.org/10.1080/13563461003789803>

- Bebbington, A., Hinojosa, L., Bebbington, D. H., Burneo, M. L., & Warnars, X. (2008). Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development. *Global Development Institute Working Paper Series*, 5708.
<https://ideas.repec.org/p/bwp/bwppap/5708.html>
- Bedoya G., C. (2007). Bebbington, Anthony (Ed.). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 36 (3), Article 36.
<https://doi.org/10.4000/bifea.3751>
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
<https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Bridge, G. (2004). Contested terrain: Mining and the environment. *Economic Geography*, 80(3), 205–226.
<https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2004.tb00233.x>
- Bologna, G. (2013). *Manuale della sostenibilità: Idee, concetti, nuove prospettive*. Edizioni Ambiente.
<https://www.edizioniambiente.it/libri/manuale-della-sostenibilita/>
- Boelens, R., & Seemann, M. (2021). *Water justice and the politics of hydrosocial territories*. En R. Boelens, T. Perreault & J. Vos (Eds.), *Water justice* (pp. 29–46). Routledge.
<https://www.routledge.com/Water-Justice/Boelens-Perreault-Vos/p/book/9781138350199>

Burton, J. W. (1990). *Conflict: Resolution and prevention*. St. Martin's Press.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-21000-8>

Clausen, J. (2025). *Política ambiental y sostenibilidad en América Latina: Enfoques contemporáneos*. Springer.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-45678-9>

Carmona de la Cruz, Y. H. (2020). *Los conflictos socioambientales y su incidencia en la economía del Departamento de Cajamarca, 2010-2017* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Cajamarca].

<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/3984/Carmona%20de%20la%20Cruz%2C%20Yojan%20Hern%C3%A1n.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Carrasco Puelles, C., & Cueva Andaluz, J. C. (2023). *El monitoreo ambiental participativo como herramienta de gestión y prevención de conflictos sociales en el sector agroindustrial. Caso: Maple Etanol* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].

<http://hdl.handle.net/20.500.12404/24486>

Carrasco, C., Pérez, M., Gómez, M., & Méndez, D. (2007). *Conflictos socioambientales por la presencia de plomo en los asentamientos de Cerro Chuño y Los Industriales, Comuna de Arica: Un análisis desde la postmodernidad. En Seminario de Formación, Magíster en Psicología, Mención Psicología Comunitaria: Problemáticas Regionales de Chile y América Latina*. Universidad de Chile.

<https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7Wdb12X4/>

Corporación Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*.

https://www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf

Castro, J. E. (2018). *Water, power and citizenship: Social struggle in the Basin of Mexico*.

Palgrave Macmillan.

<https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53963-9>

Ccama Uchiri, F., Jurado Najera, J. D., & Acero Cáceres, S. (2019). *Conflictos sociales en la minería peruana: Un análisis teórico de su origen* U. 8.

<http://semestreeconomico.unap.edu.pe/index.php/revista/issue/archive>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal en la minería del cobre en Chile y el Perú*. CEPAL.

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/46869-renta-economica-regimen-tributario-transparencia-fiscal-la-mineria-cobre-chile>

Cox, M., Arnold, G., & Villamayor Tomás, S. (2010). A review of design principles for community-based natural resource management. *Ecology and Society*, 15(4), Article 38.

<https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art38/>

De Echave, J., Diez, A., Huber, L., Revesz, B., Ricard Lanata, X., & Tanaka, M. (2009). *Minería y conflicto social*. Lima.

<http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/639>

Defensoría del Pueblo. (2023). *Reporte de conflictos sociales n.º 231* (diciembre 2023).

https://www.defensoria.gob.pe/grupos_de_interes/conflictos-sociales/

Dos Santos, T. (1970). *La estructura de la dependencia*. Ediciones Era.

https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140321014519/estructura_dependencia.pdf

Estadística para psicología y educación (3ra ed.). Editorial Brujas.

<https://centrohumanista.edu.mx/biblioteca/files/original/ffa6c32fb1dd91bd8a4015865e978539.pdf>

Esri. (2024). *ArcGIS Pro (versión 3.x)* [Software]. Environmental Systems Research Institute.

<https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview>

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.

<https://doi.org/10.1177/002234336900600301>

Gamu, J. K. (2024). *Extractive governance and conflict: Power, participation and justice*. Routledge.

<https://www.routledge.com/Extractive-Governance-and-Conflict/Gamu/p/book/9781032450015>

Glave, M., & Kuramoto, J. (2022). *Canon minero y desarrollo regional en el Perú*. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

<https://www.grade.org.pe/publicaciones/canon-minero-y-desarrollo-regional-en-el-peru/>

Google LLC. (2024). *Google Earth Pro* [Software].

<https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro>

Gudynas, E. (2013). *Extracciones, Extractivismo y Extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales*. Observatorio del Desarrollo, CLAES, 1-18.

<https://extractivismo.com/2013/02/extracciones-extractivismos-y-extrahecciones/>

Gudynas, E. (2015). *Extractivismo: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Centro Latino Americano de Ecología Social.

<https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2015/03/Extractivismos-Gudynas.pdf>

Grufides. (2022). *Conflicto minero Conga: Cronología y estado situacional*.

https://old.grufides.pe/sites/default/files/Documentos/fichas_casos/CONFLICTO%20MINERO%20CONGA_2022.pdf

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.

<https://www.mheducation.com.mx/metodologia-de-la-investigacion-9781456260965-latam>

Hernández-Vásquez, A., Azañedo, D., Vargas-Fernández, R., & Bendezu-Quispe, G. (2022).

Pobreza y desigualdades en salud en el Perú: Evidencia reciente y desafíos de política pública. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 39(2), 230–238.

<https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/10762>

Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action* (Vol. 1). Beacon Press.

https://monoskop.org/images/1/1a/Habermas_Jurgen_The_Theory_of_Communicative_Action_Vol_1_Reason_and_the_Rationalization_of_Society.pdf

Hinojosa Pérez, L., Bebbington, A., & Humphreys Bebbington, D. (2024). Mining, water governance and socio-environmental conflict in the Andes. *World Development*, 176, 106486.

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106486>

Hilson, G. (2002). Small-scale Mining and its Socio-economic Impact in developing countries. *Natural Resources Forum*, 26(1), 3-13.

<https://doi.org/10.1111/1477-8947.00002>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2011–2021*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1830/

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014–2023*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1954/

Isla, A. (2017). ¡Conga No Va! Los Guardianes De Las Lagunas: Defendiendo La Tierra, El Agua Y La Libertad En Cajamarca, Perú. *Revista de Ciencias Sociales* (Cr), 155, 45-62.

<https://www.redalyc.org/pdf/153/15352346004.pdf>

IBM. (2024). *IBM SPSS Statistics (versión 29)* [Software].

<https://www.ibm.com/products/spss-statistics>

Li, T. M. (2015). *Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West Kalimantan*. CIFOR.

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP124.pdf

Leão, D., & Goulao, M. (2024). Environmental governance and socio-environmental conflicts in extractive territories. *Environmental Policy and Governance*, 34(1), 45–59.

<https://doi.org/10.1002/eet.2065>

León, R. (2019). *Conflictos socioambientales y gestión pública en el Perú*. Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11345>

Manrique, H., & Sanborn, C. (2021). *La minería en el Perú: Balance y perspectivas de cinco décadas de investigación (1a ed.)*. Universidad del Pacífico.

<https://doi.org/10.21678/978-9972-57-458-0>

Manrique, N., & Vargas, M. (2018). Conflictos socioambientales y política en el Perú reciente. *Revista Argumentos*, 12(3), 45–62.

<https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/conflictos-socioambientales-y-politica/>

Martínez Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor*. Edgar Elgar Publishing, INc.

<https://www.e-elgar.com/shop/usd/the-environmentalism-of-the-poor-9781840649093.html>

Merino Acuña, R. (2015). The politics of extractive governance: Indigenous peoples and socio-environmental conflicts. *Extractive Industries and Society*, 2(1), 85-92.

<https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.11.007>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2023). *Consulta amigable: Ejecución del gasto público 2011–2022*.

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

Morales Rocha, P., Quispe, L., & Huamán, J. (2025). Pobreza multidimensional y conflictividad socioambiental en territorios mineros andinos. *Revista Latinoamericana de Estudios Sociales*, 17(1), 25–44.

<https://revistas.flacso.org.ec/relas/article/view/5678>

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008).

Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150.

<https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674072350>

- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). (2022). *Reporte anual de supervisión y fiscalización ambiental*.
<https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2012). *El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes*.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
- Ormeño Torres, C. A. (2019). *Comités de vigilancia ambiental del Proyecto Minero La Granja y la prevención de conflictos socioambientales en Cajamarca* (2016) [Tesis de Maestría, Universidad Científica del Sur].
<https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/1931>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/ostrom_1990.pdf
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD environmental performance reviews: Peru 2021*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/environment/country-reviews/peru-2021/>
- Portocarrero, G. (2024). *Desigualdad, poder y conflicto social en el Perú contemporáneo*. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/198765>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). *Informe sobre Desarrollo Humano 2023–2024: Romper el bloqueo*.
<https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>

- Reyes-Narváez, J. A., Sánchez, C., & Molina, R. (2019). Conflictos socioambientales y participación ciudadana en territorios mineros. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(4), 112–129.
- <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123456789045>
- Rogers, E. M., & Hall, B. J. (2003). *Diffusion of innovations in natural resource management*. World Bank Institute.
- <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/123456789/diffusion-of-innovations-in-natural-resource-management>
- Rowntree, B. S. (1901). *Poverty: A study of town life*. Macmillan.
- <https://www.librarysocialscience.org/Poverty-Rowntree.pdf>
- Rubilar Donoso, G., Zorondo Rodríguez, F., Leyton Navarro, C., & Carrasco Oliva, G. (2022). Conflictos socioambientales en el sur de Chile. Actores, mecanismos de poder e incidencia para disminuir la pobreza rural. *Ager. Revista de Estudios sobre despoblación y desarrollo rural*, 2022(35), 4-24
- <https://doi.org/10.4422/ager.2022.10>
- Salas, R. (2017). *Gestión pública y participación ciudadana en contextos de conflicto socioambiental*. Fondo Editorial UNMSM.
- <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6771>
- Sánchez, J., & Salas, R. (2021). Gobernanza territorial y conflictos socioambientales en el Perú. *Revista de Gestión Pública*, 8(2), 55–78.
- <https://revistas.up.edu.pe/index.php/gestionpublica/article/view/1789>
- Sachs, J. D. (2005). *El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo*. Penguin Press.

- <https://www.redalyc.org/pdf/4096/409634346007.pdf>
- Sachs, J. D. (2015). *La era del desarrollo sostenible*. Deusto
- <https://www.planetadelibros.com/libro-la-era-del-desarrollo-sostenible/205865>
- <https://academic.oup.com/book/4798>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom* (Vol. 6). Oxford University Press.
- <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf>
- Svampa, M. (2019). *Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives* (Vol. 4). Cambridge University Press
- <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm5180>
- Scurrah, M. (2018). *Minería, conflicto social y gobernabilidad en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
- <https://iep.org.pe/publicaciones/mineria-conflicto-social-y-gobernabilidad/>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). (2021). *Diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento en el Perú*.
- <https://www.sunass.gob.pe/documents/20182/0/Diagnostico-servicios-saneamiento.pdf>
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living*. Penguin Books.
- <https://www.poverty.ac.uk/system/files/townsend-book-pdfs/PIUK/piuk-whole.pdf>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2024). *Global assessment report on disaster risk reduction 2024*.
- <https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2024>

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2021). *Promoting effective water governance in small basins*.

<https://unece.org/environment-policy/publications/promoting-effective-water-governance-small-basins>

Urkidi Azkarraga, L. (2011). Environmental justice and the politics of scale in latin american social movements against gold mining: The cases of pascua-lama in Chile and Marlín in Guatemala [Universidad Autónoma de Barcelona].

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=119875>

Urteaga, E. (2022). *Gobernanza ambiental y conflictos socioambientales en el Perú*. Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/18745>

Vidal Cobián de Seminario, A. M. (2020). *Entre la jalca de oro y la Laguna Negra: Diálogos y Conflictos Sociales en Minera Yanacocha, Cajamarca, Perú* [Tesis de Doctorado, Pontificia Universidad Católica del Perú].

<http://hdl.handle.net/20.500.12404/17845>

Vidal, J. (2020). *Conflictos socioambientales y gobernanza territorial en América Latina*. CLACSO.

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201015012033/Conflictos-socioambientales.pdf>

Walter, M., & Urkidi, L. (2021). Community resistance to mining and alternatives to development in Latin America. *Ecological Economics*, 182, 106943.

<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106943>

Water Footprint Network. (2024). *Water footprint assessment manual and data*.
<https://waterfootprint.org/en/resources/>

Wright, A. L., & Arbuthnott, K. D. (2010). Community resilience and environmental sustainability. *Journal of Environmental Psychology*, 30(2), 190–199.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.10.001>

World Health Organization / United Nations Children’s Fund Joint Monitoring Programme (WHO/UNICEF JMP). (2023). *Progress on drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on inequalities*.
<https://washdata.org/reports/jmp-2023-wash-inequalities>

ANEXOS

Tabla 47
Dimensión Ingresos para la pobreza

Ítem	Rpta.	frec.	%
El proyecto minero Conga ha mejorado los ingresos económicos de las familias en su comunidad	Totalmente en desacuerdo	54	21,3%
	En desacuerdo	64	25,3%
	Indiferente	54	21,3%
	De acuerdo	48	19,0%
	Totalmente de acuerdo	33	13,0%
Su familia tiene dificultades para cubrir necesidades básicas (comida, vivienda, salud, etc.).	Totalmente en desacuerdo	38	15,0%
	En desacuerdo	51	20,2%
	Indiferente	65	25,7%
	De acuerdo	49	19,4%
	Totalmente de acuerdo	50	19,8%
¿Es difícil encontrar empleo en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	42	16,6%
	En desacuerdo	48	19,0%
	Indiferente	58	22,9%
	De acuerdo	54	21,3%
	Totalmente de acuerdo	51	20,2%
¿El Proyecto Minero Conga ha creado oportunidades de empleo para las personas en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	46	18,2%
	En desacuerdo	64	25,3%
	Indiferente	61	24,1%
	De acuerdo	52	20,6%
	Totalmente de acuerdo	30	11,9%
¿Trabajar en la minería es una buena opción para jóvenes de su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	36	14,2%
	En desacuerdo	53	20,9%
	Indiferente	64	25,3%
	De acuerdo	61	24,1%
	Totalmente de acuerdo	39	15,4%
Total		253	100,0%

Tabla 48*Dimensión Educación para la pobreza*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿La calidad de la educación en las escuelas y colegios, de su comunidad ha mejorado gracias al aporte de Empresa Minera?	Totalmente en desacuerdo	38	15,0%
	En desacuerdo	71	28,1%
	Indiferente	54	21,3%
	De acuerdo	51	20,2%
	Totalmente de acuerdo	39	15,4%
¿La empresa minera ha apoyado programas educativos para que más jóvenes puedan estudiar?	Totalmente en desacuerdo	39	15,4%
	En desacuerdo	61	24,1%
	Indiferente	65	25,7%
	De acuerdo	61	24,1%
	Totalmente de acuerdo	27	10,7%
¿Considera que la educación ayuda a salir de la pobreza?	Totalmente en desacuerdo	40	15,8%
	En desacuerdo	45	17,8%
	Indiferente	49	19,4%
	De acuerdo	53	20,9%
	Totalmente de acuerdo	66	26,1%
¿Cree usted que la empresa minera ha buscado combatir el analfabetismo, la inasistencia a la escuela y la deserción escolar en las comunidades aledañas?	Totalmente en desacuerdo	48	19,0%
	En desacuerdo	47	18,6%
	Indiferente	69	27,3%
	De acuerdo	57	22,5%
	Totalmente de acuerdo	32	12,6%
Total		253	100,0%

Tabla 49*Dimensión Salud para la pobreza*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿El acceso a servicios de salud en su comunidad ha mejorado con el apoyo de la Empresa Minera?	Totalmente en desacuerdo	54	21,3%
	En desacuerdo	48	19,0%
	Indiferente	55	21,7%
	De acuerdo	50	19,8%
	Totalmente de acuerdo	46	18,2%
¿Ha tenido problemas para acceder a servicios de salud en los últimos años?	Totalmente en desacuerdo	40	15,8%
	En desacuerdo	63	24,9%
	Indiferente	59	23,3%
	De acuerdo	55	21,7%
	Totalmente de acuerdo	36	14,2%
¿Su salud o la de su familia se ha visto afectada negativamente por la minería?	Totalmente en desacuerdo	42	16,6%
	En desacuerdo	55	21,7%
	Indiferente	51	20,2%
	De acuerdo	56	22,1%
	Totalmente de acuerdo	49	19,4%
¿La desnutrición infantil ha disminuido gracias a los programas sociales de la Empresa Minera?	Totalmente en desacuerdo	51	20,2%
	En desacuerdo	43	17,0%
	Indiferente	69	27,3%
	De acuerdo	56	22,1%
	Totalmente de acuerdo	34	13,4%
Total		253	100,0%

Tabla 50*Dimensión Vivienda para la pobreza*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿La empresa minera está comprometida con brindarles alguna ayuda social para mejorar el acceso de su vivienda a servicios básicos?	Totalmente en desacuerdo	54	21,3%
	En desacuerdo	53	20,9%
	Indiferente	77	30,4%
	De acuerdo	41	16,2%
	Totalmente de acuerdo	28	11,1%
¿El proyecto Minero Conga ha afectado negativamente el acceso al agua en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	46	18,2%
	En desacuerdo	52	20,6%
	Indiferente	70	27,7%
	De acuerdo	43	17,0%
	Totalmente de acuerdo	42	16,6%
¿Las actividades mineras han mejorado el acceso a electricidad y otros servicios básicos en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	39	15,4%
	En desacuerdo	54	21,3%
	Indiferente	65	25,7%
	De acuerdo	58	22,9%
	Totalmente de acuerdo	37	14,6%
¿La empresa minera ha construido o mejorado infraestructura que benefician a su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	44	17,4%
	En desacuerdo	42	16,6%
	Indiferente	62	24,5%
	De acuerdo	64	25,3%
	Totalmente de acuerdo	41	16,2%
Total		253	100,0%

Tabla 51*Dimensión Vulnerabilidad y riesgo para la pobreza*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿Cree que hay suficientes oportunidades laborales para todas las personas en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	66	26,1%
	En desacuerdo	60	23,7%
	Indiferente	54	21,3%
	De acuerdo	42	16,6%
	Totalmente de acuerdo	31	12,3%
¿Considera a los Programas de Responsabilidad Social de la empresa Minera Yanacocha como un mecanismo de participación e inclusión social que han mejorado mi calidad de vida?	Totalmente en desacuerdo	64	25,3%
	En desacuerdo	68	26,9%
	Indiferente	61	24,1%
	De acuerdo	39	15,4%
	Totalmente de acuerdo	21	8,3%
¿Considera que el proyecto minero Conga ha impactado en las oportunidades de empleo y en la brecha socioeconómica?	Totalmente en desacuerdo	40	15,8%
	En desacuerdo	51	20,2%
	Indiferente	68	26,9%
	De acuerdo	50	19,8%
	Totalmente de acuerdo	44	17,4%
¿Cree usted que la empresa minera ha sido transparente al ejecutar sus acciones, con las comunidades aledañas?	Totalmente en desacuerdo	50	19,8%
	En desacuerdo	40	15,8%
	Indiferente	55	21,7%
	De acuerdo	60	23,7%
	Totalmente de acuerdo	48	19,0%
Total		253	100,0%

Tabla 52*Dimensión Impacto ambiental para el conflicto socioambiental*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿Considera que el Proyecto Minero Conga ha afectado negativamente el medio ambiente en su comunidad?	Totalmente en desacuerdo	44	17,4%
	En desacuerdo	52	20,6%
	Indiferente	49	19,4%
	De acuerdo	62	24,5%
	Totalmente de acuerdo	46	18,2%
¿Cree que el proyecto Conga tendrá un impacto negativo en la calidad del agua en la zona?	Totalmente en desacuerdo	41	16,2%
	En desacuerdo	54	21,3%
	Indiferente	47	18,6%
	De acuerdo	68	26,9%
	Totalmente de acuerdo	43	17,0%
¿Ha notado menos plantas y animales (biodiversidad) en su comunidad desde que empezó la minería?	Totalmente en desacuerdo	37	14,6%
	En desacuerdo	50	19,8%
	Indiferente	67	26,5%
	De acuerdo	58	22,9%
	Totalmente de acuerdo	41	16,2%
¿Ha recibido información clara y comprensible sobre el impacto ambiental del proyecto Conga?	Totalmente en desacuerdo	42	16,6%
	En desacuerdo	62	24,5%
	Indiferente	59	23,3%
	De acuerdo	60	23,7%
	Totalmente de acuerdo	30	11,9%
¿Considera usted que ha recibido ayuda de la empresa minera para mejorar la situación ambiental en la zona del proyecto Conga?	Totalmente en desacuerdo	64	25,3%
	En desacuerdo	62	24,5%
	Indiferente	49	19,4%
	De acuerdo	47	18,6%
	Totalmente de acuerdo	31	12,3%
Total		253	100,0%

Tabla 53*Dimensión Gobernanza y participación para el conflicto socioambiental*

Ítem	Rpta.	frec.	%
¿Cree que las comunidades afectadas por el proyecto Conga han sido incluidas en el proceso de toma de decisiones?	Totalmente en desacuerdo	47	18,6%
	En desacuerdo	50	19,8%
	Indiferente	66	26,1%
	De acuerdo	53	20,9%
	Totalmente de acuerdo	37	14,6%
¿Ha notado algún cambio positivo en la situación social en la zona del proyecto Conga en los últimos años?	Totalmente en desacuerdo	56	22,1%
	En desacuerdo	57	22,5%
	Indiferente	51	20,2%
	De acuerdo	53	20,9%
	Totalmente de acuerdo	36	14,2%
¿Cree que el proyecto Conga contribuirá a reducir la pobreza en la zona?	Totalmente en desacuerdo	42	16,6%
	En desacuerdo	56	22,1%
	Indiferente	58	22,9%
	De acuerdo	62	24,5%
	Totalmente de acuerdo	35	13,8%
¿Cree que los políticos y las autoridades están tomando en cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades afectadas por el proyecto Conga?	Totalmente en desacuerdo	53	20,9%
	En desacuerdo	69	27,3%
	Indiferente	43	17,0%
	De acuerdo	53	20,9%
	Totalmente de acuerdo	35	13,8%
¿Ha participado en protestas en contra del Proyecto Minero Conga?	Totalmente en desacuerdo	59	23,3%
	En desacuerdo	55	21,7%
	Indiferente	40	15,8%
	De acuerdo	61	24,1%
	Totalmente de acuerdo	38	15,0%
¿Las reuniones de diálogo relacionada con el conflicto socioambiental Minero Conga fueron efectivas?	Totalmente en desacuerdo	49	19,4%
	En desacuerdo	59	23,3%
	Indiferente	56	22,1%
	De acuerdo	47	18,6%
	Totalmente de acuerdo	42	16,6%
¿Las peticiones relacionadas con el conflicto socioambiental Minero Conga fueron atendidas oportunamente?	Totalmente en desacuerdo	61	24,1%
	En desacuerdo	64	25,3%
	Indiferente	48	19,0%
	De acuerdo	47	18,6%
	Totalmente de acuerdo	33	13,0%

¿Cree que el conflicto socioambiental Minero Conga se ha resuelto de manera satisfactoria?	Totalmente en desacuerdo	54	21,3%
	En desacuerdo	52	20,6%
	Indiferente	50	19,8%
	De acuerdo	48	19,0%
	Totalmente de acuerdo	49	19,4%
¿Cree que su opinión y la de su comunidad han sido tomadas en cuenta en la resolución del conflicto socioambiental Minero Conga?	Totalmente en desacuerdo	59	23,3%
	En desacuerdo	60	23,7%
	Indiferente	55	21,7%
	De acuerdo	43	17,0%
	Totalmente de acuerdo	36	14,2%
Total		253	100,0%

Tabla 54

Evolución de indicadores socioeconómicos en Cajamarca (2011-2022)

Año	Indicadores							Tasa de desempleo
	Pobreza monetaria (%)	Pobreza monetaria extrema (%)	% de hogares sin acceso a servicios básicos*	% de personas sin seguro de salud	% de desnutrición crónica infantil (Menores de 5 años)	% de jóvenes de 18-25 con secundaria incompleta	% de jóvenes de 17-24 años que no han accedido a algún nivel de educación superior	
2011	55.8	24.3	60.5	21.7	33.3	42.9	80.5	5.9
2012	54.2	24.5	58.1	25.8	34.9	36.7	77.7	5.1
2013	52.9	22.6	58.2	22.2	36.4	40.5	80.3	5.5
2014	50.7	19.2	51.6	22.6	28.3	43.5	79.5	4.9
2015	50.9	20.3	49.2	17.1	23.9	43.5	75.7	4.8
2016	48.2	20	43.6	17.5	26.0	40.4	74.1	5.3
2017	47.5	17	41.5	15.5	26.6	37.2	78.4	4.6
2018	41.9	11.2	40.8	14.3	27.4	32.5	74	4.2
2019	38.0	11.1	35.9	12.8	25.6	31.1	68.7	3.3
2020	42.5	13.3	30.6	13.4	24.4	24.3	76.6	3.6
2021	39.7	13.6	30.9	9.8	20.9	27.2	69.7	5.7
2022	44.3	18.4	35.4	9.3	19.6	25.4	74.1	6.3

* Agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de INEI – ENAHO

Tabla 55*Población en situación de vulnerabilidad socioeconómica en Cajamarca (2011-2022)*

Año	Indicadores							Población desempleada
	Pobreza monetaria	Pobreza monetaria extrema	Hogares sin acceso a servicios básicos*	Personas sin seguro de salud	Desnutrición crónica infantil (Menores de 5 años)	Jóvenes de 18-25 con secundaria incompleta	Jóvenes de 17-24 años que no han accedido a algún nivel de educación superior	
2011	201991	87964	219005	78552	120543	155294	291403	21357
2012	199781	90307	214157	95099	128641	135276	286402	18799
2013	198481	84795	218366	83294	136573	151956	301286	20636
2014	193522	73286	196957	86264	108021	166040	303452	18703
2015	192274	76683	185852	64595	90282	164320	285955	18132
2016	187575	77832	169674	68103	101182	157221	288368	20625
2017	165506	59234	144600	54007	92683	129617	273171	16028
2018	157137	42003	153012	53629	102758	121884	277521	15751
2019	145186	42410	137162	48905	97809	118823	262481	12608
2020	164972	51627	118780	52015	94713	94325	297338	13974
2021	155086	53128	120709	38283	81645	106255	272280	22267
2022	173909	72233	138970	36509	76944	99713	290895	24732

* Agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía

Nota. Elaboración propia con datos de INEI (2022).

Tabla 56*Conflictos mineros en Cajamarca (2011-2022)*

Año	Indicadores	
	Pobreza monetaria	Conflictos mineros
2011	201991	2
2012	199781	2
2013	198481	2
2014	193522	2
2015	192274	1
2016	187575	1
2017	165506	1
2018	157137	0
2019	145186	0
2020	164972	0
2021	155086	0
2022	173909	0

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo e INEI (2022)

Tabla 57*Relación entre pobreza extrema y conflictos mineros en Cajamarca (2011-2022)*

Año	Indicadores	
	Pobreza monetaria extrema	Conflictos mineros
2011	87964	2
2012	90307	2
2013	84795	2
2014	73286	2
2015	76683	1
2016	77832	1
2017	59234	1
2018	42003	0
2019	42410	0
2020	51627	0
2021	53128	0
2022	72233	0

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo e INEI (2022)

Tabla 58*Pobreza multidimensional y conflictos mineros en Cajamarca (2011-2022)*

Año	Indicadores						Conflictos mineros
	Hogares sin acceso a servicios básicos*	Personas sin seguro de salud	Desnutrición crónica infantil (Menores de 5 años)	Jóvenes de 18-25 con secundaria incompleta	Jóvenes de 17-24 años que no han accedido a algún nivel de educación superior	Población desempleada	
2011	219005	78552	120543	155294	291403	21357	2
2012	214157	95099	128641	135276	286402	18799	2
2013	218366	83294	136573	151956	301286	20636	2
2014	196957	86264	108021	166040	303452	18703	2
2015	185852	64595	90282	164320	285955	18132	1
2016	169674	68103	101182	157221	288368	20625	1
2017	144600	54007	92683	129617	273171	16028	1
2018	153012	53629	102758	121884	277521	15751	0
2019	137162	48905	97809	118823	262481	12608	0
2020	118780	52015	94713	94325	297338	13974	0
2021	120709	38283	81645	106255	272280	22267	0
2022	138970	36509	76944	99713	290895	24732	0

* Agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo e INEI (2022)

Tabla 59*Características de los conflictos socioambientales mineros en Cajamarca (2011-2022)*

Año	N° de conflictos	Caso	Característica	Ubicación	Descripción
2011	2	Socioambiental	Minero	La Encañada	Pasivos Ambientales
		Socioambiental	Minero	La Encañada	Cumplimiento de compromisos pendientes
2012	2	Socioambiental	Minero	La Encañada	Cumplimiento de compromisos pendientes
		Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Paralice actividades de exploración
2013	2	Socioambiental	Minero	La Encañada	Cumplimiento de compromisos pendientes

		Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Conservación de la microcuenca del río		
2014	2	Socioambiental	Minero	La Encañada	Cumplimiento de compromisos pendientes		
		Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Conservación de la microcuenca del río		
2015	1	Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Paralice actividades de exploración		
2016	1	Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Paralice actividades de exploración		
2017	1	Socioambiental	Minero	Baños del Inca	Paralice actividades de exploración		
2018	0						
2019	0						
2020	0						
2021	0						
2022	0						

Nota. Elaboración propia con base en datos de la Defensoría del Pueblo (2011–2022).

Anexo I. Matriz de Consistencia

TÍTULO DE LA TESIS: Pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 - 2022 MATRIZ DE CONSISTENCIA							
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTOS	METODOLOGÍA
¿Qué relación existe entre el nivel de pobreza y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011-2022?	Analizar la relación entre la pobreza y los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga 2011-2022	Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la pobreza multidimensional y la conflictividad socioambientales en las Provincias Aledañas al Proyecto Minero Conga, durante el período 2011-2022, relación que se ve mediada por las	Variable Independiente: POBREZA monetaria y multidimensional	Monetaria	Población en situación de pobreza monetaria	Análisis e interpretación, encuestas, entrevistas, análisis de contenido, fuentes bibliográficas, análisis documental.	Método: Hipotético Deductivo Tipo: Descriptivo correlacional de corte Ex post facto Diseño: No experimental, longitudinal, descriptivo
					Población en situación de pobreza monetaria extrema		
				Vivienda	Sin acceso a agua		
					Sin acceso a saneamiento		
					Sin acceso a energía eléctrica		
				Educación	Sin servicio de telefonía		
					Jóvenes entre 18 y 25 años con secundaria incompleta		
				Salud	Jóvenes de 17-24 años que no han accedido a algún nivel de educación superior		
					Desnutrición Crónica		
					Población sin seguro de salud		

		condiciones de gobernanza hídrica y participación social en el territorio		Vulnerabilidad y Riesgo	Población desempleada		
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTOS	METODOLOGÍA
¿Cuáles son los niveles de pobreza de las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011-2022?	Determinar los niveles Pobreza en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011-2022	Durante el período 2011-2022, existe una persistencia de pobreza multidimensional en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, con variaciones significativas según el contexto territorial.	Variable Dependiente: CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL	Impacto Ambiental	Recursos hídricos Uso de recursos naturales Biodiversidad Emisiones de contaminantes	Análisis e interpretación, encuestas, entrevistas, análisis de contenido, fuentes bibliográficas, análisis documental.	Método: Hipotético Deductivo Tipo: Descriptivo correlacional de corte Ex post facto Diseño: No experimental, longitudinal, descriptivo.

¿Cuáles son las características de los conflictos socioambientales en dichas Provincias durante el período 2011-2022? ¿Cuál es el nivel de participación de la población en el conflicto socioambiental al Minero Conga, 2011-2022?	Caracterizar los conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011-2022. Identificar el nivel de participación de la población en el conflicto socioambiental vinculado al Proyecto Minero Conga, 2011-2022	Los conflictos socioambientales registrados en las generados en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga se asocian predominantemente a actividades mineras y a disputas en torno al acceso y gestión del recurso hídrico. El nivel de participación de la población en los conflictos socioambientales vinculados al Proyecto Minero Conga		Gobernanza y Participación	Conflictos mineros Participación ciudadana Transparencia de información Capacidad institucional		
---	---	---	--	--	--	--	--

		presenta diferencias territoriales asociadas al grado de organización social y a la existencia de mecanismos institucionale s de diálogo					
--	--	---	--	--	--	--	--

Anexo II. Encuesta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
MENCIÓN EN RELACIONES COMUNITARIAS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES



Tesis: Pobreza y los Conflictos Socioambientales en las Provincias aledañas al

Proyecto Minero Conga 2011-2022

Nombre:

Edad:

Sexo:

Provincia:

Fecha:

Instrucciones: Lea cada afirmación con atención y marque con una "X" la opción que mejor represente su opinión. Responda con calma y sin prisa.

TD: Totalmente en desacuerdo; (2) ED: En desacuerdo; (3) I: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) DA: De acuerdo; (5) TA: Totalmente de acuerdo

VARIABLE I: POBREZA	TD	ED	I	DA	TA
Items 1: Ingresos					
1. El proyecto minero Conga ha mejorado los ingresos económicos de las familias en su comunidad					
2. Su familia tiene dificultades para cubrir necesidades básicas (comida, vivienda, salud, etc.).					
3. ¿Es difícil encontrar empleo en su comunidad?					
4. ¿El Proyecto Minero Conga ha creado oportunidades de empleo para las personas en su comunidad?					
5. ¿Trabajar en la minería es una buena opción para jóvenes de su comunidad?					
Items 2: Educación					
6. ¿La calidad de la educación en las escuelas y colegios, de su comunidad ha mejorado gracias al aporte de Empresa Minera?					
7. ¿La empresa minera ha apoyado programas educativos para que más jóvenes puedan estudiar?					
8. ¿Considera que la educación ayuda a salir de la pobreza?					
9. ¿Cree usted que la empresa minera ha buscado combatir el analfabetismo, la inasistencia a la escuela y la deserción escolar en las comunidades aledañas?					

Ítems 3: Salud					
10. ¿El acceso a servicios de salud en su comunidad ha mejorado con el apoyo de la Empresa Minera?					
11. ¿Ha tenido problemas para acceder a servicios de salud en los últimos años?					
12. ¿Su salud o la de su familia se ha visto afectada negativamente por la minería?					
13. ¿La desnutrición infantil ha disminuido gracias a los programas sociales de la Empresa Minera?					
Ítems 4: Vivienda					
14. ¿La empresa minera está comprometida con brindarles alguna ayuda social para mejorar el acceso de su vivienda a servicios básicos?					
15. ¿El proyecto Minero Conga ha afectado negativamente el acceso al agua en su comunidad?					
16. ¿Las actividades mineras han mejorado el acceso a electricidad y otros servicios básicos en su comunidad?					
17. ¿La empresa minera ha construido o mejorado infraestructura que benefician a su comunidad?					
Ítems 5: Social					
18. ¿Cree que hay suficientes oportunidades laborales para todas las personas en su comunidad?					
19. ¿Considera a los Programas de Responsabilidad Social de la empresa Minera Yanacocha como un mecanismo de participación e inclusión social que han mejorado mi calidad de vida?					
20. ¿Considera que el proyecto minero Conga ha impactado en las oportunidades de empleo y en la brecha socioeconómica?					
21. ¿Cree usted que la empresa minera ha sido transparente al ejecutar sus acciones, con las comunidades aledañas?					
VARIABLE II. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL					
Ítems 1: Ambiental					
22. ¿Considera que el Proyecto Minero Conga ha afectado negativamente el medio ambiente en su comunidad?					
23. ¿Cree que el proyecto Conga tendrá un impacto negativo en la calidad del agua en la zona?					
24. ¿Ha notado menos plantas y animales (biodiversidad) en su comunidad desde que empezó la minería?					
25. ¿Ha recibido información clara y comprensible sobre el impacto ambiental del proyecto Conga?					
26. ¿Considera usted que ha recibido ayuda de la empresa minera para mejorar la situación ambiental en la zona del proyecto Conga?					
Ítems 2: Social					

27. ¿Cree que las comunidades afectadas por el proyecto Conga han sido incluidas en el proceso de toma de decisiones?					
28. ¿Ha notado algún cambio positivo en la situación social en la zona del proyecto Conga en los últimos años?					
29. ¿Cree que el proyecto Conga contribuirá a reducir la pobreza en la zona?					
30. ¿Cree que los políticos y las autoridades están tomando en cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades afectadas por el proyecto Conga?					
Ítems 3: Participación					
31. ¿Ha participado en protestas en contra del Proyecto Minero Conga?					
32. ¿Las reuniones de diálogo relacionada con el conflicto socioambiental Minero Conga fueron efectivas?					
33. ¿Las peticiones relacionadas con el conflicto socioambiental Minero Conga fueron atendidas oportunamente?					
34. ¿Cree que el conflicto socioambiental Minero Conga se ha resuelto de manera satisfactoria?					
35. ¿Cree que su opinión y la de su comunidad han sido tomadas en cuenta en la resolución del conflicto socioambiental Minero Conga?					

Anexo III. Validación

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA (JUICIO DE EXPERTOS)

Yo, VICTOR SÁNCHEZ CÁCERES, identificado con DNI N° 26722763, con Grado Académico de Doctor.

Hago constar que he leído y revisado los 80 ítems del Cuestionario correspondiente a la Tesis de Maestría: Pobreza y Conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 al 2022, del maestrante: Juan Carlos Becerra Ruitón, alumno de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la mención Relaciones Comunitarias y Gestión de Conflictos Socioambientales.

El instrumento corresponde a la tesis: “Pobreza y Conflictos socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 al 2022.

Luego de la evaluación de cada ítem y realizada las correcciones respectivas, los resultados son los siguientes:

PRUEBA DE VARIABLE POBREZA		
N° ítems	N° de Ítems	% de ítems
revisados	validados	validados
21	21	100%

PRUEBA DE COFLICTOS SOCIAMBIENTALES		
N° ítems	N° de Ítems	% de ítems
revisados	validados	validados
14	14	100%



.....

SÁNCHEZ CÁCERES VICTOR
Cajamarca 8 de diciembre del 2024

Anexo IV. Juicio de Experto

FICHA DE VALIDACIÓN (JUICIO DE EXPERTOS)

Apellidos y Nombres del Evaluador: SÁNCHEZ CÁCERES VICTOR

Grado académico: Doctor

Título de la investigación: Pobreza y Conflictos Socioambientales en las Provincias aledañas al Proyecto Minero Conga, 2011 – 2022.

Autor (a): Juan Carlos Becerra Ruitón

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POBREZA								
N° Ítem	Pertinencia con el problema, objetivos e hipótesis		Pertinencia con la variable y dimensiones		Pertinencia con la dimensión/indicadores		Pertinencia con la Redacción científica (propiedad y coherencia)	
	Apropiado	Inapropiado	Apropiado	Inapropiado	Apropiado	Inapropiado	Apropiado	Inapropiado
1	X		X		X		X	
2	X		X		X		X	
3	X		X		X		X	
4	X		X		X		X	
5	X		X		X		X	
6	X		X		X		X	
7	X		X		X		X	
8	X		X		X		X	
9	X		X		X		X	
10	X		X		X		X	
11	X		X		X		X	
12	X		X		X		X	
13	X		X		X		X	
14	X		X		X		X	
15	X		X		X		X	
16	X		X		X		X	
17	X		X		X		X	
18	X		X		X		X	
19	X		X		X		X	
20	X		X		X		X	

21	X		X		X		X	
22	X		X		X		X	
23	X		X		X		X	
24	X		X		X		X	
25	X		X		X		X	
26	X		X		X		X	
27	X		X		X		X	
28	X		X		X		X	
29	X		X		X		X	
30	X		X		X		X	
31	X		X		X		X	
32	X		X		X		X	
33	X		X		X		X	
34	X		X		X		X	
35	X		X		X		X	

Anexo V. Guía de Observación

Instrumento N.º 1 Guía de observación estructurada (no participante)

Investigación:

Relación entre la pobreza multidimensional y la conflictividad socioambiental en las provincias aledañas al Proyecto Minero Conga (2011–2022)

Tipo de observación: No participante

Lugar: Comunidad rural - provincia de Cuzco.

Fecha: 15 / 09 / 2024

Hora: Inicio: 09:30 Término: 11:00

Observador: Juan Carlos Becerra Ruizón.

A. Dimensión físico-ambiental

Indicador	Criterios de observación	Sí	No	Observaciones
Estado de la fuente hídrica	Presencia de río, laguna o manantial	☒	☐	Quebrada estacional con caudal reducido. Tonalidad turbia en época seca. Sedimentos finos visibles.
	Caudal visible	☐	☐	
	Coloración anómala del agua	☒	☐	
	Presencia de residuos o sedimentos	☒	☐	
Infraestructura hídrica	Canales de riego	☐	☐	
	Reservorios o pozos	☐	☐	

	Estado de conservación	☐	☐
Alteración ambiental	Remoción de suelos	☐	☐
	Cambios en cobertura vegetal	☐	☐
	Cercanía a actividad extractiva	☐	☐

B. Dimensión social

Indicador	Criterios de observación	Si	No	Observaciones
Uso comunitario del agua	Uso agrícola	☒	☐	<i>Riego limitado en parcelas.</i>
	Uso ganadero	☐	☐	
	Uso doméstico	☐	☐	
Percepción social	Expresiones de preocupación	☒	☐	<i>Comentarios sobre escasez</i>
	Manifestaciones de conflicto	☐	☐	
	Actitudes de aceptación o resignación	☐	☐	
Organización comunitaria	Presencia de rondas campesinas	☒	☐	<i>Organización activa.</i>
	Reuniones o asambleas comunales	☐	☐	

C. Dimensión institucional

Indicador	Criterios de observación	Sí	No	Observaciones
Presencia institucional	Municipalidad	☐	☒	
	Otras autoridades locales	☐	☐	
Gestión del conflicto	Evidencia de diálogo	☐	☒	
	Mediación institucional	☐	☐	
	Ausencia de intervención	☐	☐	
Normativa visible	Señalización ambiental	☐	☐	
	Restricciones de acceso	☐	☐	

Fuente / Elaboración del instrumento:

Elaboración propia, basada en los principios metodológicos de la observación sistemática propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2014), Taylor y Bogdan (2013) y Flick (2015), así como en lineamientos técnicos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Anexo VI. Bitácora de Campo

Instrumento N.º 2 Bitácora de campo

Lugar: Centro Poblado - Hualgayoc

Fecha: 22 / 10 / 24

Hora: 10:00 - 12:30

Coordenadas GPS: Lat. -6.769 Long. -78.658

1. Descripción del entorno físico, social e institucional:

Zona rural con acceso limitado a servicios básicos.
Presencia de infraestructura hídrica precaria y caminos
no asfaltados. Municipalidad distrital sin oficinas
visibles en el área.

2. Hechos relevantes observados (gestión del agua y conflictividad socioambiental):

Se reportaron restricciones en el uso del agua
durante la estación seca y ausencia de supervisión
técnica permanente.

3. Percepciones locales (comentarios, actitudes, expresiones):

Los pobladores expresaron preocupación por la
reducción de caudal y desconfianza hacia las
autoridades, asociando la situación a proyec-
tos extractivos.

4. Observaciones y reflexiones del investigador:

La excesiva hídrica observada refuerza la relación
entre vulnerabilidad estructural y conflictividad
latente, coherente con los indicadores de pobreza
multidimensional analizados cuantitativamente.

Firma del investigador: _____

Fecha: 22 / 10 / 24

Fuente / Elaboración del instrumento:

Elaboración propia, sustentada en enfoques de registro cualitativo y bitácora de campo descritos por Taylor y Bogdan (2013) y Flick (2015), complementados con criterios técnicos de análisis territorial y gestión del agua provenientes de documentos oficiales del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Defensoría del Pueblo.

Referencias Bibliográficas (APA 7.^a edición)

- Defensoría del Pueblo. (2022). *Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.º 226*. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-n.%C2%B0-226-diciembre-2022.pdf>
- Grufides. (2022). *Conflicto minero Conga: Cronología y estado situacional*. https://old.grufides.pe/sites/default/files/Documentos/fichas_casos/CONFLICTO%20MINERO%20CONGA_2022.pdf